

Revista Foro

Santafé de Bogotá, D.C. - Colombia

No. 35

Septiembre de 1998

Valor \$6.000.00

Cultivos ilícitos y Medio Ambiente

Ilustración: Mauricio Suárez Acosta



00035

9 770121 255009



Ediciones Foro Nacional por Colombia

DOS
PUNTOS DE
VISTA CON
CANALES DE
DISCUSIÓN
DURANTE
15 AÑOS



FORO QUINCE AÑOS

Fundación Foro Nacional por Colombia

Marco Toro Daza - Presidente

Cra. 4A No. 27-62 Tels.: 2822550 - 3340967 - 2861488 Fax.: 2836045

Eduardo Vidal - Director Foro Centro

Cra. 3A No. 26-52 Tels.: 2433463 - 2840582
Santa Fe de Bogotá D.C.

Diógenes Rosero - Director Regional Costa Atlántica

Calle 56 No. 44-107 Tels.: 937215551
Barranquilla

Esperanza González - Directora Regional Valle del Cauca

Diag. 34 No. 6-35 Tels. 5581594 - 5141141 Fax.: 5541098
Santiago de Cali

Aura Hernández - Directora CIRET - Foro Regional Tolima

Calle 7 No. 4-44 Tels.: 611441 - 611441 - 6322163
Ibagué



**Revista Trimestral de la
Fundación Foro Nacional por Colombia**
No. 35 \$6.000 Septiembre 1998

Director:
Pedro Santana Rodríguez

Editor:
Hernán Suárez

Comité editorial:
Eduardo Pizarro Leongómez
Orlando Fals Borda
Ricardo García Duarte
Rocío Londoño Botero
Jorge Bernal Medina

Colaboradores Internacionales:
Eduardo Galeano (Uruguay), Hilda Herzer,
Edison Nunes (Brasil), Alfredo Rodríguez, Alex
Rosenfelt (Chile), Gustavo Riofrío, Rossana
Reguillo (México), Federico Arnillas (Perú),
Fernando Carrión, Jorge García (Ecuador), John
Turner (Inglaterra), David Slater (Londres), Juan
Díaz A. (Francia), Alejandro Angulo (Roma),
Candido Grybowski (Brasil), Carlos Guerra
Rodríguez (España).

Asamblea de Socios:
Humberto Arboleda, Francisco Mejía, Eduardo
Pizarro, Pedro Santana, Fabio Velásquez,
Enrique Vera, Rocío Londoño, Eduardo Vidal
Díaz, Diógenes Rosero, Esperanza González,
Aura Hernández.

Gerente:
Sandra Tatiana Jiménez López

Ilustraciones:
Mauricio Suárez

Impresión:
Gente Nueva Editorial

Distribución y suscripciones:
Cra. 4A No. 27-62
Teléfonos: 2835982 - 2822550 - 2861488 -
3340967
Fax: 2836045
Apartado Aéreo 10141
Santa Fe de Bogotá - Colombia

Licencia:
No. 3886 del Ministerio de Gobierno

Tarifa Postal reducida: No. 662
ISSN: 0121-2559

Contenido

Editorial

- 2 Cultivos ilícitos, narcotráfico
y soberanía nacional

Constanza Ramírez

Cultivos ilícitos y Medio Ambiente

- 5 Conflicto agrario y
medio ambiente
29 El medio ambiente y la
guerra en Colombia
43 Cultivos ilícitos, colonización
y revuelta de raspachines
55 Política cultural y biodiversidad:
Estado, capital y movimientos
sociales en el Pacífico colombiano

Gustavo Wilches-Chaux

José Jairo González Arias

Arturo Escobar

Política Nacional

- 75 Las elecciones presidenciales
de 1998
84 La soberanía de Colombia
amenazada

*Oscar Delgado y Miguel
Eduardo Cárdenas*

*James L. Zackrison y
Elleen Bradley*

Ideología y Sociedad

- 90 El *Manifiesto* reincide

Jorge Giraldo Ramírez

Movimientos Sociales

- 95 Movimientos indígenas
y esfera pública

Rossana Reguillo

Sociedad y Comunicación

- 105 ¿Qué es el periodismo cívico?

*Ana María Miralles
Castellanos*

Cultivos ilícitos, narcotráfico y soberanía nacional

Durante las dos últimas décadas los cultivos de coca y amapola han cubierto una importante área en diversos departamentos del país. La coca ha existido desde siempre en nuestras tierras. Ha sido usada tradicionalmente por las comunidades indígenas, principalmente de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Amazonas. Es el centro de su tradición y de su cultura. La usan, inclusive hoy en día, para trabajar largas jornadas y para alimentarse, para sus ceremonias y sus ritos, y también para la guerra. Los conquistadores la persiguieron por razones militares; los indios mambeando coca podían combatir días enteros sin descansar y, sobre todo, sin dormir, lo que significaba una ventaja táctica. El problema no es la planta que tiene un sinnúmero de usos, el problema ha nacido de la producción de cocaína a partir de sus hojas, mediante procedimientos químicos. La cocaína es una sustancia psicoactiva prohibida desde que se penalizó el uso de estas sustancias a comienzos de los años sesenta en la Convención de Viena.

Inicialmente fueron las redes de esmeralderos de Muzo y Otanche las que se vincularon al comercio de la cocaína que se desarrollaba en Perú y Bolivia, en donde también tradicionalmente se ha cultivado la coca. Utilizando la experiencia derivada del tráfico de esmeraldas decidieron utilizar las redes de distribución y comercialización para agregarle ahora la pasta de coca o la cocaína ya refinada. De esta presencia poco importante se pasó a las organizaciones de la mafia con sede principalmente en Medellín y Cali que decidieron incursionar, no solo en el procesamiento y tráfico sino, también, en el estímulo de la siembra para producir su propia coca y de esta manera no depender de la pasta producida en los dos países andinos ya mencionados. Los campesinos y los indígenas entraron en el negocio sorprendidos de que un producto que no había tenido mercado adquiriera un precio tan alto en el mercado de un día para otro. De esta manera, a los tradicionales cultivos de hoja de coca en el Cauca se extendieron al Putumayo, al Guaviare y al Casanare, regiones fértiles y con una reducida población. Posteriormente se extendieron por toda la Amazonia y principalmente en el departamento del Caquetá. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en las cifras, pero estas oscilan, según los cálculos, entre 60.000 y 80.000 hectáreas actualmente.

La amapola se transformó de planta ornamental en materia prima para la producción de heroína. Hoy se cultiva principalmente en las tierras frías del Huila, Tolima y Cauca y, sobre todo, en los páramos de las cordilleras en los departamen-



tos de Boyacá, Santander y Cundinamarca. Se calcula que hay sembradas en Colombia cerca de 20.000 hectáreas actualmente.

El aumento espectacular en los terrenos sembrados con coca y con amapola tienen como razón principal la pobreza de los campesinos colonos que no tienen alternativas de cultivos lícitos que sean competitivos o que les permita sobrevivir dignamente. Este es el lado social del problema. Los campesinos perciben unos ingresos por la venta de hoja de coca o de pasta, que les permite incluso ciertos niveles de acumulación que dedican a la mejora de sus pequeñas unidades de producción. Es obvio que al lado de los pequeños productores hay también plantaciones mayores directamente manejadas por narcotraficantes, pero, según los estudios que aquí se publican, la mayor parte corresponde a campesinos colonos. Decenas de miles de campesinos no tienen otra actividad que el cultivo ilícito de estas materias primas. Estas regiones carecen de infraestructura vial y de servicios públicos, están aisladas de los circuitos económicos, y la única actividad rentable es precisamente la proporcionada por estos cultivos. La presencia del Estado en estas regiones está limitada, en buena medida, a la actividad de los agentes de la policía antinarcóticos que fumigan a diestra y siniestra, depredando de paso miles y miles de hectáreas de bosque tropical en ecosistemas muy ricos en biodiversidad, pero frágiles.

Un segundo elemento de la problemática tiene que ver con la presencia de la guerrilla en estas regiones. No es un secreto para nadie que las guerrillas ejercen control territorial en vastas zonas de la geografía nacional en que la única actividad rentable económicamente es el cultivo de la coca o de la amapola. Parte del poder económico del que disponen las guerrillas se deriva del terraje o impuesto que cobran a los cultivadores. Está claro que la guerrilla no ha entrado al procesamiento, pero también es cierto que parte de su poder económico está relacionado con los impuestos que cobran por permitir los cultivos de coca y amapola. Hay evidencias que en otras regiones del país quienes ejercen el control y cobran los impuestos son los paramilitares. Estas realidades deben ser reconocidas para abocar un eventual proceso de negociación política.

Frente a esta realidad la política del Estado colombiano y del gobierno norteamericano ha consistido en la fumigación a gran escala. Sin embargo, entre más hectáreas se fumigan más hectáreas se siembran. Los campesinos colonos se adentran más en la selva, allí talan el bosque y lo reemplazan por la coca. Entretanto va quedando la desolación, la deforestación y la pérdida de biodiversidad en toda nuestra región amazónica o en los páramos que son nuestros principales productores de agua. El crimen ecológico es irreparable. Así lo demuestran los estudios que publicamos en esta revista. Es por ello, y debemos registrarlo con esperanza, que los ambientalistas consideraron este como el principal problema en su reciente Congreso Nacional Ambiental.



Allí se propusieron salidas inteligentes. En primer término, y mientras no se produzca la despenalización hacia la cual marchamos inexorablemente, debería levantarse un gran movimiento tendiente a la suspensión de las fumigaciones y propugnar por la erradicación manual y la sustitución de cultivos. En estas regiones se debería proceder a dicha sustitución por cultivos de palmito, palma africana, caucho, ganadería intensiva etc., manteniendo un equilibrio con el bosque tropical. En segundo término, se requiere el desarrollo de un gran programa de infraestructura para lo cual se anunció el apoyo a la creación de un fondo internacional con recursos provenientes del presupuesto nacional y de la cooperación foránea. Esto es lo que en el programa presidencial de Andrés Pastrana se llamó la puesta en marcha de un Plan Marshall. Este fondo internacional debería financiar la construcción de las grandes obras de infraestructura para conectar estas regiones con el mercado nacional y externo, infraestructura pública y social que reivindique la vida de los cientos de miles de familias que habitan en estos territorios.

El Fondo Internacional deberá tener una estructura en la cual tomen asiento en sus organismos directivos delegados de las agremiaciones campesinas y de las agrupaciones de desplazados. Esta es la real garantía de que los recursos se invierten en sus necesidades y en el desarrollo de unidades productivas pequeñas y medianas o en zonas de reserva campesina. Los recursos nacionales deberían garantizarse en el próximo plan nacional de desarrollo como contrapartidas anuales que serían el plante inicial del país para invitar a los estados de los países desarrollados a invertir en dicho fondo. Es preciso prepararse para adelantar un gran debate sobre el nuevo plan nacional de desarrollo y para la inclusión en el mismo de un capítulo que defina una política de inversión en estas regiones para sustituir cultivos e incorporarlas a la economía nacional.

Al mismo tiempo, debe avanzarse en el proceso de negociación política con las guerrillas que dominan en estas regiones. El poder local y regional será uno de los puntos del debate y la negociación. Estos procesos deben marchar de manera simultánea para que el próximo milenio nos encuentre ocupados en resolver los problemas de exclusión, miseria y protección del medio ambiente y la biodiversidad y no en ver como nos matamos los unos a los otros.

Uno de los principales problemas que afronta el país es el que representan los cultivos ilícitos. Las políticas de fumigación, tierra arrasada y guerra no son la mejor alternativa. Es preciso demandar del nuevo gobierno consecuencia con los programas que ofreció en la campaña electoral. Esta es la salida.



Constanza Ramírez
Socióloga, investigadora

Conflicto agrario y medio ambiente

Constanza Ramírez



En la distribución de la tierra, podría decirse, está el origen de los sanguinarios conflictos políticos y sociales que han marcado la historia del país en este siglo. Para poseerla se han hecho leyes, se han declarado guerras, se ha perdido la vida. Ha sido más importante incluso el hecho de tenerla que de ponerla a producir. De los 40 millones de hás. de tierra con vocación agrícola, en la actualidad sólo se cultiva el 11 % (Cuadro No.1). Las demás se encuentran en potreros. Mientras tanto, la frontera agrícola se ha ampliado paulatinamente debido a la necesidad de incorporar más tierras a la producción, y, más importante aún, debido a la llegada de poblaciones migrantes expulsadas del interior del país por la manera violenta como se ha dado la concentración de la tierra. El 40% de la superficie explotada del centro del país está hoy en manos de menos del 3% de los propietarios (Cuadro No.2). Muchos campesinos han sido obligados a dejar las laderas de las cordilleras y las fértiles planicies de la costa Atlántica y los valles interandinos, y han migrado a la selva atraídos por las ventajas comparativas de paz y trabajo que ofrecen los territorios selváticos. En este sentido es indispensable mirar con detenimiento las transformaciones que se han dado en la estructura agraria del interior, como una de las principales causas de la ocupación de nuevas zo-

nas y que, para el punto que aquí interesa, contribuyen en gran medida al deterioro del medio ambiente.

La ocupación de la frontera agrícola

Desde finales del siglo pasado comenzaron a llegar al llano y a la selva migraciones masivas de refugiados de las guerras civiles o de campesinos andinos en busca de tierras nuevas para trabajar. La mayoría se vincularon a la explotación del caucho que por aquellos días era la principal fuente de trabajo en la región. La guerra con el Perú, en 1932, contribuyó a la colonización de la selva con la vinculación de los excombatientes que comenzaron a tumbarla para abrirse campo. En la zona andina, mientras tanto, los conflictos agrarios obligaban al gobierno a reformar el estado de cosas.

En 1936 se promulgó la Ley 200 dando propiedad sobre la tierra a quienes la trabajaban y estableciendo la extinción de dominio sobre los predios rurales improductivos, obligando a trabajar permanentemente las tierras durante 10 años. Con ello se favorecía a campesinos y aparceros. Pero

Documento elaborado por Constanza Ramírez para el Congreso ambiental "Ambiente para la paz"

estos privilegios no les alcanzaron a durar 10 años. Con la ley 100 de 1944, se otorgó todas las garantías a los grandes terratenientes para transformar sus haciendas en empresas capitalistas. La defensa campesina estuvo a cargo del líder agrarista Jorge Eliecer Gaitán que conquistó el partido liberal y logró en 1947, una alta mayoría en el Congreso de la República para revisar la ley 100. Su asesinato el 9 de abril de 1948, desató la Violencia política de la siguiente década. Por la fuerza se puso en práctica lo que legalmente no había podido hacer la ley 100: expulsar a los pequeños campesinos de las tierras más fértiles. En la primera mitad de los años 50, cerca de 400.000 parcelas fueron abandonadas y dos millones de personas dejaron sus tierras. (Oquist, 1978).

Los campesinos salieron del interior del país hacia las selvas y se volvieron colonos que no tenían mayores perspectivas económicas dadas las dificultades de sacar sus productos a los mercados. Sobrevivieron gracias a las bonanzas del caucho, de la quina y de las pieles. Con cada bonanza las migraciones se intensificaron y a los campesinos se unieron comerciantes, transportadores, capataces, empleados públicos. Cuando la bonanza se acababa, muchos regresaban a su lugar de origen, pero otros, que habían logrado echar raíces, se quedaban.

Así se fue poblando la región del piedemonte con miles de campesinos de las regiones minifundistas tradicionales, despojados de sus tierras, sobrevivientes de la lucha política, víctimas de las armas oficiales y del sectarismo. Muchos se defendieron entrando a las filas de las Guerrillas del Llano hasta que, en el año 53, el General Rojas Pinilla controló con un Golpe de Estado la guerra civil irregular. Firmada la amnistía con Guadalupe Salcedo, guerrillero liberal que acaudilló el movimiento del Llano, los grupos armados de entonces

se desmovilizaron a cambio de libertades políticas, exigencia de una reforma agraria y algunos implementos para trabajar. Pero las promesas se incumplieron, y después del asesinato de Guadalupe, volvió de nuevo la persecución. Los campesinos se reorganizaron poco a poco en el Sumapaz y en el sur del Tolima. Se formó el movimiento agrario de Juan de la Cruz Varela, gaitanista, y un sector de guerrilleros de la región limítrofe entre el Cauca, el Huila, el Tolima y el Valle, volvió a la lucha, hasta que el Gobierno declaró, en 1955, al Sumapaz como zona de operativos militares. Ante el asedio y los bombardeos, los nuevos grupos guerrilleros se refugiaron en el Macizo del Sumapaz y en el Tequendama. El ejército finalmente los derrotó en la llamada Guerra de Villarrica, y los campesinos se replegaron hacia el piedemonte del Meta y del Caquetá.

Distribución de la tierra

Para 1960 la superficie apropiada del país ocupaba la cuarta parte del territorio nacional, es decir 27.3 millones de hectáreas. Ver Cuadro 1.

CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN Y USO DE LA TIERRA
EN COLOMBIA EN 1960

Uso	Superficie	%
Agrícola	5.047.088	18.46
Pastos	14.605.954	53.43
Otros	7.684.785	28.11
Total	7.337.827	100.00

Fuente: Dane Censo Agropecuario 1960, Boletín No. 274-2745, 1974.

La distribución de la tierra, según el Censo Agropecuario de 1960, mostraba ya una clara tendencia a la concentración. De 1.209.672 explotaciones, el 76.5% (925.364) eran meno-

res de 10 hectáreas y ocupaban tan solo el 8.8% (2.403.725 hás) del territorio apropiado, mientras las fincas mayores de 200 hás, con el 55% (15.046.702 hás) de la superficie estaban en manos del 1.6% (20.595) de los propietarios.

A comienzos de los 60 los campesinos ocuparon varias haciendas en el Huila, Cundinamarca y Cesar. Ante la agudización del conflicto agrario, Lleras Camargo sancionó en diciembre de 1961 la Ley 135 o Ley de Reforma Social Agraria propuesta por Lleras Restrepo. Se creó el Incora para ejecutar lo que en resumen significaba una nueva posibilidad para campesinos y pequeños propietarios. Sin embargo, fue el mismo Instituto el que inició la apertura y “civilización” del piedemonte y la selva con sus Proyectos de Colonización Dirigida bajo los auspicios del BIRF: Sarare (Arauca), Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Magdalena Medio y Urabá. Queriendo drenar los problemas del centro del país, inició la ocupación de 7.6 millones de hectáreas de zonas selváticas y abrió el camino al desmonte de suelos frágiles cuya productividad agrícola era limitada (Igac, 1986). El Incora, queriendo obligar a la producción de tierras ociosas, obligaba al desmonte del 70% de la parcela para entregar títulos de propiedad (cap. VIII, art. 30). Fue el inicio de una devastación ecológica que hoy comienza a mostrar sus resultados.

Durante la década del 60 los logros del Incora fueron mínimos. Compró menos del 30% de las fincas que tenía planeado adquirir que ocupaban 196.544 hás (el 14% del área total programada). Al mismo tiempo puso en funcionamiento 980 distritos de riego en el centro del país, que favorecían a los empresarios capitalistas (Gilhodes, 1989).

Mientras tanto, en las zonas altas de las cordilleras Central y Oriental, los campesinos asediados por el ejército se organizaron bajo formas de



autodefensa e iniciaron la Colonización Armada (Ramírez, William. 1981). Fue una estrategia política, económica y militar que conformó lo que Alvaro Gómez llamó las Repúblicas Independientes de Marquetalia y Riochiquito en la cordillera central (Huila), y El Pato (Caquetá) y El Guayabero (Meta) en la cordillera oriental. Tenían sus propias autoridades, su economía solidaria, y obedecían a un proyecto político. En 1964, cuando el gobierno les declaró la guerra y las bombardeó, las organizaciones campesinas formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc y se dispersaron por las cordilleras y selvas del suroriente.

Durante el último período del Frente Nacional (1958-1974) los procesos de violencia, desplazamiento, organización y reorganización en las zonas de colonización pasaron en silencio y se mantuvieron ocultos a la luz pública. La orientación de la política agraria a partir de 1971, basada en el plan de desarrollo Las Cuatro Estrategias del gobierno de Misael Pastrana orientado por Lauchin Currie, fomentó la agricultura empresarial al mismo tiempo que impulsó la construcción y la industria manufacturera para que absorviera a los campesinos desalojados por la descomposición de su economía.

A fines del Frente Nacional dos hechos trascendentales transformaron

el campo. Por un lado se firmó el Pacto de Chicoral, que dió origen a las leyes 4a. y 5a. de 1973, que favoreció la concentración de tierras, y por otro, se aprobó la Ley de Aparcería, Ley 6a. de 1975, que golpeó a la organización campesina e impulsó el desempleo rural. Fue la contrarreforma agraria. Por medio del Pacto de Chicoral, el sistema otorgó a los terratenientes todas las garantías necesarias para concentrar tierras y acumular predios. Por su parte, la Ley de Aparcería, reglamentó el gran arriendo capitalista y consiguió que se continuara expulsando a miles de campesinos de las tierras que trabajaban, e impulsó a muchos hacendados tradicionales a volverse ganaderos. La Reforma Agraria fue enterrada abriéndole las puertas al capital financiero que buscaba afanosamente líneas de inversión. Por esos días la Revolución Verde, impulsada por el Banco Mundial, estimulaba el desarrollo empresarial de la agricultura y el campo se volvió una promesa para los dueños del capital.

Evolución del uso de la tierra

Entre 1960 y 1978 la superficie total destinada a la agricultura se incrementó de 5 millones a 8.8 millones de hectáreas. Cumpliendo los pró-

positos gubernamentales, el mayor crecimiento se produjo en los cultivos comerciales hacia donde se dirigieron los mayores incentivos y las facilidades de financiación del Fondo Financiero Agropecuario.

Los cultivos de algodón, arroz riego, sorgo, soya y azúcar fueron los más favorecidos, en detrimento de cultivos tradicionales como el maíz, el frijol, el plátano o la yuca. Los primeros, cuyos requerimientos de capital solo podían ser cubiertos por empresarios capitalistas, eran cultivos altamente subsidiados que rompían la lógica de la producción tradicional.

A los suelos fértiles de las vegas se los comenzó a agotar con el uso intensivo de maquinaria y con la aplicación de correctivos, abonos y fertilizantes necesarios para lograr las productividades requeridas para competir con los mercados internacionales. Adicionalmente la mecanización desplazó a los jornaleros agrícolas.

Por su parte, la agricultura campesina de ladera que abastecía el consumo doméstico, empezó a entrar en bancarrota como producto del desestímulo estatal. El programa de Desarrollo Rural Integrado DRI, que desde mediados de la década del 70 tuvo la intención de fortalecer la economía campesina, no pudo competir con las importaciones crecientes de productos agrícolas y significó una

nueva decepción para un sector tradicional que encontraba cada vez más dificultades para sobrevivir. El minifundio alcanzó su mínimo nivel de subsistencia. Las familias campesinas crecían y la tierra les era cada día más estrecha. Las migraciones hacia la selva se hicieron más frecuentes.

Durante los años 80 la superficie agrícola se redujo (Cuadro No.2). Para 1987 ocupaba 5.3 millones de hectáreas y en 1995 solo había sembradas en el país 4.4 millones. La superficie en pastos, en cambio, mantuvo su crecimiento hasta finales de los años 80 llegando a ocupar 8 veces más tierra que la dedicada a la agricultura. 40 millones de hectáreas, de las mejor ubicadas y más fértiles tierras estaban en pastos. Solo durante los últimos años, el sector pecuario ha presentado crecimiento negativo. Hoy las estadísticas dan cuenta de 35.5 millones de hectáreas en pastos. El clima de violencia que se ha desatado en todo el territorio nacional ha afectado también al sector ganadero que, a pesar de haber recurrido a todo tipo de tácticas y alianzas políticas y militares para defenderse, no ha escapado a la crisis.

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DEL USO DE LA TIERRA
1960-1995
(MILLONES DE HECTÁREAS)

Actividad	1960	1970	1978	1987	1995
Agrícola	5	7.6	8.8	5.3	4.4
Pastos	14.6	17.5	20.5	40.1	35.5
Bosques y otros	94.6	89.1	84.9	68.7	74.2
Total	114.2	114.2	114.2	114.1	114.2

Fuente: 1960-1970, Dane. 1978, DNP. 1987, IGAC-ICA. 1995, Dane-SISAC.

En la frontera agrícola los campesinos desplazados, cuyo único capital era su fuerza de trabajo, se han transformado en colonos y se han de-

dicado a producir "mejoras" en ecosistemas frágiles de bajo potencial productivo. Abren parcelas de tierra de 1 a 5 has, limpias, civilizadas con una o dos cosechas maíz, que después sustituyen por pasto. "Después de una o dos cosechas magníficas, debido a que la quema del bosque origina procesos de liberación de nutrientes y de basificación y reducción de la acidéz del suelo, éste comienza a mostrar signos de agotamiento e invasión de malezas. Por lo tanto sólo se puede sembrar pasto como única posibilidad de establecer una producción rentable" (Vieco, 1995). La mejora se convirtió entonces en una mercancía que tiene comprador seguro. El maíz, el arroz y el plátano, los cultivos con que se civiliza la tierra, le permiten al colono sobrevivir un tiempo mientras hace la mejora. Pero el excedente que necesita lo consigue con el sistema del "endeude" o crédito con los comerciantes y los préstamos terminan por ahogarlo. Para salir de deudas venden las fincas, y una vez vendidas se ven obligados a tumbar más selva y a repetir el proceso, mientras comerciantes y ganaderos compran las mejoras para concentrarlas y hacer haciendas. La colonización se convierte en un mecanismo de desplazamiento permanente que a la vez que reproduce la pobreza, aumenta el desempleo y genera el latifundio, destruye la selva. Este conjunto de factores explica dos fenómenos que se afianzaron en las zonas de colonización: las guerrillas y los cultivos ilícitos.

Orden público y conflictos armados

Como se ha visto, la distribución de la tierra en Colombia se ha hecho de manera forzada, apelando una veces a las leyes, pero otras a hechos de violencia. Esta situación recrudece cada día más el conflicto en las zonas rurales en una escalada que tiene al país envuelto en una guerra civil no aceptada oficialmente. Con la gue-

rra se han fortalecido todos los grupos armados. Por un lado los que defienden a los campesinos desplazados y desalojados de sus tierras: las guerrillas de las Farc, el ELN y el EPL, y por otro los que defienden el poder expansionista de los terratenientes y el capital invertido en el campo: los grupos paramilitares y más recientemente las asociaciones Convivir.

La guerrilla

La guerrilla, tiene un origen eminentemente agrario. Nació de La Violencia de los años cincuenta como reacción a la violencia partidista ejercida desde el Estado. Se fortaleció primero en las zonas de colonización del piedemonte, donde los colonos acogieron la organización social y la justicia local que impartía en regiones tan lejanas de la acción del Estado, y en las áreas campesinas, minifundistas, de Córdoba y Sucre, donde era fuerte la Anuc, apoyando las luchas por la tierra. También creció paralela a las luchas indígenas del sur del país. Marquetalia, en la cordillera central, siguió siendo un eje de su acción política, y en el Cauca, el Huila y el Tolima se encuentran todavía hoy los frentes más antiguos.

Poco a poco, a medida que la crisis del agro se ha ido agravando, la guerrilla se ha vinculado a las zonas cafeteras de Risaralda, el Valle, Caldas y Quindío, y a las regiones de economía campesina tradicional de Cundinamarca, Santander y Boyacá. Por otro lado, al ritmo en que la ganadería ha ido ganando terreno y ha desplazado a poblaciones de campesinos del Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar y los Llanos, la guerrilla ha ido avanzado.

Por último, en las zonas de economías de enclave y explotación de los recursos por parte de empresas extranjeras y multinacionales, donde hay gran cantidad de jornaleros agrícolas y trabajadores asalariados en los cascos urbanos, la guerrilla ha encontrado bastos recursos económicos que cobran a las empresas para dejarlas

trabajar y el descontento laboral le ha permitido arraigarse. Las plantaciones de banano de Urabá y Ciénaga, las plantaciones de palma africana de Fundación y El Copey, la explotación del oro del oriente antioqueño y el Chocó, los campos petroleros de Arauca y Casanare, se encuentran rodeados de actividad guerrillera.

Hoy, además, están presentes en las zonas de colonización del Caquetá, el Guaviare, La Macarena y el Putumayo donde la existencia de cultivos ilícitos y las formas organizativas que ellos requieren les permiten su afianzamiento económico y políticamente. También en las regiones donde primero fue fuerte y después exterminada la Unión Patriótica, partido de izquierda que ganó 16 alcaldías en la primera elección popular (1988), dejando a los habitantes sin una alternativa política de oposición, la guerrilla llenó el vacío. El mapa de su presencia es pues nacional.

Hasta ahora todas las medidas militares que se han tomado para combatirla han resultado inútiles. El presupuesto de sector defensa destinado al conflicto armado desde 1990 hasta 1994 fue de 3'311.084 millones de pesos (DNP, 1995) sin que el conflicto haya disminuido. Al contrario, de 48 frentes que tenían las Farc en 1990 cuando el bombardeo a Casa Verde, hoy hay 62 y tiene presencia en 450 municipios que representan el 45% del país. Ver Cuadro 3

CUADRO 3
PRESENCIA Y FORTALEZA
DE LAS FARC

Año	1986	1990	1994	1996
Efectivos	3.200	5.000	7.000	7.500
Cuadrillas	32	48	60	62
Armas	2.800	5.000	7.000	7.500
Municipios	289	393	434	450

Fuente: La Prensa. Alianza Blanca. Septiembre 15 de 1996.

Para el total de los grupos guerrilleros el número aumenta considerablemente. Aunque los datos consulta-

dos varían, las cifras muestran un crecimiento permanente sobretodo a partir de 1985. Los estudios del Departamento Nacional de Planeación (1995) y Análisis de los Factores de Violencia en Colombia (González, F.y Díaz, J., 199) presentan los siguientes datos:

NUMERO DE HOMBRES EN ARMAS DE LA GUERRILLA

Año	Farc	Eln	Epl	Total	Otra Fuente
1970	740	150	100	990	1.000
1975	820	27	70	917	1.100
1980	980	70	140	1.190	2.300
1985	2.590	700	670	3.950	5.800
1990	5.380	1.600	820	7.800	
1992	5.805	2.080	210	8.095	12.500
1994	6.966	2.710	715	10.391	

Fuente: Presidencia de la República. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Otra Fuente: Gonzalez, Fernán, sin año)

Para financiar la guerra creciente han recurrido al robo (abigeato y asalto de entidades bancarias), extorsión al sector carbonífero, petrolio, transportador, empresas contratistas y comerciantes, al boleto, vacuna y secuestro y de ganaderos y hacendados, al gramaje o impuesto sobre los cultivos ilícitos y a otras inversiones:

INGRESOS DE LA GUERRILLA POR ACTIVIDAD (FARC-ELN)

Actividad	1991	1992	1993	1994
Narcotráfico	148.691	149.849	188.051	214.749
Robo y Extorsión	96.760	97.180	122.089	165.546
Secuestro	64.802	64.728	57.862	141.593
Producto				
Inversión	N.D.	N.D.	28.931	83.035
Desvío de recursos	14.425	14.425	20.975	21.333
Otros	11.096	10.995	N.D.	N.D.
Total	335.774	337.294	417.908	626.256

Fuente: Presidencia de La República. Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional. DNP. Unidad de Justicia y Seguridad. Los costos del Conflicto Armado en Colombia, 1995.

Grupos Paramilitares

Los grupos paramilitares nacieron a comienzos de los años 80 en el Magdalena Medio con respaldo institucional, aduciendo la defensa a los atropellos cometidos por las organizaciones guerrilleras a los ganaderos y terratenientes de la región. Con el correr del tiempo pasaron de ser grupos de defensa a ser grupos de ataque patrocinados por narcotraficantes, terratenientes y gremios económicos que, con tal de controlar el avance de la subversión que representaba un obstáculo para su crecimiento, acabaron con los intentos locales de obtener reivindicaciones políticas y sociales legítimas de las comunidades.

La década del 70 fue una época de crecimiento y desarrollo sin precedentes del Partido Comunista y de las FARC en la región del Magdalena Medio. El Partido Comunista dominó en las elecciones los concejos municipales de Cimitarra, Puerto Berrio y Puerto Boyacá. Al mismo tiempo la guerrilla aumentó la vacuna, el secuestro y la extorsión a los ganaderos y campesinos de la región, lo que ocasionó un descontento general que fue aprovechado por el Ejército. Las fuerzas militares instalaron retenes permanentes, carnetizaron a los campesinos para que pudieran transitar en la zona, controlaron los mercados e impulsaron las acciones cívico-militares con el fin de «rescatar la población campesina para la democracia».

Durante el gobierno de Turbay (1976-1980), el ministro de Defensa General Camacho Leyva recomendó explícitamente a los ciudadanos que pudieran hacerlo que se armaran para defenderse ellos mismos.

Desde comienzos de 1982 las acciones del Ejército Nacional acantonado en el Magdalena Medio, lograron la «recuperación» general de la zona del dominio comunista, con la participación activa de la población civil de Puerto Boyacá. Colaboraron

el alcalde, representantes de la Texas Petroleum Company, miembros del Comité de Ganaderos, jefes políticos regionales, la Defensa Civil, la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos ACDEGAM, representantes de las fuerzas militares y comerciantes que institucionalizaron un grupo cuya función esencial era la de defender a la población del hostigamiento económico de las FARC. Para financiar este grupo se contó con la ayuda de ganaderos, comerciantes y terratenientes de la región reforzados muy pronto con los nuevos dueños del Magdalena Medio: integrantes del Cartel de Medellín que comenzaron a invertir en tierras buscando la manera de lavar dinero y pisar su fortuna al mismo tiempo.

Fue la primera vez que se oyó hablar de grupos de autodefensa, que pasaron de tener compromiso con el poder local tradicional de ganaderos y gremios del sector agropecuario, a tratar con narcotraficantes en una alianza común para confrontar la guerrilla. En sus inicios estuvieron más ligados a poderes regionales que a los narcotraficantes, pero el fortalecimiento de estos últimos y su nuevo poder en las regiones como grandes compradores de tierras aumentó su importancia local y la lucha de las autodefensas contra la subversión como enemigo común los acercó a militares, comandantes de guarniciones en las zonas de conflicto. De ahí son llamados también paramilitares.

En Puerto Boyacá tanto los grupos paramilitares como los de autodefensa constituyeron dos formas distintas de organización de ganaderos y terratenientes:

— Las autodefensas ganaderas que obedecían a la «estrategia de defensa» de pobladores adinerados de la región para proteger sus familias, sus bienes y sus zonas de trabajo y vivienda.

— Los grupos paramilitares que se estructuraron como ejércitos privados; grupos de civiles organizados

—incluso uniformados— que patrullaban zonas de influencia de la guerrilla. Conformaron la vanguardia del ejército, marcharon durante una época delante de él buscando el contacto con la subversión armada o realizando labores de desarticulación de las bases sociales y políticas de la guerrilla.

El MAS, Muerte a Secuestradores, fue el primero y más famoso de estos grupos. En él tienen origen los múltiples movimientos de autodefensa o paramilitares que hoy se mueven por todo el territorio nacional, “respaldados en disposiciones de la Ley 48 de 1968, sobre “defensa nacional”, que permite a los mandos castrenses organizar y dotar de armamento a grupos de civiles denominados de “autodefensa”, a fin de que puedan repeler por sí mismos la acción de delincuentes organizados así como de grupos alzados en armas que operan en determinadas regiones campesinas.” (Universidad Nacional, 1987).

Para 1987 los Escuadrones de la Muerte ya habían asesinado 300 miembros de la Unión Patriótica y realizaban en pueblos y ciudades, acciones de “limpieza” contra inconformes, drogadictos, indigentes, etc. Las mayores masacres registradas hasta entonces eran de carácter urbano y se llevaron a cabo en Cali y Medellín, pero se conocía la existencia de 27 grupos de autodefensa distribuidos así (Fuente: Revista Semana 1987):

Región	Cantidad
Magdalena Medio	10
Cali	7
Medellín	4
Bucaramanga	3
Bogotá	2
Armenia, Buga y Tulúa	1
Aguachica	1
Popayán	1

Para el primer trimestre de 1988 los asesinatos colectivos en las zonas rurales se volvieron cotidianos. La actividad paramilitar se extendió del Magdalena Medio al Urabá antio-

queño. La masacre de La Mejor Esquina en Córdoba y los 21 muertos del 4 de marzo en las fincas “La Honduras” y “La Negra” cerca de Currulao en Urabá, alertaron al país sobre el fenómeno paramilitar.

El DAS presentó un informe publicado en *Semana* el 3 de mayo de 1988 donde justificaba las causas que llevaron a los bananeros a buscar la eliminación de los grupos de extrema izquierda:

“La gradual extinción del latifundio productivo a raíz de las ‘recuperaciones’; el agotamiento de la capacidad económica como consecuencia de las vacunas, en sus modalidades de ‘cuotas periódicas’ y ‘salarios’ ficticios para agitadores de la guerrilla, la impotencia empresarial para reposar o sustituir equipos afectados por el sabotaje; la imposición sindical de contratar solamente operarios designados por ellos mismos; la imposibilidad de administrar personalmente sus propiedades por el temor de ser víctimas de atentados y la indefensión ante el secuestro, parecen haber saturado la tolerancia empresarial, optando estos por conformar grupos de ‘protección’.

Seis meses después, el 11 de noviembre, 43 personas más eran asesinadas y 53 resultaron heridas por un grupo de paramilitares en Segovia, municipio minero de Antioquia con predominio político de la UP. Entre los sindicados se encontraban algunos miembros del batallón Bombón. Con esta eran 19 las masacres cometidas durante 1988.

“Son organizaciones que empiezan a contar con la simpatía y el apoyo económico de los terratenientes más reaccionarios de cada región del país” dijo el entonces director nacional de Instrucción Criminal.

Para entonces ya los narcotraficantes consolidaban sus inversiones en tierras. Habían adquirido un millón de hectáreas durante los últimos 10 años. Las zonas de mayor concentración de

tierras estaban en Córdoba, Magdalena Medio, norte de Antioquia (Caucasia y Urabá), Caquetá, Meta, Sucre, Atlántico, norte del Valle, Cauca antioqueño, Casanare, Sabana de Bogotá y zona cafetera del viejo Caldas. (Sarmiento y Moreno, 1990)

Durante el año 1989 las acciones de los grupos paramilitares se multiplicaron. El 18 de enero 2 jueces y 10 empleados judiciales fueron asesinados en La Rochela, Santander. Su acción se había extendido por el Magdalena Medio (Pacho, Yacopí, Puerto Boyacá, Puerto Berrio, Doradal, La Danta, Las Mercedes y Puerto Triunfo), Santander (Cimitarra y San Vicente de Chucurí), Urabá Antioqueño, Córdoba (Eje Montería-Puerto Escondido), Nordeste Antioqueño (Caucasia), Bajo Cauca, el Ariari (Vistahermosa, Puerto López, Acacias y Caviolina), Putumayo (La Azulita y Puerto Asís) y Caquetá (San Vicente del Caguán y El Recreo). Es decir las mismas regiones donde se estaba dando la concentración de tierras.

El Presidente Barco quiso poner límite a la acción de estos grupos armados autorizados por la ley que se le habían salido al gobierno de las manos, a través de los Decretos 813, 814, 815 de 1989.

Pero para el año 1991 y durante todo el gobierno del Presidente Gaviria los grupos paramilitares aumentaron: "El gobierno Gaviria recuperó decretos del Estado de Sitio del gobierno anterior para "contrarrestar" esos grupos y en su discurso siempre los presentó como proscritos por su gobierno. Su práctica sin embargo, caminó siempre en absoluta contravía de su discurso: escogió para los más altos cargos de las fuerzas armadas a militares cuya hoja de vida revelaba el más acendrado compromiso con la estrategia paramilitar, incluso públicamente censurados por el Parlamento y por la Procuraduría como fundadores de las estructuras paramilitares más tozudas.

La geografía nacional, durante la administración Gaviria, se fue llenan-

do de nuevas estructuras paramilitares: Urabá, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Boyacá, Casanare, Arauca, Meta, Santander, Antioquia, Magdalena Medio, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, conocieron, durante la administración Gaviria, una expansión escandalosa del paramilitarismo." (Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, 1994).

A finales del gobierno de Gaviria se registraban 132 grupos de auto-defensa según los inventarios del Comando del Ejército y del DAS, en 21 departamentos, aparte de las organizaciones guerrilleras (Cambio 16, No. 69. 1994).

GRUPOS PARAMILITARES

Región	Grupos	Municipios
Santander	21	6
Antioquia	20	6
Magdalena Medio	8	
Meta	8	12
Córdoba	6	4
Atlántico	5	
La Guajira	4	
Nte. de Santander	4	2
Casanare	3	9
Magdalena	3	6
Quindío	3	
Caldas	2	7
Caquetá	2	2
Cesar	2	
Huila	2	
Sierra Nevada	2	
Tolima	2	3
Bolívar	1	
Boyacá	1	13
Chocó	1	
Cauca		5
Valle del Cauca		1

A pesar de la voluntad de paz y de los primeros intentos de acercamiento del presidente Samper con los paramilitares de Fidel Castaño para establecer conversaciones, dos meses después de su posesión surgió, por parte del Ministerio de Defensa y a solicitud de los ganaderos, la propuesta para la creación de las Cooperativas de Seguridad Rural Convivir. La

información más reciente da cuenta de 414 Cooperativas según la Superintendencia de Vigilancia y 5.000 armas sin contar las que no están registradas.

COOPERATIVAS CONVIVIR

Departamento	Asociaciones
Santander	106
Cundinamarca	83
Antioquia	65
Boyacá	64
Córdoba	19
Caldas	12
Cesar	8
Meta	8
Huila	7
Magdalena	5
Sucre	5
Valle	5
Bolívar	5
Nariño	5
Tolima	4
La Guajira	3
Quindío	3
Atlántico	2
Casanare	2
Risaralda	2
Chocó	1
Total	414

(Cambio 16, No. 218, agosto de 1997).

En síntesis, se puede concluir que el avance de los paramilitares no se ha dado solo como respuesta a las acciones subversivas como ha querido mostrarse reiteradamente. Son varias las causas de índole social y económica que han llevado a que desarrollos los altos niveles de conflicto encontrados: la intolerancia a la oposición que llevó al exterminio de la UP; la concentración de tierras por parte de narcotraficantes y ganaderos que han extendido sus dominios a costa de pequeños propietarios quienes, desalojados de las zonas rurales, han tenido que buscar nuevos modos de vida; el auge de economías de enclave que no han reinvertido las ganancias en las regiones donde se desarrollan, la falta de asistencia estatal y la impunidad.

Estas condiciones han generado descontento que ha sido tachado de subversivo y con el fin de controlarlo, los grupos de poder han contribuido al fortalecimiento de organizaciones de justicia privada que les permitan alcanzar sus objetivos utilizando cualquier medio.

La rápida multiplicación de los grupos de autodefensa expresa la falta de control que ha ejercido el Estado a través de su organismo encargado del monopolio de las armas: las fuerzas armadas, que al justificarlos pone en evidencia su incapacidad para controlar los problemas de orden público. Lo que queda claro es que las condiciones que dieron origen a su conformación no han mejorado en los últimos diez años y la solución a los conflictos tiene que comenzar por atacar esos problemas desde sus causas económicas, sociales y políticas.

¿Pero cómo afecta globalmente el conflicto armado el medio ambiente? Se plantean los siguientes puntos.

1. La confrontación de los grupos armados tiene cada vez más víctimas dentro de la población civil. Colombia es el país con mayor tasa de homicidios y atropellos contra los derechos humanos en el mundo. Para 1995 la cifra de víctimas de la violencia fue de 9.425. Eso significa, además de una pérdida irreparable de vidas humanas, un atentado contra las formas de expresión y la extinción del conocimiento popular. La mayoría de los muertos son campesinos. Se está perdiendo la diversidad cultural y con ella opciones distintas de intervención del medio ambiente.

2. La guerra ha conducido al desplazamiento forzoso de cerca de un millón de personas que han sido sacadas de sus tierras, desvinculadas de su medio de producción y obligadas a buscar refugio en las zonas selváticas y en áreas de Reserva y Parques Nacionales Naturales.

3. El conflicto armado ha generado uno adicional: ha puesto en con-

frontación a comunidades indígenas y negras con comunidades campesinas que, en su afán por buscar alternativas pacíficas y económicas, han ocupado resguardos indígenas y territorios colectivos.

Derrames de petróleo

El derrame de petróleo merece un análisis especial dada magnitud de los efectos ambientales negativos que conlleva. Ha sido incluído este punto en el capítulo de Conflicto Armados, debido a que la mayor parte de ellos han sido asociados a la violencia al ser producto de atentados terroristas realizados contra las instalaciones petroleras. Sin embargo no se tienen datos oficiales de los derrames accidentales producto de la explotación del crudo. Ecopetrol considera que son ínfimos con relación a los producidos por las acciones guerrilleras razón por la cual no tiene una información sistemática disponible sobre su magnitud (Santiago, 1996). Por esta razón el análisis que aquí se hace solo contempla la información oficial recopilada por la Defensoría del Pueblo sobre los atentados, y supone que los efectos globales de los derrames de petróleo son entonces mucho más graves que los mencionados.

Entre 1986 y 1996 hubo 636 atentados a los más importantes oleoductos del país, superando el millón seiscientos mil barriles derramados, es decir 11 veces más que el crudo derramado en el accidente del Exxon Valdez en Alaska (Castro, 1997). El 70% de los atentados ha sido realizado por el Ejército de Liberación Nacional ELN contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauca, Norte de Santander y Antioquia principalmente. Solo para este oleoducto las estadísticas dan cuenta de 1.516 hectáreas afectadas y 1.833 kilómetros de ríos limpiados con un costo mayor de 15.000 millones de pesos (Castro, 1997).



Aunque según Castro hay muy pocos estudios sobre los efectos del derrame del petróleo y “no se conoce con certeza la efectividad de los planes de contingencia ni el grado de perjuicio a los diferentes recursos, así como a las comunidades que viven en áreas de influencia”, lo cierto es que los derrames de petróleo afectan drásticamente los suelos, la flora y la fauna de los terrenos donde ocurren, y llegan por escorrentía muy rápido a los ríos y ciénagas destruyendo la vida de organismos acuáticos al desestabilizar los sedimentos, la calidad del agua y la disponibilidad de oxígeno (Gamboa, 1994).

Todas las regiones donde se cometen los atentados han sido zonas de gran influencia guerrillera no solo del ELN sino también de las FARC, principalmente en los departamentos de Nariño y Putumayo. Se trata de comunidades rurales desprimidas que han sido víctimas de los efectos negativos y los cambios radicales que las bonanzas petroleras han llevado a sus regiones, sin que hayan tenido ninguna posibilidad de participar en las decisiones que sobre exploración y explotación de recursos naturales les han sido impuestas desde el gobierno. El caso de la exploración de petróleo en el Bloque Samoré que afecta a la comunidad indígena U'wa es un claro ejemplo sobre la manera como se imponen las decisiones desde los altos mandos sin tener en cuenta a las poblaciones afectadas. Pero además, se trata de regiones que no han recibido la inversión de los recursos que por regalías les corresponden. La regalías, el caso de Arauca es patético, han sido invertidas en obras suntuarias en las capitales departamentales, y repartidas —la mayoría de las veces— entre las burocracias administrativas dejando por fuera de su cobertura las necesidades y requerimientos de las poblaciones rurales.



Esta situación de inconformidad ha sido aprovechada por los grupos guerrileros para llevar a cabo los graves atentados ambientales y sociales que cometan con la voladura de los oleoductos, a pesar de que basan su justificación en razones de soberanía nacional que tiene que ver con la manera inequitativa como se han hecho los contratos de asociación para la explotación de los recursos naturales: “Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de atentados terroristas, sino de sabotajes a la infraestructura a través de la cual se entregan los recursos nacionales a las empresas multinacionales. En segundo lugar, nosotros no nos hemos negado por principio a las inversiones de capitales extranjeros. El problema que nosotros hemos señalado es cómo se hacen los contratos de inversión extranjera en la explotación de los recursos, que no producen desarrollo tecnológico, no defienden la propiedad de la nación sobre los mismos, ni favorece el desarrollo de una planeación estratégica en el uso de dichos recursos. Eso no solo sucede con el petróleo, sino con todos los recursos no re-

novables de carácter estratégico, el carbón, el níquel, el gas natural...” (Medina, 1996).

Por su parte, el Informe de la Defensoría del Pueblo dice que a pesar de la magnitud de los desastres, las autoridades ambientales no han tenido en cuenta los factores de riesgo que implica el diseño y la construcción de oleoductos en áreas social y ambientalmente frágiles. “Coincidencialmente, muchas de las actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos se adelantan en zonas del país que presentan altos niveles de biodiversidad, como son el piedemonte de la cordillera Oriental y la cuenca del Magdalena, entre otros. Además la biodiversidad se afecta con los derrames de hidrocarburos; estos derrames, accidentales o deliberados, normalmente resultan en una alta concentración de aceite, de mucho impacto ecológico” (Gamboa, 1994).

Se concluye entonces, como anota el Defensor del Pueblo, que el comienzo de la solución tiene que ser la inversión social: “Debe abrirse en el país un debate amplio sobre el tema de la seguridad de las instalaciones petroleras. Las cifras que se destinan a este rubro, no solo en la petrolera estatal sino en todas las compañías privadas, son enormes. Cerca de 5.200 efectivos de la Fuerza Pública, en puntos fijos de una sola empresa, y 28 batallones, con aproximadamente 1.000 hombres cada uno para seguridad periférica en el país, equivalen a una cuarta parte del ejército colombiano. Si se suma, no sólo la destinación de personal sino de recursos que se invierten en la seguridad petrolera colombiana, se debe hacer la siguiente reflexión: ¿qué sucedería si este dinero pudiese destinarse a programas con las comunidades, a mejorar el nivel de vida de los colombianos del

campo, a subsanar el impacto social, ambiental y económico que se crea en las comunidades?

No existe quién asegure el tubo ni el petróleo. No tiene solamente un alto costo operativo, sino social, salvaguardar 5.300 kilómetros de infraestructura de oleoductos con personal de la Fuerza Pública. Con ello se contribuye a incrementar el conflicto de nuestro país, en lugar de buscar alternativas para su manejo y solución" (Castro, 1997).

Cultivos ilícitos

La Marihuana

La marihuana se conoció en el país a mediados de los años sesenta, cuando llegaron a Colombia los Cuerpos de Paz, un grupo de voluntarios de Estados Unidos, pacifistas y rebeldes, cansados de la guerra del Vietnam, a trabajar con las comunidades campesinas e indígenas del Cauca, el Huila y la Sierra Nevada. Allí comenzaron a sembrarla para su consumo exclusivo. Pero la buena calidad de la "Punto Rojo" pronto alcanzó fama entre los hippies de la Sierra.

En la Sierra Nevada de Santa Marta estaban dadas las condiciones naturales, humanas, e históricas para que el negocio prosperara. Por un lado estaban los colonos que habían llegado desde los años de La Violencia de los santanderes y el Magdalena Medio y que a duras penas sobrevivían, y por otro los guajiros, que conocían todos los secretos del contrabando. Ambos grupos vieron en la marihuana un negocio próspero que podía contribuir a incrementar sus ingresos. El macizo empezó a sembrarse de arriba a abajo y se tumbaron más de 90.000 hectáreas de bosque primario. De todas partes del país llegaron campesinos y pequeños comerciantes a trabajar en la bonanza con los norteamericanos y con los guajiros. Todos los sectores terminaron involucrándose en

el negocio que creció rápidamente sin ningún control por parte del Estado. Se hicieron pistas clandestinas y de todos los puertos entre el Cabo de la Vela y Taganga, salían cargamentos de marihuana prensada. Se construyeron hoteles de lujo, se ampliaron las ganaderías extensivas, renació la zona bananera, se enriquecieron las autoridades militares y civiles, y aparecieron los ejércitos privados.

Expansión

La marihuana se extendió de la Sierra Nevada de Santa Marta a la Serranía del Perijá, al Urabá, a la Serranía de San Lucas, al Cauca y a la Serranía de La Macarena y el Guayabero. El fenómeno se repitió en cada una de estas regiones; la demanda norteamericana estaba garantizada. A pesar de los controles que se iniciaron hacia 1978 con la operación "Fulminante" para erradicar los cultivos de marihuana de La Guajira, y la fumigación aérea con gllifosato (Randup) que comenzó hacia 1980 ocasionando uno de los primeros desastres ecológicos y sanitarios de que se tenga noticia, la producción se mantuvo constante cerca a las 10.000 has, durante toda la década del 80. La mafia colombiana comenzó a invertir a lo largo y ancho del país en todo tipo de negocios y los cultivadores mejoraron sus condiciones de vida. Para 1987 el cultivo abarcaba más de 13.000 has. (Cuadro No.4)

A mediados de los ochenta, con la creación del Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), aumentaron los controles estatales. Pero no fue esta la razón por la que la bonanza se acabó. Los norteamericanos encontraron variedades híbridas que podían producir la hierba en su tierra y la producción de Estados Unidos desplazó a la colombiana. La bonanza terminó en la mayoría de las zonas de colonización y los colonos volvieron a abrir la selva para sembrar maíz y vender la mejora, aunque

ya muchos conocían la existencia de un nuevo producto: la coca.

Hoy en día, según los reportes encontrados, la marihuana no ha cambiado de sitios. Se sigue produciendo fundamentalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Perijá, en la Serranía de San Lucas y en el norte del Cauca. A partir del año 89, los cultivos se sostienen alrededor de unas 5.000 has que pueden equivaler al consumo nacional. (Cuadro No.)

La Coca

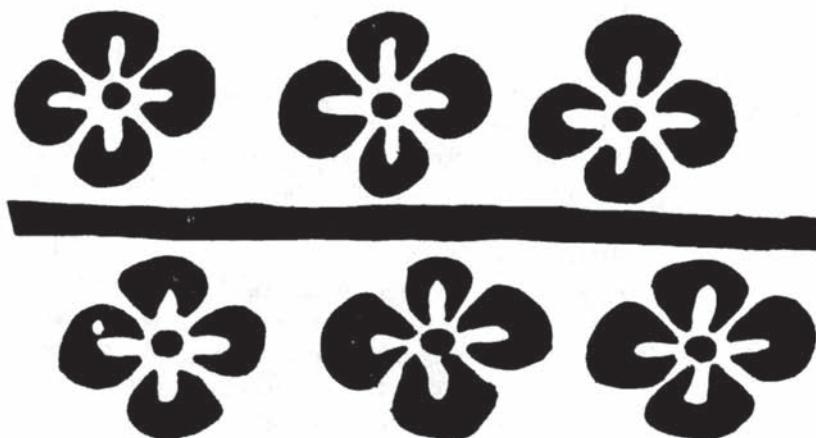
La coca ha existido en Colombia desde siempre. Ha sido usada tradicionalmente por las comunidades indígenas principalmente de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Amazonas. Es el centro de su tradición y su cultura. La usan —inclusive hoy en día— para trabajar largas jornadas y para alimentarse, para sus ceremonias y ritos, y también para la guerra. Los conquistadores la persiguieron por razones militares; los indios mambeando solo coca podían combatir días enteros sin dormir, y sobre todo sin dormir, lo que significaba una ventaja táctica. (Cuadro comparativo de nutrientes).

Aún antes de que se acabara la bonanza marimbera, los esmeralderos de Muzo y Otanche, que ya sabían de la existencia del negocio de la cocaína que se desarrollaba de manera incipiente en Perú y Bolivia, habían empezado a vincularse a su comercio. La coca tenía ventajas comparativas frente a la marihuana tanto en el volumen de la mercancía como en las ganancias que generaba. La mafia tenía experiencia en el negocio ilegal de esmeraldas. Conocía los canales de comercialización y los contactos, tenía el capital y había logrado la corrupción de las autoridades, y, sobre todo, tenía asegurado el mercado. Al principio, hicieron un centro de actividades financieras en Iquitos y embarcaban la pasta de coca en Tingo María para exportarla hacia los Llanos

Orientales donde la transformaban en cocaína. Durante los años 70 se creó una división del trabajo entre colombianos, peruanos y norteamericanos, hasta que la nueva industria comenzó a coger vuelo a medida en que se expandían los mercados norteamericano y europeo de la cocaína.

Para finales de la década la mafia colombiana decidió entonces producir su propia coca. Se sabía que los indígenas la cultivaban en el Cauca y hasta allí llegaron a comprarles hoja. Los indígenas y campesinos entraron en el negocio sorprendidos de que un producto que no había tenido mercado, adquiriera un precio tan alto de un día para otro. Ningún cultivador supo para qué se compraba hoja en grandes cantidades ni porque se transportaba en secreto hacia las capitales. A medida que el negocio prosperaba la demanda por hoja comenzó a crecer y el mercado existente fue insuficiente. Los campesinos e indígenas comenzaron a tumbar los cultivos tradicionales —incluido el café— para sembrar coca, pero aún así lo producido era poco. Los cultivos se extendieron entonces a los Llanos Orientales, una región ideal porque el Estado tenía una débil presencia, y porque el clima y las condiciones sociales se prestaban para la siembra ilícita de coca. También allí había colonos agobiados por las deudas y el trabajo.

Los primeros cultivos comerciales para producir cocaína se hicieron en 1980 por los lados de Calamar, en el Guaviare, y en el Putumayo, regiones fértiles, escasamente pobladas, que tenían en su haber la experiencia de las bonanzas de caucho, de pieles, de petróleo y de madera. Cada bonanza había pasado por allí sin dejar ninguna ganancia consolidada, pero



los colonos, los comerciantes, los transportadores y los funcionarios públicos estaban acostumbrados a los vaivenes del dinero esporádico. La mafia introdujo variedades peruanas con mayor contenido de alcaloide —peruana y tingo maría— que compitieron con éxito con la variedad local llamada pajarita. Un día la semilla empezó a dispersarse por agua, tierra y hasta por aire. Las avionetas hacían vuelos razantes votando las maticas en sitios estratégicos.

Los campesinos comenzaron a sembrarla y la extracción química de la base la hacían técnicos de la ciudad que eran llevados directamente al laboratorio donde trabajaban una semana, sin tener contacto con nadie, y una vez procesada la hoja se iban por donde habían llegado, hasta la siguiente cosecha. Al principio la coca se cultivó en grandes plantaciones en que los colonos participaban como jornaleros. Poco a poco fueron comprándoles a los patronos la semilla y haciendo su propio cultivo, su propia chagra. El monopolio residía en la compra de la hoja, y en el secreto de los procesos químicos para sacar la cocaína. Pero también los colonos se fueron dando cuenta del negocio y, no se sabe exactamente como, al cabo de un tiempo se generalizaron las fórmulas para el procesamiento. La mafia conservaba no obstante el control sobre el paso siguiente: la transformación de la base a cocaína.

Un par de años después, las chagras y los “laboratorios” para producir base de coca se empezaron a dispersar por el piedemonte. El Guaviare, el Guayabero, el Caguán, La Macarena, el Putumayo y también el Chocó entraron poco a poco a la producción. Los pioneros eran gentes salidas del hampa o mafiosos que

habían trabajado y se habían enriquecido con la marihuana o con las esmeraldas. Tenían experiencia en el manejo de grupos armados, soborno de las autoridades, mercadeo clandestino. En las zonas de colonización comenzó la bonanza cuya única ley era la distribución de la ganancia.

Bonanzas y violencia

La coca comenzó a ser cultivada bajo el sistema del endeude, con la misma残酷和 las mismas condiciones con que funcionó el negocio del caucho. El comerciante adelantaba dinero o mercancías a cambio de la base de coca. El cambio no era posible sino bajo estrechas medidas de seguridad que los comerciantes ejercían armando grupos de sicarios. En el Guaviare el sistema de avance dejó miles de muertos porque el colono buscaba a toda costa volarse con el plante o avance. La mayoría de los negocios eran hechos de palabra puesto que eran ilegales y por lo tanto no tenían respaldo institucional, de ahí que los ejércitos privados han acompañado todas las bonanzas y particularmente la de coca. Durante los primeros años en el Guaviare hubo miles de muertos debido al enfrentamiento de bandas armadas por ajuste de cuentas. En la zona esta época se conoce como la “Guerra del Guaviare”.

Los cultivos ilegales y el comercio ilegal implican necesariamente la justi-

cia privada, los ejércitos particulares, o la utilización de las armas oficiales a través del soborno. En las zonas de colonización estas dos tendencias siempre han estado presentes.

El procesamiento

PROCESO PARA EXTRACCION DE COCAINA

gasolina, bicarbonato de sodio, amoniaco

ácido sulfúrico, permanganato, amoniaco

eter, ácido clorhídrico, acetona

filtrado y secado

El procesamiento de la hoja de coca para producir la base de cocaína, que al comienzo estaba separado del cultivo, hoy se hace de manera complementaria dentro de la misma chagra. Todo cultivador procesa. La producción de pasta básica es una operación química relativamente sencilla para lo cual se necesitan recipientes y paños para trasvasar las soluciones que permiten ir separando el alcaloide de las demás materias orgánicas.

La producción de cocaína a partir de la base se hace en las ciudades y en los pueblos por regla general. Es un proceso mucho más profesional que no está al alcance de todos. Implica la utilización de sustancias químicas en proporciones precisas, tiempos de reacción y temperaturas determinadas. Muchos pasos son peligrosos por la utilización de eter. A pesar de todo, hay colonos que están produciendo cristal en las zonas de cultivo.

Precursores

Para el aislamiento del alcaloide contenido en la hoja se requiere gasolina, carbonato de calcio y permanganato. Excepto éste último producto los colonos han encontrado muchas alternativas para procesar la hoja y sacar —con mayor o menor rendimiento— la base de coca. Usan aceite de motor, kerosene y agua en vez de gasolina, y cemento, abonos químicos, y hasta decol para reemplazar la cal liviana. La gasolina además se recicla una y otra vez y se vuelve a utilizar, de modo que solo gastan lo que se evapora o la poca que se derrama. Han encontrado procedimientos para “lavar” la gasolina por decantación.

El efecto ambiental del proceso de producción de la base de coca, a pesar de que se ha hecho énfasis en su gravedad, es más bien reducido porque en general los residuos de la operación se entierran —para no dejar huellas— y en ocasiones se usan como abono para la misma coca.

La comercialización

Cuando la base de coca se comienza a mercadear se comienza también a elevar su precio. El valor agregado está vinculado al transporte, pero el alto precio que va adquiriendo a medida que la mercancía se acerca al consumidor se debe principalmente a los impuestos y sobornos que el comerciante debe pagar a las autoridades reales o formales y sobretodo al riesgo de ser capturada. La ilegalidad es la fuente de los elevados precios que la mercancía adquiere y por lo tanto de las ganancias fabulosas que se adquieren en su comercialización.

La inversión comienza con un capital, proveniente de los carteles de exportación, que se distribuye entre comerciantes menores que compran la mercancía. A medida en que este comprador o “propio” acumula, se convierte en un socio del cartel que

corre sus propios riesgos y maneja su propia organización.

El “propio” distribuye a su vez el capital entre agentes compradores —llamados “chichipatos”— que son los que entran a las zonas y tratan con los cultivadores en pueblos, puertos o caseríos. El “chichipato” paga la mercancía al colono dependiendo de la calidad y el peso del producto. El colono cancela sus deudas a los raspadores y a los comerciantes locales que le han adelantado remesa, insu- mos, herramientas. Son los principales gastos que el colono tiene. Si logra retener una porción de utilidades la invierte en mejorar su finca: casa, trocha y transporte. Algunos ahorran para comprar una casa en el pueblo donde puedan vivir los hijos para estudiar el bachillerato.

En general el “chichipato” negocia solamente con los colonos, y los “propios” tratan con los “capos” evitándose el intermediario menor. A veces los grandes capos son también agentes comerciales y por tanto transportadores en magnitudes mayores. Hay movilidad ascendente en los chichipatos que en ocasiones han sido antes raspadores que se vuelven “propios” a medida en que ganan confianza de los capos.

Impuestos

Tanto “chichipatos” como “propios” son quienes deben pagar el “gramaje” y las “mordidas”, es decir los tributos tanto a la guerrilla como a las autoridades legalmente constituidas. En términos generales, los agentes compradores entran a las zonas de producción autorizados por la guerrilla; son identificados y han aceptado pagarle a los alzados un determinado porcentaje —entre el 10% y el 20%— sobre la base de la coca comprada. El control es muy riguroso y las faltas son castigadas con severidad con penas que van



desde el extrañamiento hasta el fusilamiento.

Fuera de la zona los narcotraficantes deben pagar también un tributo a las autoridades del Estado. No es propiamente un soborno ocasional, sino un pago regular que suele acordarse con los agentes o empleados de mayor rango. En la gran mayoría de los puestos de control los narcotraficantes pagan tributo. La diferencia con la guerrilla es que esta lo cobra a nombre de la organización y bajo el nombre de impuesto de guerra; mientras que los agentes del Estado lo hacen a título individual y, por tanto, no comprometen de manera directa a la institución a la que pertenecen.

Entregada la mercancía a los grandes productores de cocaína, en el caso de la base; o a los exportadores, en el caso del cristal, la mercancía sale de la órbita de la producción propiamente dicha y entra al mercado internacional donde adquiere cada vez ganancias más desproporcionadas.

Expansión de los cultivos de coca

La coca encontró un terreno fértil para germinar y por eso la gente la

acogió rápidamente. Es el único producto que le deja al colono utilidad y que, por lo tanto, le permite conservar su mejora y, gracias a las posibilidades de acumulación, convertirla en una unidad económica solvente. En ella puede invertir su trabajo y sin perderlo, integrarse poco a poco al mundo del consumo, comprar electrodomésticos, y mandar a sus hijos a estudiar.

Entre 1978 y 1984 los cultivos de coca se extendieron por el río Guaviare, Caguán, Apaporis, Caquetá y Putumayo. Roto el monopolio del secreto y divulgada la fabulosa rentabilidad de la producción, las zonas de colonización se llenaron de colonos, comerciantes, transportadores, negociantes, y profesionales desempleados. La oferta comenzó a desbordar la demanda y pronto los precios cayeron. De un millón de pesos que se pagaba en 1980, el kilo de pasta básica cayó en 1983 a \$80.000 pesos. (Cuadro No. 5) Temporalmente las zonas se desocuparon, los entables y los cultivos fueron abandonados, las líneas de abastecimiento se suspendieron. En la frontera solo quedaron los campesinos que habían llegado a trabajar la tierra. Obedeciendo de nuevo a las leyes de oferta y demanda los precios repuntaron alcanzando los \$600.000 en el 85, y desde entonces la bonanza ha sido cíclica. Las medi-

das de control por parte del Estado han contribuido a mantener cierta estabilidad en los precios.

A pesar de las inconsistencias que muestran las distintas fuentes consultadas, las cifras estadísticas muestran que el cultivo de coca ha tenido tres etapas. Una de experimentación hasta el año 82 (menos de 10.000 has); entre el 83 y el 87 la producción se dobla a 20.000 y entre el 89 y el 96 se estabiliza alrededor de unas 40.000 has. (Cuadro No.4)

Los cultivos de coca se han extendido entre 1985 y 1995 desde las riveras de los ríos Guaviare, Caguán y Putumayo hacia sus desembocaduras en el Orinoco, el Caquetá y el Amazonas. La siembra ha ido desplazándose por los cursos medios y se ha internado desde las riveras hacia las sabanas y mesetas. Hoy día en la zona oriental del país los cultivos llegan hasta Santa Rita en el Vichada, Puerto Inhírida en Guanía, la Pedrera en el Caquetá y Puerto Nariño en el Putumayo. Las fumigaciones han contribuido a su desplazamiento y los colonos se internan cada vez más adentro de la selva para evitar su localización.

En el suroccidente, el norte y el sur del Cauca y el norte de Nariño, la coca se intercala con cultivos tradicionales como el café, el plátano y la Yuca. Pero están asociados en lo fun-

damental a zonas campesinas e indígenas. En la llanura Pacífica también se han incrementado los cultivos de coca en la mayoría de los cursos medios de los ríos, fundamentalmente el Patía, el Micay, el Naya y en algunas zonas del San Juan y de la Serranía del Baudó.

En la vertiente oriental de la cordillera occidental hay cultivos en el Cauca, Valle y Risaralda. En la Costa Atlántica se han ampliado los del sur de Bolívar, en la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Perijá, prácticamente desde los Montes de Oca hasta el Catatumbo.

En la zona central se conoce que existen asociados a las áreas esmeraldíferas, Quípama, Coscuéz, Otanche. En Antioquia hay cultivos por los lados del Magdalena Medio y hacia el límite con Chocó. Lo que parece persistir es que en los cultivos ilícitos están asociados tanto a la economía campesina como a la economía empresarial.

La Amapola

El cultivo de amapola y la fabricación de heroína en Colombia ha sido un proceso más planificado que el de la cocaína. La amapola había sido hasta fines de la década del ochenta una planta de jardín, pero con la primera crisis de la coca se inició en firme esta nueva línea de producción.

El Cartel de la Amapola, compuesto por capitales del triángulo Caquetá-Tulúa-Pereira envió profesionales a aprender en detalle las técnicas agrícolas y los procedimientos químicos para la elaboración de la heroína a Filipinas, principal productor de opio y heroína, al mismo tiempo que estudiaban los mercados para introducir en Estados Unidos y la Unión Europea la mercancía colombiana. Una vez conocidas las condiciones técnicas y económicas comenzó a trabajarse en el país. Se experimentó en tres lugares: los páramos del Rio-

negro, Huila, en San Antonio en el Tolima y en San Sebastián en el Cauca. Aunque las variedades que se importaron eran menos productivas que las asiáticas, la calidad de la heroína no era inferior. Y como la gente estaba ansiosa de trabajar la nueva línea, el experimento tuvo éxito y el látex comenzó a salir comercialmente a los mercados en los años 89-90. Comezaba la crisis cafetera y muchos de los campesinos empezaron a trabajarla en los páramos donde habían nacido y de donde habían salido hacia la selva a trabajar con la coca.

Expansión del cultivo

Al comienzo se presentaba en las zonas frías el comerciante que “plantaba” a los cultivadores —les adelantaba dinero para la siembra y la recolección— y los asesoraba para obtener látex de óptima calidad. Cuando se vendía “la mancha” o látex extraído del bulbo —que es la materia prima de la heroína— se pagaban las deudas del plante inicial. Los campesinos de los páramos no presentaron resistencia porque tenían relación con las zonas de colonización y con la cultura de la bonanza.

En el Huila y el Tolima los planteros trabajaron con campesinos que comenzaron a desmontar parches aislados de los páramos. Los indígenas del Cauca también se vincularon poco a poco el nuevo cultivo. Primero le arrendaron el pedazo de páramo al plantero, luego le aceptaron el dinero adelantado y por último se volvieron cultivadores. Pero no de grandes “cortes” sino de jardín. Igual que la coca, los indígenas sembraron la amapola inicialmente cerca de la casa, en la huerta.

En el año 90 la amapola salió a la luz pública y el gobierno del presidente Gaviria decidió tomar medidas para su control. Se divulgaron por todos los

medios las amenazas representadas por su cultivo: la destrucción de los páramos y las fuentes de agua; se denunció la alianza de los carteles de la coca y la amapola, los perjuicios que le traerían a la economía nacional. La Policía Antinarcóticos denunció la participación de la mafia siciliana en el negocio, y le declaró la guerra fumigando cultivos en la Cordillera Central. La prensa y los medios publicaban diariamente noticias sobre el cultivo. El Gobierno creó entonces un clima adverso para facilitar su erradicación, sin imaginar que a la larga, sirvió más para divulgar sus beneficios que para los fines que se proponía. Los cultivos se dispersaron por toda la cordillera Central y los páramos de Boyacá, Santander y Cundinamarca. En el Tolima los pequeños cultivos dieron origen a grandes extensiones y en las zonas donde comenzaba la nueva bonanza no tardaron en presentarse eventos de violencia.

La amapola ha subido espectacularmente de cerca de 700 hás. reportadas en el 90 a unas 16.000 hás. en el 92 y se ha estabilizado alrededor de las 20.000 hás. para el año 95 (Cuadro No 4). Hoy se encuentra en casi todos los páramos, pero son notables las densidades en la cordillera central en los departamentos de Cauca, Huila, Tolima, Valle y Nariño. En la cordillera occidental se han extendido a los páramos que dividen aguas entre la zona cafetera y el Chocó y en el borde oriental de la cordillera oriental en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Ultimamente se ha detectado cultivos en las zonas altas del Perijá.

Situación actual

Las cifras

Las estadísticas de la Policía Antinarcóticos arrojan las siguientes cifras:

Cultivo	Superficie (has.) 1994	Superficie (has.) 1995	HAS erradicadas (enero-dic 1995)
Marihuana	5.000	4.986	
Coca	39.800	45.000	25.402
Amapola	20.785	6.540	5.074

Estas cifras en su conjunto nos plantean las siguientes dudas:

Según los cálculos de la Policía deberían aparecer para el año 95, 14.398 hás de coca pero aparecen 45.000. ¿Esas 30.602 hectáreas nuevas son fruto de nuevas siembras? ¿O de cálculos erróneos? O de las dos cosas.

Para la amapola en cambio sucede lo contrario. De 20.785 hás en 1994 se pasa a 6.540 hás en el 95, habiendo erradicado tan solo 5.074 hás. ¿Qué se hicieron las 9.171 hectáreas restantes? Los campesinos dejaron de sembrar y se acogieron al Plante o los cálculos se hicieron en distinta época del año. ¿En el primer caso en la cosecha de año y en el segundo la mitaca?

Por otro lado, la superficie estimada para la coca por el Grupo de Dublín en 1994 asciende a 80.959 hectáreas, que se aproxima a los cálculos hechos por Uribe para el PNUD, superan por mucho las de la Policía Antinarcóticos (Uribe, 1996). Según este último en Colombia habría aproximadamente 83.600 hás de coca que es casi el doble de lo que presumen que existe las fuentes colombianas. Según Uribe la diferencia radica en que no se contabilizan las áreas marginales. Cabe también la posibilidad de que no fueran contabilizadas para aumentar la eficacia de la fumigación. Del lado Norteamericano las cifras pueden ser infladas para exigir más resultados. Ver Cuadro 4.

Lo mismo sucede con los datos sobre productividad. Los cálculos que se han hecho varían dependiendo de: la variedad de coca, el tiempo de siembra y el sistema de procesamiento principalmente, aunque hay factores como la altura sobre

CUADRO4
AREA DE CULTIVOS ILÍCITOS
EN COLOMBIA (1994)

Dptos.	Coca (hás)	Marihuana (hás)	Amapola (hás)	Total (hás)
Antioquia	600		157	757
Boyacá			806	806
Caldas			120	120
Chocó	130			130
Bolívar ¹	2.300	630	71	3.001
Caquetá ⁹	20.706	6	322	21.034
Cauca	3.402	200	4.784	8.386
Cesar ²	300	2.000	105	2.405
Cundinamarca			458	458
La Guajira			75	75
Huila		16	5.823	5.839
Magdalena ³	800	3.000	100	3.900
Meta	8.500		262	8.762
Nariño	2.990		1.312	4.527
Norte de Santander		225	140	140
Putumayo ⁴	15.281		130	15.411
Quindío			132	132
Risaralda			121	121
Santander			45	45
Tolima	100	5	5.159	5.264
Amazonas ⁵	800			800
Guainía ⁶	750			750
Guaviare ⁷	24.448			24.448
Valle del Cauca		30	283	313
Vaupés ⁸	1.250			1.250
Vichada	1.250			1.250
Total	83.607	6.112	20.405	110.124

Notas: 1. Serranía de San Lucas 2. Serranía de Perijá 3. Sierra Nevada de Santa Marta

Notas adicionales de los presentes autores: 4,5,6,7,8 y 9: departamentos amazónicos selváticos.
Fuente : Uribe (1995).

el nivel del mar y la humedad relativa del lugar donde se encuentren los cultivos que varían la concentración del alcaloide en la hoja.

En resumen, no se tiene certeza de cuántas hectáreas existen hoy en día en cultivos ilícitos y por tanto cuánto se produce, cuál es el efecto ambiental y social de esa producción, cuánta gen-

te puede haber involucrada, cuál es la distribución de utilidades —incluyendo el gramaje— ni cuál es el efecto real de las actividades de erradicación o de los Programas de Desarrollo Alternativo.

La producción de cultivos ilícitos además, ha ejercido un doble efecto en la agudización del conflicto: al mis-



mo tiempo que garantiza los únicos ingresos fijos a las poblaciones campesinas que viven en las zonas de colonización — que además constituyen la base política de la guerrilla— , contribuye a aumentar los ingresos que los grupos guerrilleros recaudan, principalmente las Farc, a través del gramaje que exigen a cultivadores, procesadores y comerciantes de la droga. Por el otro lado su comercialización ha financiado el crecimiento de los grupos paramilitares a medida que aporta el capital para financiar la expulsión del campesino y la expansión del latifundio. Su efecto en la financiación de la guerra es contundente.

Sobre los efectos ambientales dice un documento oficial: "La producción de coca se concentra en los bosques húmedos tropicales de la Amazonía y la de amapola en los bosques altoandinos de niebla. Se estima que la siembra de una hectárea de coca significa la destrucción de 2 hectáreas de bosque, y la siembra de una hectárea de amapola, la tala de 2,5 hectáreas. En total, la deforestación de es-

tos ecosistemas ronda las 200.000 hectáreas por año (Plante, 1995-1998). Esa cifra puede ser menor dado que la coca es un cultivo permanente que, de no ser erradicada o fumigada, sería productiva al menos por cinco años. En ese sentido las estadísticas que se contabilizan año tras año estarían incluyendo cultivos antiguos que solo han tenido efectos ambientales sobre el bosque en el momento de ser sembrados. De la superficie anual sería necesario establecer cuáles son las siembras nuevas para los cálculos del daño sobre los bosques. Los efectos de la amapola sobre los páramos son mucho más contundentes en la medida en que la superficie que sale de la producción cada cosecha es generalmente sustituida por potreros.

Anota también el documento que: "el 60% del área sembrada en cultivos ilícitos es de carácter campesino (menos de 3 hectáreas) —unas 30.000 familias estarían asociadas de manera directa a esas siembras y otras 270 mil estarían de manera indirecta— y

el restante 40% tiene carácter comercial. Los cultivos en pequeña escala se ubican en su mayoría al interior de la frontera agrícola. (Los de amapola en los páramos del Huila, Cauca y Nariño y los de coca en el Cauca y el sur de Bolívar). Los cultivos comerciales, de mayor tamaño, se localizan sobre áreas periféricas de la frontera o en zonas aisladas bosque adentro, tanto en la Amazonía como en la región Andina (Los cultivos comerciales de amapola están ubicados principalmente en el Tolima). Así las cosas, es claro que la lucha de este gobierno contra los cultivos ilícitos y su tráfico, es también la lucha por la recuperación y preservación del más caro y significativo patrimonio ambiental del país: los bosques tropicales". (Plante, 1995-1998).

En resumen, los cambios más importantes en estos diez años son:

- La ocupación de los páramos con amapola
- la dispersión de los cultivos de coca en la selva amazónica, y
- la extensión de los tres cultivos hacia las zonas cafeteras.

Migraciones

Las áreas más dinámicas de producción ilícita siguen siendo Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta. Son las áreas de colonización por excelencia que han recibido un creciente número de jornaleros, campesinos y comerciantes. Al departamento del Guaviare llega gente del Meta, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle y aún de Bogotá. El Caquetá recibe campesinos migrantes del Huila, Tolima, Valle, Cauca y Cundinamarca. El Putumayo recibe gente de Nariño, Caquetá, Cauca y Huila.

Sin poder cuantificarlo, la población migrante es en su gran mayoría constituida por campesinos expulsados por la violencia, la concentración de la tierra, por la crisis de la economía parcelaria y la subdivisión del minifundio, por la crisis cafetera y por el desempleo. Tampoco se puede afirmar con certeza que la migración se haya acelerado con las políticas de apertura y privatización pero existen numerosos testimonios que apoyan estas hipótesis.

— Migración oscilante

Ahora bien, los campesinos que llegan no todos se establecen con carácter permanente. Existe la migración oscilante entre las parcelas de origen y las chagras productoras de coca y amapola. Campesinos del Valle de Tenza o de la región de Gutiérrez, de Sandoná o del Sanquianga abren sus chagras en el Guaviare o en el Putumayo y con los ingresos allí obtenidos sostienen sus fincas originales. Cuando sobrevienen las crisis de precio abandonan los cultivos ilícitos y se refugian en sus parcelas donde suelen invertir la mayoría de sus utilidades.

— Migración permanente

Los colonos estables son los que digamos han perdido sus tierras, han



vendido sus parcelas y han llegado a hacer finca. Por esta razón invierten en cultivos lícitos, en el mejoramiento de pastos, en pequeñas ganaderías, en el mejoramiento de vivienda y transporte, y sobretodo en educación de los hijos. Muchos compran una casa en las capitales con miras a que los niños superen su analfabetismo, inversión está última que en Colombia exhibe una tasa de retorno negativa. A este grupo de campesinos no lo afecta por lo general las oscilaciones y las crisis de precios. En los años 85 a 87 cuando los precios se vinieron al suelo, es-

tos migrantes campesinos conservaron sus mejoras.

— Migración por cosecha (Raspadores)

Hay un sector de jóvenes campesinos que migra a las zonas de cultivo con el fin de participar como jornaleros agrícolas o como cosecheros, como procesadores o en fin como auxiliares en el comercio o el transporte. La mayoría son los llamados raspadores o raspachines, cuyo número está cerca a los 100.000. Es un grupo muy heterogéneo por su origen y composición social pero que tiene una característica en común: ahorra muy poco.

— Migración ausentista

Existe también un sector empresarial que trabaja grandes extensiones y cuyo esquema productivo es asimilable al de la economía de enclave. Podría decirse que son los menos interesados en una solución social. En general están muy vinculados a los grandes comerciantes y a los políticos locales. La mayoría de sus utilidades son invertidas fuera de las zonas de producción. Muchos son ausentistas y se asocian con mayoristas que manejan sus negocios localmente.

Medidas de control

Fumigaciones

Las fumigaciones de los cultivos ilícitos han sido hasta el momento desastrosas en términos de la pérdida de biodiversidad. No tanto por los efectos que pueda tener el Glifosato (herbicida utilizado) sobre el medio ambiente, sino sobretodo porque el efecto inmediato que producen es el desplazamiento de los cultivos a áreas más alejadas. Por un lado, la aplicación de herbicidas —que de hecho tienen consecuencias perjudiciales para

el medio ambiente, la salud humana y las aguas— es mucho más grave en los cultivos comerciales del Tolima, el Huila, el Valle del Cauca o el Cesar. Se trata de productos que atacan las plantas y microorganismos del suelo para dejarlo limpio de malezas que puedan interferir en el crecimiento del cultivo seleccionado, al mismo tiempo que abonan los suelos proporcionando nutrientes artificiales que compiten y agotan la fertilidad natural. Pero por otro lado esta forma de erradicación ha contribuido a aumentar la superficie cultivada en dos sentidos:

1. Ha desplazado los cultivos selva adentro en la medida en que ha conducido a los cultivadores a realizar nuevas siembras en terrenos boscosos, a costa de páramos o selvas, para recuperar el dinero invertido en el cultivo perdido. Al menos hasta el año 95, la superficie total cultivada había continuado aumentando a pesar de todos los esfuerzos de la Policía Antinarcóticos por erradicarlos, y

2. En la medida en que momentáneamente se disminuye la oferta, la fumigación ha contribuido a mantener altos los precios de los cultivos, estimulando a los cultivadores a mantener la producción seguros de ver retribuida su inversión.

Programas de Sustitución

La otra forma de erradicación que hasta ahora parece haber tenido mejores efectos han sido los programas de sustitución. Se han llevado a cabo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Cauca, el Guaviare, el Caquetá y el Putumayo con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del uso indebido de las drogas UNFDAC. Sin embargo las alternativas productivas que se han ofrecido a los cultivadores no han tenido los resultados esperados. Primero porque los cultivos lícitos alternativos no han tenido la comercialización garantizada. En muchas regiones se sem-



bró café como posibilidad de sustitución justo cuando este entraba en crisis. Segundo porque de los programas del gobierno solo llegan a la región las promesas. Según las fuentes consultadas para el año 1996, los campesinos hicieron cerca de 5.000 solicitudes de crédito al programa de Desarrollo Alternativo Plante en el Meta, de los cuales durante el primer semestre del 96 solo había atendido 127 (Guerrero, 1996). La revista Semana por su parte calcula que en el departamento del Guaviare mientras el cultivo y producción de base de coca mueve de forma subterránea 300.000 millones de pesos, el presidente Samper ofreció 17.000 millones de pesos para invertir durante todo el año y a julio solo se habían entregado 2.000 millones (Julio 30 de 1996). Las limitaciones del mismo programa de atender solo a los 30.000 cultivadores de menos de tres hás. de coca deja por fuera la mayor parte de las 300.000 personas vinculadas al cultivo y procesamiento de la coca en el departamento.

Por último, el otro problema que tienen los programas es el estímulo de la ganadería extensiva. Es cierto que se trata de una actividad acogida por

los campesinos porque tienen confianza en su rentabilidad y porque saben manejarlo; los estudios demuestran que es una de las pocas actividades que puede competir con los cultivos ilícitos. Pero no es menos cierto que la ganadería, en la medida en que implica la poterización de suelos frágiles como son los de la Amazonía, tiene efectos ambientales muy graves. En este sentido sustituir la selva por ganado a través de la erradicación de la coca, puede contribuir a la pérdida de biodiversidad. El Plante hasta el momento ha tenido el cuidado de impulsar la ganadería intensiva y de doble propósito con manejos silvo-pastoriles. Sin embargo hay que tener en cuenta que si estas modalidades de ganadería fracasan y los campesinos se arruinan, podrían llegar a convertirse en la base de grandes ganaderías.

En resumen, los pocos recursos económicos con que han contado los programas de sustitución en comparación con las grandes sumas empleadas en la fumigación por la lucha antinarcóticos, han impedido obtener resultados eficientes en el control y la erradicación de los cultivos ilícitos.

Movilizaciones campesinas

Durante los meses de junio y julio de 1996 se movilizaron cerca de 200.000 cultivadores de coca en el Putumayo, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander y el sur de Bolívar. El incumplimiento de las expectativas generadas por los programas de sustitución, las fumigaciones y el control de los insumos para el procesamiento de la hoja, condujeron a protestas y movimientos campesinos que se controlaron con medidas represivas generando nuevos eventos de violencia en las regiones productoras. Los enfrentamientos entre los cultivadores dejaron un saldo de tres muertos y más de un centenar de heridos (Semana, agosto 20 de 1996).

El movimiento, que fue ampliamente publicitado, tuvo en sus comienzos varios efectos positivos: puso en

evidencia el conflicto que se vive desde hace más de una década en las zonas de colonización, sensibilizando a la opinión pública acerca de la realidad de los cultivadores de coca. A pesar de la insistencia de los medios y de las Fuerzas Militares en vincular las movilizaciones a los grupos armados, se generó una amplia corriente de oposición que desatanizaba a los cultivadores, quitándoles el rótulo de delincuentes y entendiendo su actividad como una manera legítima de vincularse al mercado desde sus posibilidades. Muchos de los protagonistas de las marchas tuvieron la oportunidad de dar declaraciones a los medios explicando la precariedad de sus condiciones de vida y la desatención del Estado a que han estado sometidos por años. Por último, la agresión contra un camárografo de la televisión evidenció a su vez los atropellos cometidos con frecuencia por la Fuerza Pública contra las poblaciones marginadas.

Esta situación condujo al gobierno del presidente Samper a buscar un arreglo pacífico y se llevaron a cabo mesas de negociación en las distintas regiones protagonistas de las marchas campesinas. En cada una de las manifestaciones, excepto en el Guaviare, se firmaron actas de compromiso entre el Gobierno Nacional y representantes de la comunidad.

El valor de los compromisos adquiridos se calculó inicialmente en \$ 138.000 millones de pesos (Documento Conpes DNP-UPRU-PLAN SUR, enero 29 de 1997), sin contabilizar en ese momento programas y proyectos de los cuales no había definido el monto de recursos y que después ascendería a la cifra de \$ 225.791 millones (Plan Sur, diciembre de 1997).

Sin embargo, a pesar del arreglo negociado, varios puntos quedaron en entredicho. Primero, en muchos casos el gobierno adquirió compromisos y creó expectativas difíciles de aten-

der —dicho por el mismo documento Conpes—, y segundo, la mayor parte de las solicitudes de las comunidades se centraron en asuntos económicos: obras de infraestructura (70.2%), sector agropecuario (5.9%) y atención de servicios de salud (7%), vivienda (8.7%) y educación (6.2%), que de hecho las entidades del orden nacional y regional estaban en obligación de atender, dejando por fuera reivindicaciones políticas, sociales y culturales de las cuales adolecen todas las regiones de colonización y que a su vez son la principal causa de su marginamiento. El resultado fue pues, el petitorio de siempre que se desempolva cada vez que se presentan los conflictos. En muy pocos casos se tocaron temas como las medidas de control a los cultivos ilícitos, la violación de derechos humanos, la necesidad de alternativas políticas, ni los mecanismos efectivos y permanentes de participación de las comunidades en las definiciones de inversión regionales. Casi dos años después, aunque el gobierno ha cumplido más del 60% de sus compromisos, siguen presentándose conflictos con las comunidades y los cultivos ilícitos no han disminuido.

En la medida en que no existan inversiones sociales adecuadas a las necesidades y permitan a las comunidades mejorar realmente su nivel de vida, los campesinos de las zonas de colonización seguirán cultivando marihuana, coca y amapola como fuente de ingresos, financiación de sus actividades productivas y garantía de supervivencia.

Situación actual

El panorama que se presenta hoy en el campo colombiano es dramático. Pero no solo en términos económicos; también en lo social y en lo ambiental.

1. La tierra está concentrada en pocas manos. 12.000 propietarios (el

0.6% del total) son dueños de 10 millones de hectáreas (el 20% del total de tierra agropecuaria) (Cuadro No.2). En 1995, veinte años después, se ven claramente los efectos de las reformas políticas de los años 70. Es tan rentable su inversión que inclusive los narcotraficantes se han adueñado de ellas y 5.2 millones de la superficie está en sus manos. (Reyes, 1997). En efecto, ellos han comprado tierras en 409 municipios de los 1.039 que tiene el país.

2. Según la vocación de las tierras (IGAC, 1989), en el país hay un uso inadecuado. La superficie empleada en agricultura es sustancialmente menor a la potencialmente agrícola, mientras la superficie en potreros supera ampliamente la aconsejable.

	uso potencial ¹	uso actual ²	Diferencia
agricultura	14.306	4.430	9.876
ganadería	19.400	35.527	-16.127
bosques	80.300	74.200	6.100

Fuente: 1. Igac. Atlas Básico de Colombia. 1989.
2. Dane Proyecto Sisac. 1995.

3. Aunque el total de la superficie aprovechada prácticamente se duplicó entre 1960 y 1995, pasando de 19.6 millones de hás. a 39.9 hás., la superficie agrícola disminuyó cerca de 600.000 hás. y las tierras más肥iles están dedicadas a la ganadería. Los departamentos de los Llanos, la costa Atlántica y el Magdalena bajo y medio tienen más del 90% de su superficie agrícola destinada a los pastos (Cuadro No.6). La tercera parte de ellas, presumiblemente las sabanas naturales del oriente del país, está trabajada bajo el sistema de ganadería extractiva.

4. Más de la mitad de la superficie agrícola se encuentra dedicada a monocultivos comerciales (banano, palma africana, caña de azúcar) que emplean mano de obra asalariada

desvinculando al campesino de su medio de producción y destruyendo los vínculos sociales. Dos millones y medio de hectáreas (el 56% de la superficie cultivada) están dedicadas a cultivos permanentes.

5. La economía campesina que mantiene prácticas agrícolas diversificadas y conserva el bosque, ocupa un espacio cada vez más reducido. En las fincas de menos de 5 hás. la superficie dedicada a los cultivos ocupa casi la mitad de la extensión aprovechada. Pero a medida que aumenta el tamaño de las fincas, mayor es la superficie dedicada a los potreros. En las fincas mayores de 500 hás, la agricultura prácticamente desaparece (Cuadro No.7).

6. Los campesinos cada vez son una proporción menor de los propietarios rurales. Del 62.5 % del total de explotaciones que en 1960 tenía menos de 5 hás, en 1995 había disminuido al 46.8%. En este sentido se está perdiendo la única opción de desarrollo sustentable en el campo.

7. Los campesinos, que fueron expulsados para agrandar las haciendas ganaderas y las plantaciones de cultivos comerciales, están migrando a las ciudades o están ampliando la frontera agrícola a costa del bosque y de los territorios de las comunidades indígenas y negras. El estudio de las migraciones entre los censos de 1985 y 1993 revela que el Guaviare es el departamento más afectado por la lle-

gada de migrantes. El 65% de la población residente viene de otras partes del país. Santa Fe de Bogotá, Arauca, Putumayo, Meta y San Andrés y Providencia le siguen con el 40%, y en Caquetá, Vichada, Quindío y Risaralda cerca del 35% de la población provino de otros departamentos (Martínez y Rincón, 1997). Los departamentos de región Orinoquia-Amazonia son principalmente los que están recibiendo la mayoría de los migrantes.

8. La violencia desatada en las zonas rurales, violando los derechos humanos de los campesinos, al mismo tiempo que facilita la concentración de la tierra, acelera la destrucción de la selva. Según el estudio de la Conferencia Episcopal Colombiana (1995), el 10.23 % de los 586.261 desplazados que hubo en el país entre 1985 y 1995, llegaron a los departamentos de la frontera agrícola (Llanos, Amazonas y Chocó). Si se calcula que una familia de colonos abre en promedio 5 hás al año, estaríamos hablando de 60.000 hectáreas menos de bosques al año por motivo de la violencia.

Alternativas

Se ha visto como hasta ahora todas las medidas tendientes a la erradicación de los cultivos ilícitos han sido ineficientes. Es hora de buscar soluciones distintas a la fumigación y el

control en zonas productoras y proponer grandes cambios en las estructuras que los originan. Hay que resolver el problema del desplazamiento de campesinos desde su origen, evitar la concentración de la tierra y la crisis de la economía campesina. Hay que hacer más inversiones sociales y menos militares, hay que resolver la guerra que vive el país. Algunos pequeños pasos se han dado en este sentido:

1. Los acercamientos logrados con los grupos armados pueden ser el comienzo que conlleve a una verdadera solución donde se involucren todos los actores relacionados con el conflicto.

2. Apoyar la creación del Fondo Internacional de lucha contra las drogas propuesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el mes de junio pasado, es otro gran avance a la solución del problema por la vía dell compromiso internacional de las partes,

3. Si bien, la situación actual del campo en el país contribuye plenamente a la pérdida de biodiversidad, en Colombia hay diferentes iniciativas que pueden salvar aún las prácticas sostenibles vinculadas a la producción y garantizar el desarrollo pacífico de formas culturales indispensables para la conservación del medio ambiente: la ampliación y saneamiento de territorios a las comunidades indígenas, la Ley 70 que garantiza la titulación de territorios

CUADRO 7

Actividad (millones de hás)	1960	1970	1978	1987	1995
Agrícola	5	7.6	8.8	5.3	4.4
Pastos	14.6	17.5	20.5	40.1	35.5
Bosques y otros	94.6	89.1	84.9	68.7	74.2
Total	114.2	114.2	114.2	114.1	114.2

Fuente: 1960-1970, Dane. 1978, DNP. 1987, IGAC-ICA. 1995, Dane-Sisac.

colectivos a las comunidades negras y la nueva Ley de Reforma Agraria —Ley 160 de 1994— que crea las Zonas de Reserva Campesinas. Los objetivos de la Ley más contundentes a los que debe apuntalar una política de biodiversidad son (Minagricultura-IICA, 1997):

1. Fomentar y estabilizar la economía campesina
2. Superar las causas de los conflictos sociales que las afecten
3. Crear condiciones para el logro de la paz y la justicia social
4. Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país
5. Evitar o corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la propiedad rústica
6. Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos
7. Crear una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión pública
8. Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural
9. Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su real participación en las instancias de planificación y decisión local y regional.

BIBLIOGRAFÍA

- Balcázar Alvaro, 1994, *La gandería bovina en Colombia, 1970-1991*, Minagricultura 1994.
- Castro Caicedo, José Fernando, 1997, “En defensa del pueblo acuso: Informe sobre impactos ambientales, económicos y sociales de la voladura de oleoductos en Colombia”. Defensoría del Pueblo.
- Comando del Ejército y el DAS, *Cambio 16 N° 69*, octubre 3-10 1994.
- Comisión Intercongregacional de Justicia y paz, *Boletines de Justicia y Paz*, 1989-1995.
- Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, *Boletines de Justicia y Paz*, Primer trimestre de 1996, p. 53.
- Dane, 1974, *Censo Nacional Agropecuario 1960, 1970-71*, Boletín Mensual de Estadística, Nos. 274-275, mayo-junio 1974.
- DNP, 1978, Tomado de Balcazar Alvaro. “La ganadería bovina en Colombia, 1970-1991”, Revista *Coyuntura Agropecuaria*, Cega, vol. 7, No. 4, cuarto trimestre, 1990.
- Gamboa, Medardo, 1994, “Investigación y medio ambiente” en *Congreso Nacional Petrolero*, Citado por Castro 1997.
- Gómez, Hernando José, *Economía Colombiana*, 226-227, febrero-marzo 1990.
- González y Díaz. mimeo, sin fecha.
- Guerrero, Eugenio, 1996, “Cultivos Illegales y problemática social” en Revista de *Derechos Humanos, Justicia y Paz*, vol. I, No. 3, julio-diciembre de 1996.
- IGAC, 1986, Situación y Análisis del Proceso Colonizador en Colombia, *Análisis Geográficos* 10.
- IGAC-ICA, 1987, *Mapa del Uso Actual de la Tierra en Colombia*.
- Martínez, Ciro y Rincón, Manuel, 1997, “Tendencias recientes de las migraciones internas en Colombia”. Documento preparado por la División de Indicadores y Orientación del Gasto Social DNP, en revista *Desarrollo Urbano en Cifras*, No. 2, abril de 1997.
- Medina Gallego, Carlos, 1990, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*, p. 81.
- Medina Gallego, Carlos, 1996, *ELN: Una historia contada a dos voces*. Entrevista con el cura Manuel Pérez y Nicolas Rodríguez Bautista, *Gabino*, Rodríguez Quito Editores.
- Minagricultura-IICA, 1997, Proyecto Zonas de Reserva Campesina. programa de Modernización y Diversificación. Las Zonas de Reserva Campesina: Una estrategia de Desarrollo Rural. (Documento de Trabajo), enero de 1997.
- Oquist, Paul, 1978, *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Biblioteca del Banco Popular.
- Plante, 1995-1998, Plan de acción, Síntesis preliminar, mimeo, 26 de mayo de 1995(s.n.p.).
- Ramírez, William, 1981, La guerrilla rural en Colombia: una vía hacia la colonización armada? *Estudios Rurales Latinoamericanos*, vol. 4, No. 2, mayo-agosto 1981.
- Revista *Semana*, Justicia Privada, junio 16 de 1987, p. 82.
- Revista *Semana*, La masacre de Segovia, noviembre 15 de 1988, p. 82.
- Santiago, Miguel Angel. 1996. Jefe de la Oficina de Relaciones con la Comunidad. Ecopetrol. Com. pers.
- Sarmiento Libardo y Moreno, Carlos, 1990, “Narcotráfico y sector agropecuario en Colombia”, en *Economía Colombiana*, No. 226-227, febrero-marzo 1990.
- Universidad Nacional, 1987, *Colombia: Violencia y Democracia*, Informe presentado al Ministerio de Gobierno.
- Uribe, Sergio, 1996, “Algunas consideraciones sobre las extensiones de los cultivos de coca en Colombia”, Revisa *Coloquio*, Dirección Nacional de Estupefacientes, Año 4, No. 1, Septiembre de 1996.
- Vieco, Juan José, 1995, El proceso de colonización en Colombia durante el último decenio. Conferencia Episcopal.

Anexos

CUADRO 1
SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA TOTAL NACIONAL 1995
DANE. PROYECTO SISAC. 1995

	DEPARTAMENTOS AGRICOLAS	DEPARTAMENTOS NO AGRICOLAS	TOTAL
SUPERFICIE TOTAL	73.890.515	39.196.842	113.087.357
SUPERFICIE NO ESTUDIADA	28.926.529	32.294.832	61.221.361
BOSQUES	21.384.330	27.848.642	49.232.972
AGUAS	2.667.210	425.017	3.092.227
URBANA	326.496	2.978	329.474
PARQUES NACIONALES	1.909.808	4.018.195	5.982.003
PARAMOS	2.638.685		2.638.685
SUPERFICIE ESTUDIADA	44.963.986	6.902.010	51.865.996
AGRICOLA	4.219.410	210.609	4.430.019
CULTIVOS PERMANENTES	2.355.416	145.875	2.501.291
CULTIVOS TRANSITORIOS	1.863.994	64.734	1.928.728
POTREROS	30.308.867	5.219.006	35.527.873
PASTOS	22.810.085	4.946.236	27.756.321
MALEZAS Y RASTROJOS	7.498.782	272.770	7.771.552
BOSQUES	8.862.306	1.225.764	10.088.070
BOSQUES NATURALES	8.615.861	1.224.475	9.840.336
BOSQUES DE PLANTACION	246.445	1.289	247.734
OTROS	1.573.403	246.631	1.820.034
ERIALES	678.583	8.230	686.813
CUERPOS DE AGUA	360.239	17.148	377.387
OTROS	534.581	221.253	755.834

CUADRO NO. 6
VARIACIÓN DEL USO DEL SUELO POR DEPARTAMENTO 1970-1995

DEPARTAMENTO	1970				1995				TOTAL	VARIACION	
	AGRÍCOLA	PASTOS Y RASTROJO	TOTAL	AGRÍCOLA	PASTOS Y RASTROJO	TOTAL	VARIACION				
META	369.459	12%	2.733.571	88%	3.103.030	185.669	5%	3.271.834	95%	3.457.503	354.473
ANTIOQUIA	1.057.164	37%	1.769.777	63%	2.826.941	441.289	12%	3.159.367	88%	3.600.656	773.715
CASANARE					84.017	3%		2.729.620	97%	2.813.637	
SANTANDER	644.437	39%	1.013.350	61%	1.657.787	284.596	14%	1.808.211	86%	2.092.807	435.020
CORDOBA	278.214	18%	1.251.986	82%	1.530.200	109.376	6%	1.697.892	94%	1.807.268	277.068
CESAR	362.935	30%	837.771	70%	1.200.706	178.541	10%	1.533.738	90%	1.712.279	511.573
LA GUAJIRA					—	49.769	4%	1.353.406	96%	1.403.175	1.403.175
CAQUETA					—	93.181	6%	1.343.205	94%	1.436.386	1.436.386
CUNDINAMARCA	482.555	36%	857.915	64%	1.340.470	278.016	17%	1.322.984	83%	1.601.000	260.530
BOLIVAR	441.526	38%	713.574	62%	1.155.100	125.200	9%	1.295.120	91%	1.420.320	265.220
MAGDALENA	242.785	21%	905.352	79%	1.148.137	157.298	11%	1.290.888	89%	1.448.186	300.049
ARAUCA					—	22.369	2%	1.256.321	98%	1.278.690	1.278.690
TOLIMA	545.956	42%	746.081	58%	1.292.037	337.406	21%	1.251.102	79%	1.588.508	296.471
HUILA	245.670	25%	739.090	75%	984.760	221.568	17%	1.071.619	83%	1.293.187	308.427
N. DE SANTANDER	412.988	55%	340.393	45%	753.381	148.937	13%	1.035.735	87%	1.184.672	431.291
BOYACA (Y CASANARE)	524.633	15%	3.046.829	85%	3.571.462	188.472	17%	952.804	83%	1.141.276	
CAUCA	438.702	52%	410.881	48%	849.583	286.137	24%	914.851	76%	1.200.988	351.405
SUCRE	105.407	14%	623.500	86%	728.907	68.887	8%	52.306	92%	821.193	92.286
VALLE	492.753	47%	561.244	53%	1.053.997	351.784	37%	590.274	63%	942.058	(111.939)
NARIÑO	470.921	66%	237.950	34%	708.871	208.761	32%	446.184	68%	654.945	(53.926)
CALDAS	232.044	40%	345.408	60%	577.452	146.234	27%	386.742	73%	532.976	(44.476)
CHOCO					—	75.186	20%	308.935	80%	384.121	384.121
ATLANTICO	82.996	35%	153.460	65%	236.456	14.504	6%	243.488	94%	257.992	21.536
PUTUMAYO					—	7.243	5%	142.153	95%	149.396	149.396
RISARALDA	142.045	57%	108.065	43%	250.110	81.110	48%	86.272	52%	167.382	(82.728)
QUINDIO	85.478	56%	68.374	44%	153.852	69.968	53%	62.133	47%	132.101	(21.751)
SAN ANDRES					—	880	35%	1.666	65%	2.546	2.546

Dane: Censo Nacional Agropecuario 1970-71. Proyecto Sisac 1995



FUNDACION ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR

PREMIOS 1998

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Estudios inmunológicos, bioquímicos y moleculares de **Trypanosoma cruzi**, agente causal de la enfermedad de Chagas, como contribución al establecimiento de programas de prevención y control a nivel nacional. *Felipe Guhl Nannetti*

Ciencias Sociales y Humanas

Historia de Orocué. *Roberto Franco García*

Menciones de Honor

La ciudad representada. Política y conflicto en Bogotá.

Francisco Gutiérrez Sanín

Album de familia: la imagen de nosotros mismos.

Armando Silva

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

La biogeografía como herramienta en la selección de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en la Amazonia y Pacífico colombianos.

Thomas Walschburger, Adriana Hurtado Guerra, Milton H. Romero Ruiz, Olga Lucia Montenegro Díaz, María del Pilar Rivas Pava, Claudia Sofía Polo Urrea, Martha Liliana Ahumada Franco.

Solidaridad

Asociación para el Desarrollo Campesino, ADC. Pasto (Nariño)

Corporación para el Desarrollo de Versalles. Versalles (Valle del Cauca)

Reconocimiento a la excelencia: *Profamilia. Asociación pro-bienestar de la familia colombiana*

Gustavo Wilches

Sembrador de árboles, padre de cuatro hijos, abogado, ambientalista.

El medio ambiente y la guerra en Colombia

Gustavo Wilches-Chaux*

El medio ambiente como escenario, arma, objetivo y motivo de guerra

El medio ambiente no solamente es el escenario de la guerra y, en consecuencia, una de sus víctimas directas (*“Cuando dos elefantes se pelean es la yerba la que sufre”*), sino que también se utiliza como arma y puede también constituir el motivo de la guerra.

El primer caso, el del medio ambiente como escenario de guerra, lo ejemplifican en el medio rural los efectos de las voladuras de oleoductos y de las fumigaciones contra los llamados “cultivos ilícitos”, actividades cuyo propósito directo no es el deterioro del entorno, pero como resultado de las cuales ese deterioro se produce de manera inevitable.

“Muchos de los atentados terroristas (contra los oleoductos) han afectado en forma grave fuentes de agua y puesto en peligro la subsistencia de especies vegetales y animales en zonas donde ellos se han llevado a cabo. Existen estimativos sobre las áreas involucradas, así como sobre las especies y poblaciones afectadas. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible medir la magnitud económica de estos daños... Arauca y Santander resultan ser los departamentos más afectados por los atentados. Sólo entre enero y abril de 1995 se llevaron a

cabo quince atentados contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas en estos departamentos. En muchos casos los atentados han producido el agotamiento de recursos como la pesca en ríos y quebradas y se han afectado miles de hectáreas de cultivos de pancoger en localidades como La Unión, la Ceiba, La Pajuela, La Esmeralda, Caño Rojo, etc. Según el Ministerio del Medio Ambiente, aproximadamente en cinco mil hectáreas del Catatumbo y en inmediaciones del parque nacional El Tamá ha desaparecido la vegetación y todo vestigio de vida animal por los reiterados ataques al oleoducto y el subsiguiente derrame de combustible. De igual manera, en este mismo periodo el ecosistema del río Magdalena se ha visto afectado por el derramamiento de cerca de 20 mil barriles de combustible, afectando los acueductos y la pesca en numerosas poblaciones ribereñas”¹.

En el caso de las fumigaciones contra “cultivos ilícitos”, ya existe un daño ambiental previo a las mismas, en la medida en que la preparación de los suelos para dichos cultivos requiere la deforestación de terrenos de vocación forestal, muchas veces en pendientes, laderas y zonas productoras de agua. Sin embargo, la fumigación contribuye no solamente a incrementar el deterioro de los ecosistemas ya afectados, sino que los efectos de las mismas trascienden a las áreas vecinas. Cuando las fumigaciones produ-

* El presente artículo es un capítulo de un trabajo preparado por el autor para la Corporación Viva la Ciudadanía presentado a la vez al Congreso Nacional Ambiental que se reunió en Guaduas (Cundinamarca), los días 24, 25 y 26 de julio de 1998. Este documento a su vez será presentado a la Cumbre contra la Pobreza y por la Equidad que se reunirá en septiembre de 1998. El medio Ambiente y la Guerra en Colombia es el capítulo sexto de dicho trabajo. El primer capítulo de dicho texto se ocupa del carácter transectorial, transversal y multidimensional del medio ambiente, el segundo se ocupa de la sostenibilidad global, el tercero trata sobre la equidad ambiental, la pobreza ambiental y la violencia ambiental, el cuarto se ocupa de presentar una visión del panorama mundial actual sobre el medio ambiente, el quinto presenta un panorama nacional sobre el medio ambiente, el sexto trata sobre el medio ambiente y la guerra y es el que se publica aquí, el séptimo trata sobre la sostenibilidad del país, el octavo trata sobre los puntos críticos de la agenda de los ambientalistas, el noveno presenta las propuestas de los ambientalistas al proceso de paz, el décimo plantea lo que esperan los ambientalistas del Estado, el once lo que esperan los ambientalistas de los actores armados a nivel internacional. Además, el texto incluye un anexo sobre las preguntas para evaluar la sostenibilidad y una bibliografía. Agradecemos al autor y a la Corporación Viva la Ciudadanía.



cen los efectos deseados, los cultivadores se trasladan a nuevas zonas boscosas, debido a lo cual se incrementa todavía más el problema.

El siguiente comunicado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Colombia² confirma lo anterior:

EE.UU. reconoce cifra récord colombiana en su lucha contra los cultivos ilícitos

En 1997, la Policía Nacional de Colombia, con un gran apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, fumigó una cifra récord de cultivos ilícitos de coca y amapola: más de 41.000 hectáreas de coca y cerca de 7.000 hectáreas de amapola. Las cifras del gobierno de Estados Unidos confirman los buenos resultados de este programa masivo, el más grande de erradicación aérea en la historia. (Estas cifras cubren el período de octubre 96-97, y no incluyen cerca de 25.000 hectáreas fumigadas entre octubre de 1997 y enero de 1998). Se ha reducido en un 25% la cantidad de coca cultivada en el Guaviare, en donde se concentran nuestras actividades de fumigación.

Lamentablemente, se registra un notable incremento en los culti-

vos fuera de la zona fumigada, lo cual condujo a un aumento general del 18% en el total de la coca cultivada en Colombia, pasando de 67.200 a 79.500 hectáreas. No obstante, nos animan los resultados alcanzados en la región del Guaviare y tenemos el propósito de trabajar con el gobierno de Colombia para que el programa sea aún más efectivo durante el año que viene. Mientras tanto, aplaudimos el trabajo de la Policía Nacional en el programa de erradicación aérea, y el apoyo de las fuerzas armadas, con quienes se han alcanzado resultados récord en 1997, a pesar del alto riesgo para sus vidas. Santafé de Bogotá, 28 de enero de 1998.

El segundo caso, el del medio ambiente como arma y objetivo de guerra, está ejemplificado en los bombardeos con napalm durante la guerra del Vietnam, los cuales tenían como objetivo directo la destrucción del entorno que les servía de protección a los combatientes comunistas. En este caso, se trata o de evitar que las condiciones ambientales se conviertan en aliadas de las fuerzas contrarias, o de convertir al ambiente en un medio hostil contra las mismas, como cuando los conquistadores españoles des-

truían las fuentes de agua y los canales mediante los cuales las culturas del México precolombino obtenían el agua necesaria para su existencia. Los incendios intencionales de los pozos petroleros por parte de los iraquíes durante la Guerra del Golfo también podrían catalogarse dentro de esta categoría.

Aparentemente no existen en la guerra, o en las múltiples guerras que se libran en Colombia, casos que permitan afirmar que el ambiente haya sido declarado “objetivo militar” o utilizado expresa e intencionalmente como arma de guerra.

El tercer caso, el del medio ambiente como motivo de guerra (ejemplificado en todas las guerras por el control sobre determinados recursos naturales), seguramente irá incrementándose en los próximos años, ya no tanto por el dominio sobre recursos de los llamados “no renovables”, sino por el acceso a recursos “renovables” como el agua y los recursos genéticos, y por la posibilidad de acceder a determinados “servicios

1. Fonseca Carlos, Rincón Nidia Yaneth y Valderrama Sandra, “Productividad, Equidad y Ciudadanía”, Viva la Ciudadanía, Santafé de Bogotá, 1997, p. 145.

2. <http://usiahq.usis.usemb.se/abtusia/posts/CO1/wwwhcrci.html>

ambientales". No han faltado voces que desde el "mundo desarrollado" propugnan por una intervención armada para evitar por la fuerza que se continúe la destrucción de la selva amazónica (sin tener en cuenta las complejas circunstancias e interacciones, tanto regionales como mundiales que conducen directa o indirectamente al deterioro de los ecosistemas del Amazonas).

En la medida en que la alteración de la biosfera y de los ecosistemas que la conforman continúe expresándose en una cada vez más desigual distribución de las posibilidades de acceder al agua en las distintas regiones del planeta, en esa medida la lucha por ese recurso vital, o lo que es igual: la lucha por el ambiente que lo ofrece, seguirá constituyendo motivo de conflicto y de guerra.

En Colombia ya son frecuentes los conflictos entre comunidades por el acceso a las fuentes y los cuerpos de agua, así como por el control sobre las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Es interesante anotar cómo el 60 por ciento de los paros cívicos que se llevaron a cabo en Colombia entre 1971 y 1981 tuvieron como causa la carencia de servicios públicos, especialmente de acueducto y alcantarillado, ambos como es obvio relacionados con el agua.

Los costos ambientales indirectos de la guerra

Además de los ya citados efectos directos que la guerra produce sobre el medio ambiente en su condición de escenario de la misma (contaminación por voladuras de oleoductos o por la fumigación de cultivos ilícitos, efectos de bombardeos sobre zonas rurales, etc.), el conflicto armado genera una serie de consecuencias ambientales indirectas que contribuyen a incrementar la inequidad ambiental, la pobreza ambiental y la violencia ambiental que pesa sobre los colombia-

nos, no solamente sobre aquellos que habitan las regiones del país en las cuales se desarrollan los enfrentamientos bélicos, sino sobre la sociedad entera en su condición de sistema dinámico y complejo, cuyos elementos se encuentran todos en una u otra manera interconectados.

De manera no taxativa, vamos a resaltar como efectos ambientales y sociales más o menos indirectos de la guerra los siguientes:

- El impacto de los desplazamientos campesinos sobre sus territorios de origen: Abandono de la actividad y de la infraestructura social y productiva, reducción en la producción de alimentos, concentración de la propiedad rural en manos de los actores armados (guerrilla o paramilitares) o de sus instigadores, pérdida de oportunidades, traumatismos sociales, sociológicos y culturales de los afectados, consolidación de las condiciones para que se perpetúe la violencia de una generación a otra.

- El impacto de los desplazamientos campesinos sobre las zonas urbanas: Escasez y consecuente encarecimiento de los alimentos procedentes del campo, incremento de los asentamientos marginales y de la pobreza urbana, incremento del desempleo, incremento del déficit educativo, de salud, de vivienda y de servicios públicos, profundización de la brecha entre ricos y pobres, carencia de "códigos urbanos" que dificulta la incorporación de los desplazados a la vida en ciudades, consolidación de las condiciones para que se perpetúe la violencia de una generación a otra.

- Imposibilidad para realizar una gestión ambiental adecuada en zonas de guerra, lo cual incluye los riesgos contra la vida y la integridad de líderes y miembros de organizaciones sociales y autoridades locales, y contra funcionarios públicos y de organizaciones no gubernamentales³.

- Riesgos sobre la viabilidad de múltiples ecosistemas y recursos bio-

lógicos y sobre grupos étnicos y culturales relacionados con los mismos⁴.

- Pérdida de oportunidades económicas como el ecoturismo⁵, que constituye una opción concreta de "comercialización sostenible de servicios ambientales tangibles —como el aire puro y el paisaje— e intangibles —como la inspiración y el sentido de trascendencia—"⁶, a partir de la cual Colombia podría derivar recursos tan importantes como los provenientes de la exportación de café o de petróleo, con un impacto ambiental muy bajo y con enormes posibilidades para una redistribución democrática de los beneficios.

¿Quién paga los platos rotos del deterioro ambiental?

En términos generales podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los costos ambientales directos e indirectos de la guerra los pagamos todos los colombianos en cuanto a pérdida de calidad ambiental, pérdida de nuestro patrimonio ecológico y cultural, pérdida de oportunidades económicas, reorientación hacia el conflicto armado de recursos que podrían destinarse a inversión social, gestión ambiental e infraestructura productiva, etc.

Hay, sin embargo, actores sociales que resultan afectados de manera mucho más directa que otros. Así como el secuestro y las desapariciones nos afectan indirectamente a todos los colombianos, pero directamente perjudican mucho más en términos

3. Galán Sarmiento Francisco Alberto, "Anotaciones sobre la política ambiental en el plan nacional de desarrollo 1998-2000", p. 7

4. *Ibidem*.

5. *Ibidem*.

6. Wilches-Chaux, Gustavo, "Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador" o "Guía de La Red para la Gestión Local del Riesgo", 1998.

sociales, familiares e individuales a quienes son víctimas directas de estas dos formas atroces de violencia, así la violencia ambiental afecta especialmente a las comunidades cuya calidad de vida se encuentra directa y cotidianamente ligada a la salud de los ecosistemas con los cuales interactúan: comunidades campesinas, indígenas y negras que habitan las zonas de conflicto; comunidades que habitan territorios cruzados por oleoductos; comunidades afectadas por cultivos "ilícitos"; desplazados por la violencia o "*refugiados y desplazados ambientales*" (categorías comunes en zonas como Sudán y el Sáhara, pero que ya comienzan a presentarse en Colombia como resultado del deterioro ecológico en muchas regiones), y comunidades en zonas de conflicto urbano o cuyas condiciones de marginalidad se incrementan por la afluencia masiva de desplazados rurales.

Dentro de cada comunidad afectada, las mujeres y los niños resultan especialmente perjudicados por el deterioro ambiental. Para citar un solo ejemplo, ante el agotamiento del agua y la madera para leña en una región determinada, las mujeres y los niños deben caminar cada vez más kilómetros (lo que quiere decir, dedicarle al acarreo más tiempo a costa del necesario para educación, recreación, estudio y ocio) para abastecer a la familia de estos dos recursos sin los cuales resulta imposible la vida.



Sostenibilidad o disolución: El reto ambientalista de los colombianos

La población colombiana para el año 2005 se calcula en cerca de 49 millones de habitantes, los cuales superarán los 54 millones en el 2025 y se estabilizarán en 60 millones a mediados del siglo. La tasa de crecimiento total continuará su tendencia a reducirse, desde el 2.28% en 1985, el 1.96% en el 95 y el 1.59% en el 2005, hasta el 1.06% en el año 2025⁷.

Sesenta millones de personas quiere decir que hacia mediados del próximo siglo casi se habrá duplicado la población actual, pero esa cifra representa más o menos el mismo número de habitantes que hoy posee la Gran Bretaña (58,6 millones de personas). Nuestro país, sin embargo, alcanza una extensión de 1.141 kilómetros cuadrados⁸, mientras la Gran Bretaña tiene apenas 1.141 kilómetros

cuadrados de área, es decir, aproximadamente una quinta parte del territorio colombiano.

El principal reto que debemos afrontar los colombianos durante el próximo siglo consiste en garantizar, en un escenario de paz integral, las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de esa población en aumento, en términos⁹ de ser, tener, hacer y estar, así como de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Existe casi consenso en el sentido de que el crecimiento económico y la redistribución de los beneficios del desarrollo constituyen requisitos sin los cuales será imposible superar los niveles crecientes de pobreza y marginalidad que hoy caracterizan la realidad colombiana.

Sin embargo, está demostrado, tanto a nivel nacional como mundial, que el desarrollo, tal y como está siendo concebido y ejecutado, no solamente no permite satisfacer las necesida-

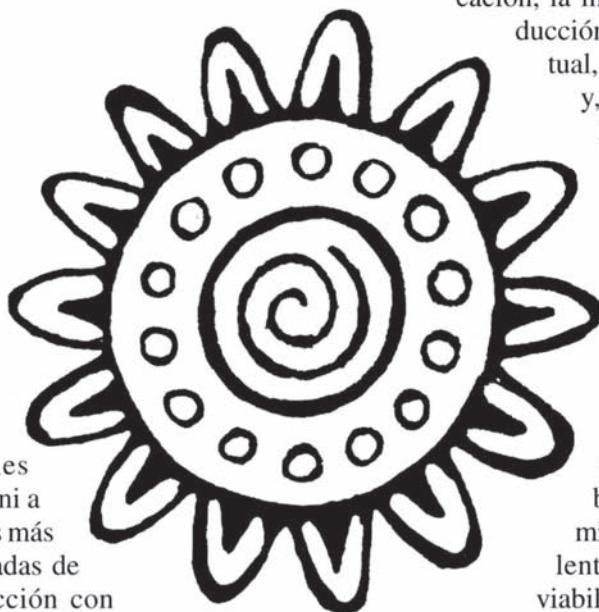
7. Wilches-Chaux, Gustavo, "Sociedad y Medio Ambiente en Colombia en el Siglo XXI", Comfecámaras, Proyecto Siglo XXI, 1992.

8. Sin contar la Zona Económica Exclusiva de 988 kilómetros cuadrados sobre el océano Pacífico y el mar Caribe, equivalente al 87% de la extensión del territorio emergido.

9. Utilizando las categorías de Cepaur.

des humanas y reducir las enormes y cada vez más grandes brechas existentes entre los ricos y los pobres, sino que genera nuevas formas de pobreza (cultural, ambiental, espiritual), nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades.

Es decir que, vista la humanidad como conjunto, el desarrollo no está conduciendo ni a una mejor calidad de vida ni a una mayor felicidad humana, como tampoco a unas relaciones más armónicas entre nuestra especie y



otras especies vivas, ni a formas más adecuadas de interacción con el entorno, y mutuamente más seguras, tanto para los ecosistemas como para los seres humanos.

Nuestro reto, entonces, consiste en redirigir el desarrollo (y con él el crecimiento económico) hacia lo que en los últimos años se ha venido a denominar sostenibilidad, en todas las dimensiones y con todas las implicaciones que hemos descrito a lo largo de este documento.

Ese reto incluye, entre otras, las siguientes responsabilidades:

- 1) Desarrollar y apropiarnos de una ética de la vida, para la vida y por la vida. De una bioética que se convierta en brújula que oriente el comportamiento individual, social y am-

biental de los colombianos y que con participación protagónica del sector educativo en todas sus modalidades y de los medios de comunicación nos debe contribuir a reorientar de manera mucho más comprometida y profunda el sentido de aquello que alguna vez se denominó "civismo y urbanidad" (y que necesariamente debemos complementar con los conceptos de "campesinismo" y de "ruralidad"). No se trata de incrementar la carga formal de los currículos escolares, sino de reorientar la educación, la comunicación, la información, la producción material e intelectual, la creación cultural y, en general, todas las actividades que constituyen nuestro ser, nuestro hacer, nuestro tener y nuestro estar, a partir de la responsabilidad histórica que nos cabe a las generaciones presentes de cambiar el rumbo del país o de permitir su disolución violenta por carencia de viabilidad. Un lema contundente en este sentido podría rezar: sostenibilidad o disolución.

- 2) Enmarcar los acuerdos nacionales que conduzcan a la paz, dentro de la convicción y el compromiso colectivo en el sentido de que el crecimiento económico —y en general la dinamización de las fuerzas productivas y sociales—, debe llevarse a cabo con criterios claros y expresos de sostenibilidad global, que no afecten (ni en el corto, mediano, o el largo plazo) ni la capacidad de autorregulación de los ecosistemas, ni su biodiversidad, ni la capacidad de organización, de participación y de decisión de la sociedad civil, ni su diversidad étnica y cultural.

- 3) Garantizar la presencia y la influencia activa de la perspectiva de género en todas las negociaciones y decisiones concertadas, y no perder nunca de vista el carácter diverso, multiétnico y pluricultural de la nación colombiana (lo cual se traduce en la necesidad de que los acuerdos logrados tengan capacidad de adecuarse y aplicarse según las particularidades de cada región y de cada comunidad y que no sólo respeten, sino que expresa y activamente contribuyan a la *consolidación positiva*¹⁰ de esas particularidades).

- 4) Establecer como parte de esos acuerdos mecanismos concertados entre los distintos actores y sectores de la sociedad, que tengan como objetivo definir la manera como los colombianos, de manera consciente, solidaria, creativa y responsable, nos podamos integrar a unos procesos aparentemente irreversibles de globalización que no está en nuestras manos evitar, pero sí encarar con alternativas adecuadas, de manera tal que éstos no nos sigan conduciendo a la insostenibilidad económica, social, política, ecológica y cultural, y de los cuales podamos obtener todos los beneficios posibles. Entre otros de esos beneficios, destacamos el acceso a información (a través de redes como el www o Internet), el intercambio de saberes, la capacidad del pensamiento local para incidir sobre la gestión ambiental a nivel global (*Pensar localmente y actuar globalmente*), la

10. Por *consolidación positiva* se entiende el fortalecimiento de las distintas identidades étnicas mediante el reconocimiento y reafirmación de sus particularidades y valores y de sus modelos culturales de apropiación del territorio y de adaptación ambiental, pero no a partir de la negación de las particularidades y derechos de los demás grupos étnicos o de las demás comunidades con las cuales se sostienen relaciones de vecindad.

protección del consumidor nacional, el aprovechamiento de ventajas comparativas de Colombia en el mercado mundial, la realización de “alianzas estratégicas” para el desarrollo sostenible con potenciales aliados internacionales, etc.

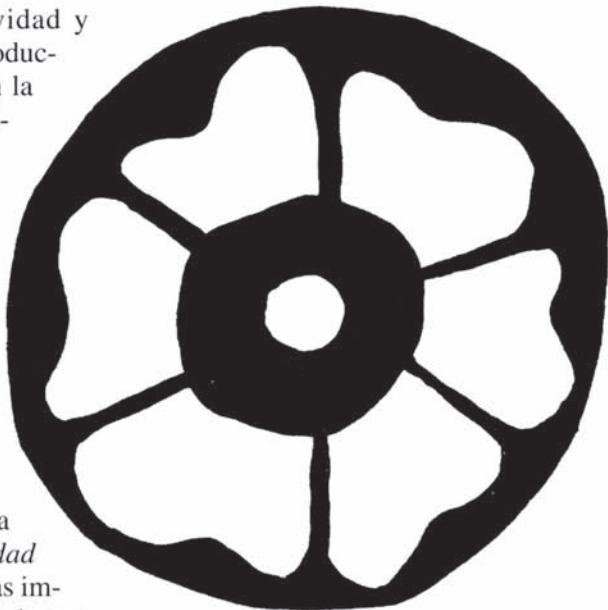
5) Adelantar como una política de Estado un programa de reforma agraria integral y definitivo, con un plazo límite predeterminado, que permita que las próximas generaciones de colombianos no continúen heredando una situación crónica de inequidad en la cual tiene sus raíces gran parte de los conflictos sociales que impiden el desarrollo sostenible en Colombia. Dicho programa deberá partir de una evaluación de la estructura de la propiedad agraria en el país y de los efectos reales que han tenido los anteriores y actuales planes de reforma agraria en términos de sostenibilidad global¹¹, con el objeto de aprender tanto de los éxitos como de los fracasos, y deberá adelantarse no solamente como compromiso aislado de un Ministerio (Agricultura) y de una entidad (Incora), sino como el resultado de un gran acuerdo entre el Estado, el sector productivo y financiero, los gremios, las organizaciones sociales—especialmente campesinas y étnicas—, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones ambientalistas y, en general, la sociedad civil, así como también con los actores armados del conflicto. Deberá comprometer a los actores internacionales verdaderamente interesados en contribuir a la búsqueda de caminos viables hacia la paz en Colombia y, como ya se indicó, deberá regirse por criterios de sostenibilidad global, que miren al país en su conjunto (dentro de una perspectiva de ordenamiento territorial, entendido el territorio en sus múltiples dimensiones) y a la economía dentro de la cual los habitantes del campo están insertos, como un sistema complejo y dinámico, para participar en el cual deberán garantizarse eficiencia, eficacia,

rentabilidad, productividad y competitividad (en la producción, en el mercadeo, en la reinversión de los beneficios, etc.). Así mismo deberá tener en cuenta no solamente la función social de la propiedad en sus distintas modalidades, sino también su función ecológica (que constituye una dimensión inseparable de la función social).

6) Redefinir bajo la óptica de *la sostenibilidad global*, el significado y las implicaciones y aplicaciones de conceptos como los mencionados de *eficiencia, eficacia, competitividad, rentabilidad y productividad*. Lo anterior incluye la necesidad de incorporar a esos conceptos el sentido del largo plazo y la conciencia de nuestra responsabilidad ética, social y ambiental. En el caso de la rentabilidad, por ejemplo, ésta no se puede medir solamente en términos económicos (inversión versus ganancia), sino también en términos ecológicos, culturales y sociales. Especial responsabilidad poseen en este sentido las universidades y demás instituciones educativas y de formación profesional dedicadas a preparar profesionales y técnicos en los distintos campos del saber, al igual que las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, encargadas de promover el desarrollo, así como los organismos financieros.

7) Llevar a cabo una reforma política profunda que vaya más allá de la mera transformación formal de los partidos y que se traduzca en condiciones que faciliten la construcción de una verdadera democracia participativa en Colombia. Esto debe incluir, entre otros puntos:

- Consolidar el Estado como servicio público por excelencia y como



patrimonio inalienable de la comunidad. En la práctica esto significa reconocer que una de las causas de la violencia y de la desinstitucionalización que caracterizan a la Colombia de hoy, radica en que el Estado, sus instituciones y sus recursos, han adquirido la condición de botín de guerra de los caciques políticos, lo cual desvirtúa la esencia de su función social.

- Concretar en los hechos la separación entre gobierno y Estado, con el fin de garantizar la continuidad de las políticas estatales más allá de los

11. Determinar si como resultado de los mismos la sociedad colombiana, en general, y los habitantes del campo, en particular, son más o menos vulnerables en términos organizativos, políticos, económicos, ecológicos, institucionales, educativos, culturales, tecnológicos, etc. Muy importante determinar también si los colombianos somos hoy más vulnerables o más fuertes en términos de seguridad alimentaria que antes, y qué criterios deben orientar al programa propuesto de reforma agraria con el objeto de hacernos menos vulnerables (especialmente en cuanto a seguridad alimentaria) ante el embate de la globalización, así como ante una eventual crisis del sistema económico internacional.

períodos de los cargos de elección popular.

- Eliminar la intermediación clientelista como requisito para poder acceder a los servicios del Estado y para poder ejercer los derechos que la Constitución nacional consagra a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas.

- Garantizar la participación política de las minorías y el ejercicio de la oposición.

- Reconocer que la corrupción en todas sus formas constituye una de las principales —si no la más grave— formas de contaminación ambiental y uno de los principales atentados contra la calidad de la vida de los colombianos.

8) Garantizar que el monopolio de las armas esté en manos exclusivas del Estado y que el uso de la fuerza por parte de éste se realice de manera *legítima, transparente, responsable y controlada*, respetando los derechos humanos y teniendo como objetivo último garantizar la sostenibilidad política, social e institucional de la sociedad colombiana.

9) Abolir el servicio militar obligatorio, profesionalizar las fuerzas militares y desarrollar las normas que crean el servicio social y el servicio ambiental de los jóvenes con el objeto de formar *militantes de la vida y gestores del desarrollo sostenible* tanto en los campos como en las ciudades. El Estado y los actores armados del conflicto deberán comprometerse como parte de las negociaciones de paz (y aún antes de lograr los acuerdos definitivos), a respetar la vida y la integridad de los jóvenes, hombres y mujeres, que prestan el servicio social y el servicio ambiental aún en zonas de conflicto armado.

10) En términos específicos de la gestión ambiental el reto se concreta, entre otras, en las siguientes expresiones:

- Definir entre los distintos actores sociales, y especialmente entre los



actores armados del conflicto, criterios que permitan en lo posible adelantar una adecuada gestión ambiental en los territorios de guerra, con el propósito evidente de garantizar que una vez sembrada la paz exista todavía una naturaleza para que ésta germe. Lo anterior incluye las garantías necesarias para la vida y la integridad de quienes desde el Estado o desde la sociedad civil se dedican a impulsar una gestión ambiental hacia la sostenibilidad.

- Definir criterios que garanticen una adecuada gestión ambiental en los territorios dominados de hecho por los actores armados.

- Garantizarle a la sociedad civil espacios y mecanismos eficaces de participación en los diferentes escenarios de la gestión ambiental. En tal sentido, el Consejo de Gabinete del Ministerio del Medio Ambiente acaba de aprobar los “lineamientos para una política de participación ciudadana en la gestión ambiental”¹², a partir de los cuales el Estado y la sociedad civil deben avanzar conjuntamente en la construcción de una verdadera gestión participativa, como parte de la consolidación de la democracia y de la construcción de la paz.

- Por su parte, corresponde a la sociedad civil no solamente llenar esos espacios de contenido real, sino también ganar capacidad para incidir de manera eficaz sobre el proceso legislativo y, de llegar a darse, sobre el nuevo proceso constituyente, de manera tal que en todas y cada una de las correspondientes actuaciones y decisiones se tengan en cuenta criterios de sostenibilidad y se evalúe el impacto potencial de cada actuación y de cada decisión sobre los ecosistemas y quienes los habitan o dependen de ellos.

- Continuar con el proceso de creación, consolidación y aplicación de un sistema integrado de cuentas económicas y ambientales, que permita determinar y valorar los servicios ambientales que prestan algunos ecosistemas (así como las regiones en las cuales estos se encuentran) y que resultan mucho más importantes y significativos en términos de sostenibilidad local, regional y nacional, que cualquier otra actividad extractiva o productiva que se realice en los mismos. De esta manera, y también desde la óptica del ordenamiento territorial, se podrán establecer políticas y estrategias ten-

12. “Yo participo, Tú participas, ¡hagamos el ambiente!”, Ministerio del Medio Ambiente, 1998.

dientes a compensar la inequidad que afecta a varias regiones de Colombia (y a las comunidades que las habitan), que simultáneamente son las más ricas en recursos y servicios ambientales y las más pobres en términos de necesidades básicas insatisfechas y en calidad de vida de sus pobladores. La mayor parte de las "propuestas de desarrollo" formuladas para dichas regiones (como la Costa Pacífica colombiana) se basan en criterios económicos ortodoxos, que lejos de solucionar en el largo plazo las inequidades existentes, les sumarán la pobreza ambiental y harán más vulnerables desde todo punto de vista a la zona y a sus comunidades. Resulta paradójico, para citar otro ejemplo, que muchas de las regiones en donde se produce el agua que alimenta a las grandes centrales hidroeléctricas que proveen de energía a otras zonas del país no tengan posibilidad para acceder al fluido eléctrico. El mecanismo del pago de regalías a las Corporaciones Autónomas Regionales por parte de las centrales hidroeléctricas no ha sido suficiente para compensar dicha inequidad. Un sistema adecuado de cuentas ambientales permitirá establecer el valor de los servicios ambientales que presta una determinada región y la manera como las regiones beneficiarias de esos servicios deben contribuir a la respectiva compensación.

• El Estado debe comprometerse a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos a través de documentos ya suscritos por el gobierno colombiano como son, entre otros, la Agenda 21 (suscrita durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Rio de Janeiro en 1992) y el "Plan de Acción" surgido de la Cumbre de las Américas sobre desarrollo sostenible llevada a cabo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a finales de 1996. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y a las organizaciones de la sociedad civil di-

fundir esos documentos, y a la comunidad presionar al gobierno para lograr, de manera conjunta, que los compromisos adoptados se conviertan en realidad.

- Los actores armados de la guerra en Colombia deberán acoger y observar la "Convención sobre prohibición de usos militares y de uso hostil de cualquier técnica de modificación ambiental" (Enmod)¹³, así como los "protocolos adicionales" de la Convención de Ginebra, en virtud de los cuales se prohíbe la utilización de medios de guerra dirigidos a causar daños severos, extendidos y con efectos de largo plazo sobre el medio ambiente natural¹⁴.

- En caso de darse un nuevo proceso constituyente deberá llenarse el vacío que quedó en la Constitución Nacional de 1991¹⁵ en el sentido de que así como se reconoce que la propiedad privada debe cumplir una función ecológica a la par que una función social, se reconozca que la soberanía nacional se debe ejercer con responsabilidad planetaria y en función de garantizar la sostenibilidad de la Tierra.

2. Temas críticos en la agenda ambientalista para la paz

Ese reto ambientalista de los colombianos a que se hizo referencia en el capítulo anterior, tiene validez frente a todos los sectores de la actividad nacional y en todas las regiones del país. Por eso desde un principio se ha insistido en este documento en el carácter transectorial, transversal y multidimensional del medio ambiente y de la gestión ambiental.

Existe, sin embargo, una serie de temas que tanto por el impacto ambiental de las actividades relacionadas con ellos, como por su sensibilidad en

cuanto a la construcción de la paz merecen un capítulo especial.

1) Recuperación de ecosistemas y comunidades afectadas por "cultivos ilícitos":

Muy seguramente en este documento no va a existir ninguna propuesta novedosa para el tratamiento de los llamados "cultivos ilícitos", en la medida en que a lo largo de los últimos años casi todo cuanto se puede plantear a nivel teórico sobre las causas internas y externas del narcotráfico y, en particular, sobre este primer eslabón de la cadena (los campesinos y colonos cultivadores), ya ha sido planteado.

Sin embargo, lo obvio y lo elemental en cuanto al tratamiento de este problema, es decir, la necesidad de responder al mismo con soluciones integrales y que apunten a las raíces y no sólo a la supresión de los síntomas y los efectos, no ha pasado del campo teórico y se siguen intentando soluciones que en la práctica resultan meramente represivas y puntuales y, sobre todo, totalmente contraproducentes: el boletín de la Embajada de Estados Unidos que transcribimos algunos capítulos atrás habla de la fumigación exitosa de más de 70 mil hectáreas de "cultivos ilícitos" entre 1997 y enero de 1998 ("más de 41.000 hectáreas de coca y cerca de 7.000 hec-

13. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (Enmod).

14. <http://www.law.berkeley.edu/~ddcaron/courses/iel97/ie01012.htm>
<http://www.law.berkeley.edu/~ddcaron/courses/iel97/ie01013.htm>
<http://www.law.berkeley.edu/~ddcaron/courses/iel97/ie01014.htm>

15. Y que formaba parte de la propuesta que los ambientalistas colombianos hicieron llegar a la Asamblea Constituyente.

táreas de amapola... Estas cifras cubren el período de octubre 96-97, y no incluyen cerca de 25.000 hectáreas fumigadas entre octubre de 1997 y enero de 1998). Sin embargo, según cifras oficiales, a principios de 1992 la extensión cultivada en amapola en Colombia apenas superaba las 3.000 hectáreas, lo cual permite deducir que las medidas empleadas para reducir los "cultivos ilícitos", realmente han producido el efecto de multiplicarlos.

En donde sí existe todavía un enorme vacío teórico en cuanto al tema de las drogas es en lo que podríamos llamar el "valor de uso" de esas sustancias que Albert Hoffman y otros investigadores prefieren llamar "enteógenas"¹⁶, en contraposición a los adjetivos de "alucinógenas", "enervantes", "estupefacientes", etc., con que suelen calificarse.

La mayor parte de las preocupaciones está centradas en el "valor de cambio" de las drogas, pero sin apuntar ni a las razones que incitan o inducen a su consumo, ni a la enorme incapacidad de la cultura predominante para ofrecer satisfactores alternativos, que permitan llenar los vacíos que conducen a su consumo, pero sin poner en peligro ni la salud individual, ni la salud social, ni la salud cultural, ni la salud económica de la comunidad.

Uno de los retos que tiene por delante la biotecnología es el desarrollo de sustancias enteógenas inocuas desde el punto de vista de la salud humana. Los científicos saben que en los ecosistemas colombianos existen más de 20.000 especies con propiedades enteógenas, pero este aspecto de nuestra biodiversidad solamente trasciende al resto de la sociedad cuando el narcotráfico se apodera de alguna de ellas con fines exclusivamente económicos y con los resultados socialmente nefastos que todos conocemos.

La existencia de estos satisfactores alternativos colocaría en un terreno completamente diferente



—y además legítimo— al tema de la legalización de la droga.

Los ambientalistas hacemos un llamado a la comunidad científica colombiana (Colciencias, Instituto von Humboldt y otros institutos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, etc.), al gobierno (especialmente a los ministerios del Medio Ambiente, de Educación y de Salud) y a las comunidades étnicas y campesinas que habitan los ecosistemas tropicales, para que exploremos y desarrollemos ese filón de nuestra biodiversidad y para que traduzcamos los resultados de esa investigación en satisfactores alternativos, cultural, social, económica y legalmente viables. Para que no esperemos o a que esas sustancias de uso potencialmente benéfico caigan en las garras ne-

fastas del narcotráfico, o a que esos satisfactores alternativos, basados en la biodiversidad de nuestros ecosistemas, nos lleguen patentados desde el exterior y tengamos que comprárselos a los laboratorios multinacionales.

Este sería apenas uno de los aspectos a través de los cuales la tarea de construir una nueva cultura (y como parte de esa tarea, una redefinición profunda del concepto de desarrollo) podría contribuir a solucionar los problemas de la drogadicción y el narcotráfico.

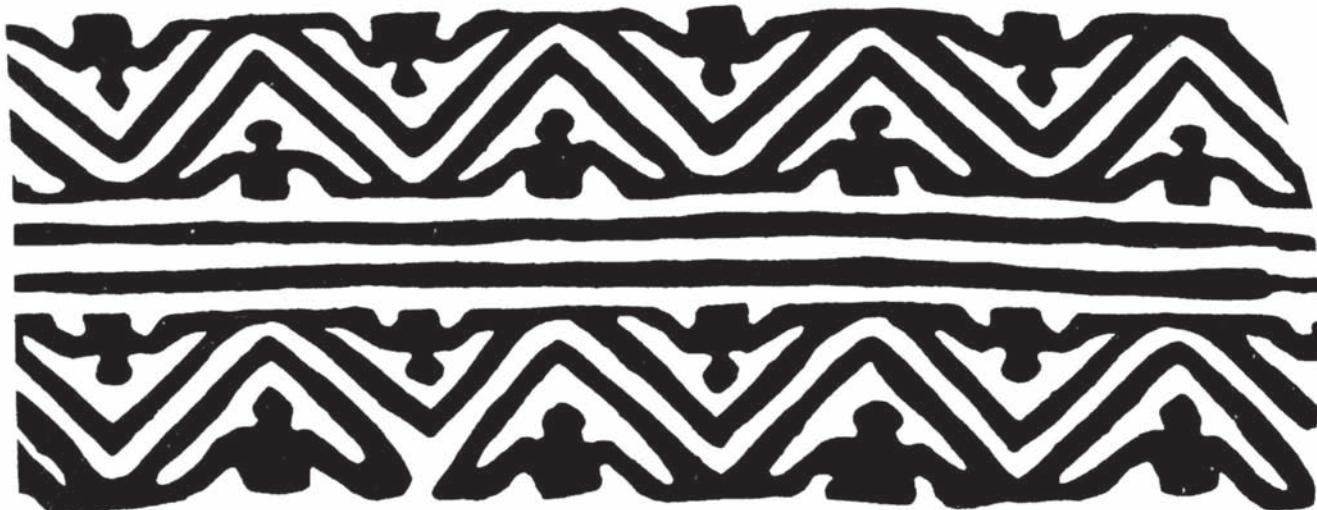
Pero regresemos al tema central que nos ocupa, el de los llamados "cultivos ilícitos":

Existen varias piezas que deben interactuar dinámicamente para poder armar ese rompecabezas de múltiples dimensiones hacia una solución integral al problema:

- Un plan concertado de *ordenamiento territorial* surgido, tanto del conocimiento científico sobre los ecosistemas colombianos y su uso potencial, como del conocimiento de los conflictos de toda índole (incluidos los conflictos de "uso del suelo") que tienen a dichos ecosistemas como escenario. Dicho plan de ordenamiento territorial deberá surgir de la identificación de aquellos ecosistemas y actores sociales con los cuales resulta prioritario construir propuestas integrales de gestión ambiental que incluyan, entre otras estrategias la sustitución de "cultivos ilícitos", la reubicación de comunidades, la elaboración de planes concertados de recuperación y manejo de cuencas, etc.

- Un programa nacional de *reforma agraria* en función de la sostenibilidad, en los términos expues-

16. Etimológicamente sustancias "capaces de despertar a Dios" o "que tienen a Dios adentro", para referirse al yagé, al peyote y a otras utilizadas en un contexto ritual.



tos en los numerales 5) y 6) del capítulo anterior, que tenga por objeto optimizar ecológica, económica y culturalmente el aprovechamiento de las tierras con vocación productiva que existen en Colombia, en lugar de ampliar arbitrariamente "la frontera agrícola" sobre ecosistemas con vocación exclusiva de prestación de servicios ambientales. La eventual reubicación de parte de las familias campesinas dedicadas actualmente a la siembra de "cultivos ilícitos" estaría estrechamente vinculada a la capacidad de la sociedad para ofrecerles alternativas reales y sostenibles, que incluyan el acceso a tierras de vocación productiva.

- Fortalecimiento de la estrategia de las *reservas campesinas*, como respuesta a las necesidades de apropiación y de gestión del territorio por parte de las comunidades campesinas.

- Fortalecimiento de la estrategia de las *reservas naturales de la sociedad civil* como respuesta a los retos de vincular a la comunidad a la gestión ambiental mediante alternativas que permitan que la propiedad cumpla, tanto su función ecológica como su función social.

- Programas de *asistencia técnica* basados en tecnologías sostenibles para la gestión de ecosistemas, el manejo de agro-

ecosistemas, la práctica de la ganadería en suelos frágiles, el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, acuicultura, etc. En el país existen múltiples experiencias de producción sostenible en ecosistemas andinos, costeros, amazónicos, de la Orinoquia y del Chocó biogeográfico, desarrolladas por organizaciones no gubernamentales en asocio con comunidades locales y algunas veces con instituciones y programas estatales, en las cuales existe la semilla para dicha asistencia, pero que simplemente no han sido validadas, avaladas, ni mucho menos difundidas por las instituciones poseedoras del "saber oficial" en materia de producción rural. El desarrollo y la aplicación de tecnologías sostenibles para el aprovechamiento de nuestros ecosistemas debería convertirse en un propósito nacional, del cual debe formar parte el compromiso de las universidades y demás instituciones de formación profesional y técnica, de revisar sus programas de formación y el perfil de sus egresados en función de ese propósito. Como parte del desarrollo de alternativas económicas, deberán considerarse actividades como el ecoturismo, entendido éste como la comercialización sostenible de servicios ambientales tangibles (aire puro, paisaje) e intangibles

(inspiración, aventura, sentido o significado), al igual que el aprovechamiento económico sostenible del bosque mediante actividades no tradicionales (zoocriaderos de mariposas, producción de plantas ornamentales, etc.)

- Programas de *financiación y crédito* y de *mercadeo y comercialización*, basados, entre otros factores, en:

- Negociación de acuerdos nacionales e internacionales para la protección y la comercialización de la producción rural nacional (el compromiso internacional para participar en la lucha contra el narcotráfico deberá concretarse en este tipo de acuerdos y no solamente en el suministro de armas convencionales o químicas para la erradicación de cultivos).

- Evaluación del programa Planete y de otros programas de sustitución de "cultivos ilícitos" basados en la formulación de planes alternativos de desarrollo rural, con el objeto de aprovechar y multiplicar sus aciertos, identificar sus obstáculos y limitaciones y determinar acciones prioritarias tendientes a solucionar los motivos por los cuales no han cumplido los objetivos esperados a cabalidad.

- El análisis de los mecanismos y procesos utilizados por el narcotráfico para la financiación de los campesinos dedicados a los "cultivos ilícitos"

tos” y para la comercialización de cosechas, con el objeto de determinar en qué medida resultan aplicables a los “cultivos lícitos” y en condiciones de legalidad.

— Adopción de los conceptos de seguridad alimentaria y de seguridad ambiental como prioridades, y análisis de sus implicaciones en términos de la responsabilidad del Estado y de la comunidad nacional e internacional con los productores de alimentos y de bienes y servicios ambientales.

— Concertación a nivel nacional de un programa de difusión masiva (con participación intensa de los medios de comunicación, del sector educativo, del gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, del comercio y, en general, del sector privado) de una política de producción, mercadeo y consumo de bienes y servicios obtenidos mediante sistemas sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental, como desde el punto de vista social y cultural, que les abra a los campesinos nuevas oportunidades de mercado y nuevos nichos para la participación en la construcción colectiva de la paz. Existen en el mundo múltiples experiencias de comercialización privilegiada de productos orgánicos y de productos provenientes de “reservas extractivistas” como las creadas en el Brasil para el aprovechamiento sostenible de la selva amazónica.

• Acuerdos con las autoridades tradicionales de las comunidades étnicas, con el fin de adelantar la erradicación de los “cultivos ilícitos” como parte del desarrollo de sus respectivos “planes de vida” (o equivalentes), tendientes a fortalecer su identidad cultural, su autonomía política y su dominio territorial, dentro de un marco de gestión para la sostenibilidad.

• Comprometer al “frente internacional” de la lucha contra el narcotráfico con los planes integrales de

gestión social y ambiental que se desarrollen al interior del país, y con la definición, ejecución y evaluación de estrategias eficaces a nivel internacional para frenar la demanda, principal acicate para la producción nacional de drogas.

• Las organizaciones ambientalistas internacionales podrían asumir un papel que no están cumpliendo en sus países sedes, en cuanto a dar a conocer las implicaciones sobre los ecosistemas tropicales del consumo de drogas en el mundo industrial y de la manera como se está combatiendo el problema de los “cultivos ilícitos”; en promover el apoyo a estrategias social, económica, cultural, política y ecológicamente sostenibles de gestión ambiental en el llamado Tercer Mundo; en promover el mercadeo internacional de productos tropicales “ambientalmente sanos” y en presionar a sus congresos y gobiernos para que asuman compromisos coherentes con los propósitos de sostenibilidad a nivel de los llamados “países subdesarrollados”, y a nivel regional y mundial.

• En resumen, articular todos los puntos mencionados en función de diseñar y ejecutar planes de recuperación y sanación, tanto de los ecosistemas afectados por “cultivos ilícitos”, como de las comunidades que los habitan o que ocupan su vecindad.

Reforma agraria integral

Ya se ha mencionado en dos oportunidades dentro de este documento, la necesidad de una reforma agraria integral como parte de una gestión ambiental y social para el desarrollo sostenible. La primera vez, al definir “el reto ambientalista” que debemos enfrentar los colombianos como parte de los esfuerzos hacia la construcción de la paz y, la segunda, ligada a

la anterior, como una de las piezas claves de una estrategia de recuperación de los ecosistemas y de las comunidades afectadas por “cultivos ilícitos”.

En este punto vamos a complementar (y en algunos casos a reasumir) lo anterior, resaltando otros aspectos y escenarios en los cuales la reforma agraria resulta una prioridad¹⁷:

• Las necesidad de redistribuir entre campesinos carentes de tierra la propiedad agraria subutilizada sobre tierras con vocación agrícola, de manera tal que se elimine el atesoramiento especulativo de tierras y se articulen pequeños, medianos y grandes productores, con el objeto de obtener un mayor valor agregado y de aumentar el capital social en términos de producción de bienes y servicios, de seguridad económica y social, de seguridad alimentaria y de gobernabilidad.

• La necesidad de recuperar y garantizar a nivel local, los elementos de “biodiversidad” esenciales para la seguridad alimentaria de las comunidades en regiones dominadas por monocultivos con destino a los mercados nacionales e internacionales (caña de azúcar, cereales, palma africana, reforestaciones comerciales, algodón, etc.).

• La necesidad de restablecer la propiedad y la “territorialidad” de los campesinos desplazados por la violencia, de extinguir el dominio de quienes se han apoderado de las tierras por medio de la fuerza, y de restituirla a sus originales propietarios dentro de un esquema de sostenibilidad como el que se ha expuesto a lo largo de todo este documento.

17. Acogemos para el efecto las propuestas del investigador y académico Alejandro Reyes, resumidas en *El Espectador* de junio 7 de 1997.

- En general, extinguir el dominio sobre tierras adquiridas en virtud de negocios ilícitos, narcotráfico, violencia o corrupción.
- Congelar y en lo posible revertir la colonización sobre ecosistemas con vocación ambiental.
- Consolidar y llevar a la práctica un sistema de “cuentas ambientales” que permita compensar a las regiones oferentes de “servicios ambientales” por lo que dejan de producir en términos agropecuarios o extractivos, y avanzar en la definición y aplicación de incentivos (como los forestales ya existentes) que hagan económicamente atractiva la conservación.

• Reconstruir, utilizando las herramientas propuestas, las economías campesinas afectadas por el narcotráfico (“cultivos ilícitos”, aca-paramiento de tierras por los narcotraficantes), por la violencia rural generalizada, por el impacto de grandes obras de infraestructura, por el agotamiento de la capacidad de cargo de los ecosistemas y por los efectos de las medidas de apertura económica y globalización.

• Proteger la territorialidad de las comunidades étnicas, indígenas y negras, garantizar el ejercicio de sus derechos tradicionales, y facilitar las condiciones para que sus territorios cumplan su función social, ecológica y cultural en interés tanto de esas mismas comunidades como de la sostenibilidad nacional, basada en el reconocimiento y el respeto a la diversidad.



Política energética y equidad en el acceso a la energía en sus distintas formas:

La revisión de la política energética, y particularmente de la política petrolera del país, constituye uno de los ejes centrales de las agendas de negociación formuladas por los grupos alzados en armas al Estado colombiano y a la comunidad en general¹⁸.

Coincidimos los ambientalistas con los planteamientos sobre el tema energético contenidos en dichas agendas, en cuanto hace referencia a los siguientes temas:

- La importancia de que las negociaciones entre el Estado colombiano y las empresas transnacionales se realicen de manera transparente y teniendo en cuenta como una prioridad condicionante el interés nacional.

- La necesidad de que los beneficios económicos provenientes de la explotación de los recursos naturales se reinviertan prioritariamente en el desarrollo de las regiones que los proveen, entendiendo el desarrollo en los términos propuestos en este documento, con miras siempre a incrementar la calidad de vida de los seres humanos dentro de un marco de sanidad y seguridad ambiental.

- La importancia de que el país asegure su autonomía energética en el corto, mediano y el largo plazo.

- La necesidad de que las empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales adopten medidas eficaces de mitigación del impacto ambiental, social y cultural de su actividad y asuman los costos que implique la reparación de los daños causados.

No coincidimos los ambientalistas en los métodos, como las voladuras de oleoductos, a través de los cuales las organizaciones guerrilleras pretenden apoyar sus denuncias y fortalecer sus argumentos de discusión (540 casos reportados por el Ministerio del Medio Ambiente hasta la primera semana de julio de 1998, con afectación sobre 6.000 hectáreas y 2.500 kilómetros de ríos). Pensamos que dichos métodos no solo resultan totalmente contraproducentes e inconsecuentes frente a los objetivos buscados, sino que afectan de manera grave la

18. Ver “La paz sobre la mesa”, publicación de la comisión de Conciliación Nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la revista *Cambio 16*.

sostenibilidad de los ecosistemas, factor decisivo en la construcción de una sociedad sostenible en la cual sea posible la paz.

Existe, además de los anteriores, otra serie de puntos relacionados con el tema energético que consideramos necesario tener en cuenta, tanto dentro de las agendas inmediatas de paz, como en la redefinición de un nuevo modelo de desarrollo para la sociedad colombiana. Comenzamos con recomendaciones puntuales para terminar en aspectos de política global:

- El apoyo a la aplicación de medidas tecnológicas encaminadas a reducir el impacto ambiental de la utilización de combustibles derivados del petróleo (como la llamada “gasolina verde”) y la necesidad de ampliar y fortalecer dichas medidas en las cuales Colombia ha sido pionera dentro del panorama internacional.

- La exploración de alternativas energéticas —como el alcohol— para los vehículos de combustión interna.

- La adopción del fortalecimiento del transporte público, en términos de cantidad, cubrimiento y calidad, como una prioridad nacional¹⁹.

- La necesidad de generar estímulos para el desarrollo, la difusión y la adopción masiva de alternativas energéticas de bajo impacto ambiental, como la energía eólica y la energía solar.

- La necesidad de impulsar masivamente la plantación de “bosques energéticos”, como una alternativa a la deforestación de los ecosistemas estratégicos y como una medida tendiente a reducir la carga adicional que pesa sobre las mujeres y los niños encargados de recolectar la leña en el medio rural.

- La incorporación de una red de microcentrales hidroeléctricas al sistema eléctrico nacional (en combinación con el sistema de interconexión), al igual que de sistemas que permitan

convertir en energía activa las pérdidas en las líneas de transmisión, con el objeto de ampliar y democratizar el acceso de las comunidades locales al servicio de energía eléctrica y de reducir la dependencia de la leña en las comunidades rurales.

- Adelantar programas permanentes de educación de la comunidad (no campañas fugaces en momentos de crisis) en todos sus niveles y sectores, empezando por las autoridades y demás niveles de decisión, tendientes a fomentar la utilización responsable de la energía (al igual que de otros recursos y bienes como el agua y el papel) y a concientizar sobre la importancia de tal conducta en términos de sostenibilidad y equidad interregional e intergeneracional.

- Adelantar un programa nacional para ampliar y democratizar el acceso de las comunidades al servicio de gas, lo cual deberá ir acompañado de actividades que les permitan a las comunidades que dependen de la leña asimilar este cambio tecnológico en términos de sus propios imaginarios y en función de su identidad cultural.

- Como una medida de equidad ambiental, la adopción de políticas que les garanticen a las regiones proveedoras de agua para las centrales hidroeléctricas, el acceso favorable a la electricidad.

- La adopción de políticas y estrategias tendientes a hacer económica, social y ambientalmente rentable la conservación ambiental para las regiones productoras de agua con destino a las centrales hidroeléctricas. (La conservación no solamente se traduce en mayor cantidad de agua, sino también en una menor sedimentación, lo cual incrementa la vida útil de los embalses de agua).

- Como una medida para combatir la plusvalía ecológica y las consecuentes pobreza y violencia ambientales, la incorporación eficaz de crite-

rios y medidas de gestión ambiental en las obras de infraestructura ligadas a la generación eléctrica (hidroeléctricas y termoeléctricas) o en la explotación de combustibles fósiles (petróleo y carbón), de manera tal que se repare de manera efectiva el impacto de las mismas sobre los ecosistemas y las comunidades que lo habitan.

- Comenzar a prepararse anticipadamente para asumir el impacto que sobre la economía nacional va a tener (posiblemente en la próxima generación) la reducción, a nivel mundial, del uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, como consecuencia de la necesidad de alternativas tecnológicas que permitan reducir la contaminación atmosférica y el calentamiento global.

- El Estado deberá comprometerse con la sociedad a no tomar ninguna medida tendiente a propiciar la adopción de la fisión nuclear como fuente de energía, sin que medie un debate amplio, serio y exhaustivo, en el cual los distintos actores y sectores sociales puedan evaluar el impacto ambiental, social, político, económico, técnico y cultural que implicaría una decisión en tal sentido para el país.

19. Sobre este punto, considerado como uno de los aspectos alrededor de los cuales se debe focalizar la gestión ambiental en Colombia, existe un amplio análisis en Galán Sarmiento, Alberto, “Anotaciones sobre la política ambiental en el plan nacional de desarrollo 1998-2000”.



Reforma Política y Social

Seminario Nacional

15 y 16 de octubre de 1998

Invitados:

- NESTOR HUMBERTO MARTINEZ-MINISTRO DEL INTERIOR
- PARMENIO CUELLAR BASTIDAS-MINISTRO DE JUSTICIA
- HORACIO SERPA URIBE-DIRECTOR PARTIDO LIBERAL
- OMAR YEPES ALZATE-DIRECTOR DEL PARTIDO CONSERVADOR
- PIEDAD CORDOBA DE CASTRO-SENADORA DE LA REPUBLICA
- ANTONIO NAVARRO WOLF-REPRESENTANTE A LA CAMARA



Convocan:

**Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
y Corporación Viva la Ciudadanía**

José Jairo González Arias
Investigador Cinep

Cultivos ilícitos, colonización y revuelta de raspachines¹

José Jairo González Arias

Introducción

Hace apenas dos años las imágenes de miles de marchantes campesinos le dieron la vuelta al mundo, sorprendiendo, no sólo a la opinión pública internacional sino, también, paradójicamente a la opinión pública nacional, enredada como estaba por los impactantes acontecimientos desencadenados por el proceso 8.000, el cual curiosamente servía en la cúspide del poder de manto encubridor de cuanto estaba sucediendo en la base de la pirámide.

De hecho, después de veinte años de iniciado el ciclo del narcocultivo en Colombia, justamente cuando ya se evidenciaban los más rotundos fracasos producidos por los procesos de colonización campesina espontánea, dirigida u orientada por el Estado, según la propia evaluación del Incora realizada en 1974, a espaldas de un país, que se empeñaba en desconocerlos, marcharon cerca de 180.000 campesinos que asumían de frente su condición de pequeños cultivadores de coca, chagreros, raspachines y chichipatos.

De no mediar el desesperado y lúgido acuerdo de septiembre de 1996, entre el gobierno y los campesinos marchistas, y sin que sepamos todavía cuáles pueden ser sus consecuencias, por poco el país se ve enfrentado, para ahondar su crisis, a una muy singular revuelta de raspachines. Lo que va de la crisis de los procesos de colonización, la implantación de los cultivos ilícitos, al pro-



ceso 8.000 y los conatos de revuelta de raspachines del Guaviare, Caquetá y Putumayo tiene que ver con el propio proceso de estructuración territorial y social de nuestro país, por lo menos durante las últimas ocho décadas.

Por obvio que parezca, en el origen de los actuales desequilibrios regionales, desajustes sociales y violencia están las descollantes disputas por el máspreciado de los recursos: la tierra. Esto no es solo una vieja herencia

recibida del pasado, aunque desde esa época se haya advertido sobre las nefastas consecuencias que acarrearía el no dotarnos oportunamente de una adecuada estrategia de resolución de lo que después se llamó "el problema agrario".

No obstante los numerosos estudios realizados, todavía no ha sido suficientemente reconocido el impacto que sobre el narcocultivo, el narcotráfico y las violencias recientes, tienen, tanto la "viciosa constitución de la propiedad territorial" en nuestro país, como lo afirmara Aníbal Galindo hace 125 años, como la respuesta que el Estado

1. Conferencia pronunciada en el Seminario Comunicación y Ambiente. Universidad de Antioquia, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sáfila. Medellín, mayo 12 de 1998. Con base en el libro en preparación, Amazonia colombiana hoy: escenarios, procesos y actores, Cinep, 1998.

ha querido darle a través de las distintas “políticas” de colonización, o la de la misma comunidad que asumió como propia la tarea de ocupación, poblamiento y colonización de nuevas tierras, en una dinámica espontánea.

Respecto a las políticas de colonización vale la pena recordar cómo estas arrancaron equivocadamente con una legislación sobre baldíos que muy pronto generó los primeros grandes conflictos y enfrentamientos sociales y regionales, como fue también tempranamente denunciado por Galindo, cuando advertía desde esa época que la enajenación de áreas inmensas de tierras baldías en favor de propietarios especuladores “tienen que ser fecundas en perturbaciones inmensas sobre la distribución de la riqueza pública”², como en efecto se evidenció desde el comienzo del presente siglo con las movilizaciones agrarias de los años 20 y 30, concentradas particularmente en el Sumapaz³ y que culminaron, en primera instancia en la legislación de tierras de 1936 y luego en la contrarreforma dramáticamente expresada en la llamada violencia de los años cincuenta.

Esta es una vieja historia, reconstruida ejemplarmente en el trabajo de Catherine Le Grand⁴, quien señala cómo nuestro país buscó insertarse, desde 1850, en el mercado internacional mediante la expansión de la frontera agrícola hacia tierras aptas para el cultivo y explotación de los productos agrícolas tropicales. Esta expansión fronteriza significó, por una parte, los enfrentamientos entre colonos, arrendatarios, peones, hacendados y empresarios agrícolas, además del desplazamiento forzoso de etnias enteras. Por otra, implicó también un reordenamiento regional traumático, difícilmente asimilable por el Estado nacional, que apenas para final de siglo contaba con un espacio integrado o efectivo de 300.000 Km., y una población de 3'000.000 de habitantes, según la memoria de don Salvador Camacho Roldán⁵. En cualquiera de los casos, y desde entonces, el Estado en sus propuestas de control territorial puso en juego su legitimidad y en todos ésta resultó desbordada, cuestionada o simplemente ignorada por quienes protagonizaban en los nuevos escenarios fronterizos el ininterrumpido proceso de poblamiento y colonización del territorio⁶.

Detrás de todo este proceso están, por supuesto, los colonos campesinos, los empresarios y hacendados, aunque la historia escrita generalmente se deshizo en elogios respecto a estos últimos, y poco o ningún reconocimiento se dio a los primeros, es decir, a los colonos campesinos, para quienes más bien parece asignárseles ahora, bajo las nuevas estrategias ambientalistas de organización del territorio y, desde luego, frente a la reciente guerra declarada contra el narcotráfico, poco menos que el papel de villanos, cuando no de delincuentes.

Para ellos, desde el principio, la suerte estaba echada en su contra. En efecto, el proceso de usurpación y aca-paramiento de las tierras de los colonos pobres, así como el aprovechamiento del proceso de colonización y de sus beneficios derivó inicialmente de la equivocada política de baldíos, que denunciara Galindo. Y a pesar de que las sucesivas medidas tomadas desde principios de siglo frente a la adjudicación de baldíos, como lo estableció el Código Fiscal de 1912, pretendían corregir el error y “dejar a salvo los derechos de los cultivadores y colonos”⁷, lo cierto es que la secular tendencia a la especulación con la tierra y la formación de grandes propiedades en las regiones de colonización no ha cesado hasta el presente.

Desde este punto de vista el proceso de consolidación de la colonización y su desarrollo, es al propio tiempo el proceso de expulsión de los colonos primarios y la sustitución por los nuevos agentes y reales beneficiarios del progreso: el comerciante, el terrateniente, el empresario agrícola o el coquero. No hay, pues, mecanismos estatales que aseguren los beneficios del desarrollo para el cultivador primario, en este caso para el colono campesino, aquel que con su trabajo ha “civilizado” la tierra, como se decía antes. En esta larga cadena de equívocos, ni el Estado, ni el colono primario, como en el viejo adagio popular, saben “para quién trabajan” o a lo mejor no quieren saberlo o no pueden evitarlo.

Hoy sabemos ya por los contundentes resultados que la colonización que se presentó como alternativa al rígido y tradicional régimen de tenencia de la tierra (en la medida en que ofrecía tierras gratuitas a los campesinos acosados por la gran propiedad y, consiguientemente, como mecanismo para desconcentrar las tensiones sociales), muy excepcionalmente cumplió su cometido. Por el contrario, en la mayoría de los casos y desde sus comienzos se impusieron prácticas que contribuyeron a consolidar y/o reproducir la tradicional estructura

2. Aníbal Galindo, *Escritos económicos y fiscales*. Imprenta a cargo de H. Andrade, Bogotá, 1880.

3. Elsy Marulanda A., *Colonización y conflicto, Las lecciones del Sumapaz*. Edit. Tercer Mundo, Iepri-U. Nal., Santa Fe de Bogotá, 1993.

4. Catherine Le Grand. *Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950*. Centro Editorial de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988, pp. 17 y ss.

5. Salvador Camacho Roldán, *Notas de Viaje*, Banco de la República, Bogotá, 1973, tomo y p. 44.

6. Cfr. José Jairo González Arias “Geopolítica de la violencia”. En: *Revista Análisis* No 2 Cinep. Bogotá, 1989.

7. Cfr. Código Fiscal. Ley 11 de 1912, Art. 47, Edición oficial, Bogotá, Imprenta Nacional, p. 15.

agraria predominante, por un lado, y por el otro, geográficamente se extendieron los conflictos sociales por el control de las regiones de fronteras, conflictos que involucran ya, no sólo los viejos actores, colonos pobres, hacendados y empresarios sino, también, los nuevos actores de estos procesos, los colonos coqueros, los chagreros, los raspachines, los chichipatos, los tráquetos, los narcotraficantes y los empresarios de la droga. Adicionalmente, apenas recientemente se empieza a evaluar el costo ambiental que este proceso de colonización, y la posterior implantación allí del narcocultivo, ha traído y traerá dentro de las nuevas estrategias de desarrollo humano sostenible.

Basta observar la trayectoria de este proceso dentro de los últimos 10 años, inscrito ya dentro del agresivo proceso de concentración de la tierra a favor de los narcotraficantes, proceso que, como ha sido señalado en varios estudios, ha conducido a que desde 1987 cada tres años un millón de hectáreas de tierra vaya a parar a manos de narcopropietarios, calculándose en la actualidad en 4 millones de hectáreas concentradas y distribuidas en el 42% del total de los municipios del país⁸.

Por supuesto, en estas condiciones de insostenibilidad de la colonización, no sólo económica y ambiental sino, también, social y política se inscribe la expansión de los frentes guerrilleros en estas zonas y, por supuesto, el narcocultivo y asociado a este el inicio de la cadena del narcotráfico, y más recientemente del paramilitarismo, fenómenos que si bien, en algunas circunstancias, establecen determinadas relaciones, no guardan ninguna relación de causalidad.

El narcotráfico en Colombia surgió en el primer lustro de la década del setenta con la implantación de los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Guajira. Posteriormente los cultivos se extendieron hacia las zonas de los Llanos Orientales, especialmente hacia La Macarena. La represión y, sobre todo la legalización del cultivo en las costas californianas, marcó el ocaso del mismo, pero también el inicio de los cultivos de coca en lo más profundo de la selva amazónica colombiana, en la región del Carurú, actual departamento del Vaupés, donde se esparció por toda la región amazónica, e incluso por algunos de sus valles interandinos.



La celeridad con que se expandieron los cultivos, así como su afianzamiento fue, en gran parte, producto de las propias condiciones agrarias de estas zonas, de la situación social de los colonos y campesinos pobres y de las propias políticas públicas, o mejor, la ausencia de éstas, que le permitieran controlar el avance del fenómeno en su ciclo productivo. De hecho, como lo señalan numerosos estudios, la aceleración de este ciclo productivo de la coca fue facilitada enormemente por la presencia de una masa de irredentos del campo, que venían viendo aplazadas hasta hoy sus aspiraciones de resolución de sus problemas.

Por supuesto que la no realización de la reforma agraria y la marcada exclusión política a que han sido sometidos viabilizaron su articulación al ciclo productivo de los cultivos ilícitos en Colombia, que no al ciclo del tráfico y, mucho menos, al ciclo del consumo, ciclos, que aunque articulados en su conjunto por los llamados "cártel de la droga", son claramente diferenciables, tanto desde el punto de vista funcional, como de los actores involucrados.

Este es, pues, el contexto geohistórico de configuración regional del problema de los cultivos ilícitos, el cual

8. "Narcos avanzan en el sector agrario", *El Tiempo*, noviembre 30 de 1996.

no puede ser soslayado al intentar cualquier alternativa de solución a la crisis, manifiesta contundentemente en las marchas de campesinos de mediados de 1996 y sobre las cuales, pese a los insípidos acuerdos de septiembre del mismo año, el país y la sociedad entera imperdonablemente no han vuelto a saber nada. Como los Borbones, en plena época de revueltas, nada hemos aprendido, nada hemos olvidado. Entre tanto, seguiremos contemplando, entre el asombro y el terror, el cumplimiento de la promesa hecha por Carlos Castaño "habrá muchos más Mapiripanes".

Por cierto, esta zona de implantación de los cultivos ilícitos y que incluye el vasto territorio de la Orinoquia y Amazonía colombianas, es decir, más de un tercio de la extensión territorial del país, se presenta sin lugar a dudas como el escenario privilegiado de condensación de los factores estructurales y coyunturales de la actual crisis política colombiana.

De hecho, todos los factores estructurales de la crisis dada por la permanente exclusión económica, social y particularmente política, reflejadas en el atraso, la marginalidad, la pobreza, así como la baja representación de los sectores subalternos en las estructuras del poder han acentuado las manifestaciones coyunturales de la crisis política y consecuentemente de los procesos de conflictos y violencias en estas regiones.

En ninguna otra parte del país se ha puesto de presente la actual debilidad y pérdida de legitimidad del gobierno, la ineficiencia e ineficacia del mismo frente a la búsqueda de una gobernabilidad y, por supuesto, la inoperancia de todas las estrategias de paz o de guerra en la perspectiva de resolución de los conflictos y las violencias.

Al contrario, éstas han ido incrementándose al tenor de las guerras de la insurgencia, la contrainsurgencia, del narcotráfico y el paramilitarismo.

La guerrilla históricamente vinculada a estas regiones, en algunas partes desde hace más de tres décadas como en el Caquetá, ha venido aumentando su ascendencia dentro del territorio, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista militar. De hecho, más de 40 frentes y columnas especiales de las Farc y el ELN hacen presencia a lo largo de cerca de 200 municipios afectados por los cultivos ilícitos, y más de la mitad del total de sus efectivos, hombre-armas, ejercen control, tutelaje o presión sobre cerca de millón y medio de sus habitantes.

La eficacia militar y su capacidad, no solamente táctica, sino estratégica, ha venido probándose, sobre todo los dos últimos años, mediante intesos enfrentamientos con fuerzas especializadas y de élites del Ejército Nacional, especialmente en el sur del país.

Por supuesto que esta eficacia militar de la guerrilla no puede explicarse exclusivamente por su estrategia militar, sino que esta muestra, a su vez, la propia articulación con los procesos políticos y sociales donde actúa. Una muy fluida relación que va desde la cooperación y el consenso hasta la coacción y la imposición nos da cuenta, en su conjunto, del control y la regulación que la guerrilla ejerce sobre las poblaciones, los partidos políticos y demás formas de representación económica y social, así como de los gobernantes locales y regionales.

Después de la efímera y dolorosa experiencia de la UP, para el caso de las Farc, y de algunos grupos legales apoyados por el ELN, para organizarse y participar en las elecciones locales y regionales, las guerrillas colombianas, y en especial las Farc, radicalizaron su estrategia de influencia sobre el poder político local y regional, partiendo del control y la regulación de las actividades de los partidos, las asociaciones, los gremios y las personalidades influyentes en los niveles locales y regionales.

En estas condiciones los partidos políticos tradicionales y sus redes clientelares se expresan controlados y regulados por la vigilancia de las fuerzas insurgentes. Los movimientos, coaliciones de partidos y organizaciones cívicas aparecen también vigilados o cautelados por éstas, y en su conjunto, las verdaderas movilizaciones y organizaciones políticas locales y regionales parecen no escapar al alcance de lo que las Farc llaman, "estrategia de acumulación política local".

El narcotráfico, por su parte, también ha hecho de estas regiones, particularmente de la Amazonía, el punto de partida, no sólo de sus actividades comerciales, sino también de la intervención creciente en los procesos políticos locales, principalmente, a través de sus cuerpos de seguridad y bandas de paramilitares que han incursionado desde hace más de un año en los territorios del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, en cumplimiento de la estrategia paramilitar de conquista del sur del país y, por supuesto, en beneficio de algunos actores locales y regionales y de sus lógicas privadas de defensa y de seguridad.

Es aquí donde se cruzan, por cierto, las múltiples violencias características de estas regiones. El paramilitarismo fuertemente asociado a estas actividades, pero también con recurrentes vínculos con agentes institucionales del Estado, en particular de la fuerza pública, ha buscado complementar o suplir la acción del Estado en el control de la insurgencia y ha desencadenado sobre el territorio y sobre sus pobladores, desde luego, frecuentes incursiones armadas con saldo trágicos de desplazamientos y masacres de pobladores como las conocidas últimamente, dentro de una estrategia de control de territo-

rios y, más que de éstos, de tierras, y sobre esta base, generar una nueva recomposición económica y social de estos territorios, basados en el fortalecimiento del poder de los propietarios, y empresarios rurales principalmente.

Escenarios

Si bien desde el punto de vista geográfico las áreas de instalación de los cultivos ilícitos, no solamente son extensas, sino muy variadas, y comprenden desde el bosque andino, subandino y las formaciones de páramo, para el caso de la amapola, hasta las zonas de selva y de llanura, para el caso de la coca su impacto ambiental y social se magnifica teniendo en cuenta que produce alteraciones severas sobre ecosistemas extremadamente frágiles, sobre las zonas de parques naturales, de reservas forestales, tierras de resguardo y de reservas indígenas y de comunidades afrocolombianas y, por supuesto, las zonas de economía campesina.

Según los propios inventarios de las autoridades ambientales las fuentes específicas de impacto como la tala y tumba, la remoción y quema de la cubierta vegetal, las labores de preparación del terreno y cultivo han acelerado los niveles de deforestación, los procesos de erosión, el agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, la pérdida de la biodiversidad florística y faunística, y la disminución y pauperización de las áreas dedicadas a las actividades agrícolas, con la consiguiente amenaza contra la seguridad alimentaria.

Por cierto, estos ecosistemas, de montaña, de selva y de llanura, ya venían siendo deteriorados por otras prácticas y actividades legales, tales como la ganadería, el monocultivo y el extractivismo mineral y vegetal, pero la presencia allí de los cultivos ilícitos agravó la crisis y dió la voz de alarma.

Para el caso del cultivo de la amapola, este ha afectado el mayor centro acuífero del país como el Macizo colombiano, donde nacen cuatro de los grandes ríos del país, Cauca, Magdalena, Patía y Caquetá, y el Parque de los Nevados, principalmente.



Así mismo, los departamentos y municipios más afectados por este cultivo son: el Tolima, con los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral, Ataco, Ortega, Roncesvalles, Rovira y San Antonio; en el Huila, los municipios de Teruel, Iquira, Palermo, Algeciras, Garzón, San José de Isna, La Plata, Salado-blanco, San Agustín, Acevedo, Nátaga, Pitalito, Palestina, Opo-rapa, Baraya, Tello, Colombia y Neiva; en Cauca, los municipios de El Tambo, Corinto, Almaguer, Caldono, Miranda, San Sebastián, Santa Rosa, Páez, Silvia, Sotará, La Vega, La Sierra, Bolívar, Mercaderes, Patía y Argelia; y en el departamento de Nariño los municipios de Santa Cruz, Samaniego, Policarpa, Los Andes, Leyva, La Llanada, El Tablón, Cumbitara y el Rosario.

Por su parte, la neocolonización coquera ha alterado los procesos de colonización campesina, iniciados desde décadas atrás en los departamentos del Meta, principalmente en las zonas del bajo Ariari en los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Concordia, y en los valles interfluviales del Duda, el Guayabero y el Ariari, en los municipios de La Macarena, Vistahermosa y parte de Mesetas, también sobre las riberas del río Guaviare, sobre los municipios de Mapiripán y el caserío de Puerto Alvira, y sobre las Sabanas de La Fuga.

En el departamento del Guaviare, sobre las márgenes del río Guaviare, y sobre la parte extrema del eje carreteable El Retorno-Calamar, y sus trochas a oriente, (en los poblados de Charras y La Unilla, entre otros) y a occidente (en los caseríos del Capricho y el Triunfo) y, por supuesto, en una línea discontinua, el centro de los cultivos ilícitos del Guaviare, el municipio de Miraflores y sus zonas de influencia sobre los caños del Unilla e Itilla. Sobre las cabeceras del Inírida, se encuentra el otro centro de cultivo de coca, el caserío de Tomachipán y, finalmente, en el bajo Guayabero, los centros de La Carpa y Cachicamo.

En el Vaupés, el área de cultivos ilícitos está localizada en la zona de influencia del río Vaupés, y su epicentro en Carurú, y sobre el Apaporis en la localidad de Pacoa.

En el departamento del Guainía el epicentro se encuentra en el puerto de Barrancominas, sobre el río Guaviare y su influencia se extiende, a lo largo de las márgenes del río, sobre los caseríos de Sapuara y El Cejal. En la margen izquierda, sobre territorio del departamento del Vichada, su influencia llega hasta los poblados de Güerima, Caño Uva y el Príncipe.

En el departamento del Caquetá la zona de cultivos ilícitos se extiende por todo el alto y medio Caquetá y sus afluentes, desde el Fragua y el Mandur y sus epicentros en Currillo, Solita, Cuemaní, Los Monos y La Tagua (Putumayo) en el medio Caquetá. Sobre el río Orteguaza, sobre los poblados de San Antonio de Getchá, Milán y el Paraíso, y su centro en Solano. En la zona del alto Caguán, las sabanas del Yarí y El Refugio, y las riberas del río Losada, sus epicentros lo constituyen La Macarena en el Meta y San Vicente en el Caquetá. En el medio y bajo Caguán y su afluente el Suncillas, sus epicentros están en Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán.

En el Putumayo, sobre riberas del alto Caquetá, desde Puerto Limón y Puerto Guzmán y sus afluentes los ríos Mecaya y Sencella y con epicentro en Currillo, principalmente. También sobre el río Putumayo y sus afluentes, Piñuña Blanco y Caucayá, con sus centros Puerto Leguízamo y Puerto Ospina. También sobre la zona de colonización del Picudo y sobre el río Mandur, afluente del Caquetá, y sobre la zona de influencia del río Guamuez en los centros de Orito y La Hormiga, principalmente.

En el departamento del Cauca, en su parte amazónica, se localizan los cultivos ilícitos en la llamada Bota Caucana, con epicentro en Currillo, departamento del Caquetá.

A las zonas de los Andes y orinoquense amazonense se le suman las zonas ubicadas al norte del país, en las serranías de San Lucas y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en el extremo norte de la cordillera oriental en la serranía de Tibú, Los Motilones y Perijá, sobre los poblados de La Gabarra y el Tarra, cruce de caminos a la zona de influencia de los cultivos ilícitos de coca, marihuana y amapola.

Procesos

Como ha sido refrendado por muchos estudios, la implantación de los cultivos ilícitos ha corrido paralelamente a los procesos de ocupación, poblamiento y colonización de las zonas de frontera interior de nuestro territorio nacional constituidas, a su vez, por el propio proceso de configuración regional colombiana en espacios de exclusión, de marginalidad y de pobreza.

Por supuesto que uno de los efectos de este proceso de colonización desordenada, la poterización y, consecuentemente, el agresivo proceso de concentración de tierras por parte de narcotraficantes, no solo ha producido el desplazamiento masivo de miles de familias campesinas de sus tierras, arrojándolos a engrosar los cinturones de miseria, ya no sólo de los grandes centros poblados, sino de los medianos y pequeños pueblos, situados al borde de la frontera coquera, y también a otros los ha empujado más hacia el corazón de las selvas, en búsqueda de zonas más seguras para continuar con el ciclo productivo de la coca.

Dentro de la estrategia, si es que se puede hablar de alguna estrategia para el control de la producción de narcocultivos, es notorio el tránsito actual, de la permisividad complaciente por parte del Estado y de las autoridades encargadas de combatirlo, al prohibicionismo agresivo que en más de una ocasión se ha prestado para la violación de los derechos humanos de los habitantes de esas zonas y a la generación de unas equivocadas estrategias antinarcóticas asociadas, cada vez más, con las estrategias antisubversivas. Prohibicionismo y guerra contrainsurgente, acompañada de recurrentes masacres por parte del paramilitarismo en expansión en estas zonas parecen ser las dramáticas señales de los actuales tiempos.

Hasta la década de los 60 de este siglo la colonización se inspiraba en un precepto casi milenario, que consideraba que “gobernar es colonizar y colonizar es poblar”. En esta frase un poco simple está expresado todo el contenido político de la colonización. Ahora se podría pensar que para gobernar, para garantizar mejores niveles de gobernabilidad no habría que pensar en colonizar y mucho menos en poblar; pero la idea de gobierno asumida desde la época de la Colonia por nuestros virreyes y la corona misma y por nuestros primeros gobiernos republicanos era que la manera más eficiente de ejercicio de gobierno e incluso de soberanía era la colonización. Sin exagerar demasiado creo que esta concepción estuvo animando a los gobiernos hasta épocas relativamente recientes. Incluso, en 1955, el propio presidente de la república, el general Gustavo Rojas Pinilla reivindicaba el proceso de colonización para el país, y afirmaba sin ambages que “el Estado es un colono”⁹.

Desde luego, estos fueron los presupuestos políticos que inspiraron los megaproyectos de colonización como los del Caquetá I, Ariari-Güejar I, Arauca I y otros du-

9. Gustavo Rojas Pinilla. Conferencia pronunciada en Cali. En: *Revista ICI*. Bogotá, 1955.



rante los 60, que en su momento se presentaron como alternativa para la resolución, no solamente del problema agrario, sino también como estrategia de rehabilitación, apenas conocidos los primeros efectos que la violencia había traído para el país, especialmente, para esa gran masa de campesinos irredentos que deambulaban por los campos o desbordaban las superficies urbanizadas de las ciudades más próximas.

Pero todos hemos aprendido y aprehendido un poco. Y cierto es que, desde el punto de vista del Estado, la colonización no aparece hoy como un escenario privilegiado de gobierno y, desde el punto de vista de la sociedad, la colonización no resulta un procedimiento viable para la construcción, en condiciones armónicas, de nuevos espacios sociales. De hecho, si hiciéramos una evaluación de lo que ha significado el proceso de colonización y quisiéramos llegar a una conclusión actualmente podríamos decir que, dadas las circunstancias históricas y las condiciones de desarrollo de la colonización, hoy esta aparece como insostenible. La pregunta sería ¿es en sí misma insostenible? O lo que la hace insostenible son las mismas estrategias, mecanismos y formas de colonizar la relación entre los actores, incluyendo al Estado, que participan en la colonización.

Lo cierto es que existen algunas características del proceso de colonización que no pueden ignorarse y que deben tenerse en cuenta al momento de considerar cualquier estrategia que busque revertir las actuales condiciones de insostenibilidad del mismo y ofrecer alternati-

vas viables económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales para los colonos, sobre todo para los colonos pobres. Veamos algunas de ellas.

La primera que hay que destacar es el contenido *profundamente social* de la colonización, contenido que en algunos casos se confunde con un movimiento social, mas aún con un movimiento resistencial de unos sectores campesinos que se negaron a desaparecer de la faz de la tierra, pese a la violencia y a la modernización. Nosotros no tuvimos una revolución agraria, al estilo de la que tuvieron los mexicanos, porque tuvimos infinidad de pequeñas revueltas campesinas; muchas de las cuales desencadenaron desplazamientos masivos de campesinos hacia las nuevas fronteras que constituyeron, de alguna manera, formas de resistencia a las condiciones económicas que se estaban presentando en los espacios rurales ya consolidados: la hacienda, el latifundio, el minifundio, la agroindustria etc., pero desde luego, también la violencia.

En este sentido, como nos lo recuerdan muchos de los colonos entrevistados, los campesinos pobres no se fueron a colonizar tierras tan lejanas de sus tierras, sus familias y sus amigos "por gusto", por el placer de ver caer los árboles del bosque, muchas veces sobre su cuerpo. Ellos se fueron a sobrevivir económica, social, cultural y políticamente, o al menos lo intentaron y muchos murieron en el intento, o los están matando, masacrando, como lo registran y anuncian tranquilamente los titulares de los diarios nacionales: "Masacre en Mapiripán", "Masacre en Puerto Alvira".

Sin duda, la colonización campesina es y ha sido la respuesta, "espontánea" o dirigida de una parte de la sociedad que ha sido excluida de la sociedad "mayor", ha sido la reacción social de los débiles, de los sectores sociales más vulnerables y vulnerados, económica, social y políticamente. Y configura lo que en el lenguaje alambicado de la sociología llamamos el proceso de recomposición o reconstitución social de los campesinos. Por cierto, los campesinos pobres que no optaron por la vía de la colonización o no tuvieron esa "chance" históricamente desafortunado, los encontramos desde hace décadas engrosando los cinturones de miseria ya no solo de las grandes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla), sino también de las medianas y pequeñas ciudades como Bucaramanga, Cartagena, Montería, Neiva, Villavicencio

y Florencia o municipios como El Doncello, Puerto Rico, Puerto Asís, Mocoa, San José del Guaviare, El Retorno, Granada, Vista Hermosa, etc., algunos de los cuales sirvieron como centros de paso a la colonización misma.

Este proceso de colonización entra hoy, de acuerdo con muchos estudios, en una dinámica de diferenciación. Ya no podemos hablar de él como un proceso monolítico y homogéneo, sino que debemos hablar de los distintos actores que participan, para poder determinar y evaluar su impacto global y diferenciador.

No podemos, por ejemplo, hablar de modo indiferenciado de los colonos empresarios, de los colonos hacendados y de los colonos campesinos. Cuando se habla del proceso colonizador y su impacto es no solamente cuestión de rigor en el sentido sociológico sino, también, de justicia determinar y diferenciar quiénes son los actores que intervienen en él, incluyendo al mismo Estado, de acuerdo con los roles que cada uno cumple, con sus respectivas lógicas, estrategias económicas, modelos de desarrollo, etc., y así asignar las responsabilidades e identificar los controles y las regulaciones de un modo diferenciado para no penalizar una actividad que, por lo menos para unos, es una acción de vida o una estrategia de supervivencia e, incluso, de resistencia social.

Tanto más importante es establecer estas diferencias ahora que se buscan afanosamente responsables del deterioro ambiental, cuanto más necesario es para el análisis del proceso de colonización determinar cuáles serían las estrategias por seguir para que la historia no se repita. Por ejemplo, ahora que se habla de costos sociales del proceso de colonización y de los costos ambientales sería supremamente desfasado asignárselos a uno, apenas a uno, y quizás al más débil de los actores que participan en el proceso y salvar gratuitamente de este costo, de esta deuda social y ambiental a otros grandes agentes de la colonización como el Estado, como los ganaderos, los madereros, los grandes empresarios de proyectos agroindustriales y, por supuesto, los narcotraficantes, los que por cierto fueron y son, finalmente, los grandes beneficiarios de todo este proceso.

Otra de las grandes verdades que aparece de principio a fin en un análisis más detenido del tema es que la colonización es *permanente*. No hubo un solo momento de la historia de nuestro país en que no le haya conferido centralidad y fuerza a toda la configuración regional, incluso condicionando hasta cierto punto la localización y concentración de ciertas actividades económicas como, por ejemplo, la economía cafetera, inscrita dentro de la febril colonización de vertiente. Este es uno de los primeros rasgos que aparentemente no han sido suficientemente detectados, su importancia es tal que algunos estudiosos señalan a Colombia y a Brasil como los países de Améri-

ca Latina en los cuales la colonización es el fenómeno social más destacado.

Tal permanencia de la colonización es la que le confiere el otro rasgo fundamental: el de *construcción de nuevos espacios sociales*. En eso, la colonización se diferencia de los procesos de ocupación o de los simples procesos de poblamiento. De hecho, la colonización en Colombia ha producido al mismo tiempo innumerables espacios nuevos de convivencia, de relacionamiento social. Es *productora de sociedad*, es constructora de comunidades políticas. Urabá, Magdalena Medio, Cauca-tá, Guaviare, Putumayo, etc., son comunidades políticas, resultado de este proceso, con todo lo trágico que en algunas ocasiones implica la construcción social de estas regiones.

El otro rasgo que se obtiene al observar la colonización es que ella está aún *vigente*. La colonización está vigente y lo estará hasta tanto no se puedan remover los obstáculos que la producen. Como se sabe, en Colombia hasta ahora, al umbral del milenio, apenas se insinúa de nuevo una reforma agraria, que seguramente va a alimentar de modo sucesivo estos procesos de colonización. No podemos hacernos muchas ilusiones y pensar que este fenómeno de movilización rural va a disminuir mientras los fenómenos de presión sobre la propiedad rural continúen. La colonización está vigente y actualmente lo que observamos es una nueva tendencia de ésta: ya no la de los grandes desplazamientos interregionales, sino la de las migraciones intrarregionales.

Ya no llegan los colonos del Tolima y Huila hacia el Caquetá, tampoco llegan de Cundinamarca, Valle y Antioquia a colonizar el Meta, ni de Boyacá y Santander “a fundarse en el Guaviare”, o de Nariño y Huila a colonizar el Putumayo, por ejemplo, sino que son los propios caqueteños, metenses, guaviarenses, o putumayenses, quienes están colonizando sus propios departamentos. Tenemos ya en estos antiguos escenarios de colonización colonos de primera y de segunda generación, procesos de autocolonización interna

Por eso se hace un poco invisible el actual proceso de colonización. Hay que ir a cada una de estas zonas y detectar hacia dónde van, cuál es el destino y origen de los nuevos migrantes para poder entender que las fronteras se siguen moviendo. Naturalmente que dentro de esta dinámica el fin de la colonización lo marca el agotamiento de las fronteras territoriales pero todavía, a pesar del proceso de oclusión de las fronteras que se está produciendo en estos momentos, hay fronteras abiertas que permiten dejar tierras de reserva para esta colonización, que alguien ya ha vaticinado será muy trágica; será “la colonización por el desespero”, ya no sólo por violencia y por las condiciones sociales, sino por la desesperación,

dramática revelación de las características psicosociales de la nueva migración, sin que se trate ya de procesos alimentados sólo por la actual fase de los cultivos ilícitos, como comúnmente se cree.

Ahora bien, esto es lo que hace que la colonización, en las condiciones actuales, sea a su vez *inevitable*. Con Estado o sin él, con políticas públicas o sin ellas la colonización es un proceso que se produce independientemente de la voluntad que nosotros tengamos, independientemente de la legislación para su control. Lo que sí está en nuestras manos es el diseño de políticas públicas para su regulación, para su ordenamiento.

Hay que partir del reconocimiento de que esto es un fenómeno social que no depende de un decreto, hay que admitir que es una manera de construir nuevos espacios sociales, aceptar que es un fenómeno vigente; para algunos, una manera de sobrevivir. Dentro de esta perspectiva ninguna política pública puede paralizar, contener y mucho menos impedir este hecho social; en cambio es posible diseñar una estrategia que permita articular estos procesos a sus propios proyectos de desarrollo y aspiraciones de vida, naturalmente, dentro de las condiciones de sostenibilidad que el Estado y la sociedad demandan, lo cual significaría generar un escenario de negociación entre los distintos actores de la colonización con el fin de procurar, con algunas probabilidades de éxito, verdaderas políticas públicas, privadas y colectivas de estabilización de la colonización y de ordenamiento territorial.

A este respecto, vale la pena mostrar cómo ella produce espacios diferenciados, por ejemplo, respecto a la organización de actividades productivas, extractivas o de valor estratégico, económico, social, político o militar. De hecho, en lo que se llaman “grandes zonas de colonización” se producen distintos espacios y, por tanto, se pueden identificar diferentes fronteras interiores de la colonización.

Desde este punto de vista se puede hablar, entre otras, de fronteras ganaderas, madereras, agrícolas y campesinas, por ejemplo, y al propio tiempo diseñar una política que de modo diferenciado apunte a guardar el equilibrio entre estas distintas fronteras, teniendo en cuenta que al interior de la colonización se produce una relación de dominación entre unas fronteras que terminan subordinando totalmente a las fronteras más vulnerables como es, por ejemplo, la frontera campesina. Una intervención realizada a través de políticas públicas, diferenciando cada una de estas fronteras, contribuiría notoriamente a guardar el equilibrio entre estas.

A la *diferenciación espacial y social* producida por el proceso de colonización hay que agregarle la que se origina en las sucesivas bonanzas producidas por los diversos cultivos ilegales como los de la marihuana, la coca

y, más recientemente, la amapola; bonanzas que han provocado, no solo una significativa activación de la frontera agrícola sino, también, una alteración del ritmo de poblamiento y ocupación de las nuevas fronteras, ocasionando graves perturbaciones en el orden social, económico y político de éstas, y afectando notoriamente los patrones de cohesión social de la familia, los grupos y las comunidades.

Este proceso de diferenciación espacial y social de la colonización tiende a reproducirse, siguiendo la misma lógica, en los espacios subregionales generados por la colonización. Al mismo tiempo, al interior de las fronteras de colonización y de las político-administrativas se van configurando otras fronteras, asociadas con la propia localización de las actividades económico-productivas o extractivas o, incluso, dada la dinámica del conflicto regional, a la acción de los distintos grupos armados estatales, antiestatales o paraestatales.

En este sentido se configuran en las zonas de colonización en la actualidad, de modo más o menos diferenciado, pero en todos los casos coexistiendo en una amplia gama de relaciones que van desde la cooperación y solidaridad hasta el conflicto, entre otras, las siguientes fronteras:

1. La *frontera indígena*, compuesta por el conjunto de comunidades, etnias y culturas indígenas, secularmente desplazadas de sus territorios por el proceso de ampliación de la frontera agrícola.

2. La *frontera campesina*, conformada por campesinos pobres que constituyen la punta de lanza del proceso de ocupación y poblamiento. Componen el escenario del proceso de reconstitución o de recomposición campesina, y actualmente, el espacio de condensación del ciclo del narcocultivo.

3. La *frontera latifundista-ganadera*, integrada por los comerciantes de tierras y ganaderos, localizados en las zonas de consolidación del proceso de colonización.

4. La *frontera maderera*, la cual es de alta movilidad territorial, cuyos ejes de acción oscilan entre las puntas de colonización, la frontera latifundista-ganadera y los epicentros urbanos regionales y extrarregionales. Involucra un amplio espectro de agentes, que van desde el cortero, el aserrador, el transportista, hasta el pequeño y gran comerciante de maderas.

5. La *frontera de cultivos comerciales y/o agroindustrial*, compuesta por los nuevos empresarios agrícolas, resultado del propio proceso de diferenciación económico-productiva de la colonización.

6. La *frontera de cultivos ilícitos*. De acuerdo con la variabilidad del cultivo y las condiciones políticas de producción es muy difusa, aunque de modo homogéneo tiende a localizarse en lo más profundo de los frentes

colonizadores, en las sabanas o en las alturas de las zonas de vertiente e involucra también a una amplia gama de actores. En este sentido, esta frontera se entrecruza con la frontera campesina.

El juego y relacionamiento de las distintas fronteras y de los diversos actores sociales presentes, indígenas, colonos campesinos, ganaderos, comerciantes, madereros, agroindustriales, coqueros y narcotraficantes etc., en medio de un escenario tan diferenciado, pero a la vez de relacionamiento tan fluido, determina finalmente cuáles son las dinámicas de construcción social, regional y local, allí desarrolladas.

Actores

En términos generales, la última fase de la colonización se articuló desde el punto de vista productivo con el ciclo de implantación de los cultivos ilícitos y alterará entonces sensiblemente, ya no sólo las dinámicas y tendencias de la colonización, sino también los actores de este nuevo y agresivo proceso de ocupación de nuevas tierras.

Al lado del antiguo colono y campesino fueron apareciendo nuevos actores o se fueron transformando los viejos actores. La crisis de la colonización, sumada como anotábamos, al "abandono del campo" y los procesos de latifundización - minifundización, por fuerza arrojaron a las masas de campesinos y colonos a la búsqueda de nuevos horizontes, a atrapar cualquier bonanza que les permitiera retener su predio y sentar una "finca".

Pese a las implicaciones negativas que tenía para el campesino-colono la articulación de su ciclo productivo de economía campesina con el de los cultivos ilícitos, arriesgó en gran parte, su suerte aprovechando tal vez algunas ventajas comparativas iniciales, como el de ser productor de alimentos, aunque en condiciones precarias, y se aventuró en el ciclo especulativo y consumista de la producción de ilícitos, lo que profundizó su diferenciación social y comprometió el amplio espectro de actores sociales presentes en el narcocultivo. Así, aparte del comerciante, verdadero agente catalizador de los excedentes locales y regionales producidos por la coca, otros actores hacen aparición en el complejo escenario de los cultivos ilícitos. Todos en su conjunto, contribuyen a acelerar el proceso de acumulación de capital y a su concentración final en los distintos cárteles de la droga.

El ciclo se inicia primero, con el *campesino-colono-coquero*, personaje antiguo de la región, generalmente estable, y que ha estado vinculado a la actividad agropecuaria antes de la aparición de los cultivos. Si bien, en procura de atrapar parte de los excedentes producidos por el narcocultivo deja una pequeña parte de la fin-

ca para producir coca, la base de su actividad sigue centrada en la producción de alimentos, pero aspira a invertir sus excedentes en la apertura de potreros e instalación de ganado. Según algunos cálculos la proporción entre el área dedicada a la producción agropecuaria y a la dedicada a la producción de cultivos ilícitos es de 10 a 2 a favor de la primera.

En segundo lugar, el *campesino-colono-coquero*, de más reciente asentamiento en la zona y generalmente ubicado en zonas de reserva, cuya actividad principal está centrada ya en la producción de la pasta de coca, pero deja una pequeña área de sustentación basada en la producción de algunos alimentos y el mantenimiento de algunas aves de corral y otras especies menores. Sin embargo, su aspiración es a conseguir rápidamente el excedente suficiente para invertir en potreros y ganado hasta hacerse una buena finca. Según estos cálculos, la proporción entre el área de producción de coca y la de alimentos es también de 10 a 2 a favor del área en coca.

En tercer lugar, tenemos el chagrero, especie de pequeño empresario, generalmente de origen urbano, que se ubica en las zonas de colonización y arrienda una finca o contrata un desmonte con el único fin de producir coca.

En cuarto lugar, están los empresarios cultivadores de coca que, aunque llegados al ciclo productivo, tienen articulaciones directas con el ciclo de distribución, son los cultivadores en gran escala, con extensiones que oscilan entre 25 y 200 hectáreas, como se pudo observar en Miraflores y en El Capricho, Guaviare.

En quinto lugar, encontramos a *raspachín*, asalaria-do que raspa la hoja de coca y participa parcialmente de su procesamiento. Estos raspachines aparecieron a la "luz pública" y sorprendieron al país con su existencia y su rol desempeñado dentro de las pasadas marchas campesinas del Guaviare, Caquetá y Putumayo, de junio a agosto de 1996.

En efecto, entre los marchistas estaban estos raspadores de hoja, cosecheros o trabajadores rurales estacionarios, hoy conocidos como *raspachines*, verdaderos trabajadores "sin rostro" dentro de la actual crisis. ¿De dónde surgió esta masa considerable de pequeños hombres, mujeres y niños de la coca, quiénes son?

Los *raspachines*, según la sabia clasificación que hicieran los propios voceros de los marchistas, son un grupo heterogéneo compuesto por tres clases más o menos diferenciadas:

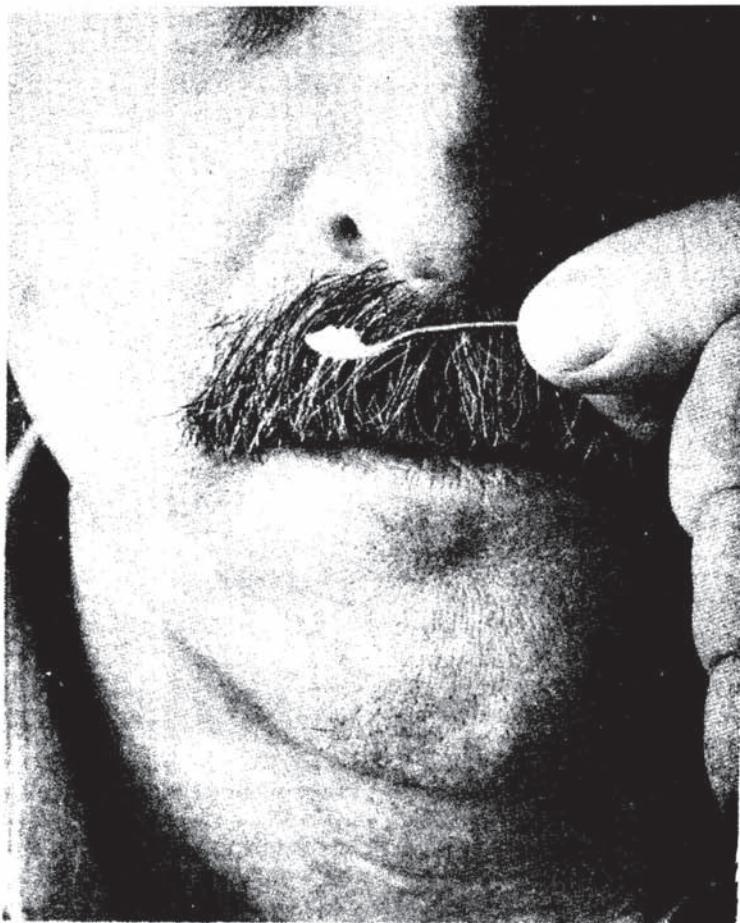
A la *primera* pertenecen aquellas personas con tradición campesina, que por distintas razones (procesos de pauperización, descomposición campesina, etc.), terminan raspando hoja, pero que mantienen, no obstante, su vocación agrícola y su voluntad de permanecer en el campo.

A la *segunda* pertenecen los jornaleros agrícolas, antiguos trabajadores rurales o cosecheros de otras áreas agrícolas del territorio nacional, como recolectores de café, cosecheros de algodón, etc., quienes aspiran a asentarse en la zona, bien como jornaleros o asalariados o bien como campesinos.

A la *tercera* pertenecen aquellos raspachines itinerantes o “andariegos”, como asimismo se llamaron, para quienes la búsqueda de fortuna y de enriquecimiento rápido los llevó lejos de sus sitios de origen, urbano o rural, pero que aspiran a retornar a su tierra con algún beneficio económico.

En *sexto lugar*, encontramos a los *chichipatos*, pequeños comerciantes al menudeo de la pasta de coca procesada en los fábricos o cocinas, si bien constituyen el primer puente entre los actores vinculados al ciclo de producción y procesamiento y el ciclo de distribución, por su nivel de inserción en el primer ciclo, su relacionamiento con lo local, principalmente, y su ascendencia dentro de estos espacios están más adscritos a las redes de sociabilidad generadas por el ciclo productivo de los cultivos ilícitos, en este caso de la coca, que a las del ciclo de distribución, de allí que hubieran estado también en medio del conflicto generado por las marchas campesinas. En particular tuvieron destacada presencia en la revuelta urbana presentada en Florencia, dentro de la coyuntura, y a los que se sumó la oleada de desempleados y andariegos producida por la misma estrategia de erradicación de los cultivos ilícitos. En su conjunto, las gentes de las cabeceras los identificaba como los *vagos y gamines* del pueblo.

En *séptimo lugar*, encontramos a los traquetos, comerciantes en mediana escala del producto de pasta y de coca refinada, constituyen el primer eslabón de la cadena de intermediación a gran escala de los empresarios de la coca, y están más articulados a los grandes centros de abastecimiento regional y a las capitales nacionales donde se realiza todo el ciclo de distribución para el mercado



internacional. Sus intereses están, pues, del lado de los grandes empresarios y su régimen de lealtades funciona adscrito al de las organizaciones y cárteles de la droga.

Y, finalmente, en algunos sitios como en el Guaviare existe el personaje conocido como paracaidista, comprador en gran escala de la pasta de coca, que llega en avioneta cargada de tulas con dólares o pesos hasta el centro de los grandes fábricos, hace sus transacciones directamente con los dueños de los fábricos o a través de los traquetos, permanece durante algunas horas en la región y se marcha hacia los grandes centros nacionales o internacionales con la mercancía adquirida.

En busca de una alternativa:

No parece ser nada razonable ni desde el punto de vista de los métodos ni de los resultados, la continuación de la estrategia prohibicionista y agresiva, en el control de los procesos de narco-cultivo. Si bien, Colombia ha aumentado los niveles de erradicación en hectáreas cultivadas de ilícitos, en términos absolutos como lo señalan las cifras, el área de cultivos ilícitos, no obstante, ha venido aumentando, desplazándose sucesivamente de unas fronteras a otras y causando irreversibles daños a las selvas tropicales.

Socialmente este tipo de control ha acentuado los procesos de segregación social urbana y rural, y políticamente ha generado procesos muy desequilibrantes dentro de las sociedades, procesos que van desde el desplazamiento forzoso, la comisión de masacres hasta la generalización de las violencias.

Un primer paso, en la búsqueda de cualquier alternativa de solución, tiene que pasar imprescindiblemente por la identificación y el reconocimiento *diferenciado* de la variabilidad de actores presentes en el ciclo productivo de los ilícitos frente a los demás actores del ciclo de comercialización y consumo.

Establecida claramente la diferenciación de actores del ciclo productivo de ilícitos es posible conformar estrategias y políticas adecuadas y precisas de control de ilícitos, sin menoscabo del respeto a los derechos humanos, ni de los derechos de los pobladores a buscar unas condiciones de vida dignas y mejores.

De alguna manera, una alternativa tal pone sobre la mesa de discusión problemas aún no resueltos dentro del contexto nacional como son, de una parte, el problema agrario y, dentro de este contexto, la búsqueda de estrategias pacíficas de resolución de conflictos. De otra parte, también obliga a poner en marcha verdaderas estrategias de integración socio-territorial, que se basen en poner en juego distintos procesos de democratización local y regional.

La introducción dentro de la ley agraria de la figura de las reservas campesinas abre por primera vez una gran posibilidad de intervención radicalmente diferente a las hasta ahora planteadas por el Estado. Los riesgos y las debilidades que tiene ya algo del futuro, pero el hecho de que se hayan considerado específicamente como reservas campesinas abre las puertas para la intervención de manera diferenciada en los procesos de colonización y conduce al fortalecimiento de uno de los actores más vulnerables de este proceso, como son los campesinos pobres. Este hecho, el que se pueda diseñar una política destinada expresamente al fortalecimiento de este sector de alguna manera equilibra un poco las fuerzas y la relación entre los distintos espacios de poder que se generan en los procesos de colonización.

Si bien la legislación sobre reservas campesinas se perfila como un adecuado instrumento para el control de los procesos de latifundización y ganaderización en los frentes de colonización no garantiza en sí mismo que se dé el proceso inverso, es decir, el de minifundización, esto es, otra de las formas de descomposición campesina y de expulsión hacia las ciudades o los nuevos frentes de colonización.

Las reservas campesinas, dentro de este contexto, no pueden ser como en el pasado lo fueron los planes de colonización orientada, dirigida y/o especial, sustitutos de la reforma agraria. La aplicabilidad y sostenibilidad de las reservas campesinas está dada por la intervención simultánea del Estado, a través de políticas públicas precisas en las otras fronteras interiores de la colonización, particularmente en las fronteras ganadera, agroindustrial y maderera, que por su particular dinámica y sus niveles elevados de acumulación de capital económico, social y

político se constituyen en un obstáculo para el desarrollo de una verdadera reforma agraria y, de paso, de las propias reservas campesinas.

Las reservas campesinas se constituyen en una política de colonización y en uno de los instrumentos que darán sostenibilidad al proceso de ocupación de tierras baldías o zonas de colonización. Desde luego, ello es posible sólo en la medida en que sus desarrollos legales y su inserción social, dentro de las comunidades campesinas, aseguren esas condiciones de sostenibilidad.

Creemos que no existen espacios que estén definitivamente cerrados para la ocupación humana; eso lo determina el equilibrio entre la población y las mismas condiciones de la oferta natural pero, en principio, no se deben determinar áreas de parques o de reservas por condiciones solamente biológicas, haciendo caso omiso de los procesos sociales generados fuera y dentro de los parques o reservas mismos. Está demostrado que esto trae enormes dificultades e inconsistencias; si ello no fuera así pues no tendríamos ninguno de los parques ocupados, pero la calidad es otra.

En este sentido la reserva campesina no puede ser un área en donde estemos reservando unas poblaciones campesinas o de colonos para tenerlas de muestra como sucedió con la política de resguardos indígenas. Me parece que, por ejemplo, las reservas campesinas pueden ser una especie de política, incluso para los habitantes de los parques. ¿Por qué no pensar en ese tipo de ocupante forestal, que haga útil y racional su relación con el bosque, con la biodiversidad y la incorpore centralmente, no sólo a su sentido de supervivencia sino también a su sentido de desarrollo? Y volvemos entonces a la gran pregunta: ¿es la colonización necesariamente insostenible?

Desde esta perspectiva y en la medida en que la reglamentación de las reservas campesinas se ajuste y satisfaga las demandas planteadas éstas pueden convertirse en un adecuado instrumento de optimización de las políticas públicas y de las estrategias de gobierno para el sector rural tendiente a contribuir a la resolución de los distintos conflictos del agro, principalmente de los derivados de las actividades de narcocultivo y, colateralmente, del enfrentamiento bélico entre el Estado y las fuerzas irregulares.

No resulta, pues, nada despreciable el potencial que pueden representar las reservas campesinas en las políticas de Estado para la erradicación o sustitución de los cultivos ilícitos, así como para el logro de un clima de paz duradera en el campo.

Arturo Escobar
Departamento de Antropología
Universidad de Massachusetts, Amherst

Política cultural y biodiversidad: *Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*

Arturo Escobar

Introducción: Las políticas culturales sobre la naturaleza¹

La posición central que ocupa la naturaleza en políticas de diversa índole—desde las reaccionarias hasta las progresistas—se vuelve cada vez más clara. La invención y reinención de la naturaleza es, en palabras de la teórica Donna Haraway, “tal vez el tema más crucial de esperanza, opresión y controversia de nuestro tiempo para los habitantes del planeta” (1991:1). Inherente a esta afirmación se encuentra la propuesta de que aquello que se entiende como naturaleza ya no puede darse por sentado. Mientras que muchos de nosotros seguimos apegados a la idea anacrónica de naturalismo —la creencia en una naturaleza externa y prístina, anterior a cualquier construcción, e independiente de la historia de la humanidad— recientes avances tecnocientíficos prometen liberarnos de los grilletes de dicha tradición. Comenzando por el ADN recombinante, las incursiones de la tecnociencia en la trama molecular de la naturaleza han ido constantemente en aumento. Hoy se pueden patentar formas de



1. Este capítulo se basa en el trabajo de campo realizado de enero a diciembre de 1993. La investigación fue llevada a cabo por un grupo pequeño, coordinado por Alvaro Pedrosa y el autor, incluyendo a dos investigadores de la Costa Pacífica. El proyecto de grupo fue financiado por subvenciones provenientes de la División de Artes y Humanidades de la Fundación Rockefeller, el Consejo para Investigaciones en Ciencias Sociales y la Fundación Heinz. A todos ellos expreso mi gratitud. También agradezco a Alvaro Pedrosa (Universidad del Valle, Cali), Libia Grueso y Carlos Rosero (Organización de Comunidades Negras de Buenaventura), Tracey Tsugawa, Jesús Alberto Grueso y Betty Ruth Lozano (miembros del grupo de investigación); e igualmente a los participantes en la Conferencia Harry Guggenheim en Ecuador (particularmente a Sonia E. Alvarez, Orin Starn y Faye Ginsburg) por su interés y apoyo durante mi hospitalización en Quito. También agradezco a mis amigas en Quito, Beatriz Andrade y Susana Wappenstein, por esto mismo.

vida, perfeccionarse el genoma humano, lograr la reproducción bajo condiciones que apenas ayer parecían imposibles y mejorar los cultivos con genes tomados en préstamo de varios microorganismos. Todos estos logros representan transformaciones profundas en la relación entre los humanos y la naturaleza. En palabras de Rabinow cuando explica el régimen biosocial naciente: “la naturaleza se fabricará y refabricará mediante técnicas, y eventualmente se volverá artificial, tal como la cultura se vuelve natural” (1992:141).

Si acaso todavía existen lugares sobre la Tierra en donde la ideología del naturalismo permanezca viva, serían las selvas tropicales. Son sitios de “naturaleza violenta, vida flexible [...] uno de los últimos repositorios del planeta de aquel sueño infinito (de naturaleza prística)”, como lo explica Edward Wilson (1993) en su ampliamente referenciado tratado sobre la diversidad biológica. No en vano se perciben las selvas húmedas tropicales como las formas más naturales de naturaleza aún sobre la Tierra, habitadas por las personas más naturales (“gentes aborígenes”) en posesión de los conocimientos también más naturales para salvar la naturaleza (“conocimientos aborígenes”). Sin embargo, veremos cómo los bosques tropicales lluviosos de todo el mundo están siendo inevitablemente lanzados hacia proyectos tecnocientíficos y administrativos que diseñan la naturaleza. Los proyectos para la “conservación de la biodiversidad”—casi siempre financiados por organizaciones no gubernamentales del norte (Ongs y por el Fondo Mundial para el Ambiente (GEF) del Banco Mundial—incorporan planificadores nacionales y comunidades locales en las complejas políticas de la tecnociencia, que ven en los genes de las especies selváticas la clave para conservar los frágiles ecosistemas; y ello ocurre en países tan diferentes como Costa Rica, Tailandia, Costa de Marfil, Colombia, Malasia, Camerún, Brasil y Ecuador. De acuerdo con el argumento básico, los genes de las especies selváticas constituyen una valiosa biblioteca de información genética, fuente de drogas maravillosas y, tal vez, reserva de abundancia de alimentos que podrían con-

vertirse en productos muy valiosos mediante biotecnología. Así pues, se preserva el bosque lluvioso, a la vez que se obtienen pingües ganancias que beneficiarían también a los pobladores locales.

El motivo por el cual se le presta tanta atención a la selva tropical actualmente radica en lo que podría denominarse “la irrupción de lo biológico” como hecho social central de las políticas globales del siglo XX. Después de dos siglos de destrucción sistemática de la vida y la naturaleza, la supervivencia de la vida ha surgido como aspecto crucial de los intereses del capital y la ciencia, mediante un proceso dialéctico iniciado por el capitalismo y la modernidad. La conservación y el desarrollo sostenible se convirtieron en problemas ineludibles para el capital, obligándole a modificar su lógica anterior: la de la destrucción. De acuerdo con ella, la naturaleza era vista como un mundo exterior de materias primas, las cuales debían hacerse propias a cualquier costo. Sin embargo, con la irrupción de lo biológico en el teatro global del desarrollo la preocupación por la seguridad y el medio ambiente han generado una nueva perspectiva hacia la vida. En palabras de Wilson: “La clave para la supervivencia de la vida como la conocemos hoy es el mantenimiento de la diversidad biológica” (1993). El creciente discurso sobre la biodiversidad es el resultado de la problematización de lo biológico, pues coloca a las áreas de selva tropical lluviosa en una posición biopolítica global fundamental.

En este escrito examinamos las reconversiones de la naturaleza y la cultura que ocurren dentro del marco de este discurso. El centro geográfico de interés es el Pacífico colombiano; un área de selva tropical lluviosa de una diversidad casi legendaria. Las políticas culturales de la naturaleza en esta región están inscritas en tres procesos básicos desarrollados simultáneamente después de 1990: 1) las radicales políticas de apertura hacia los mercados mundiales, favorecidas por el gobierno en años recientes, con especial énfasis en la integración de las economías de la cuenca del Pacífico con el resto del país; 2) las nuevas estrategias de desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad; y 3) las crecientes y cada vez

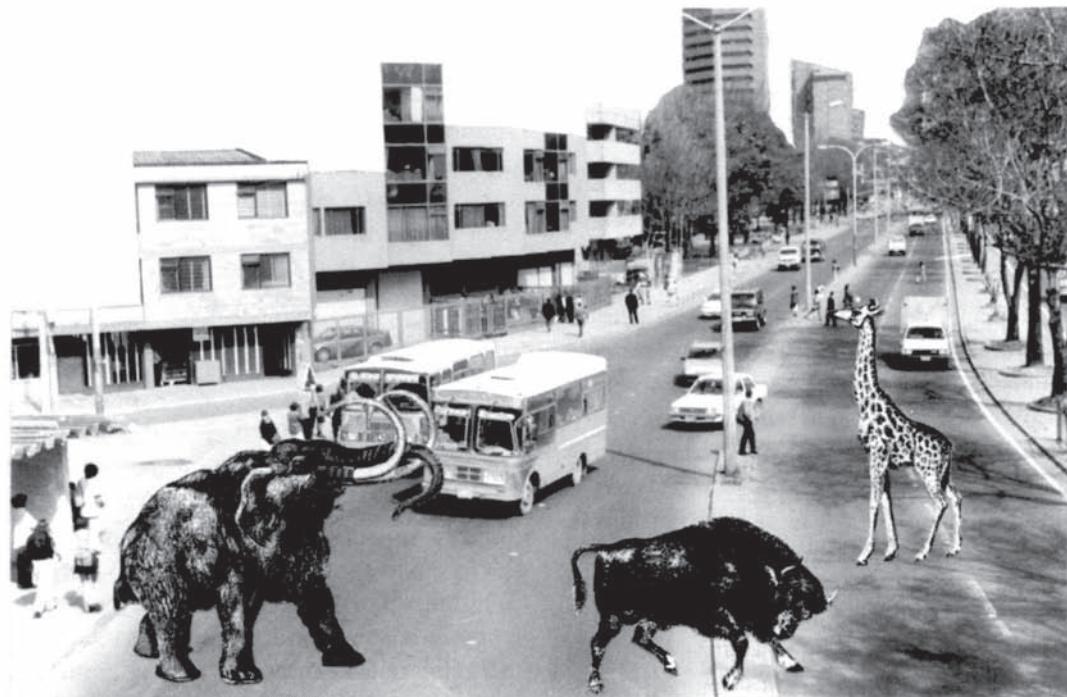
más visibles formas de movilización de poblaciones negras e indígenas.

Entiendo “política cultural” como el proceso que se ejecuta cuando los actores sociales, moldeados o caracterizados por diferentes significados y prácticas culturales entran en conflicto. La noción de política cultural asume que los significados y prácticas culturales —en particular aquellas teorizadas como marginales, de oposición, minoritarias, residuales, emergentes, alternativas, disidentes y similares, todas ellas concebidas con respecto a un orden cultural dominante— son fuente de procesos que podrían considerarse políticos. Que esto rara vez se observe como tal, es más reflejo de encasilladas definiciones de política cultural y no indicativo de fuerza social, eficiencia política, o relevancia epistemológica de las políticas culturales.

Una política cultural determinada tiene el potencial de redefinir las relaciones sociales existentes, las culturas políticas, y circuitos del conocimiento. La cultura se vuelve política cuando los significados se convierten en fuente de procesos que, ya sea implícita o explícitamente, buscan redefinir el poder social. En las áreas de selva tropical lluviosa esta redefinición está mediada por las formas de producir conocimiento y movilización política, íntimamente relacionadas con la construcción de identidades étnicas. Estas políticas culturales alteran las prácticas y el entendimiento familiar que se tiene de la naturaleza, a la vez que intentan liberar las ecologías locales, tanto mentalmente como en la naturaleza misma, de sistemas arraigados en clases, género y de dominación étnica y cultural.

La primera parte de este escrito ha sido objeto reciente de intervención por el capital y el Estado dentro del contexto de la apertu-

ra, bajo el estandarte del desarrollo sostenible. La segunda parte examina brevemente el discurso de la biodiversidad, tal como se gestó en 1990 desde las Ongs del norte y las organizaciones internacionales, y su aplicación particular en Colombia. La tercera parte analiza detalladamente el movimiento de las poblaciones negras, nacido como respuesta contra la arremetida desarrollista. También analiza las formas como este movimiento participa en las discusiones sobre biodiversidad. Finalmente, en la cuarta parte se elabora la noción de política cultural



de la naturaleza, mediante la imaginación de una estrategia de naturalezas híbridas que dependerían de nuevas articulaciones entre lo orgánico y lo artificial. Se discutirá cómo los activistas de movimientos sociales y los intelectuales progresistas, interesados por la naturaleza de la naturaleza, se ven enfrentados a defender las formas locales de conciencia y las prácticas de la naturaleza, cuyo éxito podría depender de las alianzas que establezcan con los defensores de las aplicaciones biotecnológicas a la biodiversidad —es decir, con los propONENTES de lo artificial. Al igual que el concepto de culturas híbridas, la estrategia de la naturaleza híbrida es vista como un me-

dio para elaborar nuevas representaciones de la situación del Tercer Mundo, y también como posibilidad para el posdesarrollo.

La llegada del desarrollo al Pacífico colombiano

Las áreas de selva tropical lluviosa constituyen un espacio social donde se observa la reinvenCIÓN de la naturaleza, la búsqueda de acercamientos sociales y económicos alternativos y modos cambiantes del capital. Más aún, el entramado de estos tres procesos sirve como marco interpretativo para investigar las prácticas políticas de los diversos actores sociales. Dicha red de fuerzas sugiere los siguientes interrogantes: primero, ¿cómo se están transformando las relaciones entre gente y naturaleza? ¿Qué enseñanza nos puede dejar esta transformación acerca de las teorizaciones posmodernas de la naturaleza y la cultura, derivada especialmente de contextos del Primer Mundo?; segundo, ¿qué puede aprenderse de las luchas y los debates sobre las selvas tropicales con respecto a los diseños socioeconómicos alternativos y sobre la posibilidad de trascender el imaginario del desarrollo? (Escobar, 1995); tercero, ¿corroboran los hechos en estas áreas la afirmación de que el capital está entrando a una “fase ecológica” (O’Connor, 1993), en la cual las formas modernas de destrucción coexistirían con las formas posmodernas de conservación?; y, finalmente, ¿qué nos dicen los enfrentamientos socioeconómicos y culturales por definir a las selvas tropicales con respecto a las políticas de oposición, los imaginarios disidentes y la acción colectiva de grupos sociales? En lo que sigue, exploraremos el significado de dichas preguntas basándonos en el trabajo de campo realizado en una región particular de la selva tropical colombiana.

La región del Pacífico colombiano es una vasta área de selva tropical lluviosa de aproximadamente 960 kilómetros de largo, que fluctúa entre 80 y 160 kilómetros de ancho. Se extiende desde Panamá hasta Ecuador, y desde la vertiente occidental de la cordillera Occidental hasta el Océano

Pacífico. Aproximadamente el 60% de la población vive en algunas pocas ciudades y pueblos grandes, mientras que el restante habita las áreas a lo largo de los ríos que corren desde los Andes hasta el mar. Los afrocolombianos, descendientes de esclavos traídos del África a comienzos del siglo XVI para la minería del oro, conforman el grueso de la población, aun cuando también hay aproximadamente unos cincuenta mil indígenas. Estos últimos pertenecen especialmente a las etnias emberá y waunana que habitan al norte del departamento del Chocó. Los grupos negros —objeto central de este escrito— mantienen y han desarrollado prácticas culturales de origen, tanto africano como español —como actividades económicas diferentes, familias extensas, matrilinealidad, bailes especiales, tradiciones orales y musicales, cultos fúnebres, brujería y otras— a pesar de que dichas actividades se mezclan cada vez más con formas urbanas modernas, debido en parte a migraciones internas y externas, como también al impacto ocasionado por las mercancías, los medios de comunicación y los programas para el desarrollo que se diseñan desde el interior del país. Aunque la región nunca ha estado aislada de los mercados mundiales —los ciclos de bonanza auríferas del platino, las maderas preciosas, el caucho, la industria maderera (Whitten, 1986; Friedemann, 1989) y, como lo veremos en seguida, también los recursos energéticos han amarrado a las comunidades negras con la economía mundial— fue apenas en la década del ochenta cuando se tuvo en cuenta a esta región con políticas organizadas para su desarrollo.

Lo que ocurre actualmente en el Pacífico es algo sin precedentes: planes para el desarrollo a gran escala; apertura de nuevos frentes para la acumulación de capital —como cultivos de palma africana y criaderos artificiales de camarón—; y numerosas movilizaciones de indígenas y negros. Tres actores principales: el Estado, el capital y los movimientos sociales luchan por definir el futuro de la región. Detrás de estos actores hay órdenes culturales y políticas diferentes, cuyas genealogías y lazos de unión con racionalidades socioeconómicas y culturales deben ser aclarados. El estudio de las políticas culturales de

estos tres actores es importante porque el futuro de la región dependerá, en buena parte, de cómo se la defina y represente. Analicemos, entonces, cómo el Estado, el capital y los movimientos sociales buscan desplegar su discurso y actividades en el Pacífico colombiano.

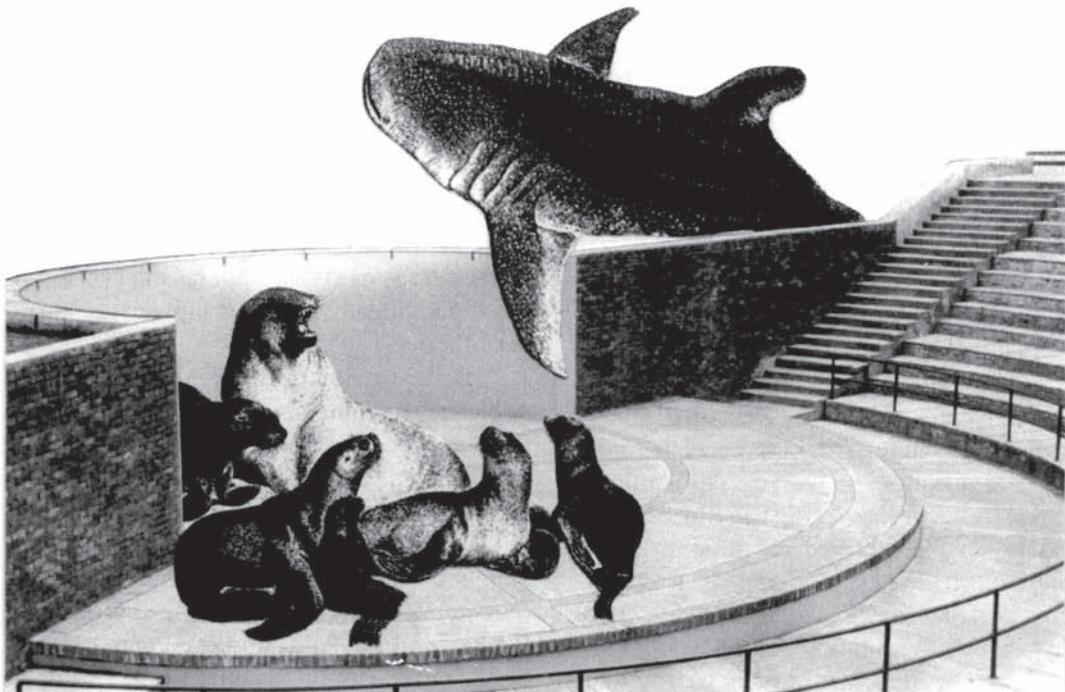
El discurso del Estado: apertura y desarrollo sostenible

Hasta hace poco, prácticamente todos los escritos sobre el Pacífico comenzaban mostrando la imagen de una región olvidada de Dios y el gobierno, sus habitantes viviendo bajo primitivas condiciones de subsistencia, el medio ambiente malsano, cálido y húmedo como en ninguna otra parte del planeta —una especie de “tierra de nadie” donde solamente se aventuraban algunos capitalistas rudos, colonos, misioneros y, ocasionalmente, algún antropólogo, que se atrevían a trabajar entre “índios y negros”. De acuerdo con algunos indicadores, la región sí es muy pobre. Algunos de estos indicadores son:

el ingreso *per cápita*, la tasa de analfabetismo y el nivel nutricional. La malaria causa estragos puesto que el área, especialmente hacia el norte, tiene uno de los índices de precipitación y humedad más altos del mundo.

Estas características fueron enfatizadas a principios de la década del ochenta como argumento inevitable e incontrovertible para hacer intervenciones desarrollistas. El determinismo geográfico y ecológico que se le ha endilgado a la región del Pacífico colombiano mediante estas representaciones —atrasada, enferma, necesitando de la

mano blanca del gobierno, del capital y la tecnología para liberarla de centurias de letargo— la presenta como una realidad empírica que debe afrontarse mediante una apropiada intervención técnica y económica. El Pacífico ingresó a la era del desarrollo cuatro siglos después que el resto del país mediante el lanzamiento del “Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica” (Plaidecop) en 1983. Este plan cambió de manera significativa la política de abandono mantenida por el gobierno durante siglos. Fue



diseñado e implementado por la Corporación Autónoma del Cauca (CVC), la cual inició labores, como es sabido, a mediados de la década de los años cincuenta con fondos del Banco Mundial y la asesoría de David Lilienthal, del Tennessee Valley Authority. Desde sus inicios, la CVC ha sido la principal fuerza social que ha moldeado el dinámico desarrollo capitalista en el fértil Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia.

Acorde con el acercamiento para el desarrollo regional seguido por la CVC, el nuevo plan para el Pacífico colombiano presentaba tres componentes básicos: la construc-

ción de infraestructura —carreteras, electrificación, suministro de agua, etc.—; el ofrecimiento de servicios sociales —salud, educación, alimentación, programas para generar ingresos para la mujer—; y la implementación de proyectos de desarrollo rural para pequeños campesinos en áreas ribereñas. Sin embargo, el logro principal del programa fue la creación, por primera vez en la historia de Colombia, de la imagen del Pacífico como un todo regional integrado geográfica y ecoculturalmente, susceptible de un desarrollo sistemático bien concertado. Este “desarrollismo” es el nuevo simbolismo al que ha sido sometida la región del Pacífico en tiempos modernos. Fue colocada dentro de un nuevo régimen de representación en el cual el capital, la ciencia y las instituciones estatales suministran las categorías significantes. De esta manera, Plaidecop comenzó —y desde luego intensificó— el proyecto de modernidad en el Pacífico, mediante la creación de una infraestructura necesaria para la llegada del capital de manera ordenada, como también mediante la iniciación del proceso de intervención social con expertos —un aspecto central de la modernidad— por sus pueblos y asentamientos ribereños. Más aún, Plaidecop intentó colocar los programas sociales como base de su estrategia para el “desarrollo integral”, en contraposición a la filosofía convencional que veía en el crecimiento económico la fuerza gestadora del desarrollo social, de acuerdo con la guía de la Unicef que se fundamenta en las necesidades humanas básicas —tendencia muy en boga a comienzos de los años ochenta—.

Sin embargo, el diseño e implementación de los programas básicos de servicio social se vieron perjudicados por muchos problemas, incluyendo el hecho de que se basaban en anteproyectos tecnocráticos diseñados para condiciones completamente diferentes, como aquellas existentes en la región Andina del interior del país. A pesar de algunos intentos por enganchar la participación local estos programas no tuvieron en cuenta las culturas ni las condiciones locales. Por ejemplo, a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa a los agricultores ribereños les ofrecieron créditos y asistencia técnica

para el cultivo y comercialización del cacao y del coco, programa copiado de los paquetes de desarrollo rural integrado diseñados desde hacía más de una década para campesinos andinos. El programa pasó por alto, no sólo las diferentes condiciones sociales, ecológicas y agrícolas, sino también las actividades de la familia afrocolombiana. Mediante la introducción de prácticas como la “metodología de planificación en la finca”— que propendía por modelos orientados hacia la rentabilidad y la contabilidad agrícola, algo nunca antes visto en la región— el programa alentaba una reconversión cultural que resultaba necesaria para mercantilizar exitosamente la tierra, el trabajo y la agricultura de subsistencia. Más aún, algunos de los campesinos que participan en el programa parecen estar haciendo esa transformación, aunque retienen muchas de sus prácticas y creencias tradicionales con respecto a la tierra, la naturaleza, la economía y la vida en general. Así, inician el proceso de hibridación cultural entre las formas modernas y no modernas motivadas por las intervenciones desarrollistas en tantos lugares del Tercer Mundo.

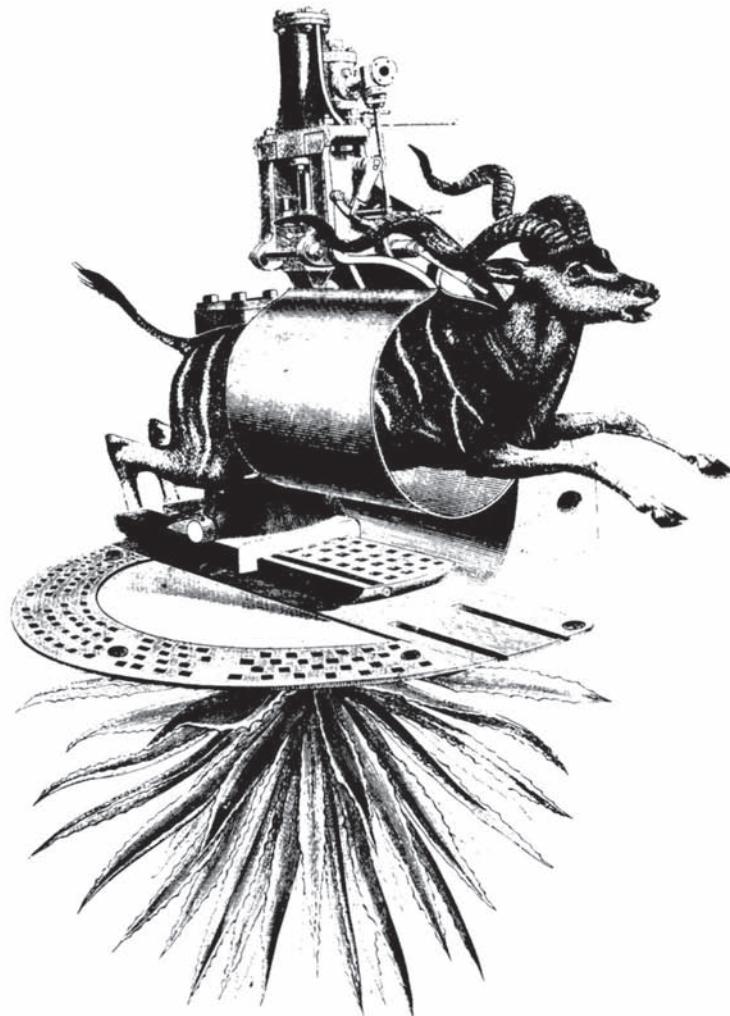
Desde finales de los años ochenta el gobierno persigue una amplia política de integración con las economías de la cuenca del Pacífico. El Océano Pacífico —rebautizado como “el mar del siglo XXI”— se percibe como el espacio socioeconómico, y en menor escala cultural, del futuro. Dentro de este imaginario naciente la región del Pacífico colombiano ocupa un lugar importante como plataforma de lanzamiento para la macroeconomía del futuro. Como veremos más adelante, el descubrimiento de la biodiversidad en esta región es uno de los principales componentes de su imaginario. Sin embargo, dicho imaginario coexiste de manera contradictoria con la radical política de apertura instaurada por el gobierno después de 1990. En medio de esta contradicción, los aspectos del desarrollo han tomado dos direcciones. Por una parte, está la intervención dominante —un ambicioso plan para el “desarrollo sostenible”, denominado Plan Pacífico (DNP, 1992). Este plan es más convencional aún en su diseño que Plaidecop, y sus resultados serán más devastadores, pues

promueve el desarrollo capitalista. Por ello encuentra oposición de las comunidades negras e indígenas, quienes ven en el discurso de la apertura una tendencia nefasta dirigida a quitarles el control sobre los ricos recursos de la región. Por otra parte, el gobierno también ha iniciado un proyecto más modesto —nueve millones comparados con los doscientos cincuenta millones de dólares destinados al Plan Pacífico para cuatro años—, para la conservación de la biodiversidad regional, bajo el auspicio de GEF² del Banco Mundial (GEF/PNUD, 1993). En la próxima sección trataremos sobre este proyecto.

Nuevas formas de capital en el Pacífico

La explotación maderera y la minería han sido actividades extractivas en el bosque tropical lluvioso del Pacífico durante décadas, aun cuando la escala de operaciones se ha intensificado con la aplicación de técnicas como en la minería aurífera industrial, buena parte de la cual es financiada con dinero del narcotráfico. La madera es recolectada por grandes compañías multinacionales y colombianas, al igual que por colonos pobres. De acuerdo con algunos estimativos, la deforestación alcanza seiscientas mil hectáreas anuales. Durante los últimos años, además del incremento en la acumulación de capital en estos sectores, y como secuela de las estrategias de integración y apertura, ha aumentado la inversión en nuevos sectores, como en las plantaciones de palma africana para la producción de aceite; los cultivos artificiales de camarón; enlatadoras de palmitos; la pesca costera y en mar adentro; pesca, procesamiento y empaque de camarón y pescado para exportación; y el turismo.

Cada una de estas nuevas formas de inversión produce notables transformaciones culturales, ecológicas y sociales, especialmente observables en el área de Tumaco, en la parte sur del Pacífico cerca a la frontera con Ecuador, donde la producción de aceite de la palma africana y el cultivo de camarones alcanzan niveles importantes. La tierra para el cultivo de la palma africana se obtiene de los campesinos negros, bien sea



por la fuerza o por compra, ocasionando desplazamientos masivos y el aumento de la proletarización. Los desplazados trabajan en los cultivos por sumas exigüas o, como en el caso de las mujeres, en las empaquetadoras de pescado en el puerto de Tumaco. Colombia es actualmente el quinto productor mundial de aceite de palma africana, con un aumento muy notable a partir de 1985 especialmente en el área de Tumaco, más que todo en plantaciones grandes de miles de hectáreas organizadas por reconocidos grupos capitalistas de Cali. La palma africana representa en dólares el 3% del GDP en agricultura. Se trata de una actividad muy significativa que ha transformado el paisaje biocultural de unos aislados parches de tie-

2. GEF: Global Environment Facilities (Fondo Mundial para el Ambiente).

rra cultivada en medio del bosque por gente local a hileras interminables de árboles de palma, tan comunes en la agricultura moderna. El ejército de trabajadores inicia su viaje por río antes del amanecer desde los pueblos aledaños, regresando a sus hogares al final de la jornada, día tras día, sin poder realizar jamás sus propias actividades agrícolas.

El paisaje cultural y físico también se ha visto alterado por la construcción de grandes piscinas para el cultivo de camarón. Esto ha desequilibrado el frágil balance de los ecosistemas ribereños y marítimos, destruyendo grandes áreas de manglares y estuarios que son esenciales para la reproducción de la vida acuática. La destrucción es aún más extensa en el Ecuador, donde la producción artificial de camarón es muchas veces mayor que en Colombia. El camarón es procesado y empacado localmente por mujeres, bajo condiciones que recuerdan las estudiadas por Aihwa Ong en las fábricas multinacionales de electrónica en Malasia (1987). Muchas de esas mujeres se dedicaban antes a la agricultura de subsistencia, a la pesca o a la preparación de carbón de leña, pero ahora han ingresado a las filas del nuevo proletariado en condiciones extremadamente precarias. En los sectores de producción de palma y camarón coexisten formas de trabajo del siglo XIX con tecnología del siglo XX. La producción de palma africana se beneficia, en gran medida de las mejoras genéticas realizadas en los países de gran producción, como Malasia e Indonesia (Escobar, 1996a). El cultivo de camarón es una operación altamente técnica que requiere de la preparación de la semilla en el laboratorio, alimentación artificial, y el cuidadoso monitoreo de las condiciones de cultivo. De tal modo, la ciencia y el capital operan como aparatos de captura (Deleuze y Guattari, 1987) que han recreado y disciplinado el paisaje, el dinero y el trabajo en una misma y compleja operación.

De acuerdo con estudios antropológicos, la integración de los afrocolombianos a la economía mundial capitalista en el pasado se limitaba a ciclos de bonanza y colapso que no produjeron transformaciones duraderas en la cultura local ni en las estructu-

ras económicas. Las comunidades locales lograron resistir, utilizar y adaptarse a la dinámica de las bonanzas y colapsos sin mostrar cambios permanentes significativos (Whitten, 1986; Arocha, 1991). Sin embargo, la escala y forma de las nuevas fuerzas del capital hacen insostenibles las estrategias adaptativas a largo plazo. Socialmente aparecen nuevas formas de pobreza y desigualdad a medida que los desplazados llegan a los abarrotados barrios pobres en ciudades como Tumaco, la cual ha duplicado su población en menos de diez años, contando ahora con cien mil habitantes. Políticamente ha aparecido una élite negra queriendo controlar su parte del "pastel" desarrollista, "modernizar" las instituciones y la cultura negra y, finalmente hacer que los negros ingresen "al siglo XX". Los capitalistas animan estos cambios con cierto grado de conciencia, formando las alianzas necesarias con las nacientes élites locales. Aun cuando comienzan a vivir la oleada de violencia, como en otras partes del país, no están dispuestos a disminuir el ritmo de acumulación.

Biodiversidad: nuevo imaginario de la cultura y la naturaleza

Nada podía ser más adverso a la tan discutida conservación de la biodiversidad del bosque tropical que la minería del oro, la agricultura a gran escala, la industria incontrolada de las maderas y otras actividades por el estilo. Sin embargo, alguien ha planteado el argumento de que el capital está ingresando a una "fase ecológica", en la cual la lógica de la destrucción podría coexistir con la tendencia conservacionista posmoderna (O'Connor, 1993). La etiqueta "capitalismo verde" es una expresión de ese cambio, a pesar de que las formas verdaderas de operatividad y la mutua articulación y conflictos entre ambas formas de capital —dijamos moderna y posmoderna— todavía no se entienden bien e indudablemente se escapan de las connotaciones superficiales sugeridas por "capitalismo verde". Lo cierto es que el poderoso discurso enfatizando la conservación de las especies, los ecosistemas y la diversidad genética, es uno de los temas

más importantes que se hayan desarrollado en los últimos tiempos, y se extiende rápidamente por muchos lugares. No es, de ninguna manera, un hecho arbitrario. Luego de doscientos años de destrucción sistemática de la naturaleza el discurso de la biodiversidad responde a lo que podría llamarse “la irrupción de lo biológico”: esto es, la supervivencia de lo bioético como problema central del orden moderno. Como lo dijo Edward Wilson (1993): “La clave para la supervivencia de la existencia humana, como la conocemos hoy, es el mantenimiento de la diversidad biológica”.

El discurso de la biodiversidad promete salvar a la naturaleza de las prácticas destructivas y, en su lugar, instituir una cultura de la conservación. Es una nueva manera de hablar sobre la naturaleza dentro de una profunda mediación tecnocientífica, y también es una nueva interfase entre la naturaleza, el capital y la ciencia. Por supuesto, el origen de este discurso es bastante reciente, y podría rastrearse hacia dos textos fundamentales: la estrategia global de la biodiversidad (WRI/IUCN/Unep, 1991), y la convención sobre la biodiversidad firmada durante la Cumbre Mundial de Rio de Janeiro en 1992. Los artífices de este discurso se identifican fácilmente: las organizaciones ambientales no gubernamentales del norte, particularmente el Instituto de los Recursos Mundiales de Washington, D.C., (WRI)³ y la Unión para la Conservación Mundial, con asiento en Suiza⁴; el Fondo Global para el Ambiente del Banco Mundial, un fondo de miles de millones de dólares, de los cuales el 40% se destina a la conservación de la biodiversidad; y el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (Unep). Decenas de documentos, informes y reuniones de expertos sobre el tema de los aspectos científicos, institucionales y programáticos de la conservación de la biodiversidad han tenido éxito consolidando su discurso y el despliegue, cada vez más complejo, del aparato institucional destinado a lograr un mayor alcance.

La clave para la conservación de la biodiversidad, de acuerdo con la visión promulgada por las instituciones dominantes, está en hallar formas de utilización

de los recursos de los bosques tropicales, que garanticen su conservación a largo plazo. Dicho uso se debe fundamentar en el conocimiento científico de la biodiversidad⁵, en sistemas apropiados de administración y en mecanismos adecuados que establezcan los derechos de la propiedad intelectual que protejan los descubrimientos que podrían ofrecer aplicaciones comerciales. Tal como ha sido expuesto en la Estrategia Global de la Biodiversidad, modificada por Daniel Janzen, experto reconocido en el tema: “hay que conocerla para usarla, y hay que usarla para salvarla”. La prospección de la biodiversidad —es decir, la búsqueda y clasificación de la naturaleza por taxónomos, botánicos y otros especialistas con el objetivo de encontrar especies que pudieran conducir hacia importantes aplicaciones comerciales farmacéuticas, agroquímicas o alimenticias— comienza a surgir como práctica principal entre aquellos que se hacen partícipes de la ecuación “conocerla-salvarla-usarla”. Conocida también como “cacería de genes”, la prospección de la biodiversidad se presenta como un protocolo respetable para salvar la naturaleza (WRI, 1993) porque se considera que la fuente de los beneficios y ganancias de la conservación están en los genes de la especie. Las actividades de prospección ya se realizan en algunos “puntos cándentes” del Tercer Mundo, con catedráticos como, por ejemplo, los jardines botánicos norteamericanos y europeos, compañías farmacéuticas, biólogos independientes y Ongs del Tercer Mundo. Los inventarios y prospección de la biodiversidad dependen, muchas veces, del trabajo de parataxónomos y paraeñólogos, como en el caso de Costa Rica, quienes actúan como paramédicos de la

3. WRI: World Resources Institute.

4. World Conservation Union (antes IUCN).

5. Conocimiento que actualmente se considera inadecuado, puesto que la ciencia solamente conoce un pequeño porcentaje de las especies en el mundo.

naturaleza bajo la guía de biólogos muy bien entrenados, pertenecientes a lo que Janzen denomina “taxoesfera internacional” (Janzen y Hallwachs, 1993; Janzen *et al.*, 1993).

El aparato para la producción de biodiversidad incluye a una serie de actores diferentes —desde las Ongs del norte, organizaciones internacionales, jardines botánicos, universidades y corporaciones hasta los recientemente creados institutos para la biodiversidad en el Tercer Mundo planificadores y biólogos del Tercer Mundo, y comunidades y activistas locales— cada uno con su propio marco interpretativo sobre qué es la biodiversidad, qué debería ser, o qué podría llegar a ser. Estos marcos están mediados por todo tipo de máquinas: desde la lupa del botánico hasta los datos satelitales procesados por computador e introducidos en programas de sistemas de información geográfica (Sig) y de predicción. Las especies, los humanos y las máquinas participan en la formación de la biodiversidad como discurso histórico, en lo que viene a ser otro ejemplo más de producción mutua entre las tecnociencias y la sociedad (Haraway, 1991). Esta formación discursiva puede teorizarse como una red con múltiples agentes y lugares donde se producen conocimientos, se debaten, utilizan y transforman. En breve veremos cómo los activistas negros del Pacífico colombiano han tratado de penetrar en la red.

Una característica interesante de la red de biodiversidad es que, a pesar del dominio de los discursos del norte, por primera vez en la historia del desarrollo cierto número de Ongs del Tercer Mundo han tenido éxito en la articulación de una visión de oposición que circula en algunos de los puntos de la red, gracias, en buena parte, a nuevas prácticas y medios, como lo son las redes electrónicas y los encuentros preparatorios de las Naciones Unidas. Aunque éste es un punto que no se puede elaborar en este capítulo, sí es importante destacar que desde la perspectiva de estas Ongs —la mayoría del sur y sudeste de Asia y algunas de América Latina— la estrategia dominante es una forma de bioimperialismo. Por ejemplo, los proyectos de la GEF van unidos por lo general

con otras iniciativas convencionales sobre la utilización y privatización del bosque lluvioso. Más importante aún, los críticos sostienen que la conservación de la biodiversidad basada en la biotecnología terminará por erosionar la biodiversidad, puesto que toda biotecnología depende de la creación de mercados uniformes de mercancías. La diversidad de las mercancías no puede resultar en la diversidad de culturas y especies. Por ejemplo, la historia de la manipulación genética de semillas también es la historia de su progresiva comodidad y de la pérdida de la diversidad de semillas (Kloppenburg, 1988). La destrucción de hábitats por los proyectos de desarrollo y por la monocultura mental y agrícola son las principales fuentes de destrucción de la biodiversidad, y no las actividades de los habitantes pobres de la selva. Con bioprospección, la enfermedad se ofrece como cura: las estrategias dominantes son como colocar las ovejas al cuidado del lobo (Shiva, 1994; Weizsäcker, 1993).

Desde el punto de vista biológico, los ecosistemas diversos se caracterizan por la multiplicidad de interacciones y por la coevolución de las especies, de tal forma que las alteraciones biológicas se reducen, las amenazas biológicas son menores y se favorece la posibilidad de productos múltiples. Los críticos del Tercer Mundo argumentan, estratégicamente, que las sociedades culturalmente diversas de los bosques tropicales han proferido la auto-organización, la producción fundamentada en la lógica de la diversidad y prácticas de cultivo que favorecen también la diversidad, tales como cultivos múltiples, rotación de cultivos y reservas para extracción. Críticos como Vandana Shiva sostienen que al régimen del bioimperialismo debe oponerse la noción de biodemocracia, la cual se fundamenta en la terminación de los proyectos de desarrollo a gran escala, el reconocimiento de los derechos de las comunidades, la redefinición de productividad y eficiencia que refleje, como resultado, ecosistemas de usos múltiples: el reconocimiento del carácter biodiverso de la cultura y el control de recursos localmente por las comunidades.

Sin tratar de llegar a analizar la razonabilidad de estas afirmaciones —eludiendo la

trampa de asumir *a priori* cualquier tipo de “sabiduría ambiental local” o la existencia de una relación benevolente entre la cultura local y la sostenibilidad a lo cual tienden algunos ambientalistas (Dahl, 1993; Hobart, 1993)— es posible recalcar desde la perspectiva antropológica la conexión necesaria que existe entre un sistema de significados de la naturaleza y las prácticas concretas que se realizan en ella. Esta no es una relación estática. A nivel local se están creando continuamente nuevos órdenes políticos y culturales, a medida que las comunidades ingresan a la política del desarrollo, del capital y del conocimiento experto. Hay una conexión entre la historia, identidad y significados, que regulan las prácticas ambientales locales. Casi siempre uno encuentra en los bosques tropicales del mundo que los patrones de significado-uso dan cuenta de las prácticas sobre la naturaleza, las cuales son ostensiblemente diferentes de aquellas típicas de la modernidad occidental.

El discurso de la biodiversidad encarna las formas posmodernas de capital (Escobar, 1996); al igual que tiene efecto sobre la resignificación de los bosques tropicales —como valiosa reserva a nivel genético—, sus gentes —como “guardianes de la naturaleza”— y sus conocimientos —como conocimientos tradicionales de conservar la naturaleza—. El que este grupo de significados implique nuevas formas de colonización del paisaje biofísico y humano, o que contribuya a la creación de nuevas posibilidades políticas para las comunidades locales, es un interrogante abierto. La respuesta depende, en gran medida, del grado en el

que las comunidades locales logren apropiarse y utilicen los nuevos significados para lograr sus propios objetivos, relacionándolos con otras identidades, circuitos de conocimientos y proyectos políticos. A su vez, esto trae a colación la fuerza de los movimientos sociales locales: ¿podrán los movimientos sociales en los bosques tropicales convertirse en actores importantes dentro de los

discursos
que están moldeando el
futuro de las selvas? ¿Podrán par-
ticipar en la coproducción de
tecnociencia y sociedad, naturaleza
y cultura que ha sido puesta en mar-
cha por la red de la biodiversidad?

Acción colectiva, identidad étnica y políticas sobre la naturaleza

Lo ocurrido durante los últimos años en los bosques tropicales lluviosos sugiere que se encuentra en juego mucho más que las políticas por los recursos, por el medio ambiente o, inclusive, por la representatividad. Un punto crucial lo definen las múltiples construcciones de la naturaleza en su dimensión más compleja: el contraste entre las prácticas de significado-uso, grupos enteros con visiones diferentes sobre la vida, los sueños de las colectividades. También se hacen visibles las nuevas estrategias de poder dentro de la trama del aparato desarrollista, sobre



la base del capital de la tecnociencia. En pocas palabras, los hechos muestran una política cultural de la naturaleza cuyas lecciones rebasan a los bosques mismos. Uno de los aspectos más sobresalientes de esta política cultural son las respuestas organizadas que resultan de ella en la forma de movimientos sociales.

La organización de las comunidades negras en Colombia se inició en la década de los años setenta, especialmente en las áreas urbanas, inspirada por los movimientos negros de Estados Unidos. Estos esfuerzos enfatizaban la explotación y la resistencia de los negros desde su llegada como esclavos al Nuevo Mundo. Los estudios sobre la afrogénesis en Colombia fueron importantes en ese sentido. Políticamente, las estrategias tempranas de los grupos negros y las organizaciones urbanas actuales se han concentrado en buscar la igualdad y la integración dentro de la “sociedad mayor”. Solamente en años recientes el estandarte de la diferencia cultural ha sido el elemento más importante de la organización negra, particularmente como resultado de un nuevo movimiento en el Pacífico. En ese sentido, existen dos factores principales: primero, la embestida desarrollista y capitalista sobre la región, animada por el proceso de apertura y su integración al país; y segundo, el proceso de reforma constitucional que culminó con la elección de la Asamblea General Constituyente de 1991, y el cambio de la Constitución política de 1886.

Con la intención de construir una sociedad multicultural y pluriétnica, echando para atrás el proyecto del siglo pasado de configurar una identidad nacional homogénea mediante la mezcla racial y la asimilación de la cultura mestiza —normalizada por la blanca—, la nueva Constitución le otorgó derechos sin precedentes a las minorías étnicas y religiosas. El cambio constitucional sirvió como coyuntura para una serie de procesos sociales, siendo los más visibles las organizaciones negras e indígenas. Para las comunidades negras del Pacífico, ésta fue una oportunidad única para construir su identidad bajo el principio de exigencias y propuestas culturales, políticas y socioeconómicas. Mientras que los negros no tuvie-

ron éxito asegurando a sus propios representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, su situación fue presentada entonces ante esta asamblea por los representantes indígenas. Inicialmente aprobada por la Asamblea como medida provisional⁶, los derechos culturales y territoriales de las comunidades negras se incluyeron finalmente en la Ley 70 de julio de 1993, dos años después de la vigencia de la nueva Constitución política.

El proceso de organización de los negros en el Pacífico y en otros lugares de Colombia se hizo más intenso y complejo a partir de aquel primer intento por obtener la representación en la Asamblea Nacional Constituyente, pasando por la movilización para redactar y aprobar el artículo transitorio como ley entre 1991-1993, hasta las conflictivas negociaciones sobre demarcación de territorios colectivos bajo la Ley 70. Cuando dicha ley entró en efecto, el carácter coyuntural del proceso organizativo promovido por la reforma constitucional estaba prácticamente eliminado y, en su lugar, había un movimiento grande y heterogéneo. El hecho de que la nueva Constitución otorgara varias curules en el Congreso Nacional a las minorías étnicas y religiosas motivó la aparición oportunista de los “líderes negros”, quienes se asociaban con los partidos políticos tradicionales y la naciente élite negra. A pesar de estas dificultades y de las crecientes divisiones internas dentro del movimiento negro —en especial entre las organizaciones del norte del Chocó y las del sur del Pacífico—, siguió el crecimiento articulado de este movimiento durante la primera mitad de la década⁷.

El impulso organizativo del artículo transitorio 55 y la Ley 70 le pusieron de mani-

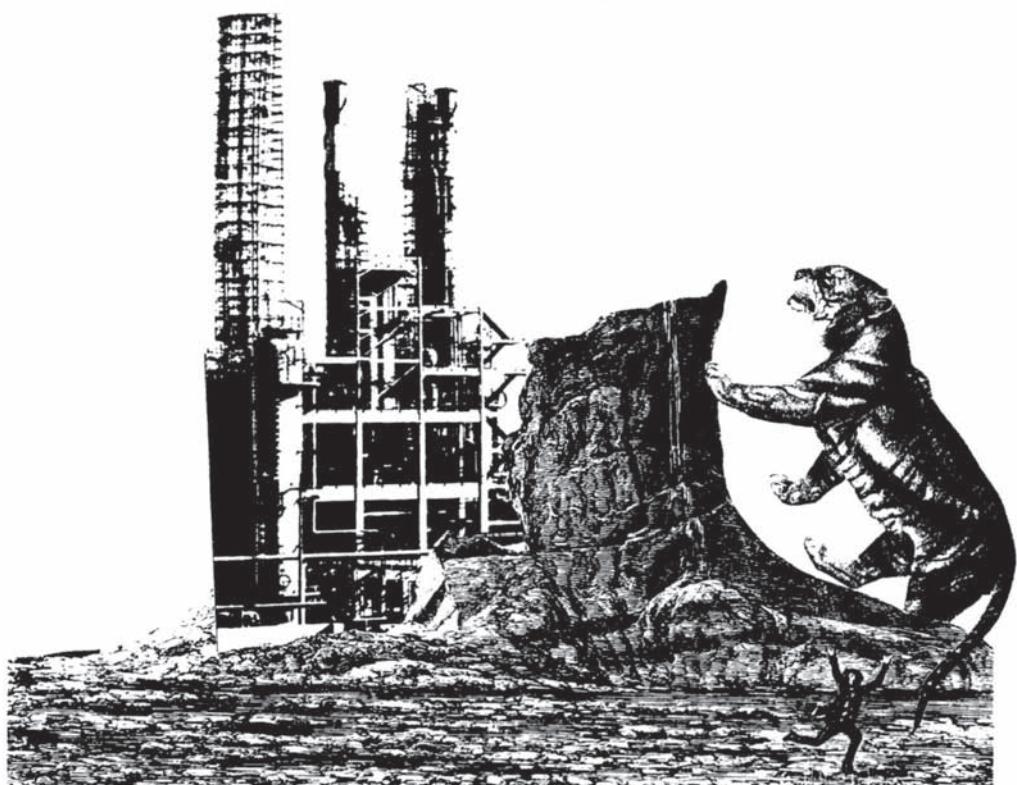
6. En el artículo transitorio 55, conocido como el A.T. 55.

7. Esta breve relación del movimiento negro se basa en mis investigaciones junto con Alvaro Pedrosa (Escobar y Pedrosa, 1996), como también en el trabajo de los dos principales activistas del movimiento en el sur del litoral: Libia Grueso y Carlos Rosero (Grueso y Rosero, 1995; Grueso, Rosero y Escobar, en preparación). Debo aclarar que dicha relación

fiesto a la nación la presencia de estos grupos negros, muy activos a lo largo de los ríos y el litoral Pacífico. El hecho de que estas comunidades tenían prácticas culturales y relaciones sociales significativamente diferentes se hizo patente, contribuyendo a desmontar la representación tradicional que había de la región desde los Andes, como la de una selva habitada por gentes indolentes, incapaces de explotar sus recursos. Las ricas tradiciones culturales, el creciente discurso acerca de la biodiversidad de la región, el compromiso del gobierno para su “desarrollo sostenible” y la posibilidad de titulaciones colectivas de la tierra para las comunidades fueron los principales elementos utilizados por los activistas en su intento por lanzar una campaña masiva y bien coordinada sobre los derechos de los grupos negros. Esta determinación se cristalizó en hechos importantes como la Tercera Convención Nacional de Comunidades Negras realizada en Puerto Tejada, en septiembre de 1993. En este evento, al que asistieron más de trescientos activistas de todo el país, se acordó que la meta de su estrategia debía ser la “consolidación de un movimiento social de comunidades negras de alcance nacional, capaz de asumir la reconstrucción y la afirmación de la identidad cultural negra”; propósito que, a su vez, se basaba en “la construcción de un proceso organizativo autónomo enfocado hacia la lucha de nuestros [de los negros] derechos culturales, sociales, económicos y territoriales, y por la defensa de los recursos naturales y del ambiente”.

En la misma declaración se identificaban y explicaban los principios básicos para su organización política. Primero, el derecho a la identidad, es decir, el derecho a ser negro, de acuerdo con la lógica cultural y la visión del mundo cuyas raíces están en la

experiencia negra, en su enfrentamiento a la cultura nacional dominante. Este principio también reclamaba la reconstitución de la conciencia negra y el rechazo al discurso dominante de “igualdad”, y su concomitante eliminación de la diferencia. Segundo, el derecho al territorio como un espacio para el ser y como elemento indispensable para el desarrollo de la cultura. Tercero, el derecho a la autonomía política, en tanto prerrequisito para po-



der ser, con la posibilidad de apoyar la autonomía social y económica. Cuarto, el derecho a construir su propia visión del futuro, su desarrollo y su práctica social con base en las formas tradicionales de producción y organización social. Quinto, el principio de solidaridad con la lucha de la gente negra en todo el mundo, en la búsqueda de una visión alternativa.

se refiere específicamente a la experiencia del movimiento negro en la Costa Pacífica del sur, especialmente aquel dirigido por la Organización de Comunidades Negras de Buenaventura, a la cual pertenecen Grueso y Rosero.

La aprobación de estos principios, como base para la articulación del movimiento negro en el plano nacional, no se logró en la convención porque las organizaciones negras del Chocó se negaron a apoyarlos. Argumentaban que, una vez aprobada la Ley 70, la dirección del movimiento no podía ser dictada solamente por aquellos que sobresalieron en la organización del artículo transitorio 55, sino que debería extenderse a todas las comunidades y actores sociales y, presumiblemente, también a los partidos políticos tradicionales. Siendo el único departamento negro del país, el Chocó tiene una larga historia de actividad con los partidos políticos. Esto se hizo evidente cuando llegó el momento de elegir a los representantes negros para el Congreso de la República, dentro de cuyos candidatos predominaban los de dichos partidos. Así, el debate sobre la participación electoral actuó como una fuerza divisoria entre las comunidades negras del Pacífico sur, del Chocó y de la Costa Atlántica. Confrontadas por dichas divisiones, las organizaciones del sur, particularmente aquellas aglutinadas alrededor de la Organización de Comunidades Negras de Buenaventura⁸, decidieron constituirse en Proceso de Comunidades Negras (PCN) a la vez que seguían presionando para la creación de un movimiento nacional de comunidades negras (Grueso y Rosero, 1995).

La característica más distintiva del PCN es la articulación de una propuesta política con una base y un carácter principalmente etnoculturales. Su visión no es aquella de un movimiento basado en un catálogo de “necesidades” y exigencias para el “desarrollo”, sino la de una lucha expuesta en términos de la defensa de las diferencias culturales. Allí descansa el carácter más radical del movimiento. El cambio hacia el énfasis en la diferencia fue una decisión de la mayor importancia, como lo explican algunos de los activistas principales:

“No sabemos exactamente cuándo comenzamos a hablar sobre la diferencia. Pero en algún momento decidimos no seguir construyendo la estrategia sobre el catálogo de “problemas” y “necesidades”. El gobierno sigue apostándole a la democracia y a la diferencia; nosotros respondemos enfatizando

la autonomía cultural y con el derecho a ser quienes somos y a defender nuestro propio proyecto de vida. El reconocer la necesidad de ser diferente, el construir una identidad son tareas difíciles que requieren del trabajo persistente con nuestras comunidades, tomando su propia heterogeneidad como punto de partida. Sin embargo, el hecho de no haber trabajado propuestas sociales y económicas nos hace vulnerables ante la actual embestida del capital. Esta es una de nuestras principales tareas políticas en la actualidad: avanzar en la formulación e implementación de propuestas sociales y económicas alternativas”⁹.

El “trabajo persistente” al que se hace referencia en esta entrevista ha sido, ciertamente, impresionante. Como se mencionó anteriormente, la concepción y preparación de la Ley 70 fue la pieza clave en la organización del proceso, especialmente en las comunidades ribereñas y, con menor intensidad, en las áreas urbanas en donde la organización de las comunidades ha sido más difícil y menos efectiva. Entre 1991 y 1993 los activistas organizaron informaciones y talleres de discusión en muchas comunidades ribereñas sobre temas como el concepto de territorio, de prácticas tradicionales de producción, de recursos naturales, al igual que sobre el significado de desarrollo y la identidad negra. Los resultados de estos talleres en las comunidades locales se llevaron luego hacia las subregionales y, finalmente, a los foros nacionales donde se discutieron las diferentes visiones. Esta construcción se adelantó como un proceso dual: primero, de acuerdo con la “lógica del río”, es decir, tomando como punto de partida la vida diaria y las aspiraciones de las comunidades locales; segundo, elaborando una concepción más completa de identidad, territorio, desarrollo

8. La ciudad más grande de la región con unos doscientos cincuenta mil habitantes, en su mayoría negros.

9. Entrevista con Libia Grueso, Carlos Rosero, Leyla Arroyo y otros miembros de la Organización de Comunidades Negras de Buenaventura (OCN), enero 3 de 1994. Material incluido en Escobar y Pedrosa, 1996.

y estrategia política en el plano regional y nacional. De este doble proceso surgieron los cinco principios propuestos en la Tercera Convención Nacional¹⁰.

La elección de la diferencia cultural como concepto articulador de la estrategia política fue el resultado de varios factores históricos, al igual que también se relacionó con los amplios debates propiciados por la reforma constitucional. En su reinterpretación de la historia regional los activistas del Pacífico no solamente se apartaron de la perspectiva integracionista, denunciando fuertemente el mito de la democracia real¹¹, sino que también resaltaron el hecho de que las comunidades negras del Pacífico han favorecido históricamente su aislamiento de la sociedad y la economía nacional, aunque reconocen que dicha ética de aislamiento e independencia es cada vez menos plausible bajo las actuales fuerzas integracionistas y ante la inevitable presencia de los medios masivos de comunicación, las mercancías modernas y demás cosas por el estilo. En este sentido, la relación entre territorio y cultura es de la mayor importancia. Los activistas tienen un concepto de territorio “como un espacio para la creación de futuros, de esperanza y continuidad de la existencia”. La pérdida de territorio se equipara con “regresar a los tiempos de la esclavitud”¹². El territorio también es un concepto económico, mientras que se relacione con los recursos naturales y la biodiversidad.

De este reconocimiento nace el interés por la biodiversidad y suministra una puerta hacia el futuro. No es coincidencial el que varios profesionales negros asociados con el movimiento hayan decidido participar en el proyecto nacional sobre biodiversidad. Aunque reconocen los riesgos que implica esta participación están convencidos de que el discurso de la biodiversidad suministra posibilidades que no pueden darse el lujo de ignorar. La biodiversidad también puede ser un elemento importante en la formulación de estrategias alternativas de desarrollo. Como lo señalan los activistas, ellos no quieren ningún tipo de desarrollo convencional; no obstante existe menos claridad sobre qué es lo que quieren. También reconocen que los expertos —ecologistas, antropólogos, bió-

logos, planificadores, etc.—pueden ser aliados importantes en este sentido. Esto sugiere la posibilidad de una colaboración entre expertos y activistas de los movimientos sociales. El papel de mediadores que asumen dichos expertos entre el Estado y los movimientos sociales debe teorizarse todavía más (Fraser, 1989). Las prácticas disidentes, de oposición o solidaridad de quienes se promulgan como expertos en la modernidad, aún están por ser imaginadas.

La noción de “territorio” es un nuevo concepto en las luchas sociales de las selvas tropicales. Los campesinos están involucrados en luchas por la tierra en toda América Latina. El derecho al territorio —como espacio ecológico, productivo y cultural— es una nueva exigencia política. Esta exigencia está promoviendo una importante reterri-

10. Aquí resulta apropiada una breve mención sobre los activistas. En la parte sur de la costa, los líderes más importantes son científicos sociales quienes crecieron junto a los ríos y luego viajaron a educarse como universitarios en ciudades como Cali, Bogotá o Popayán. Son personas muy capaces y, a pesar de ciertos desacuerdos, su visión política es sumamente clara. La presencia de mujeres en los niveles más altos de estos grupos como, por ejemplo en la Organización de Comunidades Negras de Buenaventura, y en el movimiento en general, es sumamente importante. Pero la fuerza del movimiento está en el cuadro relativamente extenso de activistas en el mismo litoral, de los cuales pocos han recibido educación universitaria. Frecuentemente el ritmo de las actividades lo determinan los activistas jóvenes involucrados con los diferentes aspectos de la creciente política cultural, como lo son las emisoras locales de radio, grupos de danza y teatro, diarios locales, y la preparación de talleres para la discusión de la Ley 70. Este impresionante, aun cuando frágil, proceso de organización todavía está por documentarse adecuadamente.

11. Véase también Wade, 1993.

12. Encuentro de comunidades en Buenaventura, celebrado en Puerto Merizalde, noviembre de 1991. A esta reunión asistieron 1.600 participantes.

torialización¹³, es decir, la formación de nuevos territorios motivada por nuevas percepciones y prácticas políticas. Los activistas de los movimientos sociales también cumplen con ese papel: hacen evidentes los procesos de desterritorialización y reterritorialización motivados por los aparatos de la modernidad, tales como el capital, los medios, y el desarrollo¹⁴, al igual que las potenciales reterritorializaciones por las comunidades movilizadas. Con motivo de la Ley 70, este proceso adquirió forma literal con viajes por los ríos con el fin de identificar los patrones tradicionales de uso de la tierra, señales de nuevas ocupaciones —por ejemplo, por colonos provenientes del interior—, y de la posible reterritorialización de las tierras selváticas “baldías”. Esta fue una práctica importante de movilización facilitada por las características y contornos del litoral, los ríos, estuarios, límites de los bosques y patrones de cultivo.

Al igual que el territorio, el interrogante sobre la identidad está en el corazón del movimiento. La mayoría de los activistas del Pacífico entiende la identidad como algo basado en una serie de prácticas culturales que, se cree, caracterizan a la “cultura negra”: prácticas como actividades económicas cambiantes y diversas, la relevancia de la tradición oral, la ética de la no acumulación, la importancia del parentesco y de las familias extensas, la matrilinealidad, conocimiento local del bosque y cuestiones por el estilo. Sin embargo, cada vez más dichos activistas entienden la identidad como una construcción, asemejándose a veces con las tendencias académicas actuales. Los teóricos de los movimientos sociales han enfatizado el que la construcción de identidades colectivas es una característica esencial de las luchas contemporáneas¹⁵. Trabajos recientes en estudios culturales han suministrado visiones adicionales sobre las identidades étnicas. Stuart Hall (1990), por ejemplo, ha sugerido que la construcción de las identidades étnicas tiene un aspecto doble: de un lado, se piensa la identidad como algo con sus raíces en una cultura compartida y caracterizada por prácticas concretas, como un colectivo formado de partes. Este concepto de identidad ha tenido un papel fun-

damental en las luchas anticolonialistas. Incluye un redescubrimiento imaginativo, cuya importancia no puede sobreestimarse en la medida que contribuye a darle coherencia a la experiencia de la fragmentación, dispersión y opresión. Del otro lado, aun reconociendo continuidad y similitud, otra concepción de identidad resalta la diferencia creada por la historia. Hace énfasis en “llegar a ser”, en lugar de “ser”. Se refiere a posición en lugar de esencia; discontinuidad como también continuidad.

La coexistencia de la diferencia y semejanza constituye esa dualidad de la identidad cultural actual. De tal manera, la identidad se conceptúa como algo que se negocia en términos económicos, políticos y culturales. Para las comunidades de la diáspora africana, identidad cultural incluye la narración del pasado “por otros caminos” (Hall, 1990:399): el África no como la tierra ancestral, sino en lo que se convirtió en el Nuevo Mundo, con la mediación del colonialismo. Esta narración se realiza en dos contextos: aquel de la presencia europea y euro-americana —un diálogo de poder y resistencia, reconocimiento de la influencia inevitable e irreversible de la modernidad—; y el contexto del “Nuevo Mundo”, en donde el africano y el europeo siempre se criollizan, donde la identidad cultural se caracteriza por diferencia, heterogeneidad e hibridación.

La dualidad de la identidad puede verse en acción en el movimiento negro del Pacífico. Para los activistas, la defensa de ciertas prácticas culturales de las comunidades ribereñas es una cuestión estratégica, hasta el punto de ser vistas como puntos de resistencia contra el capital y la modernidad. Aun cuando casi siempre se manifiestan en lenguaje culturalista son conscientes de que ser intransigentes en la defensa de la cultura negra es menos deseable que una apertura

13. Como le llaman Deleuze y Guattari (1987) a los procesos de este tipo.

14. Por ejemplo, la fuerza centrífuga de los medios sobre las culturas locales y la reorganización del paisaje en cultivos de palma africana y camarón.

15. Véase Escobar y Alvarez (1992), para un resumen bibliográfico.

ra cuidadosa hacia el futuro, incluyendo una relación crítica con la modernidad.

Ellos ven los retos que debe afrontar el movimiento originándose de este reconocimiento, e incluyen: la heterogeneidad del (o los) movimiento(s); afrontar las especificidades del movimiento, particularmente la inclusión de género como su principio organizador en su totalidad, sin descontextualizarlo de la lucha étnica y cultural global; consolidar las organizaciones de las comunidades ribereñas, especialmente mediante la creación de consejos locales para implementar la ley territorial; y llegarle a los negros que habitan las áreas urbanas, lo que hasta ahora ha sido difícil. Una de las necesidades más importantes ha sido la de articular las propuestas socioeconómicas antes de que sean arrastradas por el desarrollismo verde al estilo del Plan Pacífico. La presencia cada vez mayor de los dineros del narcotráfico desde 1995, particularmente en la minería del oro, es una de las fuerzas más poderosas que obstaculizan el movimiento, dados sus efectos negativos sobre la ecología física y cultural. Ciertamente es un problema ante el cual se sienten incapaces de hacer frente sin la ayuda nacional e internacional.

El discurso de la biodiversidad y el potencial para los proyectos económicos basados en biotecnología son atractivos para el movimiento, en la medida que pudieran ofrecer oportunidades para mejorar las condiciones de vida, a la vez que evitan la destrucción de la naturaleza y de las culturas locales. A diferencia de la visión desde el Estado y del aparato ecodesarrollista, el campo de acción para utilizar los recursos naturales sostenibles es visto por el movimiento desde las perspectivas del territorio y la identidad. En pocas palabras, es una cuestión de política cultural. Desafortunadamente, la posición negociadora de las comunidades es débil. Además, las organizaciones de movimientos negros deben competir con instituciones y organizaciones más fuertes por el espacio político generado alrededor del medio ambiente y el desarrollo. La industria maderera, la minería del oro, el cultivo de camarón, las enlatadoras de palmitos y otras actividades extractivas siguen

operando en varias partes aun contraviniendo la Ley 70, muchas veces con la complicidad de las autoridades locales, siendo el movimiento incapaz de detener dichas actividades. Sin embargo, varias veces las organizaciones sociales han podido negociar exitosamente con el Estado en casos que involucraban conflicto ambiental (Grueso, 1995).

Para resumir, los discursos sobre biodiversidad y dinámica del capital en su fase ecológica abre espacios que los activistas tratan de utilizar como elementos de lucha. Esta dialéctica presenta una serie de paradojas para el movimiento, incluyendo los aspectos contradictorios de defender la naturaleza y cultura locales mediante un lenguaje que no refleja la experiencia local sobre la naturaleza y la cultura. Es tenue la alianza entre movimientos sociales y el Estado, motivada por los proyectos de biodiversidad. Se puede predecir que la tensión irá aumentando mientras que el personal nacional encargado del proyecto siga intentando opacar su naturaleza política, haciendo más bien énfasis en los aspectos científicos; como también mientras las actividades y los acuerdos con entes privados empiezan a tomar forma. Las necesidades y aspiraciones comunitarias no podrán acomodarse con facilidad a estos esquemas, como lo indican las experiencias en otros países con proyectos GEF. Sin embargo, como se verá ahora, existen fundamentos teóricos para prever alianzas entre comunidades locales y tecnociencia, cuya conveniencia política no debe descartarse de antemano.



Conclusión: La política cultural de las naturalezas híbridas

Las formas de entender y relacionarse con la naturaleza que han existido en la región del Pacífico se están transformando por el aumento creciente de capital, desarrollo y modernidad, incluyendo los discursos sobre desarrollo sostenible y biodiversidad. Por ejemplo, los programas para pequeños campesinos en comunidades ribereñas alteran sus conceptos de tierra y bosque, aun cuando no dejen completamente de lado los sistemas más antiguos de uso y significado. La naturaleza comienza a concebirse en términos de “recursos naturales”, terminología que cada vez es más frecuente entre la gente local. Inclusive el concepto de biodiversidad empieza a circular localmente como algo corriente, mas con significados ambiguos y poco precisos.

Lo que le atribuye especificidad a los bosques tropicales en la política actual de la naturaleza y la cultura es la coexistencia —aún marcadamente contrastante— de diferentes modos de conciencia histórica y prácticas de la naturaleza. Las comunidades negras e indígenas, los capitalistas de la palma africana y el cultivo artificial de camarón y los seguidores de las prospecciones de biodiversidad parecerían promulgar diferentes modos de la naturaleza. Podríamos hablar de tres regímenes diferentes para la producción de la naturaleza —orgánico, capitalista y tecnonaturaleza— que en este escrito sólo pueden caracterizarse brevemente. En términos generales, la naturaleza orgánica está representada por aquellos modos que no son estrictamente modernos. Desde la perspectiva de la antropología del conocimiento local podrían caracterizarse en términos de la relativa indisociabilidad de los mundos biofísico, humano y espiritual, las relaciones sociales vernáculas, circuitos no modernos del conocimiento, y formas de uso y significado de la naturaleza que no implican su destrucción sistemática. Por el contrario, la naturaleza capitalizada se basa en la separación del mundo humano y del natural, las relaciones sociales capitalistas y patriarcales, y aparece como producida por

la mediación del trabajo. Finalmente, la tecnonaturaleza es naturaleza producida mediante nuevas formas de tecnociencia, particularmente aquellas basadas en tecnologías moleculares. De acuerdo con los estudios posestructuralistas y feministas de ciencia y tecnología parece como producida más por la intervención tecnocientífica que por la producción basada en el trabajo. Pero significado, trabajo y tecnociencia son importantes para los tres regímenes.

Debe resaltarse que dichos regímenes para la producción de la naturaleza no representan etapas en la historia de la naturaleza social. No se trata de una secuencia lineal, puesto que los tres coexisten y se superponen. Aun cuando los tres representan instancias de la naturaleza construida —en la medida que la naturaleza nunca existe para los humanos por fuera de la historia— las respectivas prácticas de construcción son relativamente distintas. Los términos orgánico, capitalizado y tecnonaturaleza se utilizan para transmitir intereses y prácticas particulares de uso y significado. Más importante aún, los tres regímenes se producen entre sí, tanto material como simbólicamente. Representan formas relacionadas en la producción de la naturaleza. La naturaleza capitalista dominante, incluso, se inventa sus propias formas de organicidad y tecnonaturaleza —por ejemplo, el ecoturismo y buena parte del ambientalismo, que son formas de organicidad capitalista. La mayoría de las aplicaciones actuales resultantes de la proyección de la biodiversidad podrían considerarse como tecnonaturaleza capitalista. Es importante enfatizar que, en el marco de la naturaleza orgánica, el bosque lluvioso no es un recurso externo, sino parte integral de la vida social y cultural. Allí reside la diferencia, hasta el punto que las formas capitalistas de lo orgánico no pueden reconstruir esa relación integral.

Uno debería, entonces, proponer la hipótesis de que los paisajes actuales de la naturaleza y la cultura se caracterizan por naturalezas híbridas. Las naturalezas híbridas tomarían una forma especial en las áreas de bosques tropicales, donde grupos populares y movimientos sociales buscarían defender, mediante prácticas novedosas, la naturaleza

orgánica contra el embate de la naturaleza capitalista, con tecnonaturaleza como posible aliada —conservación basada en la biotecnología y el uso de recursos—. Son importantes muchos cuestionamientos políticos e intelectuales con respecto a la viabilidad de dicha estrategia. Por ejemplo, ¿qué tipo de prácticas colectivas —realizadas por activistas culturales, científicos, ecologistas, feministas, planificadores— podrían propiciar naturalezas híbridas que contribuyan a la reafirmación de las culturas locales y el posdesarrollo? ¿Cómo podrían los activistas locales posicionarse eficientemente en el entramado de la producción en la biodiversidad? ¿Cómo podrían los antropólogos y otras disciplinas contribuir en la invención de nuevas formas para hablar de naturaleza acorde con las nuevas herramientas para concebir y producir naturaleza?

Los obstáculos a esta estrategia de naturalezas híbridas son inmensos y no es éste el lugar para discutirlos. Los activistas del Pacífico parecen estar conscientes de la necesidad de conducir las tradiciones por nuevos caminos, algunos de los cuales pueden ser irreconocibles —e inclusive indeseables, desde la perspectiva actual— en su intento por reconfigurar las tradiciones e infundirles una medida operacional de diversidad. Esta podría ser la única manera en que, con su limitado poder y con las probabilidades en su contra, los afrocolombianos logren retener algún nivel de autonomía en un mundo en el cual no solamente las tradiciones, sino muchos de los marcadores de la modernidad parecen estar cada vez más debilitados. En los límites del “Atlántico Negro”¹⁶ (Gilroy, 1993), nos hacen conscientes de los aspectos recombinantes de la naturaleza y la cultura, en los cuales la organicidad y la artificialidad pueden no ser enemigos mortales, y donde la problematización de la cultura y la etnicidad no implique el final de las comunidades locales, ricas en tradiciones diversas.

En lugares como el Pacífico colombiano, las luchas por la diferencia cultural también son luchas por la diversidad biológica. ¿Qué tipos de naturaleza será posible diseñar y proteger bajo estas circunstancias? ¿Es posible construir una política cultural sobre

biodiversidad que no profundice la colonización de los paisajes naturales y culturales tan característica de la modernidad? Tal vez tengamos la posibilidad de tejer en los bosques tropicales lluviosos la socioesfera, la biosfera y la maquinoesfera en una nueva práctica “ecosófica” (Deleuze y Guattari, 1993). Imaginando nuevas formas de modernidad, tal vez seamos capaces de renovar nuestra solidaridad con lo que hasta ahora hemos llamado naturaleza.

Posicionadas en plena convergencia entre diferentes regímenes epistémicos históricos —cuya hibridización constituye una forma única de posmodernidad— las luchas en las selvas tropicales del mundo tendrían historias ejemplares que contarnos sobre qué ha sido la “naturaleza”, qué es y qué podría ser en el futuro. Este sería uno de los significados más profundos de la lucha: la creación de posibilidades para la vida y modos de existencia, mediante nuevos conceptos y prácticas, particularmente aquellas que la mayoría de personas considerarían impensables o imprácticas. Si es cierto que la práctica de la filosofía es la creación de conceptos —una construcción de posibilidades para la vida mediante prácticas nuevas de pensamiento, imaginación y entendimiento (Deleuze y Guattari, 1993)— y que dicha tarea hoy implica revalidar la resistencia contra el capitalismo los activistas de las selvas tropicales podrían mantener vivo el sueño de otras tierras y otras gentes para el futuro. ¿Utópico? Tal vez. Pero tengamos presente que “utopía designa la conjunción de la filosofía con el presente [...] Mediante la utopía la filosofía se vuelve política, llevando hasta el extremo la crítica de su era” (Deleuze y Guattari, 1993:101). Algunas de estas utopías de la naturaleza y la cultura pueden verse en las prácticas disidentes de los activistas negros del Pacífico colombiano.

16. Black Atlantic.

- Arocha, Jaime. "La ensenada de Tumaco: invisibilidad, incertidumbre e innovación". En: *América Negra*, No. 1, 1991, pp. 87-112.
- Dahl, Gudrun (ed.). *Green argument for local subsistance*. Stockholm, Sotockholm University Press, 1993.
- Deleuze, Gilles y Félix Guattari. *A thousand plateaus*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987.
- ¿Qué es la filosofía?. Barcelona, Anagrama, 1993.
- Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP). *Plan de desarrollo integral para la Costa Pacífica, Plaideicop*. Cali, DNP/CVC, 1983.
- Plan Pacífico. *Una estrategia de desarrollo sostenible para la Costa Pacífica colombiana*. Bogotá, DNP, 1992.
- Escobar, Arturo. *Encountering development: the making and unmaking of the Third World*. Princeton, Princeton University Press, 1995.
- "Viejas y nuevas formas de capital y los dilemas de la biodiversidad". En A. Escobar y A. Pedrosa (eds.). *Pacífico: ¿desarrollo o diversidad?* Bogotá, Cerec, 1996a.
- "Constructing Nature: Elements for the poststructuralist political Ecology". En: Richard Peet y Michael Watts (eds.). *Liberation Ecologies*. Londres, Routledge, 1996b, pp. 48-68.
- Escobar, Arturo y Sonia Alvarez (eds.). *The making of social movements in Latin America*. Boulder, Westview Press, 1992.
- Escobar, Arturo y Alvaro Pedrosa (eds.). *Pacífico: ¿desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. Bogotá, Cerec, 1996.
- Fraser, Nancy. *Unruly practices*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989.
- Friedemann, Nina S. de. *Críele, Críele Son*. Bogotá, Planeta, 1989.
- Gilroy, Paul. *The black Atlantic*. Cambridge, Harvard University Press, 1993.
- Global Environment Facility (GEF) United Nations Development Program (PNUD). *Conservación de la biodiversidad del Chocó biogeográfico. Proyecto Biopacífico*. Bogotá, DNP, Biopacífico, 1993.
- Grueso, Libia. "Diagnóstico, propuestas y perspectivas de la región del Chocó biogeográfico en relación con la conservación y uso sostenido de biodiversidad". Informe presentado a Proyecto Biopacífico. Bogotá, 1995.
- Grueso, Libia; Carlos Rosero y Arturo Escobar (en prensa). "The politics of nature and the black movement of the Pacific Coast of Colombia". En: Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino y Arturo Escobar (eds.). *Cultures of politics/politics of cultures: revisioning Latin American social movements*. Boulder, Westview Press.
- Grueso, Libia y Carlos Rosero. "El proceso organizativo de comunidades negras en el Pacífico sur colombiano". Manuscrito, 1995.
- Hall, Stuart. "Cultural identity and diaspora". En: J. Rutherford (ed.). *Identity, community, culture, difference*. London, Lawrence & Wishart, 1990, pp. 392-403.
- Haraway, Donna. *Simians, cyborgs and women. The reinvention of nature*. New York, Routledge, 1991.
- Hobart, Mark (ed.). *An anthropological critique of development*. London, Routledge, 1993.
- Janzen, Daniel y H. Hallwachs. *All taxa biodiversity inventory*. Philadelphia. University of Pennsylvania, 1993.
- Janzen, Daniel; H. Hallwachs; j. Jiménez y R. Gómez. "The role of the parataxonomists, inventory managers and taxonomists in costa Rica's national biodiversity inventory". En: *World resources institute. Biodiversity prospecting*. Washington, D.C., WRI, 1993, pp. 223-254.
- Kloppenburg, Jack. *The political economy of plant biotechnology, 1492-2000*. Cambridge University Press, 1988.
- O'Connor, Martin. "On the misadventures of capitalist nature". En: *Capitalism, nature, socialism*, Vol. 4, Nº 4, 1993, pp. 7-34.
- Ong, Aihwa. *Spirits of resistance and capitalist discipline*. Albany, Suny Press, 1987.
- Rabinow, Paul. "Artificiality and enlightenment: from sociobiology to biosociality". En: J. Crary y S. Kwinter (eds.). *Incorporations*. New York, Zone Books, 1992, pp. 234-252.
- Shiva, Vandana (ed.). *Close to home. Women reconnect ecology, health and development worldwide*. Londres, Zed Books, 1994.
- Wade, Peter. *Blackness and race mixture. The dynamics of racial identity in Colombia*. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993.
- Weizsäcker, Christine von. "Competing notions of biodiversity". En: W. Sachs (ed.). *Global ecology*. Londres, Zed Books, 1993, pp. 117-131.
- Whitten, Norman. *Black frontiersmen: Afro-hispanic culture of Ecuador and Colombia*. Prospect heights, Waveland Press, 1986.
- Wilson, Edward. *The diversity of life*. New York, W. W. Norton & Co., 1992.
- World Resources Institute (WRI), World Conservation Union (IUCN), United Nations Environment Program (UNEP). *Global biodiversity strategy*. Washington, D.C. WRI/IUCN/UNEP, 1991.
- World Resources Institute (WRI). *Biodiversity prospecting*. Oxford, Oxford University Press, 1993.

Oscar Delgado, politólogo, investigador
Miguel Eduardo Cárdenas, doctor en
Derecho, coordinador del Programa de
Política Social de Fescol.

Las elecciones presidenciales de 1998

Oscar Delgado y Miguel Eduardo Cárdenas

El principal problema de la nación colombiana hoy es el de revertir la reproducción del tradicionalismo sin ética para enrutarse hacia la postergada modernización socioeconómica y cultural con eticidad y democracia. Ese giro de 180 grados, aquí llamado la transición, es un proceso de algún modo procurado, aunque sin éxito.

El reto de una nueva dirigencia nacional es, en primer término sacar al país de la degradación política y moral en que está sumido y recomenzar las frustradas tentativas para conducirlo a un proceso de transición hacia la modernización o racionalización weberiana.

Un significado importante de la campaña electoral de 1998, sin demeritar a Horacio Serpa, es el hecho de que este candidato se hallaba inhabilitado para trascender la dramática situación en que lo hundió Samper. De acuerdo con Alfredo Molano: "El desierto (de la oposición) es para los liberales la gran oportunidad de dejar tirado, por ahí, el 'costalao de bacalaos' que venían cargando y criando en sus espaldas (sic). Al liberalismo le llegó la hora de cualificarse y limpiarse. O de extinguirse" (El Espectador, 5 de julio de 1998). Si el 21 de junio Serpa hubiera resultado ganador su vocación de lealtad y gratitud le habrían impedido volverles la espalda a todos esos "bacalaos", incluido el de mayor peso —Samper— a quien mucho le adeuda en su carrera.

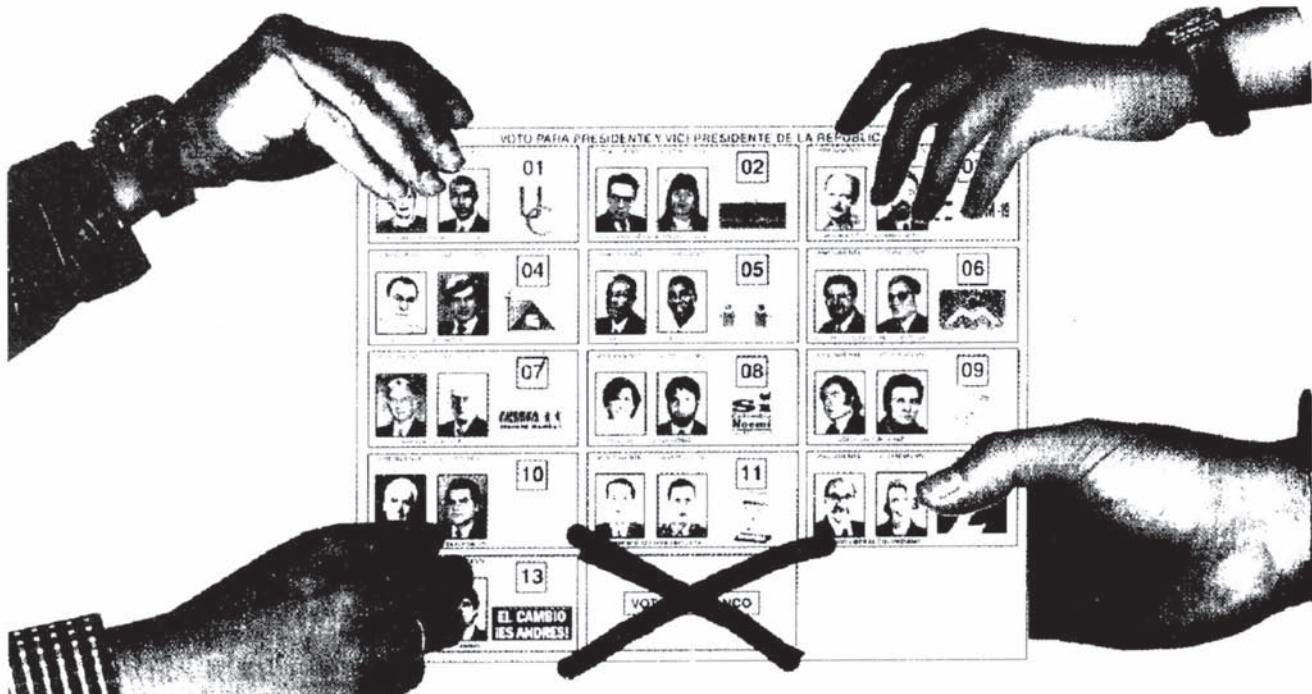
El otro significado importante de dicha campaña es la promesa hecha pública por

parte de ambos candidatos acerca de que el perdedor no haría oposición a un proceso de paz, ya fuera en la fase de diálogo o en la de negociación. El punto de partida de la transición es, entonces, la erradicación de la corrupción imperante de los delincuentes de cuello blanco; el término de las violaciones de los derechos humanos que ha venido cometiendo el Estado directamente por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o, indirectamente, a través de fuerzas narco-paramilitares; la reforma política democrática y el paso del diálogo con los guerrilleros.

Los independientes

Según las encuestas por muestreo, cerca de la mitad de la población mayor de 18 años no se identifica con ningún partido, y el resto se considera a sí misma perteneciente al liberalismo (la mayoría), y al conservadurismo (la minoría). Sin embargo, los independientes son abstencionistas en elecciones no-presidenciales, y en éstas sólo participa un sector relativamente pequeño, que distribuye su votación entre diferentes candidatos.

La principal característica de los independientes radica en la edad, cuya mayor proporción se registra en los grupos etarios juveniles. Según las encuestas, los jóvenes se identifican cada vez menos como liberales o conservadores y, en cambio, sí cada vez más como "independientes" o "sin partido". Empero, hay también independientes que conservan algún vínculo con un partido tradicio-



nal. En la alianza en torno de Noemí Sanín, *v.gr.*, junto a los desvinculados de los partidos tradicionales (Antonio Navarro, Antanas Mockus, etc.), Carlos Lleras de la Fuente se declara a sí mismo un "liberal-independiente".

Tradicionalmente esquivos para concursar a los comicios electorales los independientes votaron por primera vez en forma masiva este año, (en la primera vuelta, en su gran mayoría por Noemí Sanín, y en la segunda, por Andrés Pastrana), en cantidad de unos tres millones de electores en ambas ocasiones.

En elecciones no-presidenciales su participación se ha reducido a cantidades relativamente pequeñas por candidatos que se presentan como tales, o en microalianzas con candidatos de partidos tradicionales. O bien han optado por el voto en blanco.

Ante una oferta de candidaturas personalistas insatisfactoria, desde 1994 se ha incrementado fuertemente tal participación sin validez ni efectividad. Basta observar cómo el pasado 8 de marzo, de 9.5 millones de votos para Senado, la votación en blanco e inválida fue de 1'143.500. No obstante, en los comicios para el Congreso Nacional, además de los votos no efectivos,

hubo una votación de 1'053.013 por candidatos cuya independencia de los partidos tradicionales es inobjetable. En esta oportunidad la primera votación para el Senado fue obtenida por la lista de la independiente Ingrid Betancur (155.000 votos) y en la Cámara por los también independientes Antonio Navarro (117.919 votos), y María Isabel Rueda (110.598 votos).

En las elecciones presidenciales de 1994 los independientes de la primera vuelta fueron pocos (los de Navarro, etc.) y en la segunda vuelta unos 900.000 (12.1% de la votación total), de los cuales 2/3 votaron por Pastrana y 1/3 por Samper. En cambio, en 1998 los porcentajes de esta categoría fueron más de un 30% en primera vuelta (Noemí Sanín obtuvo un 27.9%) y 25.3 % en la segunda.

Además de estos, el 21 de junio Pastrana y Serpa captaron votos de otros independientes que no votaron en la primera vuelta por Noemí Sanín. Se estima que en la segunda vuelta la votación independiente no-noemista fue de unos 500.000 votos por Pastrana y unos 250.000 por Serpa, y la de liberales disidentes, también por Pastrana, unos 750.000.

La doble vuelta permitió en 1998 una insólita movilización de 2.8 millones de electo-

res independientes en torno a Noemí Sanín. No obstante, una minoría de electores también independientes votó el 30 de mayo por los otros candidatos.

Con la votación por Sanín en la primera vuelta y con la alta tasa de repetición de los noemistas en la segunda, el cuadro electoral, y quizás el político, ha quedado conformado no sólo por liberales y conservadores, sino también por independientes.

Vale destacar el hecho de que con el guión de Noemí, o sin él, fueron los independientes noemistas quienes frustraron la continuidad del samperismo, al elegir finalmente a Pastrana gracias al millón y medio de votos que efectivamente le entregaron el 21 de junio (véase de nuevo el Cuadro 1).

El nuevo eje de poder: Bogotá-país paisa

En el orden geográfico-electoral, en la región caribe se mantiene imperturbable la razón 60-40 (60% liberales y 40% conservadores). Una explicación en la segunda vuelta podría ser la división casi equitativa de los independientes entre Serpa y Pastrana y la movilización de los nuevos electores liberales oficialistas, en cantidad similar a la de los liberales disidentes.

En el resto del país, esto es, en el interior (donde acude a las urnas el 80% del electorado), la tendencia general es hacia un empate entre los dos candidatos de las segundas vueltas, con diferencias relativamente no muy significativas.

En las regiones o subregiones culturales del interior no hay una definición de cultura política predominante (costa norte), ya que en aquellas coexisten unidades territoriales en las que el electorado se divide casi por mitades entre liberales y conservadores para elecciones presidenciales. La excepción más conspicua y reciente es el caso de la cultura *paisa*.

A partir del 7 de agosto de 1998 el eje del poder ejecutivo Bogotá-costa caribe de la era samperista ha sido desplazado, bajo la égida pastranista, por el nuevo eje Bogotá-país paisa, conformado por Antioquia, Caldas y Risaralda.

La cultura política del llamado país paisa ha llegado a ser, en tanto contestataria, la punta de lanza de la transición hacia la modernización. Fue en Antioquia donde —a nivel departamental— Pastrana obtuvo la más grande mayoría de votos sobre su adversario en la segunda vuelta.

Una hipótesis para explicar la explosión electoral del independentismo en Antioquia podría ser la de una reacción colectiva ante la necesidad de supervivencia, y la elección racional hacia la opción que se creyó podría darle la salida al estado de naturaleza en que ha vivido la región.

Nuevo liderazgo

En la coyuntura de la campaña electoral se presentó la oportunidad para llenar un prolongado vacío de liderazgo social y político en Colombia, toda vez que el final del liderazgo tradicional y la ausencia de adalides modernos permitió la concentración de un poder ilegítimo en cabeza del presidente Samper en asocio de los hombres de negocios más ricos del país.

La coyuntura electoral ha permitido la relativa consolidación de una esfera pública, hasta hoy existente, en la que probablemente van a ser actores flamantes de primer orden: (a) en lo político el jefe de gobierno, Andrés Pastrana; el de la oposición “patriótica”, Horacio Serpa, y en la opinión pública independiente, Noemí Sanín, Ingrid Betancourt y otros; (b) en lo social, la Iglesia, los dirigentes de ONG, de gremios económicos y los comandantes de las guerrillas —de quienes se espera una futura incorporación a la vida pública institucional y a un nuevo sistema político—.

En un nivel de subliderazgo, luego del traspié de los cacicazgos electorales clientelistas, empiezan a perfilarse algunas personalidades modernas a quienes la campaña electoral les sirvió como rampa de lanzamiento hacia la figuración público-política. Se destaca, en primer lugar, Juan Camilo Restrepo, desde ahora nuevo precandidato presidencial del conservatismo, y los independientes Ingrid Betancourt, Lleras de la Fuente, Antanas Mockus y Antonio Na-

Un significado importante de la campaña electoral de 1998, sin demeritar a Horacio Serpa, es el hecho de que este candidato se hallaba inhabilitado para trascender la dramática situación en que lo hundió Samper. De acuerdo con Alfredo Molano: “El desierto (de la oposición) es para los liberales la gran oportunidad de dejar tirado, por ahí, el ‘costalao de bacalaos’ que venían cargando y criando en sus espaldas (sic). Al liberalismo le llegó la hora de cuatificarse y limpiarse. O de extinguirse” (El Espectador, 5 de julio de 1998). Si el 21 de junio Serpa hubiera resultado ganador su vocación de lealtad y gratitud le habrían impedido volverles la espalda a todos esos “bacalaos”, incluido el de mayor peso —Samper— a quien mucho le adeuda en su carrera.

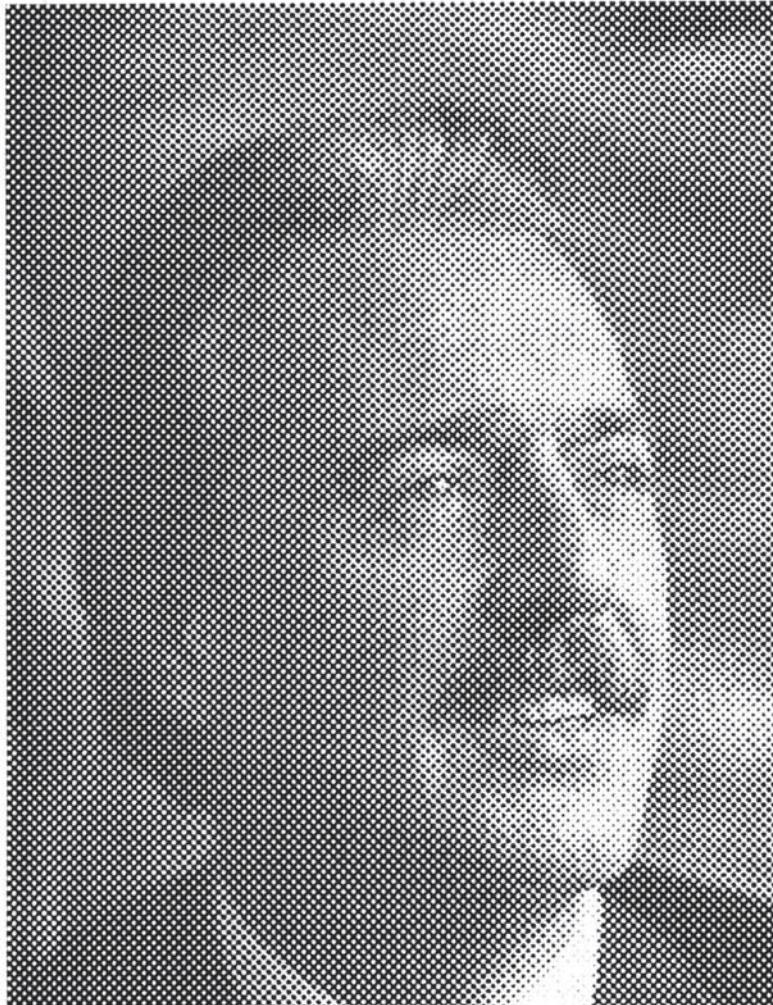
varro; en el liberalismo moderno aliancista, Humberto de la Calle y Alfonso Valdivieso, y en el oficialismo liberal, los principales asesores de Horacio Serpa en la oposición y, por último, los retadores pertenecientes al liberalismo elitista: Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe Vélez.

Geografía electoral del voto por candidatos

Si en casi todos los departamentos del interior del país se presenta la tendencia hacia el empate de las votaciones por los candidatos de la segunda vuelta, ¿dónde aparecen los desequilibrios decisarios?

En la segunda vuelta Serpa recibió en la costa sus mejores mayorías (448.800 votos por encima de Pastrana) y en su departamento natal, Santander, donde el margen sobre su adversario fue de 128.300 votos. Contribuciones menores consiguió también en Chocó, Cauca, Casanare y Tolima (de tradición liberal) con 115.400 votos (véase el Cuadro 1-A).

Los 405.000 votos mayoritarios recibidos por Pastrana de los antioqueños fueron el punto de oro para concretar una mayoría relativamente holgada en el ámbito nacional sobre su adversario. También fueron contribuyentes destacados los márgenes a su favor en Caldas (141.600 votos), Risaralda (111.900) y Nariño (92.200). En esos cuatro departamentos Pastrana logró 748.700 votos por encima de Serpa. Norte de Santander, Boyacá y Huila (de tradición conservadora) le dieron 165.600 votos de mayoría. Y en Cundinamarca, Valle, Meta, Caquetá y



Quindío (de tradición liberal) consiguió aventajar al candidato liberal por 153.100 votos. En Bogotá lo superó por 87.300 votos.

Mayorías departamentales

En la segunda vuelta la votación mayoritaria de Pastrana sobre Serpa fue 456.300 votos. Agregadas en el ámbito de cada departamento, las mayorías de Pastrana suman 1'165.900 y las de Serpa 709.600, para una diferencia igual en el total nacional. Las mayorías absolutas más pronunciadas fueron las de Serpa en la región caribe y en Santander, y las de Pastrana en la región paisa y en Nariño.

En la región caribe Serpa ganó en los siete departamentos continentales y en sus respectivas capitales, así como en la isla de San Andrés. En ellos obtuvo una mayoría de 448.800 votos y en Santander otra de 128.300, para un subtotal equivalente al 81.3% del total de sus mayorías departamentales.

Las mayorías de Pastrana fueron de 403.000 en Antioquia y 345.700 en Caldas, Risaralda y Nariño, las que sumadas representan un 64.2% del total de sus mayorías departamentales. En cantidades significativas, pero menores, también consiguió mayorías en Norte de Santander, Boyacá y Huila (de tradición conservadora), en Cundinamarca, y en Valle, Caquetá, Meta, Quindío y Putumayo (de tradición liberal). Además, logró pequeñas ventajas en Bogotá, Valle, Quindío, Meta y Caquetá (de tradición liberal) en donde perdió en 1994.

Composición social del voto

En la segunda vuelta los empates y cuasiempates que se presentaron en cada comunidad, barrio o comuna urbana, en Bogotá, Cali y en otras ciudades fueron especiales como disputa pacífica por el voto popular entre los dos candidatos. Con base en sus minorías conservadoras urbanas, Pastrana consiguió, en la gran mayoría de esas comunidades, los empates o cuasi-empates en votación frente al liberalismo serpista, gracias al sustantivo apoyo de los independientes y los liberales disidentes.

En los barrios y zonas electorales urbanas donde residen los estratos 5 y 6 Pastrana obtuvo sonoros triunfos en las principales ciudades del interior del país. En segunda vuelta alcanzó los 231.400 votos, mientras Serpa llegó a los 136.600. El aporte de los estratos medios y altos le rindió a Pastrana una mayoría de 94.800 votos con los que pudo ganar en Bogotá por 86.400 votos.

Descomposición del bipartidismo en el sector rural

Cuando todo parecía indicar que el voto independiente por Noemí Sanín estaría altamente concentrado en el sector urbano un millón de campesinos que votaron por ella desearon el 30 de mayo a los candidatos de los partidos tradicionales.

El voto rural independentista se presentó en casi todos los mil municipios rurales y semi-rurales del país, aun cuando se concentró en el occidente (en Antioquia, Valle, Risaralda y Quindío) y fuertemente en Cundinamarca. En estos departamentos hubo 620.200 independientes noemistas en sus espacios rurales, en proporciones inusitadas de 31% en Antioquia y Cundinamarca y 23 a 25% en Valle, Risaralda y Quindío, en relación con el voto rural departamental. En Boyacá y Caldas del 16%; en los demás departamentos del interior de 10 a 15% y en la costa caribe, un 8.5%.

Si se hace abstracción de los 794.600 votos noemistas depositados en Bogotá, el resto de la votación independiente se divide

por mitades entre la urbana y la rural (1'022.400 en las capitales departamentales y 1'028.800 en el resto de municipios).

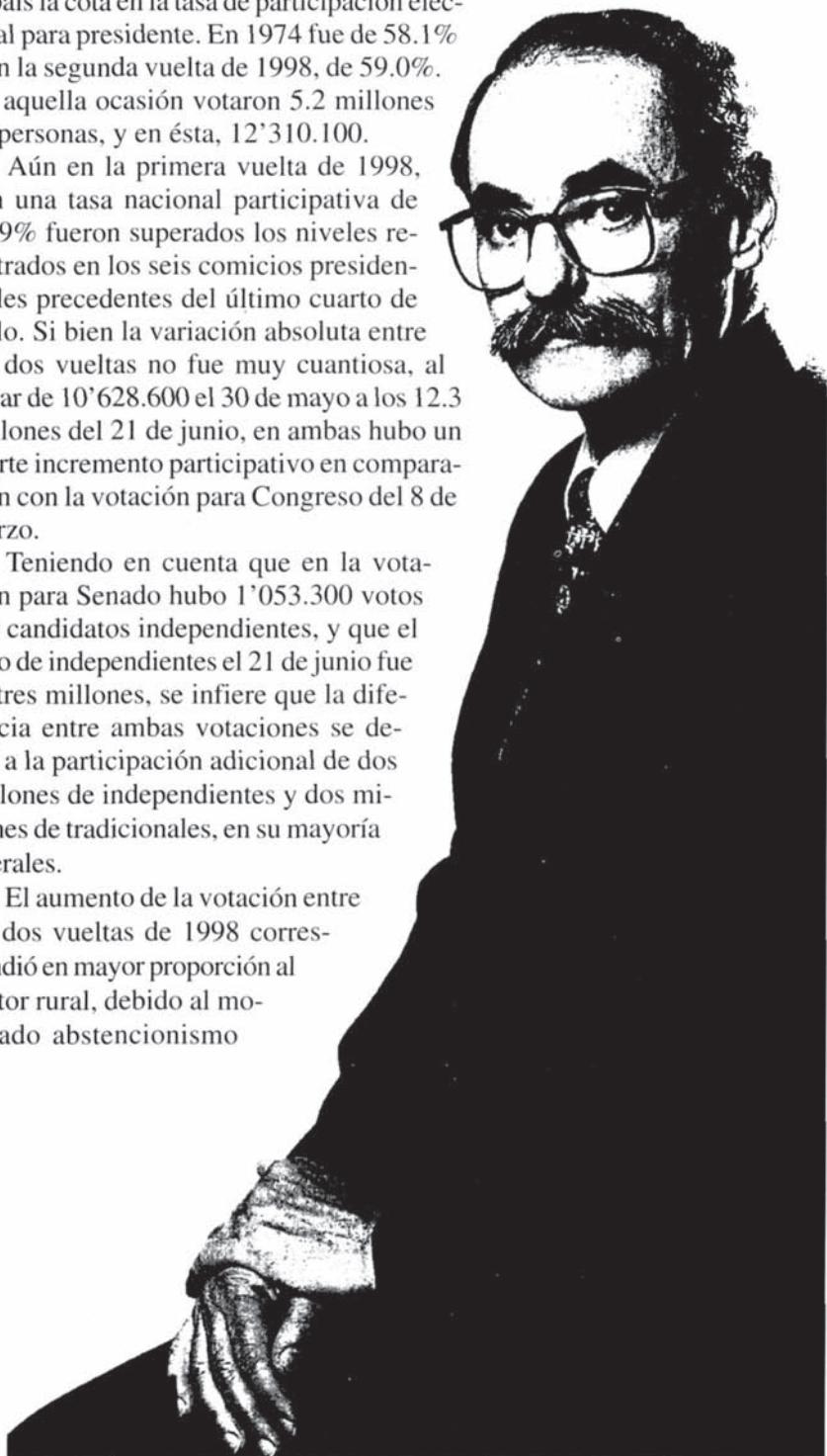
Participación electoral

Se necesitaron 24 años para igualar en el país la cota en la tasa de participación electoral para presidente. En 1974 fue de 58.1% y en la segunda vuelta de 1998, de 59.0%. En aquella ocasión votaron 5.2 millones de personas, y en ésta, 12'310.100.

Aún en la primera vuelta de 1998, con una tasa nacional participativa de 50.9% fueron superados los niveles registrados en los seis comicios presidenciales precedentes del último cuarto de siglo. Si bien la variación absoluta entre las dos vueltas no fue muy cuantiosa, al pasar de 10'628.600 el 30 de mayo a los 12.3 millones del 21 de junio, en ambas hubo un fuerte incremento participativo en comparación con la votación para Congreso del 8 de marzo.

Teniendo en cuenta que en la votación para Senado hubo 1'053.300 votos por candidatos independientes, y que el voto de independientes el 21 de junio fue de tres millones, se infiere que la diferencia entre ambas votaciones se debió a la participación adicional de dos millones de independientes y dos millones de tradicionales, en su mayoría liberales.

El aumento de la votación entre las dos vueltas de 1998 correspondió en mayor proporción al sector rural, debido al moderado abstencionismo



de los independientes noemistas, de la primera vuelta, y a las relativamente altas votaciones en las ciudades en esa vuelta.

El incremento menor de la votación de junio en las ciudades se presentó en el sector urbano del interior, toda vez que en las siete capitales de la región caribe los incrementos inter-vueltas fueron de un 25% en cada ciudad, excepto la de 31.0% en Barranquilla. En las áreas rurales de la costa también aumentó la participación en más de una cuarta parte entre una y otra vueltas.

En las ciudades del interior, en cambio, los incrementos se situaron entre 10 y 11% en general, y en menores proporciones en ciudades donde los electores ya se habían esforzado en la primera vuelta, como en Bogotá (donde sólo aumentó un 8.7%), Medellín (8.1%), y menos de 7.0% en Bucaramanga, Manizales y Pereira. En Cali el aumento fue un poco mayor, del 11.7%.

Con el retorno a las urnas de los electores de Sanín en una proporción de 80% (esto es, un poco más de 2.2 millones) además de unos 750.000 independientes no-saninistas, esta suma trimillonaria fue distribuida en votos adicionales por Pastrana y por Serpa. Ello determinó entre ambas vueltas cuantiosos incrementos; en cifras absolutas, los registros por Pastrana pasaron de 3'653.000 a 6'114.800, y por Serpa, de 3'696.300 a 5'685.500.

Las tasas de participación a nivel departamental en la segunda vuelta estuvieron cerca o un poco por debajo del promedio nacional (59.0%) en la mayoría de estas unidades territoriales, y por encima donde ha sido tradicional su alta participación relativa a la media: en Santander (69.4%); de 65 a 66% en Caldas y Risaralda y, por primera vez en este último rango superior de tasas, (en cualquier otra elección presidencial) en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Quindío. Pese a la copiosa votación, las tasas de Antioquia y Valle fueron de 57 y 56% respectivamente. En un nivel considerablemente inferior, de 42 a 43% se situaron los departamentos más violentos, rurales y atrasados (Chocó, Arauca y Putumayo) y muy a la zaga Caquetá con sólo 35.1%. En estos

departamentos campeó el abstencionismo inducido por la insurgencia.

En la costa caribe las tasas de participación han sido tradicionalmente bajas y desde hace tres decenios la votación absoluta para presidente ha sido siempre inferior a la de Congreso y autoridades sub-nacionales. En la actual oportunidad la participación se equiparó, ya que el 8 de marzo votaron allí para Congreso 2'150.000 y el 21 de junio 2'290.600.

La coyuntura electoral ha permitido la relativa consolidación de una esfera pública, hasta hoy existente, en la que probablemente van a ser actores flamantes de primer orden: (a) en lo político el jefe de gobierno, Andrés Pastrana; el de la oposición “patriótica”, Horacio Serpa, y en la opinión pública independiente, Noemí Sanín, Ingrid Betancourt y otros; (b) en lo social, la Iglesia, los dirigentes de ONG, de gremios económicos y los comandantes de las guerrillas —de quienes se espera una futura incorporación a la vida pública institucional y a un nuevo sistema político—.

Cambios históricos y recientes

En la historia de las elecciones presidenciales colombianas generalmente se presentaron dos candidatos oficiales de los respectivos partidos, ante un electorado activo inevitablemente liberal o conservador. No fueron elecciones realmente competitivas porque los régimenes y las hegemonías del partido dominante no perdían una elección, salvo excepcionalmente en coyunturas de crisis donde el poder se dividía, permitiendo así la alternancia de los régimenes (1885, 1909, 1929, 1946, 1953, 1982, 1998).

Tras la alternación forzosa en la Presidencia de la República y la consociatividad durante el Frente Nacional, el partido liberal refundó su hegemonía en 1974, la cual en 1982 fue interferida por el cuatrienio de Betancur tras el cual se retornó a ella por espacio de 12 años bajo los gobiernos de Barco, Gaviria y Samper.

Ahora, con el triunfo de Andrés Pastrana —y sobre todo por el insólito cambio en el comportamiento electoral de los colombianos—, los régimenes y las hegemonías monopartidistas —incluso bipartidistas— han finalizado para abrir el paso a un sistema democrático más pluralista, competitivo y alternante.

El liberalismo —si llegare a ser depurado— seguirá siendo un actor político y electoral importante, pero deberá competir en elecciones presidenciales futuras con recursos humanos comparables a los de sus adversarios bajo el nuevo esquema vigente en la coyuntura.

Resultados en el ámbito nacional

Los resultados de la segunda vuelta en 1994 y en las dos rondas electorales de 1998 son los siguientes:

Candidatos	Votación (miles)	Distribución (%)
1994 (II Vuelta) Ernesto Samper	3.733.3	51.07
Andrés Pastrana	3.576.8	48.93
Mayoría de Samper	156.5	
1998 (I Vuelta) Horacio Serpa	3.696.3	36.26
Andrés Pastrana	3.653.0	35.83
Noemí Sanín	2.845.8	27.91
1998 (II Vuelta) Andrés Pastrana	6.114.8	51.94
Horacio Serpa	5.658.5	48.06
Mayoría de Pastrana	456.3	

El resto de votos (blancos, nulos y tarjetas no marcadas) fue del 1.58% en 1994; de 4.09 —incluidos los de otros candidatos en la primera vuelta de 1998—, y del 4.63% en la segunda del 21 de junio. En esta la votación en blanco fue de 3.04% (373.700) y el resto sumó 1.32 % (163.100 votos).

En las segundas vueltas los márgenes entre ambos candidatos no son muy amplios. El de 1994 fue de 2.14 puntos porcentuales, y de 3.88 en 1998.

Ahora, en cambio, la intervención de los independientes y los liberales inconformes, en favor de candidatos conservadores, les permite a éstos compensar su situación minoritaria, en el nuevo esquema de competitividad democrática, alternación partidaria o de coalición en el gobierno e impredecibilidad de los resultados de la elección.

De lo pre-político a la politización

En su análisis relacional de las elecciones, la guerra interna y la antipolítica (abstencionismo electoral, voto independien-

te y voto efectivo) el politólogo Miguel Ángel Herrera Zgaib concluye señalando tres rumbos alternativos (“radical, pesimista y ecléctico”). En la vía radical, Opción Vida se constituiría como movimiento nacional organizado autónomamente para forzar el cambio del presidencialismo y el fin de la guerra interna. En la vía pesimista, el entramado de redes clientelares y neoclientelares vitaliza el presidencialismo mediante la disgregación y recuperación de esta rebelión colectiva “atomizada y cooptada”. Finalmente, la antipolítica toma una vía ecléctica, mezcla de las dos posibilidades anteriores. Así, la guerra irregular no finalizaría, pero “se gesta un compromiso de reformas al sistema político y al régimen económico social, en medio de ajustes brutales a la economía”. Este sería un acuerdo bipartidista, neoclientelista administrado por las fracciones tecnócratas de la Alianza por el Cambio, que entrarían a pactar con la guerrilla en los escenarios por ella propuestos (convención nacional y asamblea nacional constituyente, con la presencia de la llamada *sociedad civil*) (Herrera, “Elecciones. Guerra y antipolítica 1997-1998”, *mimeo*, 1998, pp. 29-30).

Nuestra hipótesis sobre la naturaleza de los cambios por venir es su indeterminación, en un escenario presidencialista regulado por la opinión pública, en que el presidente Pastrana tiene la posibilidad de avanzar tan rápida y radicalmente como lo deseé, ya que el liberalismo serpista no intentará frenarlo si su propósito real fuese transformar la sociedad colombiana, en lo concerniente a la terminación de la guerra con políticas públicas de redistribución de la riqueza y del ingreso, y políticas estatales para construir un *Estado social de derecho* y una esfera público-política democrática viabilizando el acceso de la *sociedad civil* a los medios masivos.

CUADRO 1

COLOMBIA: ESTIMACIÓN DEL ORIGEN PARTIDARIO DEL VOTO POR PASTRANA Y SERPA 21 DE JUNIO DE 1998
(EN MILES DE VOTOS)

Identificación	Pastrana	Serpa	Totales	Porcentajes
I. Liberales	750.0	4.550.0	5.300.0	45.01
II. Conservadores	3.350.0	150.0	3.500.0	29.72
III. Independientes	2.014.8	958.5	2.973.3	25.25
1. Votaron por Sanín el 30 de mayo	1.522.7	711.4	2.234.1	(18.98)
(a) En Bogotá	444.6	161.3	605.9	
(b) En Antioquia	284.4	76.5	360.9	
(c) En Valle	171.4	85.4	256.8	
(d) En la Costa	103.0	91.2	194.2	
(e) En Santander	33.1	56.1	89.2	
(f) En resto del país	486.2	240.9	727.1	
2. No votaron por N. Sanín el 30 de mayo	492.1	247.1	739.2	(6.27)
Totales	6.114.8	5.658.5	11.773.3	100.00

Fuente: Estimaciones con base en encuestas preelectorales.

CUADRO A-1

COLOMBIA: CANTIDAD DE VOTOS MAYORITARIOS POR CANDIDATOS EN CADA DEPARTAMENTO
21 DE JUNIO DE 1998

Departamentos	Mayorías de Pastrana (miles)	Mayorías de Serpa (miles)	Margen de mayorías según votación por ambos candidatos (%)	Votación el 21 de junio-98	
				Pastrana (miles)	Serpa (miles)
TOTALES	1.165.9	709.6	3.88	6.114.8	5.658.5
Grupo I	748.7		30.46	1.603.5	854.8
Antioquia	403.0		29.26	890.3	487.3
Caldas	141.6		36.44	265.1	123.5
Risaralda	111.9		36.40	209.7	97.8
Nariño	92.2		23.98	238.4	146.2
Grupo II	386.0		7.72	2.691.3	2.305.3
Bogotá	87.3		4.42	1.031.1	943.8
Cundinamarca	70.9		10.50	373.1	302.2
N. de Santander	60.2		15.76	221.1	160.9
Boyacá	53.0		12.54	237.7	184.7
Huila	52.4		18.18	170.3	117.9
Caquetá	17.5		31.20	36.8	19.3
Valle	44.7		3.74	621.2	576.5
Grupo III		692.5	18.26	1.550.8	2.243.3
Región Caribe		448.8	20.24	884.8	133.6
Santander		128.3	17.76	297.2	425.5
Chocó		40.2	52.34	18.3	58.5
Cauca		29.9	10.48	127.7	157.6

Casanare		28.0	42.16	19.2	47.2
Tolima		17.3	4.08	203.6	220.9
Grupo IV	33.8	17.1	3.18	271.6	2
Meta	12.3		6.66	98.4	86.1
Quindío	7.7		4.06	97.3	89.6
Guaviare	2.2.		22.44	6.0	3.8
Exterior	4.4		13.34	18.7	14.3
Arauca		8.9	30.94	16.8	25.7
Vichada		3.9	60.00	1.3	5.2
Guainía		1.6	40.00	1.2	2.8
Amazonas		1.4	12.50	4.9	6.3
Vaupés		1.3	27.66	1.7	3.0
REG. CARIBE	448.8	20.24	884.8	1.333.6	
Atlántico	125.8	22.90	211.8	337.6	
Córdoba	79.7	20.06	158.8	238.5	
Sucre	60.4	16.58	83.4	143.8	
Bolívar	60.2	15.02	170.3	230.5	
Magdalena	47.7	17.36	113.5	161.2	
César	41.1	17.96	93.9	135.0	
La Guajira	29.3	23.50	47.7	77.0	
San Andrés	4.6	29.88	5.4	10.0	

Fuente: RNEC, escrutinio final de 30 de junio de 1998.

CUADRO A-2
SEGUNDA VUELTA 1998: MAYORÍAS DE PASTRANA Y DE SERPA
EN CAPITALES DEPARTAMENTALES

Ciudad	Mayorías de Pastrana (miles)	Mayorías de Serpa (miles)	Distribución % del voto		Votación (miles)	
			Pastrana	Serpa	Pastrana	Serpa
I. PASTRANISTAS	466.0		56.2	43.8	2.118.5	1.652.5
Medellín	169.9		68.0	32.0	321.6	151.7
Bogotá	87.3		52.2	47.8	1.031.1	943.8
Manizales	72.0		73.6	26.4	112.3	40.3
Pereira	48.5		65.5	34.5	102.6	54.1
Pasto	40.5		68.8	31.2	74.3	33.8
Cúcuta	18.6		55.0	45.0	101.7	83.1
Popayán	14.4		58.6	41.4	49.4	35.0
Armenia	11.0		55.5	44.5	55.3	44.3
Cali	3.8		50.4	49.6	270.2	266.4
II. SERPISTAS		239.0	41.4	58.6	576.5	815.5
Barranquilla		82.3	37.4	62.6	122.2	204.5
Bucaramanga		54.4	38.5	61.5	91.3	145.7
Cartagena		23.6	43.6	56.4	80.5	104.1
Valledupar		21.2	38.4	61.6	35.1	56.3
Sincelejo		15.0	38.3	61.7	24.7	39.7
Montería		13.5	43.1	56.9	42.2	55.7
Santa Marta		12.3	43.2	56.8	39.3	51.6
Riohacha		7.6	37.9	62.1	12.0	19.6
Yopal		5.0	38.8	61.2	8.8	13.8
Ibagué		2.2	49.3	50.7	75.1	77.3
Neiva		1.9	49.0	51.0	45.3	47.2
TOTALES	227.0		52.2	47.8	2.695.0	2.468.0

La soberanía de Colombia amenazada*

James L. Zackrison y Elleen Bradley**

Conclusiones:

- En la ausencia de reformas políticas y militares, Colombia se arriesga a convertirse, ya sea en un "narco-Estado" o a desintegrarse.
- El descontento popular con las políticas gubernamentales indican que Colombia está lista para una "guerra sucia".
- Las Farc y el ELN van a continuar envueltos en el negocio de las drogas para incrementar su riqueza.
- La actividad insurgente se incrementará, especialmente en las áreas en donde el control del gobierno es limitado.
- La posible pérdida de la democracia en Colombia amenaza la estabilidad de la región.

Colombia se aproxima a una situación crítica

Desde 1966, la seguridad interna de Colombia se ha visto afectada por las acciones de dos fuerzas guerrilleras, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia, Farc) y el Ejército Nacional de Liberación (National Liberation Army, ELN). Ataques recientes contra el ejército, la economía y la población civil están causando estragos a la población y a la dirigencia colombiana: las operaciones de combate anuales promedian dos enfrentamientos diarios. A pesar de que la guerrilla carece de la capacidad militar para derrocar al gobierno su destructividad tiene el potencial de desestabilizar las instituciones políticas colombianas.

De hecho, Colombia podría colapsar como nación. Las instituciones gubernamentales son muy débiles, especialmente en las áreas ocupadas por los carteles de la droga y la guerrilla. El desmoronamiento ya está ocurriendo en varias áreas en las que la presencia del gobierno es casi inexistente. La anarquía puede desatarse si no se ejecutan pronto las reformas necesarias para fortalecer las instituciones nacionales, y



* Artículo traducido del Strategic Forum, de la National Defense University del Instituto de Estudios Estratégicos (Institute for National Strategic Studies). Número 112 de mayo del 97. Traducción de Constanza Casasbuenas.

** James L. Zarickson, es un analista de la Oficina Naval de Inteligencia. El puede ser contactado en el Tel. No (202) 685-2343, o por fax al (202) 685-3866, o al correo electrónico zackrisonj@ndu.edu. Elleen Bradley es una analista de inteligencia en El Centro Base de Inteligencia. Ella puede ser contactada en el Tel. No: (804) 980-7976. Las opiniones, conclusiones y recomendaciones expresadas o implícitas en este artículo son solamente opinión de los autores y no representan necesariamente la visión del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, La Universidad Nacional de la Defensa, el Departamento de Defensa o cualquier otro organismo gubernamental.



el gobierno podría comenzar una “guerra sucia” para evitar la desintegración de Colombia.

Las Farc, la organización guerrillera más grande y poderosa del país, (7.700 hombres), está bien armada y financiada, tras años de extorsión, secuestro, cobro de vacunas y participación en el tráfico de drogas. El ELN aunque más pequeño (2.500 hombres), es tan rico como las Farc y causa el mismo daño. Con el colapso del apoyo financiero de la Unión Soviética y Cuba las operaciones insurgentes han sido parcialmente financiadas por el negocio de la cocaína y la heroína, que se estima proveen a la guerrilla con la mitad de su ingreso anual que está alrededor de los \$0.5 a 5 billones.

Solo una pequeña parte de este ingreso es usada en la compra de armas y otros equipos militares para mantener las operaciones y actividades de combate (estimadas en US\$ 20 millones anuales). El resto es invertido

en tierras, negocios de transporte y un muy bien manejado paquete de inversiones. Esto reafirma el argumento de las fuerzas armadas de que de que los insurgentes en Colombia están en el negocio de hacer plata y poco les interesa la ideología.

Se estima que el daño causado por la acción insurgente a la economía colombiana está alrededor de los 1.5 billones de dólares anuales (4% del producto interno bruto para 1994). Esto incluye el costo de los daños causados por la violencia, gastos de defensa, negocios perdidos y pérdida de vidas humanas (ver Cuadro 1).

Los insurgentes

Doctrina e ideología. Las Farc tienen sus orígenes en la guerra civil entre liberales y conservadores y que estalló en el episodio conocido como La Violencia entre 1948 y 1965. Oficialmente establecidas en 1966, las Farc eran el brazo armado del Partido comunista colombiano, y aún empujan una plataforma marxista-leninista de redistribución masiva del ingreso y la riqueza; control estatal de los recursos naturales; aumento creciente del gasto del gobierno en seguridad social (50% del gasto estatal); y una solución no militar (probablemente la legalización) al problema del tráfico ilegal de drogas. Las Farc atacan a todo el sector de negocios. El ELN, de formación más reciente, sigue la misma agenda, aunque sus objetivos son principalmente la industria petrolera, presionando por su nacionalización. Las Farc han duplicado su membresía desde 1986 y operan en cerca del 70% del territorio nacional. La fuerza del ELN se ha mantenido estática durante los últimos años.

La dirigencia. Recientes cambios hechos a nivel de la dirigencia han ido descentralizando cada vez más el poder de los altos comandos. Los líderes de los frentes ahora logran más influencia a través del dinero que a través de la ideología o experiencia de combate, lo que explica su voluntad de participar en el negocio de las drogas; los cambios han dado como resultado un mayor poder por parte de estos, dando como resultado una nueva generación de seguidores menos dedicados a la ideología que sus antecesores. El

La insurgencia continuará hasta el final de este siglo, dado el clima político del país y la capacidad de los militares. Los insurgentes están debilitando la capacidad de decisión del gobierno a través de los tradicionales canales de corrupción tan inherentes al sistema político colombiano. La urbanización creciente, el crecimiento de la población y la falta de una reforma gubernamental contribuyen a cambiar, no solo la naturaleza de la insurgencia, sino también las fuerzas del poder en Colombia. La riqueza creciente de las Farc y el ELN que garantiza el tráfico de drogas les da acceso a tecnología de avanzada, igual o superior a la de las fuerzas armadas. Esto, a su vez, incrementa el control del poder de la insurgencia sobre vastas zonas de Colombia.

requerimiento de que los frentes sean autosuficientes es uno de los motivos principales para el énfasis que las Farc han puesto en controlar las regiones productoras de drogas y la acumulación de riqueza proveniente de este negocio.

Estructura. Las dos insurgencias tienen estructuras similares. Estas consisten en un secretariado general y “frentes” operacionales. Un frente (600 hombres) se divide en columnas, compañías, escuadrones, unidades y equipos. Las unidades individuales se especializan en el negocio de las drogas, extorsión, asesinatos, secuestros o combates operativos y/o psicológicos. Estas insurgencias no son bandas improvisadas de bandoleros, sino frentes con la estructura y sofisticación de una fuerza militar moderna.

Tácticas. Las operaciones tácticas incluyen asaltos a bases militares colombianas para adquirir municiones, armas y equipos de comunicación. Estas generalmente incluyen emboscadas y asaltos nocturnos, caracterizadas por un excelente trabajo de inteligencia y análisis, preparaciones secretas, rápida ejecución y hechas sorpresivamente. Los insurgentes se desplazan a pie, aprovechando su íntimo conocimiento de las áreas de operación y su red de informantes.

CUADRO 1
COSTO DE LA INSURGENCIA
PARA LA ECONOMÍA COLOMBIANA

	1994
Gasto público	
Defensa	592.165.000
Petróleo	40.288.000
Seguros	8.270.000
Otros	11.323.000
Total gasto público	652.046.000
Gastos privados	
Robos, extorsión,	
Secuestros	260.287.000
Sector petróleo	35.478.000
Otros	48.546.000
Total gasto privado	344.311.000
Productividad perdida	
Capital humano	650.713.000
Costo total (% PIB)	1.847.070.000

“LA CAMPAÑA BOLIVARIANA” DE LAS FARC POR UNA NUEVA COLOMBIA

Fase I (enero de 1990 a enero 1992) Objetivo de lograr 60 frentes consistentes de 600 tropas cada uno, para un total de 36.000 de las cuales 18.000 armadas. Requerimientos financieros: \$56 millones de dólares.

Fase II (enero 92 a enero del 94). Objetivo: 80 frentes de 450 tropas cada uno, para un total de 36.000.

Fase III (enero 94 a enero 96). La primera ofensiva general será lanzada con 18.000 guerrillas móviles en las áreas de los frentes y 18.000 guerrillas agrupadas en compañías y columnas móviles en la cordillera oriental.

Fase IV (enero del 96 a enero del 98). Completar la instalación de un gobierno y una organización socio-política provisional.

Estos objetivos no se han cumplido, posiblemente porque el secretariado ha concentrado su atención en hacer plata a través del negocio ilícito de las drogas. Aunque se han establecido 60 frentes, el número nunca ha rebasado los 7.700 y la ofensiva general de derrocamiento del gobierno fracasó.

Fuente: Documentos confiscados Farc.

Durante los ochenta las operaciones de la contrainsurgencia colombiana (Coin), establecieron grupos de autodefensa (conocidos como milicias) para combatir a los insurgentes. Propietarios de tierra fueron reclutados por el ejército para financiar y formar parte de grupos orientados a defender su tierra. Dado que un gran porcentaje de estos propietarios eran narcotraficantes se desarrolló una fuerte conexión entre estos y el ejército. La declaración de guerra a los carteles de la droga en 1989, dio paso a una reacción violenta por parte de las milicias contra el gobierno; estas formaron nuevas milicias privadas, muchas de ellas patrocinadas por las Farc y el ELN, incrementando así el poder y prestigio de los insurgentes.

La conexión con la droga. El creciente nexo entre los traficantes de droga y las guerrillas es una gran amenaza para la soberanía colombiana. Este es un matrimonio de conveniencia, ya que los carteles no están interesados en ninguna agenda ideológica. La guerrilla justifica su participación en el negocio de las drogas en términos de necesidad económica, pero manteniendo al mismo tiempo la contradicción entre el repudio al capitalismo, y su participación cada vez más creciente en el negocio capitalista de las drogas. Esta relación también está basada en el control y el poder. Donde las Farc son fuertes, (Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo), los carteles pagan vacunas y servicios de protección. Donde los carteles predominan (Córdoba, el sur del Magdalena Medio y Putumayo, Ariari y los principales centros urbanos), las Farc no se meten con los traficantes. Donde ninguno de los dos manda la parada, (Norte del Magdalena Medio, Norte del Valle) se presentan combates frecuentes. Asesinatos se-

lectivos de líderes y confrontación armada son frecuentes en estas regiones.

El involucramiento en el negocio ilícito de las drogas comenzó cuando tropas de las Farc y el ELN fueron contratadas por los carteles para proteger los laboratorios, bodegas y vías de salida de la droga. En la misma forma que proceden con negocios legales, los insurgentes cobraban impuestos a los traficantes que son pagados, ya sea con dinero o con armas. En los últimos años las Farc y el ELN se han introducido gradualmente en el negocio, cultivando, procesando y vendiendo marihuana, cocaína y heroína. Muchas de las ventas se hacen a intermediarios, aunque hay informes de ventas de las Farc a traficantes en Panamá, Venezuela, Perú y Ecuador.

Este nexo con los traficantes ilegales de droga sirve como fuerza multiplicadora de los insurgentes al proveer ingresos e incrementar sus áreas de operación. La inestabilidad y ausencia de ley creada por los carteles de la droga crea un ambiente que los insurgentes explotan en su beneficio. A medida que los insurgentes ganan control de cada vez más extensas áreas en el país se incrementa el peligro de que Colombia succumba al peso de los insurgentes y se convierta, ya sea en un "narco-Estado" o en un Estado marxista. La última probabilidad es remota, pero la probabilidad de un *modus vivendi* entre los insurgentes y los carteles para "gobernar desde abajo" ha aumentado.

Esfuerzos del gobierno

Durante los ochenta las operaciones de la contrainsurgencia colombiana (Coin), establecieron grupos de autodefensa (conocidos como milicias) para combatir a los insurgentes. Propietarios de tierra fueron



reclutados por el ejército para financiar y formar parte de grupos orientados a defender su tierra. Dado que un gran porcentaje de estos propietarios eran narcotraficantes se desarrolló una fuerte conexión entre estos y el ejército. La declaración de guerra a los carteles de la droga en 1989 dio paso a una reacción violenta por parte de las milicias contra el gobierno; estas formaron nuevas milicias privadas, muchas de ellas patrocinadas por las Farc y el ELN, incrementando así el poder y prestigio de los insurgentes. Desde 1991, los esfuerzos de la Coin se han concentrado más en los tribunales que en el campo de batalla. Desgraciadamente, este enfoque ha corrompido extensamente, tanto a las

fuerzas armadas como al sistema judicial. La influencia y la cantidad de dinero comprometido son tan fuertes que es posible que se requieran décadas de esfuerzos para reformar las fuerzas armadas y los tribunales de justicia.

Las fuerzas armadas de Colombia (146.600 efectivos) están pésimamente preparadas para realizar operaciones de contrainsurgencia. El pasado ministro de defensa, Juan Carlos Esguerra, admite que el ejército carece del entrenamiento y capacidad de inteligencia para llevar a cabo efectivas operaciones de contrainsurgencia. El aislamiento de los puestos militares manejados por conscriptos pobemente entrenados, el peligroso desgobierno generado por los insurgentes y los narcotraficantes y la falta de voluntad política del gobierno afecta adversamente la moral de las tropas.

El presidente Samper propuso un incremento en el presupuesto para la seguridad nacional de \$2.8 billones en 1997 (casi el 10% del gasto del gobierno central). Adicionalmente, los colombianos más pudientes estarán obligados a comprar bonos



de guerra para recaudar \$421 millones destinados específicamente a la policía y a operaciones militares. Desgraciadamente, el presupuesto de inversión de capital ha sido reducido drásticamente, amenazando todo el proyecto. Algunas mejoras de la estructura de las fuerzas armadas incluyen la creación de una tercera brigada móvil (3.500 nuevas tropas), adquisición de equipos logísticos (aviones MI-17 y helicópteros halcones negros), equipos de comunicación y de visión nocturna. Estos esfuerzos son tan solo un comienzo, ya que esfuerzos anteriores de la Coin han demostrado que solo operaciones prolongadas y sostenidas pueden ser exitosas para erradicar a los insurgentes. También son necesarios cambios en la estrategia, distintas a guarniciones de tropas fijas; se requieren operaciones ofensivas para empujar a las Farc fuera de sus sitios normales de operación para remover la ventaja de luchar en terreno conocido.

El creciente costo de la insurgencia (tanto en dinero como en vidas) está lentamente consolidando el sentimiento de la opinión pública de estar a favor de una solución militar. Se está creando un consenso alrededor de la idea de incrementar una gestión centralizada del conflicto. Algunas soluciones propuestas incluyen las siguientes:

- Cambiar la estructura legal para la detención y proceso de los insurgentes, de tal manera que las fuerzas armadas puedan arrestar a las guerrillas para ser procesadas.
- Poner a la economía en pie de guerra.
- Incrementar la inversión de capital en materiales para la Coin.
- Desarrollar un plan estratégico para reorgani-

zar a los militares y desplegar las fuerzas fuera de las guarniciones.

- Implementar una legislación para proteger a los militares y la policía de los constantes cargos de violación contra los derechos humanos durante períodos de gobierno extraconstitucionales.

Desdichadamente, pocos observadores esperan que estas propuestas sean implementadas, por tanto, no es nada sorprendente que existan rumores de que el país está listo para una “guerra sucia” a fin de eliminar a la guerrilla y a quienes a apoyan. Esto resultaría en la suspensión de la mayoría de las libertades civiles, incrementando la impunidad de los militares y los abusos de derechos humanos.

Opinión, posición

La insurgencia continuará hasta el final de este siglo, dado el clima político del país y la capacidad de los militares. Los insurgentes están debilitando la capacidad de decisión del gobierno a través de los tradicionales canales de corrupción tan inherentes al sistema político colombiano. La urbanización creciente, el crecimiento de la población y la falta de una reforma gubernamental contribuyen a cambiar, no solo la naturaleza de la insurgencia, sino también las fuerzas del poder en Colombia. La riqueza creciente de las Farc y el ELN que garantiza el tráfico de drogas les da acceso a tecnología de avanzada, igual o superior a las de las fuerzas armadas. Esto, a su vez, incrementa el control del poder de la insurgencia sobre vastas zonas de Colombia.

Las Farc y el ELN se han concentrado en desarrollar el negocio de las drogas, en lugar de desarrollar una estrategia militar o la capacidad de derrocar al gobierno. Los insurgentes, que en el pasado declararon su intención de poner fin al capitalismo, están adaptando métodos capitalistas para su supervivencia y crecimiento. A medida que el

control sobre el territorio nacional disminuye las fuerzas armadas nacionales se dan cuenta que no pueden enfrentar, al mismo tiempo, la amenaza conjunta de los narcotraficantes y la guerrilla. Las guerrillas ideológicas se han convertido en bandidos, lo suficientemente ricos como para amenazar las instituciones democráticas de Colombia.

La pérdida de la democracia en Colombia amenazaría con la estabilidad de la región al intensificarse el ambiente de anar-

quía y desgobierno que ayuda al tráfico de drogas y a la corrupción, desde y a través de Colombia hacia Estados Unidos. Un narco-Estado complicaría el mantenimiento de las operaciones de contrainsurgencia que se desarrollan en la región. La fragmentación de Colombia en pequeñas y anárquicas regiones sin gobiernos admisibles dañaría la economía y estabilidad de la región, patrocinando la insurgencia en países vecinos, lo que podría requerir la intervención de Estados Unidos.

ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS CONTRA LAS DROGAS Y CONTRA LA INSURGENCIA

Debido a la preocupación sobre la violación de los derechos humanos, la asistencia de Estados Unidos a las fuerzas armadas colombianas es muy limitada. La asistencia contra las drogas es destinada principalmente hacia la Policía Nacional, y la asistencia a la Coin es estrictamente prohibida. Al momento se están realizando negociaciones para idear un sistema de proveer con fondos antidrogas a unidades específicas del ejército localizadas en áreas de tráfico de droga y que no hayan sido acusadas de violación a los derechos humanos. Las fuerzas armadas colombianas se rehusan a recibir tal asistencia.

IMPLICACIONES PARA ESTADOS UNIDOS: FACTORES POR CONSIDERAR

¿Puede Estados Unidos aceptar la pérdida de un régimen democrático en Sur América?

¿Puede aceptar la región la presencia de un Estado marxista en Colombia?

¿Puede Estados Unidos aceptar la presencia de un narco-Estado gobernado por el crimen organizado?

¿Se opondrían ciertas organizaciones internacionales (como la OEA) a cualquier tipo de intervención para restaurar un gobierno legítimo para la población colombiana?

¿Aceptaría Colombia cualquier tipo de presencia militar americana, aun para el caso de la supervivencia nacional?

¿Podrían las fuerzas armadas estadounidenses, al no tener experiencia en operaciones Coin por más de 20 años, ofrecer algún tipo de asistencia militar?

¿Podrían levantarse las restricciones en lo que respecta a la asistencia al ejército y la policía?

¿Podrían levantarse las restricciones existentes sobre la policía y el ejército, teniendo en cuenta la cuestión de los derechos humanos?

El gobierno de Colombia es responsable por la definición de reducciones de las libertades civiles durante un conflicto armado contra los insurgentes. ¿Puede el gobierno de Estados Unidos aceptar esta definición?

Jorge Giraldo Ramírez
Licenciado en Filosofía y candidato a
Magíster en Filosofía Política.
Director de la Escuela Nacional Sindical.

El *Manifiesto* reincide

Jorge Giraldo Ramírez

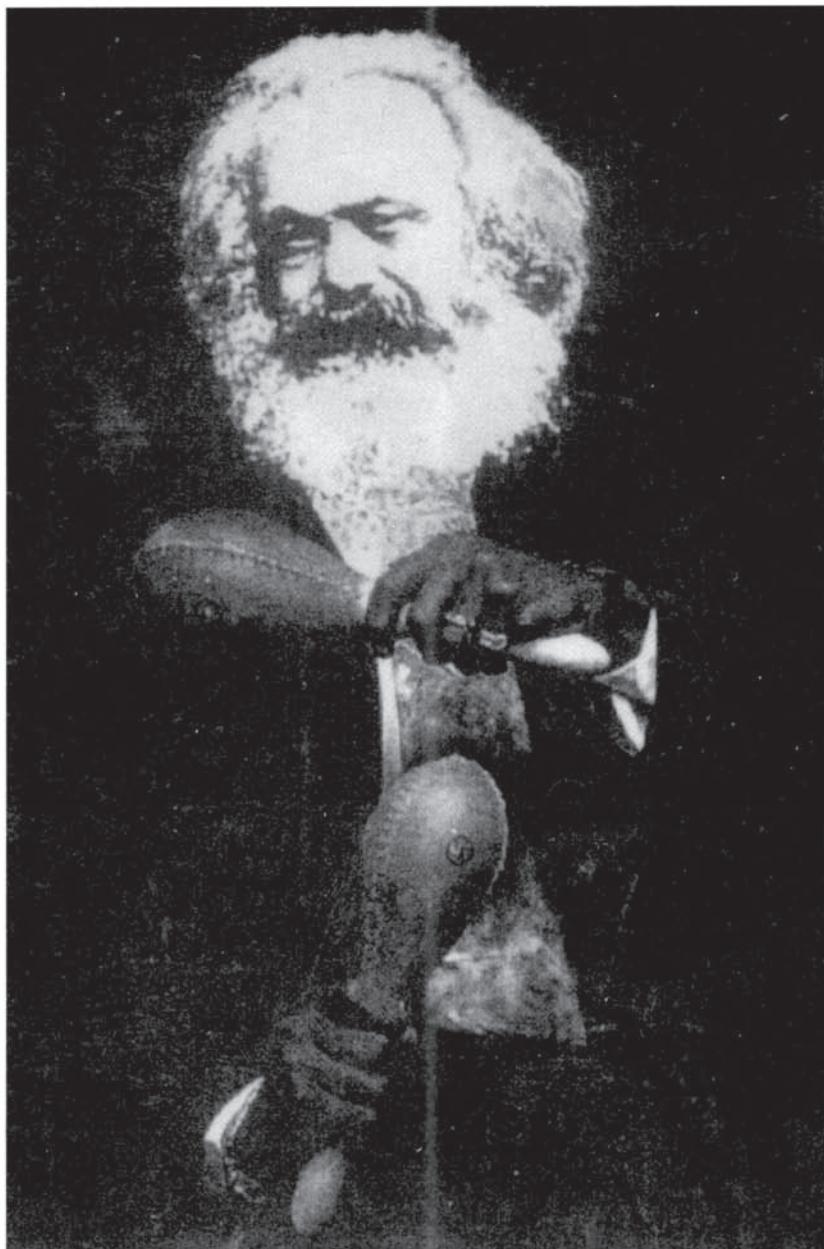
Sesquicentenario suena demasiado épico para nombrarlo y no es tiempo de epopeyas marxistas, pero el hecho es que hace 150 años (un impreciso día de febrero de 1848) fue publicada la primera edición del Manifiesto del Partido Comunista. Editoriales de todo el mundo están contribuyendo a superar las cifras históricas de tirajes del texto, mientras intelectuales, partidos y sectas efectúan una remembranza menos notoria.

El asunto parece poco usual. La importancia de Marx en la política y la teoría política de la humanidad en el último siglo es indudable, pero los 180 años de su natalicio (5 de mayo) pasaron inadvertidos, mientras se conmemora con fuerza la edición de la que pareciera una de sus obras menores.

I

El Manifiesto es, fuera de artículos de prensa, la pieza más corta¹ de Marx, hombre prolífico al escribir; por fuerza menos rigurosa que las demás de su autor y demasiado propagandística como para cultos científicos; catalogada entre las obras de juventud y, por tanto, de un período poco “marxista” de su autor (Althusser, Del Río). La impresión sobre su importancia teórica es engañosa.

1. Veintitrés páginas del original en alemán, 48 páginas en las últimas ediciones castellanas de El Viejo Topo -Madrid, 1997 y Crítica -Barcelona, 1998.



Víctor Sánchez, UNO MÁS, de la Serie *En el principio era el rítmico*, 1997 (Barcelona).

Hay otras maneras de verlo. El Manifiesto es la cumbre del proceso de construcción de los fundamentos filosófico-políticos de Marx: Ya ha marcado diferencias con su maestro en la *Critica de la filosofía del Derecho de Hegel* (1843)² y en los *Manuscritos de París* (1844); se ha separado de sus condiscípulos en *La cuestión judía* (1844) y *La miseria de la filosofía* (1845); ha puesto distancia con Feuerbach en *La ideología alemana* (1845).

Nunca más escribirá textos que pudieran clasificarse como filosóficos. Tampoco modificará en adelante su propuesta política y apenas introducirá algunas ampliaciones en la *Crítica del programa de Gotha* (1875).

La estructura del pensamiento de Marx está elaborada ya para 1848 y, en este entendido, a partir de allí coloca todo su empeño en la investigación de las “formas profanas” que encadenan al hombre en la esfera de la sociedad civil y, prácticamente con exclusividad³, a aquellas que considera decisivas: las económicas. Podemos decir que, una vez ordenada su concepción del mundo y marco político normativo, Marx se dedicó a especializarse y prepararse en el terreno desde el cual la nueva clase dirigente desataba el cambio mundial.

De algún modo el Manifiesto es la bisagra que enlaza toda la obra de Marx, es el punto de llegada de su reflexión filosófica y el punto motivacional de partida de su investigación económica. Es la más decantada expresión del pensador político más influyente de la modernidad que, a su vez, paradójicamente no escribió ningún texto de teoría política.

Bisagra y núcleo también del legado y testimonio marxianos, puesto que es la mejor expresión de su famosa Tesis Once sobre Feuerbach, “de lo que se trata es de transformarlo (el mundo)”, es el comienzo de la revolución “en la cabeza del filósofo”⁴, es la expresión de un compromiso y de una visión que orientará su itinerario intelectual.



2. La “Introducción” a este estudio es considerada, con justicia, por Maximilian Rubel como “germen del Manifiesto Comunista”, en *Karl Marx, Ensayo de biografía intelectual*, Buenos Aires, Paidós, 1970.

3. Exigencias del movimiento político lo distrajeron de este esfuerzo: *Las luchas de clases en Francia* (1849), *El 18 brumario de Luis Bonaparte* (1852), *La guerra civil en Francia* (1852), *La crítica del programa de Gotha*.

4. *Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel*, Bogotá, Eris, 1978, p. 112, Traducción de Rubén Jaramillo Vélez.



Víctor Sánchez, uno más de la serie *En el principio era el ritmo*, 1997 (Barcelona).

Con otras razones, los juicios sobre el Manifiesto de Eric Hobsbawm y Jacques Derrida coinciden con la afirmación y la hacen superlativa al contextualizarla para la historia y el presente. El tono del historiador inglés es cortante:

“este breve panfleto es... con mucho la pieza de literatura política más influyente desde la *Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano* de la Francia revolucionaria”⁵.

El filósofo posmodernista francés intenta primero ser prudente:

“dentro de la tradición filosófica conozco pocos textos, quizá ninguno, cuya lección parezca más urgente hoy”, para luego ser inquietantemente contundente:

“No hay porvenir sin Marx. Sin la memoria y sin la herencia de Marx”⁶.

La importancia del Manifiesto, más allá del peso histórico de los socialismos, parece revalorizarse desde diferentes perspectivas teóricas y precisamente en medio del derrumbe soviético. La novedosa y bella lectura que Marshall Berman nos presentó en 1988 pudo marcar, quizás, el comienzo de una serie de interpretaciones sugestivas que actualizan el texto y le hacen decir cosas para los oídos contemporáneos.

5. *Manifiesto del Partido Comunista*, Introducción, Barcelona, Edit. Crítica, 1998, p. 8.

6. *Espectros de Marx*, Madrid, Edit. Trotta, 1995, p. 27.

II

Este podría ser el *quid* de la discusión, la contemporaneidad del Manifiesto y del pensamiento de Marx, pues de su calado histórico no cabe duda⁷. De hecho, buena parte de los estudios recientes alusivos a él terminan haciendo la pregunta por su vigencia, desde Adam Schaff hasta el ya mencionado Hobsbawm⁸. La pregunta es ¿qué nos manifiesta hoy el Manifiesto?

Durante décadas muchos estudiosos se han regodeado en el examen de los anacronismos del Manifiesto Comunista, anacronismos que los propios autores comenzaron a revelar desde el prólogo a la edición alemana de 1872 en un acto que Derrida elogia preguntando:

“¿Qué otro pensador ha puesto jamás sobre aviso con respecto a este asunto de forma tan explícita? ¿Quién ha apelado a la transformación venidera de sus propias tesis?” (*Ídem*, 27).

Sin embargo, la historia es casquiana y va y viene. Por ejemplo, muchas afirmaciones de 1848 fueron inadecuadas para el período próspero del mundo capitalista de la segunda posguerra y después reverdecieron con la aplicación de los criterios económicos del neoliberalismo. Las interpretaciones de la letra del Manifiesto —como suele suceder con todo clásico— son múltiples y lo que parece extemporáneo suele recobrar actualidad despejando variables claves del problema, como sucede con el alegato firme de Hobsbawm acerca de la influencia de los partidos de origen obrero que hoy gobiernan 13 de los 15 estados de la Unión Europea.

Así que tales ejercicios de validación, sin menoscabarlos, podemos dejarlos de lado. Para algunos enfoques, es el caso de la filosofía política, lo que importa son otras cosas entre las que quiero resaltar tres:

- El diagnóstico sobre la dinámica y las contradicciones del capitalismo que muestra el vértigo del proceso modernizador, su cara de progresos así como sus potencialmente aterradoras consecuencias.

- El libreto emancipatorio que propone traspasando los alcances de la Revolución

Francesa cuando aún su herencia estaba cuestionada; libreto que involucra la política y la sociedad pero que las supera fijando el norte de una emancipación humana que signifique que “el libre desarrollo de cada cual será la condición para el libre desarrollo de todos”.

- La preocupación por las condiciones concretas de los hombres que dibuja un humanismo práxico. Preocupación que Bertrand Russell destaca como la novedad del socialismo, definiéndola como aquella “relación estrecha entre el ideal y los actuales sufrimientos de los hombres, que ha permitido que de las esperanzas de aislados pensadores surjan poderosos movimientos políticos”⁹.

Asuntos que, atendiendo las realidades de las sociedades modernas, denotan la brecha de proponer los fundamentos de una nueva forma de organización social, legitimada desde las condiciones de inequidad e indignidad para la mayoría de los individuos en el actual estado de cosas.

III

Y es que una de las peculiaridades de la propuesta de Marx, sentada en el Manifiesto es su invocación desde el futuro. Él busca en el devenir del capitalismo las condiciones que permitan el encuentro entre el pensamiento y la realidad, pero es desde un proyecto de futuro que lo hace. Manteniendo el respeto por los precedentes rebeldes socia-

7. El pensador liberal Isaiah Berlin cree que “el efecto que produjo en las generaciones subsiguientes no tiene paralelo, como no sea en la historia religiosa, y si su autor no hubiera escrito nada más el documento le habría asegurado perdurable fama”, *Karl Marx*, Madrid, Edit. Alianza, 1973, p 170.

8. Schaff, Adam, *El marxismo a finales de siglo XX*, Madrid, Edit. Ariel, 1991. Capella, Juan Ramón, *Los ciudadanos siervos*, Madrid, Edit. Trotta, 1993. Fernández Buey, Francisco, *Ni tribunos*, Madrid, Edit. Siglo XXI, 1996.

9. *Los caminos de la libertad*, Barcelona, Edit. Orbis, 1961, p 16.



Jorge: así como hay Marx, también existió Engels, que según los biógrafos serios fue el que escribió buena parte de lo que firma Marx, como siempre ocurre. H.S.

les, por la tradición comunista, por las expresiones de subordinación proletaria en el 48, Marx mantuvo una línea demarcatoria tras la cual amparó una propuesta de progreso y liberación que pudiera inaugurar la verdadera historia de la humanidad. La Comuna de 1871 conmovió su corazón, pero fueron evidentes sus discrepancias previas y sus críticas posteriores a la insurrección parisina.

El futuro esbozado en el Manifiesto es, en verdad, un futuro de largo plazo¹⁰, tanto como que en opinión de Hobsbawm solo ahora se cumplen algunas de sus previsiones pero, a diferencia del proyecto de los utopistas, esta “reforma solo consiste en que al mundo se le hace tomar conciencia”¹¹. Sin embargo, el Manifiesto expone otra crítica a las corrientes utópicas que muestra un Marx más futurable, es la crítica al dogmatismo de las doctrinas que se anclan en el pasado, que:

“se aferran a las viejas concepciones de sus maestros, a pesar del ulterior desarrollo histórico del proletariado”.

Ya sabemos que este temor de Marx al anquilosamiento, a la formación de sectas reaccionarias alrededor de su pensamiento le había hecho exclamar aquel “todo lo que sé es que no soy marxista”¹², que no es suficientemente popular.

La futurabilidad del Manifiesto y de los “espiritus de Marx” depende, en buena medida, de saber separarse de la tradición y acercarse a la realidad con ojos nuevos. Sería saludable, para un diálogo transparente con el texto y su autor, la demolición de la tradición marxista oficialista y conservadora. Esta idea, que los chinos llamaron durante su proceso reformista la “emancipación de la mente”, solo puede llevarse a cabo derrumbando los otros muros que el marxismo ordinario levantó alrededor de Marx y el Manifiesto.

10. Aquí cabría la distinción de Zubiri con el porvenir en cuanto que este está a la mano.

11. Carta de Marx a Ruge, 1843.

12. El testimonio es de Engels en cartas a Lafargue (1890) y Bernstein (1892).

Rossana Reguillo
Profesora-investigadora del Departamento de Estudios de
Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Profesora
Titular del Departamento de Estudios Socioculturales del Iteso.

Movimientos indígenas y esfera pública

Una agenda para el fin de siglo¹

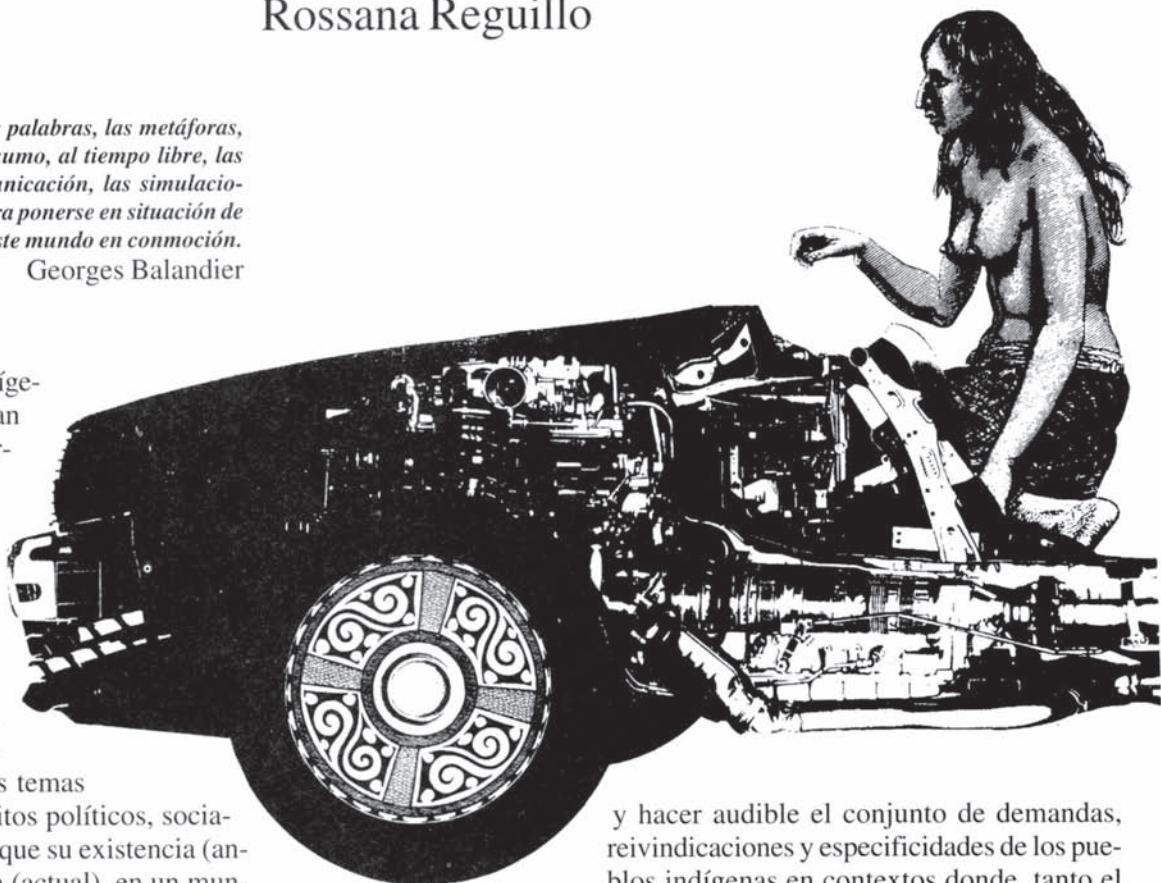
Rossana Reguillo

No basta con cambiar las palabras, las metáforas, las imputaciones (al consumo, al tiempo libre, las nuevas técnicas, la comunicación, las simulaciones y otras novedades) para ponerte en situación de comprender menos mal este mundo en commoción.

Georges Balandier

Los movimientos indígenas del continente han levantado una importante discusión para las sociedades contemporáneas que empieza a cobrar visibilidad. No es fortuito que en el umbral del próximo siglo los pueblos indígenas, alzados o no, se constituyan en uno de los temas centrales en los ámbitos políticos, sociales y académicos, ya que su existencia (ancestral) y su vigencia (actual), en un mundo que no logra resolver el problema de la diferencia y se desgarra en innumerables conflictos raciales, étnicos, religiosos, estos pueblos indígenas han cuestionado de fondo el modelo de desarrollo asumido por Occidente.

El primer asunto que se coloca como un tema de reflexión es cómo pensar los movimientos indígenas en su multiplicidad y heterogeneidad en un mundo que no es sólo indígena. Es decir, cómo volver visible



y hacer audible el conjunto de demandas, reivindicaciones y especificidades de los pueblos indígenas en contextos donde, tanto el mestizaje como las lógicas del mercado y de la globalización económica y la mundialización de la cultura tienden a diluir las dife-

1. Este texto no es sólo producto de la investigación y reflexión personal, debo mucho al diálogo que sin falsas concesiones pudimos establecer en el Seminario-taller para Comunicadores Indígenas Latinoamericanos, celebrado en la ciudad de Guatemala del 10 al 14 de febrero de 1998, promovido por la Wacc.

rencias o a reducirlas a una suma de expresiones culturales, sin atender las dimensiones políticas y económicas que un proyecto social incluyente y respetuoso de la diversidad implica.

Este planteamiento apuntaría a la necesidad de elaborar una estrategia político-comunicativa que permitiera que los diferentes pueblos indígenas, en igualdad de circunstancias con relación al conjunto de actores sociales, colocaran en el espacio público su propia voz y su visión-versión de la historia, de la cultura, del mundo. Sin embargo, para que ello sea posible como práctica cotidiana, es fundamental analizar lo que una estrategia de tal naturaleza supone.

Una primera dimensión pasa por un sistema y un proceso de comunicación desigual. Ello quiere decir que una de las principales contradicciones que enfrentan los grupos sociales, en este caso los pueblos indígenas, es la dificultad del acceso a los grandes medios de comunicación que obedecen, en su gran mayoría, a intereses comerciales articulados a proyectos políticos que devienen en procesos homogeneizadores que tienden a “masticar” la diferencia y a convertirla en una mercancía “folclorizada”, “exótica” y, por tanto, superficial.

Si bien este mecanismo no es novedoso, es decir, desde siempre las culturas dominantes han tratado las diferencias culturales a través de sus rasgos externos (Giménez, 1997), que se manejan como “curiosidades” sin contexto², hoy día, sin embargo, el desarrollo tecnológico y la omnipresencia de los medios de comunicación convierten a esta problemática en un asunto de vital importancia. La creciente interconexión tecnológica entre sociedades favorece el simulacro de una conexión y de un intercambio sociocultural, cuando las evidencias empíricas señalan que en los flujos comunicativos globales existen polos dominantes de producción y de enunciación y esto mismo se reproduce a escala nacional y regional. Es indudable que existe interconexión, pero ésta es asimétrica, lo que significa que contar con más medios, con más dispositivos tecnológicos no se traduce necesariamente en más democracia ni en mayor equidad.

Este argumento es importante para plantear que la visibilidad de los pueblos indígenas en el espacio público (mediático o no), no es una cuestión de voluntarismo y conduce a la necesidad de hacer transitar el problema tal y como fue concebido, por ejemplo, durante la década de los setenta y los tempranos ochenta, en sus enfoques de “comunicación popular y alternativa” que acuñó aquella poco afortunada fórmula para denominar los dispositivos tecnológicos y sus soportes comunicativos utilizados en el trabajo de promoción como ¡medios pobres!³

Es indudable que el boletín impreso en mimeógrafo, el radio-foro, la pequeña radio comunitaria, el “papelógrafo”, entre otras “alternativas”, han cumplido un papel fundamental en el proceso de configuración y consolidación de las identidades sociales excluidas de los grandes circuitos de comunicación, pero el mundo se ha transformado radicalmente y hoy estas estrategias y sus soportes tecnológicos resultan insuficientes, no sólo en términos de su impacto político-cultural, sino en su misma dimensión intragrupal, ya que los actores sociales se ven interpela-

2. A manera de ejemplo, el vestuario, la comida, algunas prácticas o ceremonias religiosas son tratadas de manera superficial y en sí mismas, haciendo desaparecer la cosmovisión y el proyecto que les da origen, es decir, en vez de ser considerados como expresiones o cristalizaciones de una cultura se transforman en la cultura misma. En esta operación hay una reducción del espesor cultural de los grupos; se trata de una sustitución de las identidades por algunos de sus atributos externos.

3. Un ejemplo de la perspectiva con la que se abordaron los problemas de la comunicación desigual puede encontrarse en el importante libro dirigido por Máximo Simpson *Comunicación alternativa y cambio social*, en su segunda edición por Premia Editora, 1989, México. Por ejemplo, en el texto introductorio señala el propio Simpson “...en algunos casos se define la comunicación alternativa -concepto que nosotros utilizamos de manera genérica y no excluyentemente en oposición a los medios masivos, confiriéndole un carácter eminentemente artesanal y autogestionario...” (p. 31).

dos por una multiplicidad de discursos y de imágenes, donde estos “medios pobres” terminan por desdibujarse y por aumentar la franja de incomunicabilidad entre los grupos sociales.

Se trata, entonces, de reconsiderar una estrategia que sea capaz de romper con la automarginación, en el sentido de desbloquear la introyección de la marginalidad⁴ y, por supuesto, esto tampoco es una cuestión de voluntarismo declarativo, sino un trabajo de largo plazo y, sin embargo, urgente.

Comunicar la identidad

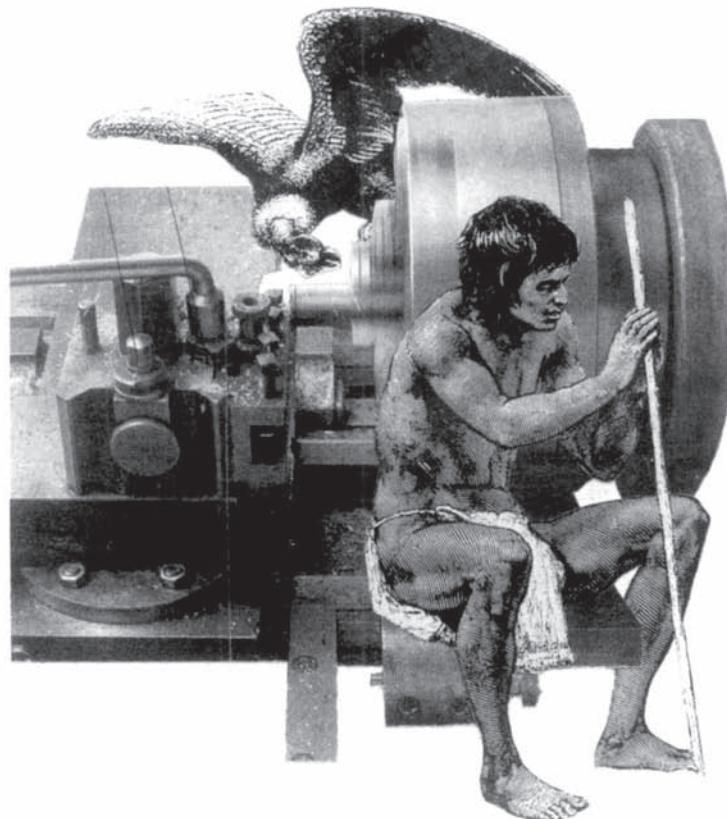
Ha dicho Martín Barbero (1995) que “hoy como nunca la comunicación es una tarea de envergadura antropológica”. Las implicaciones de esta afirmación pasan, en primer lugar, por la reflexión en torno a los modos en que diversos actores sociales, centralmente, académicos y educadores-comunicadores populares, conciben la producción-circulación de comunicación. Es decir, la pregunta de fondo es si esta práctica o proceso puede ser pensada como la fase inicial e instrumental de la búsqueda de visibilidad y reconocimiento de los actores excluidos de los circuitos dominantes y “legítimos” de la comunicación.

Conferir a la comunicación un sentido antropológico es romper precisamente con sus imperativos tecnológico-instrumentales y colocar al centro del debate la cuestión de la identidad de los actores sociales como afirmación y diferenciación en el espacio social. Es decir, acceder a la comunicación implica necesariamente el trabajo de conquista de la propia voz y la propia imagen en un proceso dinámico de interacción y negociación con otras voces e imágenes. Sin embargo, estos procesos de interacción no son horizontales ni asimétricos, como se ha señalado ya, lo que se traduce en una configuración de un espacio comunicativo desigual en el que se objetivan y se “naturalizan” los mecanismos de exclusión social.

Así termina por considerarse “natural” que los grupos marginales, las llamadas minorías, carezcan de presencia “real” en este espacio comunicativo y se reduzcan a los

ámbitos de una comunicación comunitaria y local. Ello está bien visto y es, incluso, apoyado por gobiernos y agencias internacionales.

Pero a los grandes circuitos los pueblos indígenas acceden sólo mediante la “representación” de diversos “mediadores” que atienden, a su vez, a diferentes proyectos políticos y a una particular manera de interpretar la problemática que experimentan los indígenas, lo que genera una extrema vul-



4. La marginalidad se aprende, se hace piel y mirada. La colaboración del dominado en su propia dominación es el arma política de opresión por excelencia, es un mecanismo a través del cual se expropia a los actores sociales la certeza de su identidad y de su competencia social. Este mecanismo ha sido estudiado por diferentes autores, para un análisis empírico de cómo operan estos procesos, ver R. Reguillo *En la calle otra vez. Las bandas juveniles: identidad urbana y comunicación*. Iteso, Guadalajara, 1995 (2da. edición corregida).

nerabilidad en la medida en que “lo indígena” se convierte en una categoría de clasificación externa dotada de ciertos “contenidos”, según la perspectiva de los mediadores. Algunos ejemplos de esta operación son los siguientes:

- a) el indígena se construye en referencia al pasado. Un glorioso e histórico pasado sin conexión con el presente;
- b) la reducción del indígena, como ya se anotó antes, al conjunto de manifestaciones y expresiones externas, que inversamente al procedimiento anterior, construyen al indígena como anclado en el presente;
- c) el indígena como la única alternativa “verdadera” al caos social que hoy día se experimenta; guardianes puros de la “esencia” humana;
- d) la presentación del indígena como “lastre” u obstáculo para la modernidad, al que hay que incorporar al proyecto dominante;
- e) el indígena como enemigo de la globalizada y homogénea sociedad contemporánea, al que hay que eliminar.

En estas operaciones discursivas que pueden coexistir en una misma sociedad y, que sin mucho esfuerzo, pueden “descubrirse”, tanto en los discursos políticos como en los medios de comunicación, lo que se ofrece son esquemas clasificadores que van del mal al bien absoluto y que en términos generales hacen una oposición drástica entre el pasado y el presente: el indígena “bueno”, del cual debemos sentirnos orgullosos, está en el pasado; mientras que el indígena “malo”, “tonto”, “incapaz” está en el presente. A pesar de las diferencias en los modos de construcción del “tema” indígena hay en estas posiciones diversas una coincidencia: la incapacidad, de unas y otras para reconocer al sujeto histórico que da origen a esos discursos y, por ende, una descalificación de la capacidad de los pueblos indígenas para asumir su propia representación, es decir, su propia voz.

Se trataría entonces de generar las condiciones para que los pueblos indígenas, con sus propias diferencias y contradicciones se apropien, no sólo de la dimensión instrumental de la comunicación, sino de un lugar legítimo para expresarse. Y ello implica un trabajo intenso de sensibilización y “seducción”⁵ en el complejo y multidimensional mundo de la interacción social.

Lo que remite a una problemática de no fácil resolución, la diferencia entre legalidad y legitimidad.

En el transcurso del último decenio y de maneras diversas y, sobre todo, a ritmos diferentes, en los países de la región, es decir, en Latinoamérica se ha avanzado en la formulación de leyes, reglamentos, políticas públicas en diferentes ámbitos, lo cual, sin duda, es resultado (y no graciosa concesión de los poderes) del intenso movimiento de una sociedad civil que se muestra más vigilante y activa en lo que toca a sus derechos, que interesada en la toma directa del poder. En estos procesos de negociación y pugna por la legalidad se ha descuidado el trabajo en torno de la legitimidad, es decir, la lucha por el reconocimiento y la inclusión de lo diferente, de lo “otro” en el espacio público, que tiene que ver más con los modos en que una sociedad se percibe a sí misma y a su historia, sus valores, el espacio que otorga a sus miembros y el modo en que nombra la vida, que con las leyes y los reglamentos, que no son siempre ni necesariamente la expresión directa de esa cultura incorporada y elevada a creencia orientadora de la vida.

Puede contraargumentarse que toda legalidad engendra, tarde o temprano, una legitimidad y que en tal sentido es importante “dar la batalla” legal, es decir, buscar, por ejemplo, representación indígena en los congresos, legislar en torno al territorio, al derecho a la propia lengua, a la propia religión. Sin detrimento de la importancia de una legislación que pueda garantizar los derechos

El primer asunto que se coloca como un tema de reflexión es cómo pensar los movimientos indígenas en su multiplicidad y heterogeneidad en un mundo que no es sólo indígena. Es decir, cómo volver visible y hacer audible el conjunto de demandas, reivindicaciones y especificidades de los pueblos indígenas en contextos donde, tanto el mestizaje como las lógicas del mercado y de la globalización económica y la mundialización de la cultura tienden a diluir las diferencias o a reducirlas a una suma de expresiones culturales, sin atender las dimensiones políticas y económicas que un proyecto social incluyente y respetuoso de la diversidad implica.

5. Ya Gramsci se refería a las dos formas de acceder a la hegemonía: el dominio cultural, que tiene que ver con estrategias de opresión y control; y la dirección cultural, que tendría que ver más con formas de seducción, de conquista paulatina del otro. Ver A. Gramsci, *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno. Cuadernos 1*. Juan Pablos editor, México, 1975.

de los pueblos indígenas es importante enfatizar que esto se convierte en una tarea “cuesta arriba” o conflictiva e, incluso, imposible cuando no se acompaña de un proceso de interlocución que permita la transformación de los imaginarios y las prácticas sociales.

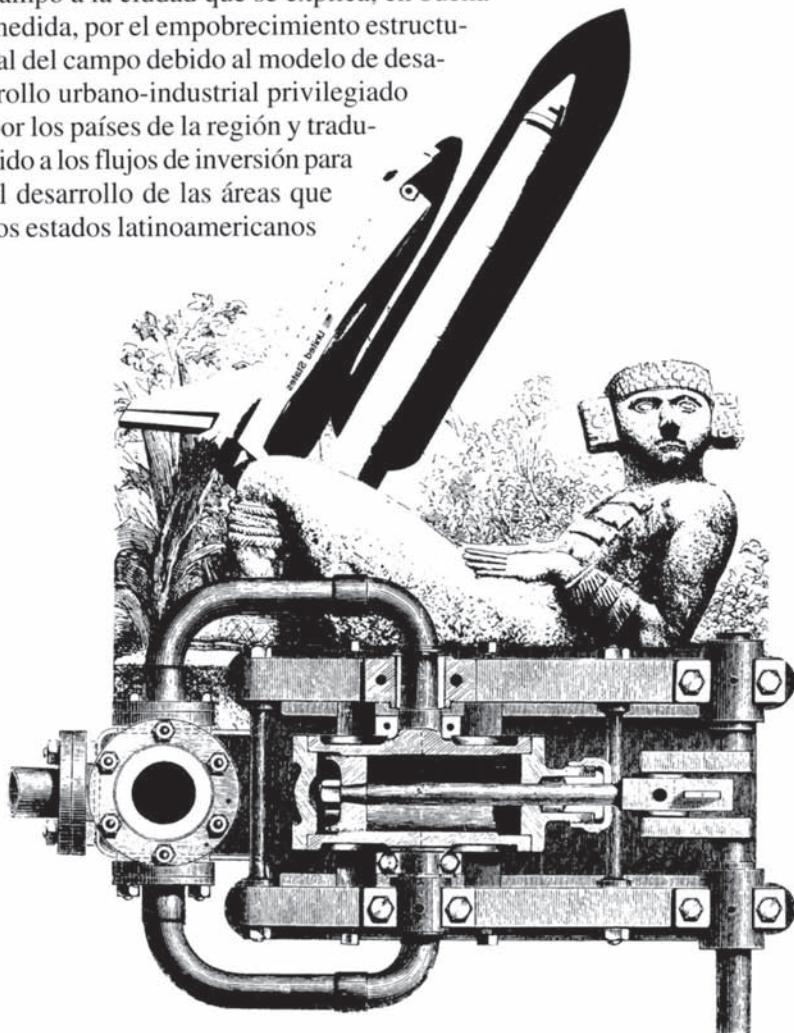
La modernidad latinoamericana, cuya etapa de arranque, con diferencias y matizadas, puede ubicarse en la década de los treinta⁶ se hizo a partir de la importación de patrones y modelos exógenos que comportaban su propio régimen de legitimidad. México, Argentina, Brasil, como los ejemplos más acabados de este proceso, asumieron que el acceso a la modernidad implicaba la “aceleración” de la industrialización y de la tecnología; aunada a estos elementos, es en esta etapa cuando se da la transfiguración de las ciudades del continente, la migración del campo a la ciudad que se explica, en buena medida, por el empobrecimiento estructural del campo debido al modelo de desarrollo urbano-industrial privilegiado por los países de la región y traducido a los flujos de inversión para el desarrollo de las áreas que los estados latinoamericanos

consideraron prioritarias. Este proceso, además de las implicaciones económicas, generó las condiciones para el surgimiento y extensión de un imaginario que fue configurando los sistemas de valoración y legitimidad de las sociedades: la ciudad por encima del campo; la industria modernizada sobre los modos de producción artesanal y familiar; el centro frente a la periferia y la exaltación de una clase media profesional ilustrada que sería la responsable de hacer el sueño de esa modernidad, una realidad.

La forma urbana y la tecnología como el entorno ideal, administrado desde un centro fuerte por unos operadores altamente calificados así encarnó ese ideal del progreso que en muchas partes del continente terminó por convertirse en sinónimo de modernidad. Lo que quedó por fuera, espacios, prácticas y actores pasaron a la descalificación por inutilidad.

La realidad que hoy se experimenta no agota su explicación en el llamado “neoliberalismo”, sino en un largo proceso histórico que favorece que la lógica del mercado y el proyecto neoliberal avancen —no sin tropiezos— en el continente. Lo que esta pequeña desviación de la ruta principal permite es la de colocar al centro de este debate la necesidad de replantear el tema de la comunicación de los excluidos como una tarea política y cultural.

Se trata de remontar no sólo años sino siglos de historia y de provocar la reflexividad⁷ de la sociedad. Es decir, desmontar los mecanismos que le otorgan a un orden



6. Para un análisis fino de la modernidad en el continente ver Martín Hoppenhayn, *Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina*. FCE, México, 1995.

7. Por reflexividad, la sociología constructivista entiende el proceso de “pensar el pensamiento con el que pensamos”, en otras palabras, hacer conscientes los mecanismos a través de los cuales percibimos y atribuimos valores. Ver, por ejemplo, P. Bourdieu y L. Wacquant, *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. Grijalbo, México, 1995) y J. Ibáñez, *El retorno del sujeto. La investigación social de segundo orden*. Siglo XXI, Madrid, 1994.

social un sentido “natural”: es “natural” que los indígenas sean pobres, es “natural” que sean excluidos, es “natural” que sirvan como elemento de “ornato” en las fiestas cívicas y “natural” (¡pobrecitos!) que no sepan expresarse.

Estos modos de representación del y de lo indígena, mucho más extendido de lo que suele suponerse, se constituyen en el “enemigo” para vencer mediante una estrategia comunicativa y fundamentalmente simbólica, que sea capaz de rebasar lo meramente instrumental.

En el planteamiento habermasiano en torno a la teoría de la acción comunicativa (Habermas, 1989) se distinguen cuatro tipos de acción, a saber: la estratégica, la regulada por normas, la dramatúrgica y la comunicativa.

Atendiendo al tema que nos ocupa interesa discutir la acción estratégica y la acción dramatúrgica. Mientras que la primera tiende al uso de códigos convencionales y controlables, en la medida en que lo que está en juego es el éxito de la acción, en la segunda, es decir, en la acción dramatúrgica, lo que mueve a la selección de ciertos códigos es la necesidad de la representación expresiva de la subjetividad.

Lo anterior significa que en la acción estratégica el éxito de la acción se convierte en el referente de ella misma, por tanto, todos los recursos expresivos se organizan en función de su utilidad o inutilidad para conseguir ciertos resultados. Para los portadores de una identidad que reivindica ciertos fines y que pueden denominarse “identidades estratégicas” los elementos simbólicos (aunque tengan un papel importante) se subordinan al proyecto y adquieren relevancia en la medida en que son útiles para la consecución de ciertos objetivos; así no importará camuflar la identidad o “sacrificar” ciertos objetos emblemáticos, adecuar los tonos y los estilos discursivos, en aras de los resultados. Para el movimiento indígena, por ejemplo, en lucha por el reconocimiento, pudiera ser más importante obtener resultados que “parecer” miembros de un movimiento indígena.

En la acción dramatúrgica los elementos simbólicos ocupan, por el contrario, el

primer plano, los portadores de estas “identidades dramáticas” se organizan en torno a decisiones expresivas que se convierten en referencias de la acción, se trata de hacer aparecer la identidad con toda fuerza y visibilidad, no hay rasgos sacrificables ni negociación posible, ya que estos elementos simbólicos constituyen el sentido mismo de la identidad.

Este esquema teórico no existe de manera químicamente pura en la realidad, ya que no es posible pensar en *estrategia sin acción dramatúrgica*, y de igual manera la dramatización de una identidad no puede sustraerse a los fines y a la búsqueda de ciertos resultados, cualesquiera que estos sean.

Quizá uno de los principales problemas que hoy enfrentan, no sólo los grupos excluidos sino, de manera importante, los partidos políticos sea precisamente el haber subordinado durante años a discursos planos, sin matices, carentes de imaginación la enorme fuerza de lo simbólico y la posibilidad que esto representa para la construcción de la intersubjetividad, como condición fundamental para la legitimación de representaciones y prácticas sociales. Y, en sentido inverso, haber sacrificado un proyecto en aras de la defensa a ultranza de la dimensión expresiva de una identidad.

Hoy cuando las fuerzas del mercado se han apropiado de esta doble lógica y direccionalidad resulta insuficiente la estrategia sin dramatización, y peligrosa la dramatización sin estrategia. Lo que se juega en el espacio comunicativo es la aceptación y reconocimiento de las identidades sociales⁸ diferenciadas. Y en esto se trata mu-

Distintos pensadores coinciden en que la mayor crisis que enfrenta la sociedad contemporánea es el estallamiento de los relatos de la modernidad y de su racionalidad. Crisis que se expresa en un sentimiento de incertidumbre e indefensión, de deterioro en los mecanismos tradicionales de gestión y representación política, en el desdibujamiento de las creencias orientadoras y, en contraposición, en la proliferación de “ofertas de salvación” y de certidumbres.

8. El movimiento zapatista que emerge en el sureste mexicano en 1994 ha dado muestras de una intelección muy fina del problema de la visibilidad y de la necesidad de dar legitimidad a su causa. Hay un manejo preciso de los códigos, de los objetos emblemáticos, de los símbolos pero siempre en referencia a un proyecto. En algunos casos el traje ceremonial indígena que marca la diferencia con sus interlocutores oficiales; en otros casos, el uso de los símbolos patrios como la bandera nacional, el himno, para marcar su “mexicanidad” y su pertenencia a la nación, además de un

cho más de una lucha contra convicciones e imaginarios profundamente arraigados que de un aumento en la expedición de leyes.

Seguir apostando por la “capacitación técnica” como única posibilidad de acceso al espacio público sin atender a las transformaciones sociales, a los discursos y recursos de los “nuevos” medios de comunicación, al análisis y aprovechamiento de las técnicas, formatos y géneros que le sirven de soporte a la comunicación, pero especialmente, disociar esta tarea de las dimensiones antropológicas de la comunicación, es decir, de los actores sociales, puede terminar por anular el mayor esfuerzo que en estos momentos realizan las sociedades, la búsqueda de un proyecto incluyente, con respeto a la diferencia en la igualdad.

La sociedad incluyente, un desafío comunicativo

Distintos pensadores contemporáneos coinciden en que la mayor crisis que enfrenta la sociedad contemporánea es el estallamiento de los relatos de la modernidad y de su racionalidad. Crisis que se expresa en un sentimiento de incertidumbre e indefensión, de deterioro en los mecanismos tradicionales de gestión y representación política, en el desdibujamiento de las creencias orientadoras y, en contraposición, en la proliferación de “ofertas de salvación” y de certidumbres.

Es en ese contexto y en coincidencia con la conmemoración de los 500 años de la conquista, en el que los movimientos indígenas se hacen visibles y presentes en el debate social. Cuando los estados nacionales habían dado por saldadas las diferencias, los movimientos indígenas y otros movimientos emergentes (mujeres, jóvenes, movimientos ciudadanos) ponen en crisis el modelo de la modernidad latinoamericana.

Los indígenas salen de la “reservación” y colocan el asunto en el mismo corazón de las metrópolis, de lo urbano, en los congresos y legislaturas y en los medios de comunicación, que aunque sea por una cuestión de *rating* se ven obligados a abrir espacios a la discusión del tema indígena. En el pro-



ceso de visibilización aparece con fuerza, por ejemplo, la afirmación del orgullo étnico al interior de unas sociedades que le apostaron a la “blanquización”.

No es poca cosa el efecto de choque que esto tiene, en el sentido de que posibilita nuevas vías de discusión, es decir, ya no se trata de la incorporación de un montón de

lenguaje que les ha valido (muchas críticas, es cierto) la sensibilización y simpatía de una parte importante de la sociedad, que encuentra en ese discurso pleno de formas, metáforas e imágenes, una alternativa interesante al discurso político tradicional. Ver, R. Reguillo: “Chiapas, el otro rostro de la modernidad mexicana”, en *Nómadas*, No. 1, San Juan de Puerto Rico, 1993.

excluidos a la modernidad oficial, sino de encontrar mecanismos que permitan preguntar, dialogar y hacer realidad un principio de convivencia social que haga factible la coexistencia de identidades diferenciadas con sus propios ritmos y especialidades.

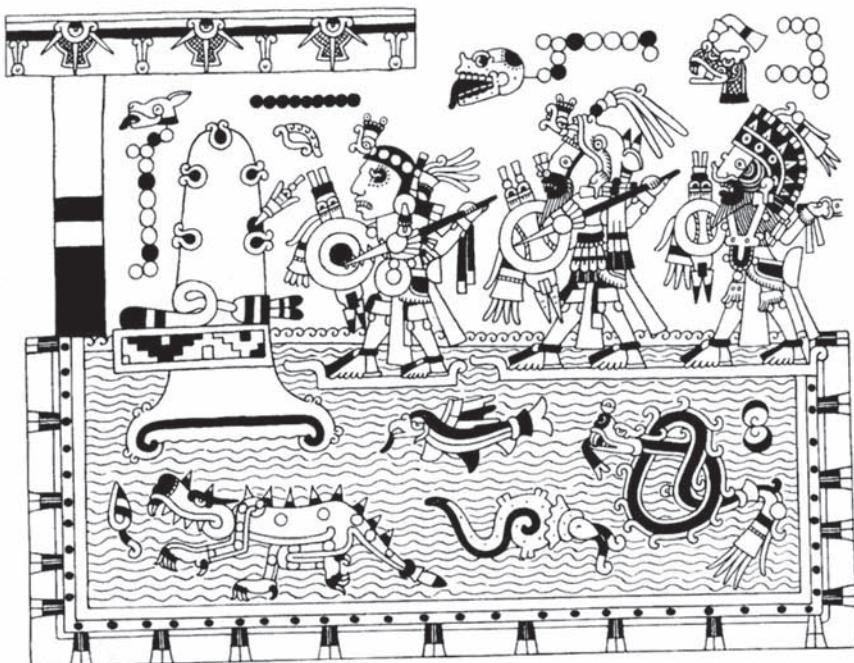
En el más reciente libro del sociólogo francés Alain Touraine, cuyo mero título es ya indicativo de la discusión que en él se aborda (*Pourrons-nous vivre ensemble?*)⁹, se afirma que el problema del siglo es “vivir juntos, a la vez iguales y diferentes”. Este desafío implicaría para el autor “salir de los imperativos del deber ser y reconocer en cada uno el derecho a la capacidad de combinar su identidad cultural con su participación en los universos de la técnica”.

La inclusión no significa la anulación de la diferencia, así como tampoco la defensa de una identidad debiera significar cerrarse al exterior en una especie de autismo que a la larga es una forma de suicidio en un mundo que de manera irreversible está cada vez más interconectado.

A ese respecto, me parece importante citar una parte del interesante y crítico diálogo que el subcomandante Marcos, uno de los líderes del movimiento zapatista, sostiene con Yvon Le Bot, sociólogo francés y director del Centro de Análisis e Intervención Sociológica de la Escuela de Altos Estudios de París¹⁰. Al comentario de Le Bot en torno al desgaste que puede significar para el zapatismo la resistencia, el Subcomandante Marcos, responde:

“El zapatismo, como cualquier fuerza, tiene que lanzar iniciativas continuamente para hacerse presente en el espacio político y para ampliar su horizonte. La resistencia entendida como “me encierro y aguento” significa el aniquilamiento, no sólo para el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), también para cualquier fuerza social no armada. Resistir aislado es renunciar a la vida, pues, aniquilarse. No podemos imponer nuestras decisiones al gobierno, o sea, no podemos obligarlo a que mande obedeciendo, pero sí podemos tomar iniciativas, y eso sólo va a ser posible si el espectro político se abre (...) Eso no significa abandonar una línea política sino edificar relaciones (...”).

El argumento que coloca el subcomandante zapatista se vincula a una pregunta de fondo para los movimientos indígenas ¿cómo capitalizar, es decir, cómo aprovechar el enorme capital político-simbólico que los pueblos indígenas del continente han cosechado durante esta década a través de esa interrelación a la sociedad?, en palabras más simples es ¿cómo transformar la “simpatía” que



provocan en buena parte de la sociedad sus planteamientos, en alianzas?

No hay en esta pregunta ningún sentido instrumental, sino una alternativa para oponer a la intolerancia, la exclusión y el autoritarismo y darle juego a la diversidad. Ello supone un enorme esfuerzo de todos, que implica un replanteamiento del modo en que se ha concebido el desarrollo social.

9. Publicado por Fayard, París, 1997. La traducción al español es *¿Podremos vivir juntos?*

10. Este diálogo se encuentra reproducido en el libro de Y. Le Bot *Subcomandante Marcos. El sueño zapatista*. Plaza & Janés, México, 1997. Se sugiere al lector interesado especialmente, el apartado titulado “Resistencia y apertura”, pp. 304-314.

El viejo esquema que clasificaba a las sociedades como modernas (complejas) y tradicionales (simples) no puede seguir operando, las evidencias indican que la complejidad es ya una dimensión constitutiva del orden social que se expresa a nivel planetario en múltiples planos y a diferentes escalas, entender la modernidad como “una vasta red de signos heterogéneos (Hopenhayn, 1995) es asumir la enorme riqueza, sin paternalismos y sin retórica, de la que son portadores los pueblos indígenas. Lo que supone para estos pueblos, también, una apertura a las distintas cosmovisiones que hoy habitan el mundo. Para ello es fundamental un diálogo de fondo entre iguales, lo que requiere de un espacio público que favorezca el libre intercambio de información y la discusión y entendimiento entre racionalidades y sensibilidades distintas, que no tienen por qué representar una amenaza para la existencia de “mí” propio grupo de adscripción.

Los ciudadanos en tiempos de la globalización

La reformulación a los códigos dominantes de la política ha sido posible mediante la emergencia de un discurso ciudadano que ha rebasado a las tradicionales formas expresivas. Se puede hablar hoy de una “culturalización de lo político”, que no es otra cosa más que el peso creciente de las orientaciones culturales (creencias, valores, adscripciones identitarias) en la esfera política. Se habla, incluso, de la ciudadanía cultural (Rosaldo, 1991) que articulada a los derechos civiles reivindica el derecho a la diferencia sin que ello se traduzca en desigualdad.

En la Conferencia Intergubernamental de la Unesco sobre políticas culturales para el desarrollo “*El poder de la cultura*”, realizada en marzo de 1998 en la ciudad de Estocolmo, cuyo objetivo es “poner a la cultura en el centro del corazón del desarrollo” (*La jornada*, 30/03/98) se contó, por primera vez, con la participación de cientos de ONGs que debatieron con los representantes gubernamentales de 140 países miembros. El director general de la Unesco, Fe-

derico Mayor, dijo en la inauguración de la conferencia:

“La diversidad es una realidad que debemos aceptar, a veces da miedo, incomoda, pero hay que demostrar sus ventajas y transformarlas en un proyecto colectivo de desarrollo para aprender a vivir juntos...” (*La jornada*, 30/03/98).

El que un corporación como la Unesco se abra a la participación de organismos no gubernamentales y que coloque al centro de su debate el reconocimiento a la diversidad es un indicativo de que los tiempos han cambiado y que la sociedad organizada ha logrado abrir espacios y hacerse oír por los poderes gubernamentales. Es este movimiento ciudadano, el que los gobiernos de países desarrollados o no, tendrán como interlocutor cada vez más visible, más fuerte, más organizado y, por tanto, más “incómodo”.

En los procesos de globalización no sólo se han “globalizado” los capitales, los productos, los servicios; se ha internacionalizado la sociedad, como un efecto no previsto por la lógica del mercado. Y hay en esto una fortaleza que puede hacer la diferencia en la lucha por la inclusión de los pueblos indígenas en la sociedad y, por ende, en el espacio mediático, a condición de abandonar cualquier afán redencionista que puede devenir en fundamentalismo.

En tal sentido, una tarea urgente para los movimientos indígenas es la incorporación en su agenda del tema “ciudadano”. La “ciudadanía” puede constituirse en una categoría clave para articular a su reivindicación cultural las dimensiones nacionales y supranacionales que se están redefiniendo aceleradamente. Es decir, pienso que sería un error de consecuencias graves que en la búsqueda de visibilidad, legitimidad, justicia y equidad los movimientos indígenas se aislaran de la discusión que, de cara al próximo siglo, será crucial: el entrelazamiento y entrecruzamiento de los distintos planos (local, nacional, global) en que habrán de moverse las sociedades¹¹.



11. Un texto que discute de manera espléndida estos aspectos es el de Renato Ortiz, *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1997.

Pensar, por tanto, que la producción de imagen —en términos comunicativos— es una tarea local y restringida a los ámbitos comunitarios, o que se trata exclusivamente de una cuestión de dominios tecnológicos es seguir contribuyendo al simulacro de que un activismo en esta línea se traduce necesariamente en democracia. El ciclo de urgencias en que se ha convertido la sociedad contemporánea requiere de la capacidad para moverse en diferentes planos, lo que resulta imposible sin proyecto y sin imaginación.

Para las agencias financieras y las ONGs, esto supone perder el miedo a “politicizar” su trabajo. La “política” se ha convertido en una mala palabra porque por demasiado tiempo la sociedad ha declinado su responsabilidad y ha permitido que “los profesionales” la conviertan en su coto exclusivo. Darle espesor al trabajo comunicativo es, sí, una tarea de “envergadura antropológica” como lo señala Martín Barbero, que requiere el desmontaje de las falsas certidumbres, lo cual es centralmente una actividad política.

El momento actual ha sido caracterizado por Balandier (1994) como una etapa de riesgo y posibilidad. El miedo al cambio, el miedo al otro, el miedo a tener miedo, aunado al desencanto y a la aparente ausencia de alternativas se han convertido en arma de gestión y control social. La comunicación es una posibilidad para oponer al miedo difuso que genera Ah Puch (Dios maya de la muerte), porque del lado de la palabra, en su sentido pleno, está Hunab Ku (el Dios creador).

BIBLIOGRAFIA

- Balandier, Georges (1994). *El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento*. Gedisa, Barcelona.
- Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant (1995): *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. Grijalbo, México.
- Giménez, Gilberto (1997). “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, en *Frontera Norte* No. 18, julio-diciembre. El Colegio de la Frontera Norte, México, pp. 9-28.
- Gramsci, Antonio (1975): *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno. Cuadernos 1*. Juan Pablos editor, México.
- Habermas, Jürgen (1989). *Teoría de la acción comunicativa*. 2 Taurus, Buenos Aires.
- Hopenhayn, Martín (1995). *Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina*. FCE, México.
- Ibáñez, Jesús (1994). *El regreso del sujeto. La investigación social de segundo orden*. Siglo XXI, Madrid.
- Le bot, Yvon (1997). *Subcomandante Marcos. El sueño zapatista*. Plaza & Janés, México.
- Martín Barbero, Jesús (1995). *Pre-textos. Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos*. Universidad del Valle, Cali.
- Ortiz, Renato (1997): *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.
- Reguillo, Rossana (1995). *En la calle otra vez. Las bandas juveniles: identidad urbana y comunicación*. Iteso, Guadalajara, (2da. edición corregida).
- _____(1993). “Chiapas, el otro rostro de la modernidad mexicana”, en *Nómadas* No. 1. San Juan de Puerto Rico.
- Rosaldo, Renato (1991). *Cultura y verdad*. CNCA-Grijalbo, México.
- Simpson, Máximo (1989). *Comunicación alternativa y cambio social*. Premia Editora, México, 2da. edición.
- Touraine, Alain (1997). *Pourrons-nous vivre ensemble?* Fayard, Paris.



ADPOSTAL

Llegamos a todo el mundo!

**CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO**

Estos son nuestros servicios:

- Venta de productos por Correo
- Servicio de Correo Normal
- Correo Internacional - Correo Promocional
- Correo Certificado - Respuesta Pagada
- Post Express - Encomiendas
- Filatelia - Corra - Fax

LEA ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS

243 88 51 - 341 03 04 - 341 55 34

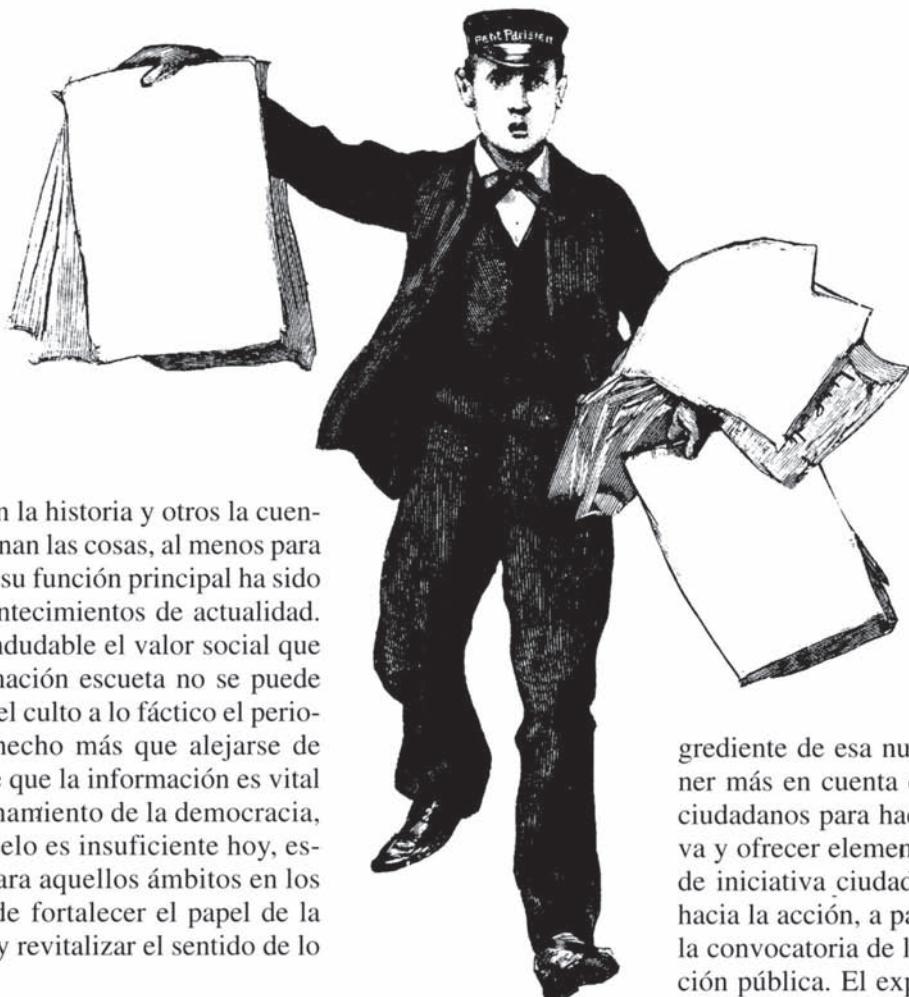
980015503

FAX: 283 33 45

Ana María Miralles Castellanos
Comunicadora Social-Periodista
Coordinadora de la especialización en periodismo
urbano, Universidad Pontificia Bolivariana

¿Qué es el periodismo cívico?

Ana María Miralles Castellanos



Unos hacen la historia y otros la cuentan. Así funcionan las cosas, al menos para el periodismo: su función principal ha sido relatar los acontecimientos de actualidad. Y aunque es indudable el valor social que tiene la información escueta no se puede negar que con el culto a lo fáctico el periodismo no ha hecho más que alejarse de aquella idea de que la información es vital para el funcionamiento de la democracia, porque el modelo es insuficiente hoy, especialmente para aquellos ámbitos en los que se pretende fortalecer el papel de la sociedad civil y revitalizar el sentido de lo público.

Desde hace diez años comenzó en Estados Unidos algo que los académicos y periodistas norteamericanos asumieron en principio como un experimento y que denominaron periodismo cívico. Varios periódicos, incluidos de manera particular algunos de la cadena Knight Ridder, se lanzaron a ensayar un nuevo tipo de relación de los medios con sus audiencias. El principal in-

grediente de esa nueva relación ha sido tener más en cuenta el punto de vista de los ciudadanos para hacer la agenda informativa y ofrecer elementos para que esos temas de iniciativa ciudadana encuentren canales hacia la acción, a partir de la información y la convocatoria de los medios a la deliberación pública. El experimento, que tras diez años ya no lo es tanto y que hasta 1996 había involucrado a más de 150 organizaciones periodísticas (prensa, radio, televisión, centros de investigación en periodismo), tiene en Estados Unidos otra particularidad: retoma mucho de aquel asociacionismo cívico del que Alexis de Tocqueville hizo una descripción tan apasionada en "La democracia en América". Esa manera particular de asociarse la

gente en Estados Unidos, en donde proliferan organizaciones para las causas más disímiles, le ha dado indudablemente una forma específica allí.

El periodismo cívico o periodismo público es más que una nueva modalidad profesional para el tratamiento de la información. No se le puede confundir con un método o con una de tantas innovaciones que, de vez en cuando, se dan en el campo periodístico, ni entenderlo como una estrategia para captar audiencias. Sus propósitos son mucho más de fondo. En realidad, se trata de una sugestiva invitación a traspasar las fronteras del periodismo tradicional y a involucrarse en la esfera de la deliberación pública, en vez de quedarse en el registro de los hechos que otros producen. Como dice Jay Rosen: ya tenemos información, ahora lo que nos hace falta es democracia. En este sentido, hace una pregunta clave: ¿para qué nos ocupamos de informar a un público que quizás ni siquiera existe? Lo primero que se debe hacer es construir el público. El periodismo informativo presupone la existencia de una esfera pública funcionando, en la cual los asuntos comunes son continuamente reconocidos y discutidos. Por ello se piensa que es suficiente con presentar noticias, añadir algunos testimonios, publicar editoriales y hacer entrevistas a los funcionarios¹.

El periodismo exclusivamente informativo está basado en el modelo filosófico liberal. Sobre la premisa de que la información es vital para el funcionamiento de la democracia se crearon los mitos de la objetividad, el distanciamiento, la ausencia de un modelo político explícito, la falta de compromiso y demás rasgos de la fórmula liberal de la información que desde hace ya casi dos siglos han sido considerados “principios sagrados” del periodismo. Y sí. La información es vital para la democracia, pero no sólo es insuficiente sino que los procedimientos para recabarla y difundirla pueden llegar a producir el efecto contrario al de la causa democrática: cinismo, indiferencia, confusión, abstencionismo, privatización, apatía.

Subsidiaria de las concepciones de la filosofía política la idea de interés público informativo, por ejemplo, no se construyó dentro de una cultura profesional periodística,

que en el siglo XVIII no existía, y, por tanto, aunque la naciente prensa de carácter marcadamente político, en la época de la ruptura con el poder absolutista tuvo un papel importante, no puede pensarse que se constituyó como una esfera autónoma de la política, así como tampoco hoy se puede admitir que la profesionalización de las labores informativas exime al periodismo de responder por un modelo de vida en sociedad, cualquiera que éste sea.

El periodista liberal trató de dar respuesta a ciertas demandas que en el campo informativo se tradujeron inicialmente en la libertad de pensamiento y de opinión. De ahí la proliferación, en el siglo XVIII, de pequeños periódicos, gacetas y hojas informativas que estaban atravesados por la idea de sacar los asuntos públicos de los palacios y comenzar a construir aquello que algunos filósofos políticos han llamado el uso público de la razón desde ámbitos privados.

La libertad en el periodismo tuvo que ver con la posibilidad de dar cauces a una naciente razón pública a partir de la posibilidad de fundar periódicos y, por tanto, al pluralismo de tendencias ideológicas. Sin embargo, esa idea de libertad, vista desde la segunda mitad del siglo XX, es más procedural que sustantiva. En las legislaciones de la mayoría de los países del mundo ya están incorporadas la libertad de prensa y de empresa (la más fuerte, quizás), así como la de opinión, aunque desde luego persistan algunas interferencias al trabajo periodístico, que hoy más que del poder de los gobernantes viene del poder económico y de los propios compromisos ideológicos de los medios. Ahora lo que falta es compromiso social, algo que ni la formulación posterior del derecho a la información ha contribuido a crear.

Pero, tal vez, lo más significativo es que el periodismo siguiera el modelo general de la teoría liberal de la ciudadanía, cuya crítica profunda hace Margaret Somers, al igual que del concepto de cultura política, porque ex-

El periodismo cívico o periodismo público es más que una nueva modalidad profesional para el tratamiento de la información. No se le puede confundir con un método o con una de tantas innovaciones que, de vez en cuando se dan en el campo periodístico, ni entenderlo como una estrategia para captar audiencias. Sus propósitos son mucho más de fondo. En realidad, se trata de una sugestiva invitación a traspasar las fronteras del periodismo tradicional y a involucrarse en la esfera de la deliberación pública, en vez de quedarse en el registro de los hechos que otros producen. Como dice Jay Rosen: ya tenemos información, ahora lo que nos hace falta es democracia.

1. Rosen, Jay. “Getting the connections right”, Twentieth Century Fund Press, 1996, New York, p. 83. Y en “Making Journalism More Public”, New York University, 1995, New York, p. 12.

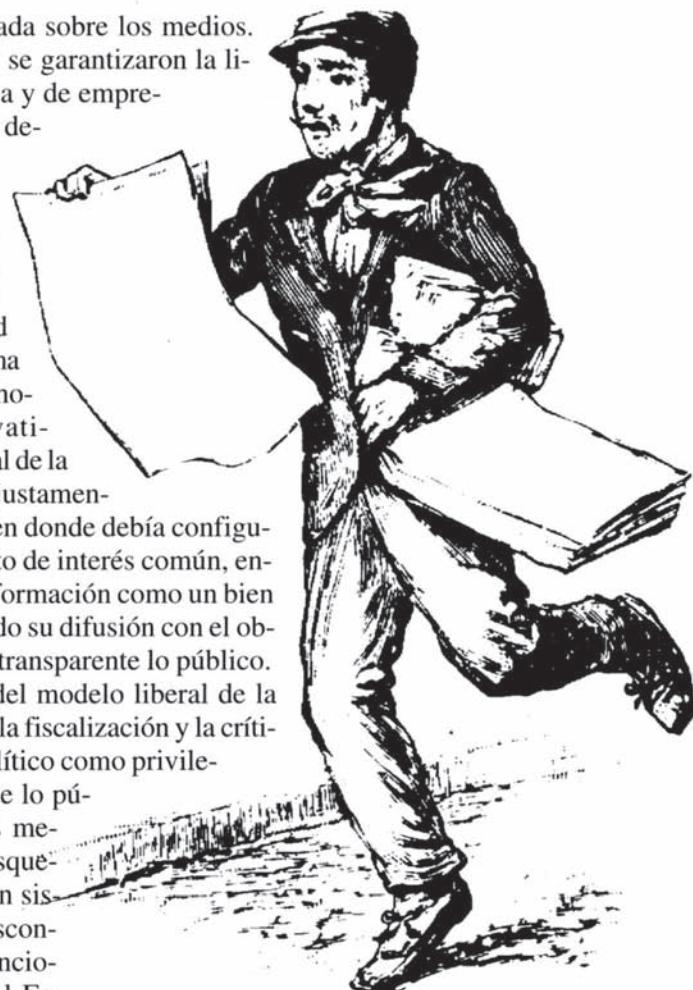
cluye la participación del ciudadano en la toma de decisiones y porque coloca la opinión pública en el ámbito privado. Somers reclama la construcción de un tercer espacio que no ha sido teorizado: el ámbito de la ciudadanía. El trabajo de los movimientos sociales en los años ochenta no fue aprovechado, según esta autora, con el fin de desmontar lo que ella llama el "metarrelato" de la teoría liberal de la ciudadanía y construir una desde la cual se piense a un ciudadano del alto perfil. "Ello ha sido denominado un 'tercer' espacio de movimientos sociales populares y de movilización colectiva, de redes informales y asociaciones, y de solidaridades comunitarias que sustentan una vida pública participativa no simbolizada por el individualismo soberano del mercado ni por el Estado. En síntesis, se percibe como un ámbito de ciudadanía , al que muchos activistas e intelectuales han venido a llamar sociedad civil"².

Teniendo en cuenta este vacío teórico se podría entender por qué desde los medios también se le apuesta a la figura del espectador más que a la del actor, descrita en forma detallada por Richard Sennett³. Por eso Somers acaba remitiéndonos al republicanismo cívico como la opción más cercana a ese ciudadano participativo, aunque lo que ella propone realmente es una tercera esfera (diferente a la del mercado y a la del Estado), "que se centre en la participación y en las solidaridades y en un fuerte discurso sobre los derechos", como la posibilidad real de desmontar el metarrelato de la teoría liberal de la ciudadanía y para crear un nueva cultura política⁴. La crítica de fondo que Somers tiene para la teoría liberal es el desfase entre la construcción teórica y el mundo empírico, cuestión sumamente aplicable a la reflexión sobre el periodismo, que justamente se ocupa del relato de los acontecimientos. ¿Cómo construir desde el periodismo ese ciudadano si lo hace sobre el modelo de semejante teoría?

Si la opinión pública está en el ámbito privado, según este pensamiento, no es extraño tampoco que no se haya resuelto la dicotomía fundamental en el campo de los medios de comunicación: el dilema del servicio público que deben prestar y el sistema de

propiedad privada sobre los medios. Históricamente se garantizaron la libertad de prensa y de empresa y este es un derecho que recae fundamentalmente sobre los periódicos, que han sido y son de propiedad privada, problema que se amplía ahora con la privatización sustancial de la televisión. Era justamente en la prensa en donde debía configurarse el concepto de interés común, entendiendo la información como un bien público y ligando su difusión con el objetivo de hacer transparente lo público.

El énfasis del modelo liberal de la información en la fiscalización y la crítica del poder político como privilegiado sentido de lo público desde los medios creó un esquema de oposición sistemática, de desconfianza en las funciones públicas del Estado. Si bien es cierto que en ocasiones esa desconfianza ha permitido la defensa de la transparencia de lo público, también lo es que la figura del "watchdog", como la llaman los norteamericanos, y en general la propia figura de la fiscalización no están exentas de la expectativa frente a unos resultados de esa postura, ya sea renuncias políticas, acciones judiciales o legislativas. Esta es una de las razones por las cuales no se puede afirmar que el periodismo que se cree depositario de la "objetividad" trabaje sin un modelo del buen gobierno y del buen



2. Somers, Margaret. "Narrando y naturalizando la sociedad civil y la teoría de la ciudadanía: el lugar de la cultura política y de la esfera pública", Revista Zona Abierta Nos. 77-78. 1996-1997, Madrid, p. 257.

3. Sennett, Richard. *El declive del hombre público*. Ediciones Península. Barcelona.

4. Somers, *Ibid.*, p. 258.

ciudadano, así como del bien común. Como si esto fuera poco, ese esquema no sería defendible ni siquiera desde el punto de vista de un distanciamiento frente al poder político, ya que en las sociedades contemporáneas y con el desarrollo que ha alcanzado el sector de las comunicaciones habría que marcar esas distancias frente al poder económico, expresado principalmente por la vía de los monopolios de la información⁵.

Crítica al objetivismo

Tal vez, de todos los elementos de la construcción teórica del sistema informativo liberal, el de la objetividad es el que más profunda influencia ha tenido y sigue teniendo en la definición de las funciones públicas de la información en los medios de comunicación. Criticada por los periodistas cívicos y definida como objetivismo esta idea, que adquirió el carácter de doctrina, moldeó de manera contundente las labores de los periodistas y permeó la formación de periodistas en las universidades. De ahí surgió aquel dogma de la información como “espejo de la realidad” y la necesidad de crear unos moldes informativos llamados géneros periodísticos que dieran buena cuenta de ella. De esos géneros, a no dudarlo, el que adquirió mayor importancia fue la noticia y sobre ella gravita aún la actividad informativa.

La definición de la noticia, que usualmente se toma en la academia como una cuestión mecánica (a escribir se aprende escribiendo), representa la columna dorsal de la doctrina liberal de la información. Estructurada en un modelo montado sobre los seis interrogantes, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué (conocidas como las seis W), muy pronto quedó aún más recortado al qué, dónde y quiénes. El cómo y sus posibilidades narrativas y explicativas sobre los sucesos fue aplazado, bien sea porque realmente no interesaba o bien por la falta de suficiente cultura en los periodistas para dotar a su trabajo de los componentes que lo harían más profundo, si bien quizás menos “objetivo”.

El esquema de la pirámide invertida —dar las informaciones jerarquizando de mayor a menor importancia—, pronto se convirtió no

sólo en dogma sino en ritual. Hay que encarar la realidad en el esquema. Basta con eso para informar. Esa es la que Manuel Martín Serrano ha llamado la mediación estructural⁶ y en la que está focalizada la idea de la objetividad. El ritual consiste en homologar todas las informaciones, por disímiles que sean, bajo un mismo formato. Así, el acontecimiento, que en realidad es una ruptura del orden social, aparece siempre bajo la misma cara. Si el acontecimiento es considerable como una ruptura, esto se debe a lo que se considera noticia: es lo novedoso, lo inédito, lo que tiene interés colectivo y hoy algunos estarían dispuestos a añadir, que noticia son los hechos negativos, pues es evidente que predominan las noticias de este tipo en los medios. Por ello no es extraña esta “normalización” de las informaciones en el formato noticioso: hasta las más terribles masacres pueden convertirse en frías estadísticas, en relatos estandarizados.

La noticia tradicional le da un lugar privilegiado a ciertas fuentes de información, las relacionadas con los poderes político y económico. Ellos son los que por lo general ocupan los espacios y fungen como actores de la noticia. El ciudadano común no aparece en los medios más que como víctima. Sus papeles centrales están definidos en términos del consumo de informaciones y de su posición de espectadores.

La asepsia, el distanciamiento de los periodistas con los hechos y la redacción en forma expositiva son los otros elementos que dan forma a la objetividad del discurso periodístico. Esta ausencia de compromiso frente a los hechos, al menos en apariencia, ha creado la sensación de que tras el modelo liberal de la información no hay un proyecto político, que se trata de un modelo neutral,

Tal vez, de todos los elementos de la construcción teórica del sistema informativo liberal, el de la objetividad es el que más profunda influencia ha tenido y sigue teniendo en la definición de las funciones públicas de la información en los medios de comunicación. Criticada por los periodistas cívicos y definida como objetivismo esta idea, que adquirió el carácter de doctrina, moldeó de manera contundente las labores de los periodistas y permeó la formación de periodistas en las universidades. De ahí surgió aquel dogma de la información como “espejo de la realidad” y la necesidad de crear unos moldes informativos llamados géneros periodísticos que dieran buena cuenta de ella. De esos géneros, a no dudarlo, el que adquirió mayor importancia fue la noticia y sobre ella gravita aún la actividad informativa.

5. Por eso es que Jay Rosen, profesor de la Universidad de Nueva York, pide que se abra la discusión sobre las diferentes visiones del ciudadano y los diversos modelos de periodismo a los que conducen. En: *Getting the connections right*. Twentieth Century Fund Press, 1996, New York, p. 16.

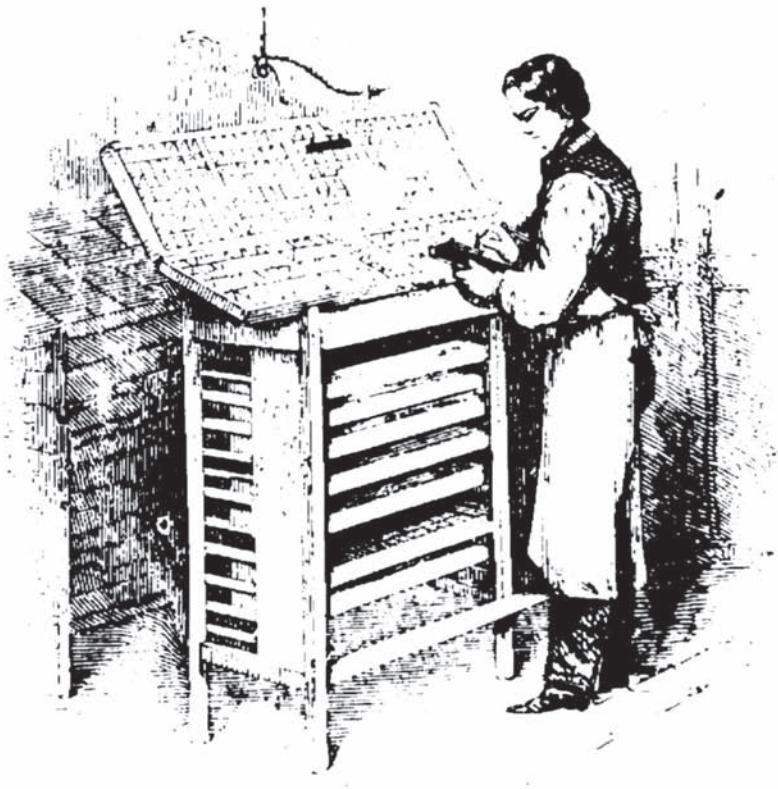
6. Martín Serrano, Manuel. *La producción social de la comunicación*. Alianza Universidad, 1986, Madrid.

cuando en realidad no lo es. En primer lugar, hay que decirlo a las claras: la objetividad es imposible, más si se tiene en cuenta que el periodismo se ocupa de hechos sociales que son dinámicos y que se leen con más acierto como procesos. En segundo término, el modelo liberal de la información sí está comprometido con la teoría liberal de la ciudadanía, con una esfera pública de expertos, con un esquema representativo y con una opinión pública anclada en el ámbito privado, debido a la radical separación de lo público/privado que supone esta teoría. Pero, además, la objetividad se ha presentado como una estructura narrativa diseñada para mostrar la realidad y, al mismo tiempo, para ocultarla, en el sentido de hacerla inaccesible a una visión pública.

Con honrosas excepciones, desde formatos más narrativos como la crónica o el gran reportaje, en la noticia está centrado todo el peso del trabajo de los medios informativos y en ella queda representado lo más importante del modelo, especialmente porque la agenda informativa se construye a partir de los criterios con los que desde una sala de redacción se considera que algo es noticia.

Justamente, el replanteamiento de los temas de la agenda informativa está en el centro de la discusión sobre el concepto que de lo público existe en el periodismo y es hoy una de las principales preocupaciones de los periodistas cívicos. A partir de los años setenta, la sociología de la comunicación y la ciencia política en Estados Unidos se preocuparon por el tema de la agenda setting, entendida como la agenda de la opinión pública, a diferencia de la agenda que se ocupa de las políticas públicas y de las relaciones con los medios y con la ciudadanía.

La orientación de los estudios de la agenda setting puede resumirse en lo dicho por B. Cohen⁷: "La prensa puede no ser exitosa la mayor parte del tiempo para decirle a la gente qué pensar, pero es sorprendentemente exitosa para decirle a sus lectores acerca de qué pensar". A partir de ahí se pueden destacar dos ideas: 1. La agenda no orienta particularmente la intensidad de las actitudes de las audiencias hacia los temas seleccionados del acontecer y, 2. La preocupa-



ción central son los efectos que produce la selección del espectro de temas posibles, sobre la mente de las audiencias.

Aunque no es del todo desdeñable el hecho de que los enfoques puedan producir cambios de actitud sobre los temas es evidente que la principal influencia comienza por el señalamiento de los temas de interés público. Bregman⁸ abre una perspectiva interesante cuando dice que los procesos de agenda se basan en "la localización de las interacciones recíprocas que rigen las relaciones entre tres tipos de agenda: la agenda de los medios, la de los ciudadanos y la de los actores políticos". Aunque probablemente este sea el aspecto nodal en las reflexiones sobre la agenda de los medios para los periodistas cívicos es necesario dejar de momento un interrogante sobre el hecho de si

7. Bregman, Dorine. "La función de agenda: una problemática en transformación". En: *El nuevo espacio público*. Jean-Marc Ferry, Dominique Wolton y otros, Gedisa, 1992, Barcelona, p. 212.

8. Bregman. *Ibid*, p. 212.

existe o no como tal una agenda ciudadana o si es parte del proceso mismo que el periodismo cívico quiere desencadenar.

No obstante, la visibilidad o no de los acontecimientos de la realidad social es indudablemente una de las más poderosas funciones de los medios y, al mismo tiempo, una de sus tareas más complejas, ya que debe partir de la percepción del interés general, que no tiene reglas pre-establecidas ni recetas tan mecánicas como las que se dan a veces en clase de periodismo y que tampoco es un asunto que se resuelva teóricamente. Victoria Camps sitúa muy bien el problema: "...el interés común no posee un contenido previamente fijado y definido con precisión. Es la actividad política el reconocimiento de los problemas sociales, el consenso sobre unos presupuestos, lo que va determinando el contenido del interés común"⁹. Así, cada día los medios participan en la construcción de legitimidad según hagan visibles o invisibles algunos temas en la configuración de su agenda. Por ello es que no puede reducirse esto a un asunto técnico, típico del perfil del que ha sido considerado buen periodista, que tiene olfato para saber dónde está la noticia.

En síntesis, a pesar de que los aportes de la filosofía política son invalables, al periodismo le quedó una asignatura pendiente. A ello puede deberse el extrañamiento que, a menudo, suele mostrar frente a lo público. Aunque de manera genérica se atribuyeran en el pasado vitales funciones a los medios en el ámbito de lo público hoy podemos afirmar que no haber construido el concepto de interés público informativo y que la formación de públicos en el sentido de grupos conscientes y con cultura política quedara al acazo y posteriormente se viera obnubilada por las técnicas periodísticas cuyos formatos fueron constituyéndose en el mensaje principal, contribuyó, sin duda, a la creación de espectadores más que de ciudadanos: el lector consumidor pasivo de información, aunque no tan esclavo de la influencia de los medios como pretendieron los primeros estudios sobre los efectos de los mensajes.

Construcción de ciudadanía

La principal idea que está en juego con el periodismo cívico es la del proyecto político que lo sustenta. En este caso sí se reconocen funciones explícitas en torno a un modelo de democracia que se acerca más a la participación ciudadana que el inconfesado sistema liberal, el cual se pretendía neutral. Aunque se trate de una propuesta que aún se está construyendo se reconoce en el periodismo cívico un perfil que no sólo se ocupa del concepto de interés público informativo, sino que amplía su ámbito al de la concepción general de la vida en sociedad.

El movimiento que surgió hace diez años en Estados Unidos fue planteado desde la perspectiva de las responsabilidades que le competen al periodismo en la creación o en la revitalización de la vida pública. Las ideas de Dewey, Habermas, Arendt y Rorty, entre otros, sirvieron para configurar la filosofía del periodismo cívico. El ciudadano de esta construcción es de corte clásico, en el sentido de que se define políticamente y guarda reminiscencias de un pasado en que se tenía mayor claridad de las responsabilidades cívicas. Parte de la premisa de que no es suficiente con una buena información para reanimar el debate público: al ciudadano hay que interesarlo para que participe.

Una de las primeras preguntas que podría plantearse es si el periodismo cívico trata de revivir las funciones originarias del periodismo, aquellas que el propio Habermas señala como uno de los momentos de coincidencia en el espacio público burgués entre los intereses públicos de una naciente prensa privada en una sociedad toda emancipada del poder absolutista, o si estamos frente a un cambio radical de los principios liberales sobre los cuales se ha sustentado la teoría de la información y la actividad periodística, la vigencia de los cuales podría estar obstaculizando la existencia de una verdadera esfera pública a partir de unos modelos informativos que no contribuyen a potenciar

Los propósitos del periodismo cívico giran en torno a la idea de reconnectar a los ciudadanos a la vida pública, potenciar la capacidad de deliberación de la ciudadanía, ofrecer información con miras a la participación, apoyar los procesos ciudadanos con un buen cubrimiento y especialmente un adecuado seguimiento, dar elementos para la creación de capital social, al tiempo que pone a los medios en calidad de actores y promotores del diálogo social. Todo ello, sin favorecer una solución o un interés particular. En forma particular, distingue entre audiencias y públicos, entre lectores y ciudadanos.

9. Camps, Victoria. "El malestar de la vida pública", Grijalbo, 1996, Barcelona, p. 151.

la capacidad deliberativa de los ciudadanos. Dejando a un lado si el ciudadano realmente tiene esas capacidades o si está siquiera interesado en explorarlas, el punto es que parece que estamos frente a un interrogante que se enraiza en los grandes temas de la filosofía política y que deberá pensarse en las profundas, aunque tanto tiempo negadas, relaciones entre política y periodismo.

En principio, es grande la tentación de inclinarse a creer que el periodismo cívico constituye una especie de revitalización de esas funciones asignadas al periodismo desde la filosofía liberal, promoviendo la clase de diálogo social y de ciudadano propios de este modelo, pretendidamente participativo, pero a la postre espectador y consumidor pasivo de información. Pero, ¿por qué esta inclinación? En principio, porque al menos tiene una tradición teórica. Desmontar los principios liberales de la información en favor de unos que favorezcan otro tipo de relaciones con las audiencias, fomentadas por un periodismo cuya agenda sea participativa, que promueva la deliberación y la acción pública, que admita que el periodismo es un actor y no solamente un relator de la vida social nos llevaría a caminos aún poco explorados, que quizás tendrían más que ver con la sociedad de la comunicación que con la de la información o con posturas epistemológicas tan exigentes como la emprendida por Margaret Somers.

Christopher Lasch¹⁰ dice que la argumentación es más importante que la información, que generar debate público es de mayor trascendencia que simplemente ofrecer datos. Pero lo que el periodismo cívico pone de relieve es que hemos tenido una especie de complejo histórico al querer tapar el pasado político del momento de creación de los periódicos. De ese “oscuro” pasado se quiere olvidar la formidable dimensión política que tuvieron los periódicos, sus niveles de compromiso y el dinamismo que pudieron imprimirle al diálogo social que después se convirtió en palabras huecas. Es posible que la no muy lejana partidización de los periódicos y, posteriormente, del conjunto de los medios de comunicación (de eso sí que sabemos aquí en Colombia) haya incidido en la deliberada opacidad que se le



ha dado a ese aspecto. Pero negar esa parte de la historia ha contribuido a un tiempo a reforzar el objetivismo con todo su potencial ideológico, y ha debilitado las relaciones de fondo entre política y periodismo que, por el contrario, deberían ser más visibles y objeto de permanente discusión pública.

No deja de resultar paradójico el hecho de que ocupándose de lo que, también en la categoría casi de lema hoy se llama “interés público informativo”, al mismo tiempo se insiste en negar que ese mismo concepto es y debe ser construido desde un modelo político de sociedad, que ahí no entra en juego la “objetividad”, que por sí solos los hechos como

10. Lasch, Christopher. “Journalism, Publicity, and the Lost Art of Argument”. En: *Kettering Review*, Spring 1995, Dayton, p. 44.

materia prima del modelo informativo no son asépticos y que en términos de ética pública justamente se trata de hacer visibles los actores que inciden, las razones desde las cuales se construye y los modos en que se manifiesta ese interés público. Jay Rosen hace a los periodistas la pregunta crucial: “Como constructores de esfera pública, ¿pueden los periodistas continuar operando sin una filosofía pública?”¹¹

Lo que verdaderamente resulta inquietante es que se haya sepultado esa dimensión política mientras de hecho se ha reforzado la partidización de los medios, que deriva en un empobrecimiento de la información misma y obviamente del debate público en general. Con partidización hacemos referencia no a que sean periódicos de propiedad de los partidos políticos sino a las ideas que defienden aún a veces en contra del debate público de las ideas, especialmente en momentos en que ese debate debería ser más abierto a todos los sectores, pero de modo enfático para los ciudadanos: el momento electoral. No en vano la mayoría de los proyectos de periodismo cívico en Estados Unidos son de carácter electoral y han pretendido cambiar la ecuación: de temas de campaña a temas de gobierno, con lo cual se intenta la democracia más como contenido que como forma y se pretende involucrar al ciudadano en un debate público sobre los temas importantes para la ciudad y no sobre lo que los conductores de campaña quieren que los ciudadanos piensen en términos de rentabilidad electoral.

¿Por qué hacer semejantes cambios en los valores tradicionales del periodismo tales como la distancia frente a los temas, la falta de compromiso con los hechos, la “objetividad” perseguida aún como meta? Hay varias razones que lo justifican, entre ellas una de las más importantes es la de la brecha entre el mundo de los periodistas y el mundo de los ciudadanos en términos de agendas. Los medios, en el supuesto de estar representando los intereses de sus lectores, no han hecho más que alejarse de ellos por la selección de temas que no los tocan en sus intereses cotidianos y los temas seleccionados no se están enmarcando desde

el punto de vista de las preocupaciones ciudadanas sino desde el ángulo de los expertos y de la otra agenda dominante: la agenda de los políticos, que incluye de manera particular a los funcionarios públicos (tecnocracia informativa). Esto ha producido indiferencia, alejamiento, cinismo y la conciencia de que los ciudadanos no pueden hacer nada.

Otra de las razones tiene que ver con las inconveniencias del sistema bipolar usado para informar, criticado por Daniel Yankelovich¹² y que ha hecho carrera aún como lema promocional de algunos medios informativos: suponer que las informaciones solamente tienen dos caras. Una versión y otra que la contradice. Esa es la “objetividad”. Y así se sigue enseñando en algunas universidades. La buena información no es la que atiende a la complejidad sino la que es simplificada en solamente dos versiones contradictorias. Este sería el papel reservado al debate en los medios. Para Yankelovich este esquema deja por fuera las posiciones intermedias que son las de la mayoría de los ciudadanos. La polarización es la que se da entre funcionarios y políticos que defienden sus propias tesis. Ello no contribuye a la formación de lo que él ha llamado “juicio público”, en la cual los testimonios y la descripción de los hechos ocupan solamente una parte y las interpretaciones y argumentos ganan espacios. En la formación del juicio público tienen un mayor peso los valores y la ética que lo estrictamente fáctico o informativo.

Uno de los interrogantes en torno al periodismo cívico tiene que ver con si su papel debe llegar solo hasta la promoción de la deliberación o si debe animar a sus públicos a la acción, en el marco del paradigma de la democracia participativa. Quizás la pregunta lleve en sí misma un engaño: ¿deliberar no es ya una forma de participación? La respuesta a esta pregunta nos lleva de alguna

La participación ciudadana en la construcción de la agenda informativa de los medios es una de las formas del periodismo cívico. Se trata de establecer anticipadamente los temas de interés público con la gente, por la vía de las encuestas o por medio de la configuración de paneles de ciudadanos que trabajen con editores y periodistas en el establecimiento de prioridades informativas y enfoques para los trabajos periodísticos, además de dar elementos para introducir de manera central el punto de vista ciudadano en esas historias. Esto también se ha hecho con focus groups.

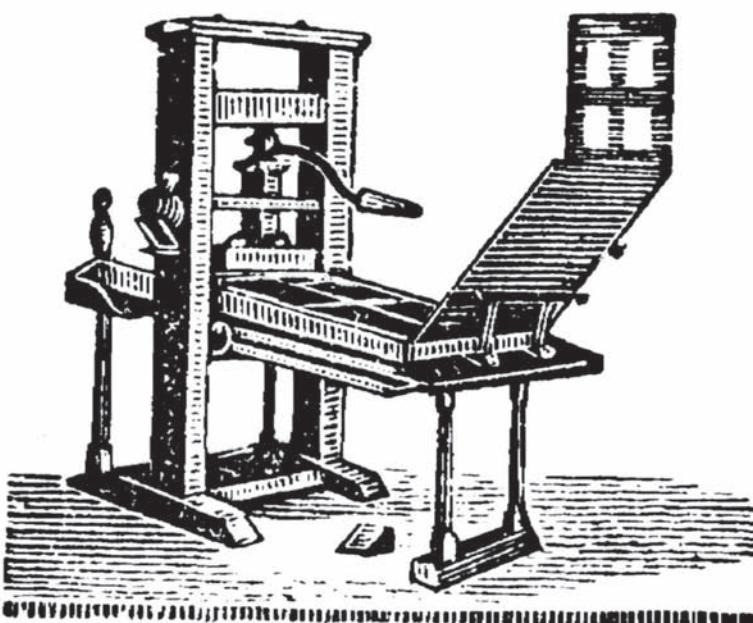
11. Rosen, Jay. “No Content: The Press, Politics, and Public Philosophy”. En: *Tikkun*. Vol. 7. No. 3, mayo-junio de 1992, p. 78.

12. Yankelovich, Daniel. “Coming to public judgment. Making Democracy Work in a Complex World”. Syracuse University Press, 1991, New York.

manera a intentar definir el modelo de democracia que sustenta al periodismo cívico.

Lo más cercano de la filosofía política a la idea del periodismo cívico es la construcción de la democracia deliberativa. “La noción de una democracia deliberativa está enraizada en el ideal intuitivo de una asociación democrática en la que la justificación de los términos y condiciones de la asociación procede mediante la argumentación y el razonamiento públicos entre ciudadanos iguales. Los ciudadanos en un orden de este tipo comparten un compromiso hacia la resolución de problemas de elección colectiva mediante razonamiento público, y contemplan sus instituciones básicas como legítimas, en tanto establecen un marco para la libre deliberación pública”¹³. El periodismo cívico correspondería a lo que el propio Habermas denomina “la organización de una praxis argumentativa pública”.

Recogiendo algunos debates de filosofía política, Anthony Giddens¹⁴ distingue entre la democracia deliberativa y la democracia liberal, de tal manera que parece hacer las mismas diferencias que hay entre el periodismo cívico y el periodismo liberal. Giddens prefiere la expresión de “democracias dialogantes” y se opone a Habermas, en una idea más próxima al periodismo cívico, porque según él en la democracia dialogante no está implícito el propio acto de habla. “Por el contrario, el potencial de la democracia dialogante está en la difusión de la capacidad social de reflexión, como requisito de las actividades cotidianas y la persistencia de formas más amplias de organización colectiva”¹⁵. La capacidad comunicativa del periodismo cívico tiene un carácter mucho más abierto y menos rígido que el de la comunidad de dialogantes de Habermas, aunque en el prólogo a la edición



alemana de 1990 de *Historia y crítica de la opinión pública*, Habermas corrige en algo esta posición.

El que el periodismo cívico se base en los principios de una democracia deliberativa abierta, considerada por algunos como parte de la democracia liberal, y el que los procesos de refundación de la política en el mundo contemporáneo tengan su eje en la dimensión comunicativa son dos buenos soportes para seguir considerando que más que ante unas nuevas

herramientas estamos frente a una racionalidad periodística diferente. El peso de la comunicación en la construcción de la democracia va siendo reconocido cada vez entre los escritores de filosofía política, así como de modo especial los investigadores de la mediología francesa admiten que la transformación del espacio público político se dio por el advenimiento de los medios y, posteriormente, por la consolidación de la democracia de masas, aunque en este enfoque es necesario tener cuidado de no reducir la vida pública a los asuntos que pasan por los medios.

Por otra parte, en el periodismo cívico se atenúa la tensión sobre la no necesaria articulación entre deliberación y acción, tensión más propia de la escena política que del escenario de los medios, ya que el compromiso mayor del periodismo cívico es con la

13. Habermas, Jürgen. “Historia y crítica de la opinión pública”. Prefacio a la edición alemana de 1990. Gustavo Gili. 1990. Barcelona, p. 26. Habermas cita esa definición de la democracia deliberativa, de Joshua Cohen: ‘Deliberation and Democratic Legitimacy’.

14. Giddens, Anthony. “Más allá de la izquierda y la derecha”. Cátedra, 1994, Madrid, pp. 120-121.

15. *Ibid.*, p. 121.

deliberación pública. Si ella lleva a los ciudadanos a la acción es un resultado importante. Para esto hay otras instituciones sociales que, como las organizaciones sociales y cívicas, desarrollan su trabajo en el campo de la acción mediante la introducción de proyectos de todo tipo, en la línea de la construcción de la democracia. El activismo del periodista cívico consiste en promover el diálogo público con estrategias diferentes a la información.

Los propósitos del periodismo cívico giran en torno a la idea de reconnectar a los ciudadanos a la vida pública, potenciar la capacidad de deliberación de la ciudadanía, ofrecer información con miras a la participación, apoyar los procesos ciudadanos con un buen cubrimiento y especialmente un adecuado seguimiento, dar elementos para la creación de capital social, al tiempo que pone a los medios en calidad de actores y promotores del diálogo social. Todo ello, sin favorecer una solución o un interés particular. En forma particular, distingue entre audiencias y públicos, entre lectores y ciudadanos.

En la idea del periodismo como constructor de públicos, con Peter Dahlgren tendríamos que hacernos algunas preguntas que sólo análisis más a fondo y el desarrollo de experiencias de periodismo cívico nos podrán ayudar a contestar: “¿Cómo se constituyen los públicos? ¿Cuál es el papel que los medios desempeñan en este proceso? ¿Cuál es la naturaleza de los vínculos sociales entre los miembros del público? ¿Cómo el periodismo y los demás medios logran favorecer o excluir la posibilidad del diálogo y del debate?”¹⁶. Aunque las respuestas a estas preguntas aún no hayan sido formuladas con claridad, lo cierto es que muy seguramente tendrán distintas respuestas en Estados Unidos y en América Latina.

En lo que no parece haber dudas es en que la tarea fundamental del periodismo cívico puede resumirse en la construcción de ciudadanía. No son la filosofía política liberal, ni el comunitarismo los que dan forma al ciudadano del periodismo cívico. En la perspectiva política que ha predominado en el planteamiento del periodismo cívico es des-

de el republicanismo cívico que hay más coincidencias: un ciudadano participativo, políticamente consciente, probablemente capacitado para el autogobierno, pero aún inscrito en la esfera pública liberal.

El hecho de que la deliberación sea considerada como participación ciudadana es claro en el republicanismo cívico. La idea de bien común se construye por medio de la deliberación. Es decir, no se parte del supuesto de un bien común pre-establecido y por eso de cierto modo se trata de una búsqueda abierta de los consensos básicos, la misma en que está empeñada el periodismo cívico, que no busca imponer los contenidos de la agenda ciudadana sino facilitar su configuración, cualquiera que sea la orientación que tenga.

Buscando el perfil del ciudadano

El ciudadano que se deriva de esta propuesta es participativo, de perfil marcadamente político. La duda que abriga el periodismo cívico frente a esta propuesta es doble. Por un lado, que así descrito el proceso de la construcción de los consensos básicos, el ciudadano que acceda a la deliberación pública debe tener una evidente capacidad argumentativa y ahí estaríamos cerca de Rawls y de Habermas, entre otros, en un modelo que acabaría siendo excluyente o que, por lo menos, difícilmente coincidiría con los públicos que el periodismo cívico podría construir, especialmente desde la radio y la televisión. Aunque el periodismo cívico busca que la voz ciudadana se vaya decantando en el proceso deliberativo, por la relación con sus audiencias debe admitir de entrada lo que algunos podrían considerar voces poco autorizadas para participar del espacio público político, tal como lo describen los autores de

El hecho de que la deliberación sea considerada como participación ciudadana es claro en el republicanismo cívico. La idea de bien común se construye por medio de la deliberación. Es decir, no se parte del supuesto de un bien común pre-establecido y por eso de cierto modo se trata de una búsqueda abierta de los consensos básicos, la misma en que está empeñado el periodismo cívico, que no busca imponer los contenidos de la agenda ciudadana sino facilitar su configuración, cualquiera que sea la orientación que tenga.

16. Dahlgren, Peter. “El espacio público y los medios. ¿Una nueva era?”. En: *Espacios públicos en imágenes*, Gedisa, 1994, Barcelona, p. 262.

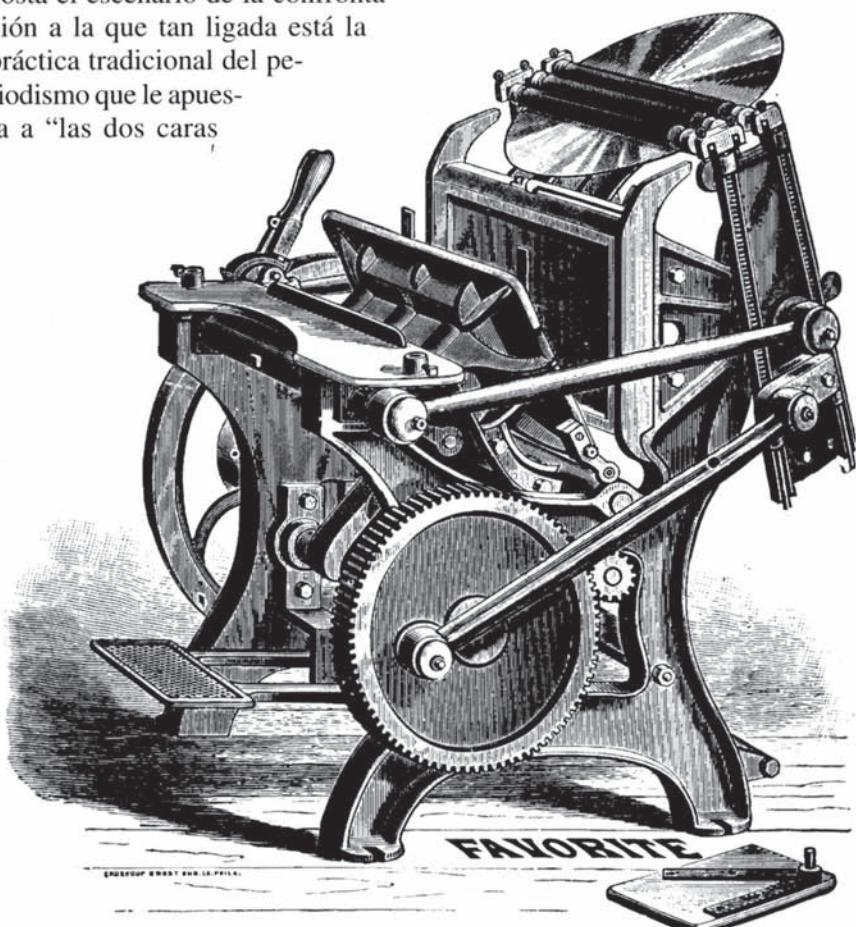
la mediología francesa, entre ellos Jean Marc Ferry y Dominique Wolton.

La otra incógnita tiene que ver con que este enfoque no ofrece mayores alternativas para pensar al ciudadano desde lo cultural, particularmente frente al tema de las identidades que en este caso tiene mucha proximidad con la construcción de los intereses colectivos. Los modos en que los ciudadanos se articulan a los procesos públicos tienen una innegable conexión con la forma en que se conectan a procesos más cotidianos, incluso del ámbito privado. Los aportes que una teoría cultural de la ciudadanía debe hacer al tema más explícito de la participación política son insoslayables si se trata de sintonizar desde el periodismo cívico la perspectiva de la ciudadanía. Aunque ciertos autores pueden reconocer, como lo hace Habermas, la necesidad de que existan algunas condiciones del contexto cultural para poder adelantar procesos argumentativos, lo que el periodismo cívico debería explorar con mucha mayor intensidad, al menos para el caso de América Latina, es el peso que tiene la variable cultural en la construcción de la agenda ciudadana. Partir del supuesto de que el ciudadano comparte una visión clásica de la política y de la condición de ciudadanía es hoy un riesgo muy grande que el periodismo cívico no estaría dispuesto a correr.

Por este camino también es posible el reconocimiento de la heterogeneidad de los supuestos culturales y éticos, lo que deriva en sociedades pluralistas en sus valores. Aunque en el prefacio a la edición de 1990 de *Historia y crítica de la opinión pública* Habermas ya admite las limitaciones de hablar de esfera pública en singular y reconoce la existencia de otros públicos, en el fondo sigue con la idea de unos públicos subordinados. Es Nancy Fraser¹⁷ la que se encarga de abrir el ángulo: “El problema, ade-

más, no es sólo que Habermas idealice la esfera pública burguesa, sino que deja de examinar otras esferas públicas no liberales, no burguesas, que compiten con ella”. Y más adelante añade: “Ya no podemos suponer que el modelo liberal de la esfera pública burguesa era sencillamente un ideal utópico no realizado; era también una noción ideológica que sirvió para legitimar el dominio emergente de una clase (y de una raza)”¹⁸.

La interacción de públicos en competencia es para Fraser, la posibilidad de construir realmente la igualdad participativa en los procesos de deliberación, teniendo como telón de fondo una única esfera pública porque no habría públicos subordinados. Esa confrontación discursiva entre públicos con diferente fuerza puede, según esta autora, derivar en procesos deliberativos o de confrontación. De aquí se entiende por qué quienes han intentado construir la filosofía del periodismo cívico en Estados Unidos han preferido optar por la idea de una esfera pública a lo Habermas, ya que quieren evitar a toda costa el escenario de la confrontación a la que tan ligada está la práctica tradicional del periodismo que le apuesta a “las dos caras”



17. Fraser, Nancy. “Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición post-socialista”. Universidad de Los Andes. Facultad de Derecho, 1997, Bogotá, p. 103.
18. *Ibid.*, pp. 105-106.

de la noticia”, consigna que pone el énfasis en el conflicto.

Lo que habría que admitir desde el periodismo cívico es un nuevo tipo de confrontación de carácter constructivo que nos presenta un panorama, no solamente más pluralista, sino más conectado con la realidad que busca el periodismo cívico. La confrontación de diferentes discursos estaría en la base de la polifonía de voces que busca poner a sonar, para lo cual es indispensable que los diversos públicos no sean subsumidos por un público hegemónico. Esto no significa que se renuncie a la construcción de algunos consensos básicos. Se trata de partir de supuestos que faciliten la búsqueda más abierta de esas otras voces y la construcción de públicos tan diversos como las audiencias mediáticas. Así, la deliberación y la confrontación de diferentes posiciones podrían tener escenario en los medios de comunicación y poner un matiz importante en las concepciones de opinión pública que, a nuestro juicio, poco servicio le han prestado a la democracia que se puede intentar construir desde el periodismo.

Si el periodismo cívico supone re-pensar sus funciones en la construcción de lo público, entonces una idea clave es considerar los medios como escenarios de debates públicos, en tanto se den la oportunidad para desarrollar un trabajo hermenéutico sobre las dinámicas urbanas, centrarse en procesos e interacciones sociales y pensarse menos como suministros de información. El periodismo cívico es una invitación a replantear el concepto clásico de opinión pública, ya que no solamente hace posible la polifonía de voces sino que admite a los procesos argumentativos dialógicos un papel mucho más allá de las páginas de opinión y de los llamados líderes de opinión. En suma, considera la deliberación, la búsqueda colectiva de consensos y el aprovechamiento democrático de los disensos como parte central del trabajo del periodista. Lo que ofrece es hacer visibles otras voces en los procesos de deliberación, y en la figura de la polifonía encontrar la voz pública o, si se quiere, las voces públicas. La deselitización

de las discusiones interpela al concepto predominante de opinión pública en la cultura occidental, de modo que sitúa a los ciudadanos en la posibilidad de asumir su propia agenda sin que sean excluidos por los discursos de los expertos o de los funcionarios oficiales.

La posible reducción de los espacios para los expertos y la voz oficial en el periodismo cívico no quiere decir que ahora el público deba ser definido por oposición a las élites. No se trata de discriminar a favor de la gente corriente, sino de permitirle a esta última una presencia negada en el espectro de discursos de la vida pública. Es que el problema no está en un público probablemente impreparado para el diálogo público, sino en que lo público no ha sido asumido como tal por periodistas, líderes políticos, funcionarios, intelectuales y lo que los norteamericanos llaman “ciudadanos destacados”. El concepto de los expertos es necesario en el paquete informativo del periodismo cívico, pero no para enmarcar todo el cubrimiento.

Todo esto contribuiría a la formación de verdaderos foros mediáticos en los que se materializa masivamente el proceso deliberativo. Aunque muchos no admitirían que se emplee el término “deliberación” para procesos que no se hagan cara a cara, es pensable que la polifonía de voces en los medios puede permitir la deliberación, consistente en la forma en que previamente se construyeron esas voces (a partir de foros deliberativos convocados en asociación con organizaciones sociales o cívicas) y al colonizarlas juntas, concluir un proceso más amplio, quizás este sí de confrontación de posiciones. “Si la idea de la soberanía popular puede todavía encontrar una aplicación realista en las sociedades altamente complejas, entonces debe desprenderse de la interpretación demasiado concreta de una encarnación en los miembros de un colectivo que (físicamente) asisten, participan y deciden en conjunto”¹⁹.

El periodismo cívico lo hace, pero para ello no le declara la guerra a muerte al pe-

El periodismo exclusivamente informativo está basado en el modelo filosófico liberal. Sobre la premisa de que la información es vital para el funcionamiento de la democracia se crearon los mitos de la objetividad, el distanciamiento, la ausencia de un modelo político explícito, la falta de compromiso y demás rasgos de la fórmula liberal de la información que desde hace ya casi dos siglos han sido considerados “principios sagrados” del periodismo.

19. Habermas, *op.cit.*, p. 31.

riodismo informativo. Es más. Todo buen periodismo cívico tiene un fuerte componente de lo mejor del periodismo informativo: investigación bien hecha, tratamiento del detalle, perspectivas creativas para el tratamiento de los temas en forma tal que los procesos deliberativos no agoten a las audiencias, y buena presentación desde el punto de vista de los formatos. Porque desde el punto de vista metodológico, el periodismo cívico es un juego de ritmos entre informaciones y procesos de participación ciudadana canalizados por líneas telefónicas, foros deliberativos, conversaciones ciudadanas, cartas y paneles de ciudadanos.

La participación ciudadana en la construcción de la agenda informativa de los medios es una de las formas del periodismo cívico. Se trata de establecer anticipadamente los temas de interés público con la gente, por la vía de las encuestas o por medio de la configuración de paneles de ciudadanos que trabajen con editores y periodistas en el establecimiento de prioridades informativas y enfoques para los trabajos periodísticos, además de dar elementos para introducir de manera central el punto de vista ciudadano en esas historias. Esto también se ha hecho con focus groups.

La otra forma visible del periodismo cívico es la de la formulación de proyectos que pueden ir de dos a seis meses y hasta un año (que no deben confundirse con las "campañas" paternalistas que a veces se hacen en los medios para resolver algún asunto puntual), en los cuales hay unos objetivos claros de promoción de la deliberación y que giran en torno de la construcción de la visión ciudadana sobre los temas de interés colectivo.

Tras dos experiencias sistemáticas e importantes de periodismo cívico en Colombia²⁰ es más importante que nunca clarificar sus bases filosóficas, pensar lo que significa en nuestro contexto, sus posibilidades, sus métodos y, sobre todo, su proyecto político. En una forma arendtiana, las experiencias se han ido ocupando de darle más cuerpo a estas ideas. No sorprende que esto sea así, pues esencialmente el periodismo es un hacer y el periodismo cívico, al inscribirse

directamente en la esfera de la acción cívica mediante la deliberación, es un modelo de periodismo que se va construyendo en una práctica que retroalimenta al concepto.

Claro que hay que seguir siendo creativos también a la hora de introducir el periodismo cívico, por lo que comporta de reprogramación de los espacios para los discursos de los poderes políticos y económicos, al igual que para la agenda de los propios medios de comunicación. Esta recomposición de los espacios y de los énfasis en los medios dependerá de un planteamiento adecuado de las premisas filosóficas del periodismo cívico y de su lectura desde metodologías apropiadas para interpretarlas.



20. En 1997, la Especialización en Periodismo Urbano de la Universidad Pontificia Bolivariana y el periódico *El Tiempo* desarrollaron en Bogotá el proyecto *Voz y voto, participe y elija*, para las elecciones a la alcaldía Mayor de Bogotá. El proyecto duró 4 meses. En 1998, el mismo programa académico en asociación con la Universidad de Los Andes, desarrolló con cinco medios de comunicación en Medellín, un proyecto de 4 meses llamado *Voces ciudadanas por la seguridad y la convivencia*.

Lecturas para minutos en el final de siglo

El aforismo, *ese cuchillo sin hoja al cual le falta el mango*, al decir de André Breton, tiene en el escritor y filósofo polaco Stanislaw Jerzy Lec uno de sus más excelsos exponentes. El arte de juntar sarcasmo, inteligencia y humor como forma de pensamiento que transmite, que alerta, que desnuda todas las lacras y males de nuestro tiempo, empezando por el poder y a quienes se ufanan de él, o hacen el ridículo para alcanzarlo, es lo que convierte a S. Lec en un autor actual en el orden del pensamiento breve y profundo, en medio de tanta liviandad y realidades virtuales. Su obra está hoy al alcance de todos gracias a Editorial Península que en junio de 1997 publicó una selección y traducción realizada por Emilio Quintana bajo el nombre de **Pensamientos Despeinados**. Aquí una selección breve a manera de divulgación, que dejamos a juicio y consideración (H.S., Editor).

Stanislaw Jerzy Lec (Lwów, 1909-Varsovia, 1966), *Pensamientos Despeinados*, Selección, traducción y edición de Emilio Quintana, Editorial Península (Barcelona), primera edición, junio de 1997.

Cuando un mito se transforma en realidad, ¿a quién corresponde el triunfo: a los materialistas o a los idealistas?



A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César.
¿Y a los hombres, qué?

Donde todos cantan a coro, la letra no importa.

Lo tomaron por otro, pero han tenido el detalle de devolver su propio cadáver.

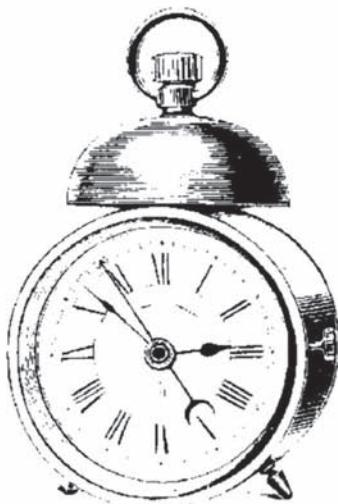
Conocí a un hombre tan ignorante que tenía que inventarse él mismo sus citas de los clásicos.



Es facilísimo transformar marionetas en ahorcados.
Las cuerdas ya están.

Cada siglo tiene su Edad Media.

Si dos enemigos tienen un adversario común eso no hace sino estimular aún más su odio recíproco. Porque cada uno de ellos quiere ser el único vencedor de su enemigo.



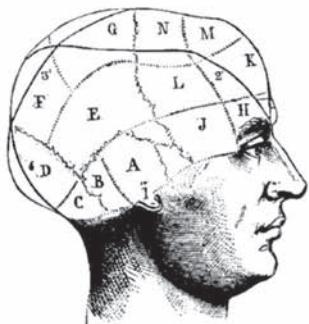
En el principio era el Verbo, y en el final el Lugar Común.

Si un hombre que no sabe contar encuentra un trébol de cuatro hojas, ¿tiene también derecho a la suerte?

Un salto moral es más peligroso que un salto mortal.

Consejo para escritores: en algún momento hay que dejar de escribir. Incluso antes de empezar.

¿El escepticismo es una cómoda concepción del mundo? Los escépticos tienen sobre esto un punto de vista escéptico.



El optimismo y el pesimismo se diferencian solamente en la fecha del fin del mundo.

Si un caníbal usa tenedor y cuchillo para comer, ¿es un progreso?

Muchos de mis amigos se han convertido en mis enemigos, muchos enemigos han hecho amistad conmigo, pero los indiferentes me han permanecido fieles.

Es horrible que un amo posea una enorme cantidad de esclavos. Creo, sin embargo, que no es mejor cuando un esclavo posee muchos amos.



Cierto sabio se inclinaba siempre ante el monarca de manera que al mismo tiempo pudiera enseñarles el culo a los lacayos.

Hay un sistema del que no vamos a salir a corto plazo: el solar.

Quien ha sobrevivido a una tragedia, no fue su protagonista.

Los plagiarios duermen tranquilos. La Musa, que es mujer, raras veces va a revelar quien fue el primero.

El poder cambia más a menudo de mano a mano que de cabeza a cabeza.

Me he dado cuenta que a la gente le gustan los pensamientos que no obligan a pensar.

Que bienestar debe reinar en un país que puede permitirse organizar su policía con la mitad de la población y mantener a la otra mitad en la cárcel a costa del presupuesto.





Las Incertidumbres de la Democracia

Compilador
Pedro Santana R.



Ediciones Foro Nacional por Colombia

NORBERTO BOBBIO
ROBERT A. DALH
UMBERTO CERRONI
PHILIPPE C. SCHMITTER
FERNANDO SAVATER
FABIO WANDERLEY REIS
ERIC J. HOBSBAW
NORBERT LECHNER
CARLOS NELSON COUTINHO
GUILLERMO O'DONNELL
JUAN CARLOS PORTANTIERRO
TOMAS MOULIAN
ADAM PRZEWORSKI
JUAN LUIS CEBRIAN
LARRY DIAMOND
ATILIO BORON
FARNCISCO C. WEFFORT
FRANCOISE DUBET
MICHELANGELO BOVERO
JULIO LEBASTIDA
VICTOR FLORES OLEA
CHANTAL MOUFFE
ROLANDO CORDERA
JOSE FERNANDO GARCIA
PEDRO SANTANA R.

En la batalla de cerca de dos siglos entre el liberalismo y el socialismo triunfo la democracia. Pero este triunfo lejos de significar el arribo a puerto seguro ha puesto sobre la mesa de la sociedad actual las precariedades y limitaciones de la democracia como sistema de organización social y como forma de organización del poder político. Al mismo tiempo la democracia se ha expandido. Ya no es simplemente una forma de gobierno sino que ella ha penetrado profundamente en la vida cotidiana de los seres humanos y se muestra como un instrumento importante para conquistar un nuevo tipo de relación entre los sexos, entre las nacionalidades y entre las mayorías y las minorías.

El debate actual sin embargo abarca temas como las relaciones entre el Estado, la sociedad civil, el mercado y el desarrollo. También sobre contenido y forma de la democracia y en medio de esta discusión sobresale el debate si la democracia puede reducirse a unas reglas de procedimiento o si involucra contenidos de igualdad y justicia social. Se han reunido a lo largo de los últimos años los ensayistas más connotados sobre este tema y se recogen en este libro sus principales ensayos. Un libro imprescindible en la discusión actual.

Pedro Santana Rodríguez
Compilador.

YA ESTA A LA VENTA

Adquiéralo en librerías
Pedidos:

Carrera 4A No. 27-62
Teléfonos: 2835982 - 2822550 - 3340967
Fax: 2836045

SEXO débil?...

Ordeñar, sembrar, cosechar, criar, cocinar, lavar y responder por el hogar, son algunas de las actividades que la mujer del campo realiza a diario, para contribuir con 65% del trabajo rural colombiano.

**LA EQUIDAD RURAL ES
ASUNTO DE TODAS Y TODOS.**



Dirección Nacional de
Equidad para las Mujeres
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 EN EL GOBIERNO DE LA GENTE.